H 330.983
M 368
v.2.

Dr. DANIEL MARTNER,
Profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Chile,
Ex-Ministro de Hacienda.

H 330
M 368
v 2

ESTUDIO

DE

Política Comercial Chilena

E

Historia Económica Nacional

TOMO II

★

Santiago de Chile
IMPRENTA UNIVERSITARIA
Estado 63
1923

ÍNDICE DE MATERIAS
DEL TOMO II

Págs.

7. *Vida económica y progreso financiero de Chile durante la Administración Pérez (1861-1871). La República liberal*..... 307

Caracterización del conjunto a la actividad económica nacional durante la Administración Pérez..... 340

8. *Trabajo económico y situación financiera de la Administración Errázuriz Zañartu (1871-1876)*..... 343

Juicio crítico del conjunto de la acción gubernativa de Don Federico Errázuriz Zañartu en la vida económica nacional. 354

9. *Papel que desempeñó la Administración de Don Aníbal Pinto (1876-1881) en el desarrollo económico de la nación*..... 357

Juicio crítico del papel que desempeñó la Administración Pinto en el desarrollo económico de la nación..... 397

Págs.

10. *Capacidad económica y política financiera de la República durante la Administración Santa María (1881-1886). Desarrollo comercial y rentístico*..... 401

Juicio crítico sobre la Administración de Santa María en la vida económica en la República..... 446

11. *Situación y actividades económicas de la Administración Balmaceda (1886-1891)*... 452

Juicio crítico del conjunto de la situación y actividades económicas de la Administración Balmaceda..... 483

12. *Normalización y desarrollo de la vida económica de la República bajo la Administración de Don Jorge Montt (1891-1896). Política financiera* 488

Juicio crítico del papel que tocó desempeñar a la Administración de Don Jorge Montt en la vida económica nacional..... 522

13. *Labor económica durante el último lustro del siglo XIX, bajo la Presidencia de Don Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901)*.. 525

Juicio crítico de la actividad económica nacional durante el último lustro del siglo XIX, bajo la Administración de Don Federico Errázuriz Echaurren.... 547

14. *Labor económica, iniciativas de política comercial y acontecimientos financieros en el primer quinquenio del siglo XX, bajo la Administración Riesco (1901-1906)*..... 551

Págs.

Juicio crítico del conjunto de la labor económica de la Administración Riesco. 585
15. *Vida económica de Chile durante la Administración de Don Pedro Montt (1906-1910)*.. 590
Juicio crítico del conjunto de la actividad económica de la Administración de Don Pedro Montt..... 607
16. *Vida económica del país durante la Administración Barros Luco (1910-1915)*..... 610
Mirada de conjunto sobre la vida y actividad económica durante la Administración Barros Luco..... 631
17. *Vida económica y financiera de Chile durante la Administración Sanfuentes (1915-1920)*..... 634
Mirada de conjunto sobre la vida económica del país durante la Administración Sanfuentes..... 658
18. *Labor económica realizada en los comienzos de la Administración Alessandri*..... 662

III. La influencia ejercida por la política económica del extranjero y el robustecimiento de la economía chilena.. 675

A. La política comercial de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos 677
1. *La política comercial de Inglaterra*..... 679
2. *La política comercial de Francia*..... 684
3. *La política comercial de Alemania*..... 687
4. *La política comercial de los Estados Unidos*..... 690

Págs.

B. La actividad político-económica de la República Argentina..... 693
C. La política comercial de Chile en el futuro y los fundamentos de la riqueza nacional..... 705
Indice de nombres..... 713
Indice alfabético..... 717

7.—Vida económica y progreso financiero de Chile durante la Administración Pérez (1861-1871).

Con la Presidencia de Don José Joaquín Pérez comienza la **república liberal.** Después de las agitaciones políticas de los últimos años de la Administración Montt, se apoderó de la población cierto cansancio, que hizo pensar en la elección de un hombre que estuviera en situación de hacer un Gobierno tranquilo, que sirviera de garantía al desarrollo normal de la vida económica. Sustentando estas aspiraciones, los partidos dirigieron sus miradas hacia Don **José Joaquín Pérez,** a quien llevaron rodeado de gran prestigio y en las mejores condiciones de apoyo político a dirigir los destinos de la patria. Pérez, que había figurado en la política nacional siendo Ministro en Gobiernos anteriores, y que había viajado por el extranjero, se caracterizaba por su tranquilidad y ecuanimidad, por su ilustración y por su rectitud. Apareció desde el primer momento como un necesario vínculo de unión.

Los valores del **comercio exterior** de 1861 llegaron a un total de exportaciones de $ 20.349,634 y de importaciones de $ 16.676,314. Con respecto al año anterior, hubo una fuerte disminución, que llegó a $ 5.101,545 en las primeras y a $ 5.495,192 en las segundas.

¿A qué se debió ello? Las noticias que hemos encontrado sobre los precios del cobre en los mercados extranjeros, producto que en aquel entonces contribuía con las mayores cifras en los valores de exportación, llegando en 1860 a $ 14.111,099, nos indican que la causa no podía ser extraña a la baja de los

valores que el metal rojo experimentaba, pues la estadística correspondiente nos da para 1861 una disminución de $ 3.042,601 en la exportación de cobre en barra y minerales de cobre crudo. En 1857 el precio del cobre en Londres fue de £ 135; en 1863 fue de £ 81 la tonelada.

El decrecimiento de las exportaciones se debió, pues, a dificultades de carácter comercial en los mercados extranjeros. El Ministro de Hacienda de entonces, Don Manuel Rengifo, hijo del anterior del mismo nombre, estimaba que se debía a eso y «muy particularmente al subido flete, que impidió en mucha parte la exportación de los minerales de cobre». Extraña es la declaración que hace el señor Rengifo a continuación: «Sin embargo, dice, investigaciones prolijas que se practican al presente y datos que tengo a la vista me hacen creer que *la exportación total de cobre en 1861 da más bien un aumento de valor que una disminución*». (*Memoria de Hacienda* de 1862, pág. 47). Hay en esto una contradicción, pues si manifestaba creer que la exportación total de cobre en 1861 daba más bien un aumento de valor que una disminución, no podía afirmar que en el valor de los cobres exportados en 1861 se notaba una considerable disminución respecto del de los exportados en 1860, *debida a la baja del precio de este artículo en los mercados europeos y muy particularmente del subido flete que impidió en mucha parte la exportación de los minerales de cobre.*

El decrecimiento casi paralelo de las importaciones de 1861 fue el efecto inmediato de la disminución de las exportaciones, ya que en el comercio internacional existe en general la tendencia de formarse un intercambio recíproco. Las mercaderías se pagan con

mercaderías. Disminuyó, así, la importación de máquinas y de artículos de lujo.

Como consecuencia de la mala situación del comercio exterior, las **rentas** de 1861 sufrieron también una notable disminución, pues llegaron sólo a $ 5.850,821.19, siendo menores en $ 1.511,334.42 a las del año anterior. El decrecimiento del comercio internacional afectó en primer lugar, como era de suponer, a las entradas de Aduana, que llegaron sólo a 3 millones 538,804 pesos 99 centavos, siendo inferiores en $ 1.238,487.88 a las del año anterior. Decrecieron igualmente las entradas del estanco, las del ferrocarril del sur, las alcabalas, los derechos de peaje, etc. Aumentaron, en cambio, las de la contribución agrícola o impuesto territorial, que llegaron a $ 666,789.64.

Se acercaban, por lo demás, los tiempos en que el Estado debía preocuparse con más ahinco en dar normas regulares y duraderas en la construcción y conservación de los ferrocarriles, medio de transporte que empezaba más y más a desempeñar el papel fundamental que le correspondió posteriormente en el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio. El primer paso importante dado en Chile en materia de **legislación ferroviaria** fue la promulgación de la *ley general de ferrocarriles* de 6 de Agosto de 1862, ley que aún se encuentra en vigencia. Según ella, los ferrocarriles construídos por el Estado, o a virtud de concesión o autorización de éste, están sujetos a los principios legales relativos a los caminos públicos. Los ferrocarriles, como vías públicas, gozan de las servidumbres establecidas por la ley sobre los fundos colindantes, sea para las obras de construcción, reparación o conservación de la vía, sea para mante-

ner expedito y libre el tránsito por ella. La ley establece numerosas prohibiciones, como las de embarazar el tráfico y otras; regula las relaciones de la Empresa con los particulares; y precave las dificultades que pudieran crearse cuando una línea atraviese ríos navegables. Contiene una cantidad de prescripciones sobre las obligaciones de la Empresa, los itinerarios y la velocidad de los trenes, sobre la carga, las tarifas, el transporte de correspondencia, los reclamos, los delitos contra la seguridad del tráfico ferroviario, etc.

Es un conjunto de buenas disposiciones sobre la materia, y en el tiempo en que se dictó, lo mejor que cabía. Si nos colocamos en situación de mayor exigencia, le haremos el reproche de no contemplar las relaciones directas entre los ferrocarriles y los caminos públicos, como cuando llega el caso de aprovechar las carreteras en la implantación de vías férreas; de no contemplar la situación que se crea con la influencia de la construcción de un ferrocarril en las aguas existentes; y de enmudecer en el control financiero. Dictada sesenta años atrás, en que este medio de locomoción contaba con sólo pocos kilómetros de extensión, la ley general de ferrocarriles no puede satisfacer ya en buena forma las múltiples exigencias modernas. Ella fija, por ejemplo, seis meses de plazo para que entren en vigencia las tarifas. Es esta una prescripción que no puede ajustarse hoy por hoy a las necesidades ni conveniencias, pues la vida económica experimenta alteraciones rápidas que exigen adaptación oportuna de las tarifas.

En cuanto al *ferrocarril de Santiago a Valparaíso*, se autorizó nuevamente al Gobierno para que pudie-

se comprar las acciones que aún conservaban los particulares. El fin era que quedara completamente en manos del Estado. El ferrocarril se entregó al tráfico en toda su extensión (187 kilómetros) en 1863. Igualmente se autorizó al Ejecutivo para levantar planos con el fin de prolongar la vía férrea *del Sur* hasta Chillán, y entre Chillán, Concepción y Talcahuano, formando el presupuesto y pudiendo invertir los fondos que hubiere menester para llevar a cabo los trabajos. Se le autorizó también para que prestase la garantía del Estado a las obligaciones que contrajese la Empresa del Ferrocarril del Sur hasta por la suma de $ 560,000 a fin de consolidar su deuda flotante y de concluir el cierre de la línea. Nacía esta iniciativa de la más legítima comprensión de los intereses nacionales en el orden económico, político y social.

Ocupando el cargo de Ministro de Hacienda Don José Victorino Lastarria, se declaró libre de derechos fiscales la *exportación del cobre* en barra o rieles fundidos con combustibles del país. La medida obedeció, sin duda, a las dificultades de precio que había en el comercio de exportación de este artículo, y promovió más tarde intensas discusiones, porque había muchos partidarios de que el metal rojo pagase derechos de exportación.

Con el fin de obtener mayores fondos, se acudió ese año al recurso de contratar un *empréstito de 1 millón de pesos*, emitiendo vales cuyo vencimiento no excedería de dos años. Sin embargo, el **comercio exterior** de 1862 fue favorable, pues superó en valores al del año anterior, aunque sin recobrar el esplendor de 1860. Las exportaciones fueron de $ 21.994,432 y las importaciones de $ 17.210,955. Aumentó la exporta-

ción de productos mineros y la importación de artículos manufacturados.

Don Domingo Santa María, Ministro de Hacienda de entonces, hace a propósito del comercio exterior de 1861 y 1862, algunas observaciones que, examinadas, no aparecen corroboradas en las estadísticas. Dice en su Memoria de 1.° de Agosto de 1863 que el aumento experimentado por el comercio exterior de 1862 sobre el de 1861 «prueba que la actividad industrial del país sale de la postración en que yacía *desde el año de 1857*, a causa de los diversos contratiempos que la trababan en su movimiento. En las exportaciones de los dos años citados se ve, agrega, que hay un exceso considerable sobre las importaciones, lo cual revela que el comercio se ha empeñado en saldar con ese exceso los créditos que por la crisis pasada dejó pendientes en el extranjero, *créditos que provenían de los excesos que las importaciones tuvieron en ese tiempo sobre las exportaciones*, y que contribuyeron a perturbar el curso regular de las transacciones». Las estadísticas arrojan, empero, las siguientes cifras de comercio exterior.

Años	Exportaciones	Importaciones
1857.....	19.778,150	20.196,968
1858.....	18.335,442	18.186,292
1859.....	19.559,254	18.395,654
1860.....	25.451,179	22.171,506
1861.....	20.349,634	16.676,314
1862.....	21.994,432	17.210,955

La bien intencionada observación de Santa María se apartó de los hechos reales, pues con excepción de

1857, en todos los años posteriores hubo exceso de exportaciones. Si en apoyo de su afirmación hubieran de considerarse las importaciones invisibles, imposibles de constatar en su monto, habría que considerar también las exportaciones invisibles, igualmente imposibles de fijar.

Un tratado de amistad, comercio y navegación, celebrado entre Chile y Prusia en Febrero de 1862, proclamó también la recíproca libertad de comercio entre nuestro país y los Estados del Zollverein, pudiendo los ciudadanos y súbditos de cada una de las partes contratantes entrar libremente con sus buques y cargamentos a todos los lugares del otro en que se permitiese comercio con otras naciones (art. 2.°).

Aumento hubo también en las *rentas públicas*, que llegaron a $ 6.287,155.26, y que se debió principalmente a un exceso en las entradas de aduana y en el estanco. Con respecto a esta última institución, los ataques seguían con la misma o quizás mayor intensidad que antes. La abolición del estanco aparecía como una grande aspiración en materia económica y financiera. Don Domingo Santa María decía en la Memoria citada: «No desconozco las dificultades que puede ofrecer una medida de esta naturaleza; pero estoy persuadido que es menester no arredrarse por ellas, sino proponerse vencerlas con fe, con prudente audacia y con constancia. Más difícil parecía la conversión del diezmo, que contaba en su apoyo con un mandamiento de la iglesia y con los temores de la conciencia. La pertinacia, sin embargo, dió cima a todos los inconvenientes que se oponían». La dificultad matriz en la abolición del estanco se encontraba en el reemplazo de la fuerte entrada que proporcionaba al Fisco ($ 1.090,079.53 en 1862).

Por ese tiempo se creyó, no obstante, hallar una nueva fuente de recursos en los descubrimientos y en la explotación de **depósitos de guano** pertenecientes al Estado, y con fecha 26 de Diciembre de 1863 se dictó una ley que disponía que esos depósitos sólo podían explotarse mediante contratos de arriendo fijándose el precio mínimo de éste en $ 2.50 por tonelada de 920 kilógramos que se extrajese de ellos. La Aduana de Mejillones daría cuenta a la de Valparaíso de todos los cargamentos que se exportasen al extranjero.

Púdose notar en las **rentas** públicas de ese año de 1863, que fueron superiores a las del anterior, habiendo llegado a $ 6.700,659.27, una fuerte disminución de la contribución de alcabalas, que bajó a $ 214,623.65. Ello se debió a una depreciación que tuvo lugar en la propiedad, guardándose muchos de hacer enajenaciones hasta que llegasen tiempos de auge. Las dificultades económicas de 1860 y los años siguientes parecen haber sido la causa de ese fenómeno. En el *comercio exterior* las exportaciones llegaron a $ 20.118,852 y las importaciones a $ 20.487,517.

Correspóndenos en este punto de nuestra historia comercial y rentística contemplar la acción e influencia que en los rumbos económicos del país tuvo un *erudito economista europeo*, que a principios de la segunda mitad del siglo XIX residió entre nosotros. Poderosa fue su influencia en el desarrollo de las ideas económicas basadas en el principio de que las fuerzas individuales deben ser libres en todo sentido, principio que se esfuerza por alejar al Estado de toda intervención en los negocios económicos de la sociedad, restringiéndolo en su acción sólo a la protección

de la persona y sus bienes. Ese erudito fue Don Juan Gustavo **Courcelle Seneuil,** natural de Francia, que había sido contratado en 1855 por el Gobierno de Chile para la enseñanza de la Economía Política en los cursos de leyes de este país y para que desempeñara el cargo de consultor técnico del Ministerio de Hacienda (1). Regresó a su patria en 1863, después de haber extendido en Chile la propagación de sus principios económicos en cinco cursos anuales de enseñanza y en múltiples labores de naturaleza práctica, como informes técnicos que sirvieron de base para decretos y leyes económicas, como el de la ordenanza de aduanas, el de la contabilidad de las oficinas de hacienda, el de la ley de moneda, el de bancos de emisión de 1860, etc., etc.

Courcelle era el más fiel reflejo de las tendencias libre-cambistas de la Europa, que arrancadas de Gran Bretaña entre los años de 1842 y 1846 habrían de tener por efecto una grande expansión económica y comercial de Europa, especialmente de Inglaterra, en todos los países que acataran los principios del intercambio libre de productos internacionales.

Poderosa fue su influencia porque estaba poseído de vasta ilustración general y era capaz de exponer con claridad sus argumentaciones y doctrinas científicas. Fue un erudito que todo lo emprendió, llegando a ser en otras actividades gran conocedor de la literatura, del griego y del latín. En la especialidad que

---

(1) Nacido en el departamento de Dordoña en una propiedad conocida con el nombre de Seneuil, y siendo frecuente en esos tiempos, en países en que los individuos llevan sólo un apellido, el paterno, como en Francia, Alemania e Inglaterra, agregar a éste el nombre del lugar de nacimiento, firmóse con el nombre de Courcelle-Seneuil, como Schulze-Delitzch en Alemania.

aquí nos interesa fue colaborador del Diccionario de Economía Política, del de Comercio y Navegación y del Journal des Economistes. Escribió diversas obras, entre otras «El Crédito y el Banco», en que aconsejaba mayor libertad para las instituciones de esta clase; el «Tratado teórico y práctico de las operaciones de banco», el «Tratado teórico y práctico de las empresas industriales, comerciales y agrícolas», el «Tratado teórico y práctico de economía política». Esta última, concebida en Chile, fue publicada en Francia, ya de regreso, en donde igualmente dió a la publicidad «El Banco libre», el «Curso completo de Contabilidad», la «Libertad y Socialismo», la «Herencia de revolución» y el «Estudio sobre la ciencia social».

Poderosa fue su influencia también porque introdujo en Chile el método científico en la enseñanza de la Economía Política, asignatura que existía ya desde 1813 con la fundación del Instituto Nacional. Esto le dió renombre, pues el contraste que se producía con su actuación frente al modo de proceder anterior era notable. El historiador Barros Arana, que había hecho estudios de Economía Política en la cátedra nacional, y que asistió a uno de los cursos del nuevo economista, al hacer recuerdo en un trabajo publicado en los «Anales de la Universidad» en 1892 sobre la enseñanza anterior a la de Courcelle, decía que su primer profesor la hacía «en latín, como la teología y la filosofía escolástica, reduciéndola a unos cuantos axiomas empíricos, sin enlace ni coordinación». Otro profesor introdujo después el libro de Economía de Say, del cual decía Barros Arana, que se estudiaban sólo las páginas en que se hallaban las contestaciones a las preguntas del programa..., y el alumno, «aún después

de ser aprobado en el examen, no podía hallar la relación entre las diversas proposiciones que había aprendido, ni mucho menos formarse una idea cabal del conjunto de la ciencia, de la verdad fundamental de sus principios y del origen de éstos como simple deducción de los fenómenos sociales que el hombre no puede desviar o modificar por su voluntad». Las innovaciones de Courcelle en materia de enseñanza económica eran de forma y de fondo. De forma, en cuanto abandonaba el sistema de axiomas, frases hechas y aprendizaje literal, haciendo buscar materia y reflexionar al auditorio indicándole los obstáculos que todo adelanto económico había tenido en su desarrollo. De fondo, en cuanto buscaba el origen de la evolución de las leyes civiles en la transformación que sufrían los pueblos en su civilización por fuerza de los fenómenos económicos.

Los trabajos realizados por Courcelle entre nosotros hubieron de tener un formidable efecto. Los vastos estudios que en los dominios de la historia, de la filosofía y de las ciencias naturales se hacen en Europa, su personalidad sobresaliente de extranjero erudito, su carácter afable y su corrección hubieron de crearle un ascendiente entre los hombres en Chile. Tuvo discípulos que fueron entusiastas defensores y continuadores de su escuela. En el grande ambiente que se formó a su alrededor no dejó de tener su influencia la circunstancia de que por aquellos tiempos (a mediados del siglo XIX) los principios de política comercial universal no eran conocidos entre nosotros, dominando, por el contrario, demasiada buena fe al respecto. La propagación de las doctrinas de Courcelle, al colocar a los países sudamericanos, especial-

mente a Chile, frente a la Europa como en lucha de competencia industrial y comercial, careciendo de medios de defensa económica, debía facilitar poderosamente la corriente, hacia el viejo mundo, de las riquezas del nuevo, eliminando el apoyo que aquí se prestaba a las instituciones económicas nacionales por parte del Estado. Y aquí, la interesante personalidad de Courcelle Seneuil, considerada dentro de la historia general del desarrollo económico chileno, dejó un recuerdo que en la consideración de muchos problemas no ha podido producir satisfacciones para el país y mucho menos para los que han deseado el robustecimiento de la actividad económica nacional.

Con todo, su relevante personalidad y los beneficios que reportó a la ciencia en general y a la economía del mundo que le vió nacer en particular, le han hecho digno de admiración tanto en Chile como en la Europa.

Volviendo al curso de nuestra historia comercial y rentística, deberemos dejar constancia de que, a pesar del mejoramiento que se hacía notar en el comercio exterior y en las rentas fiscales de 1862 y 1863 con respecto a 1861, el Gobierno no encontraba ya la holgura que encontraba en otros años. Ahora actuaba con déficits, que se debían en último término al aumento de los gastos hechos en las obras públicas: ferrocarriles y demás. No es extraño, así, que en 1864 pidiera nuevas autorizaciones para contratar *empréstitos*, que esta vez fueron: uno interno de $ 600,000, que se obtendría emitiendo vales nominales o al portador con un vencimiento que no excediere de treinta meses, y uno externo por $ 3.000,000, en que se autorizaba al Presidente de la

República para que, mientras se realizase, pudiese hacer contrato con los acreedores de la deuda interna para prorrogar el plazo de las obligaciones que a su favor reconociese el Fisco.

Por lo que respecta a las *vías y medios de transporte*, a que el Gobierno de entonces, como el anterior, prestaba un marcado interés, se acordó subvencionar con la suma de $ 50,000 el servicio de vapores hasta Chiloé, tocando en Puerto Montt; organizar los servicios del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, disponiendo que su administración corriese a cargo de un superintendente bajo la dirección superior del Gobierno; y liberar de derechos de exportación, hasta por la suma de $ 400,000, a las pastas y metales que enviase al extranjero la sociedad del ferrocarril de Carrizal. En materia de puertos, se declaró puerto mayor al habilitado de Coronel, comprendiendo en su dependencia las bahías de Lota y Colcura y el puerto habilitado de Carampangue.

En virtud de una autorización legislativa, se dictó con fecha 31 de Octubre de 1864 una *Nueva Ordenanza de Aduanas*, encontrándose a cargo del Ministerio de Hacienda Don Alejandro Reyes. Como no era de extrañar en un servicio tan vasto como ése, se notaban irregularidades hasta en la manera de interpretar las disposiciones vigentes. Urgía una norma común a todos los servicios de esa especie, estableciendo dependencia de un organismo superior que centralizase las funciones. La ley fijó los puertos mayores marítimos e indicó lo que a todo buque mercante procedente del extranjero era permitido en ellos. Los *buques extranjeros adquirirían la más completa libertad en nuestras costas*. Lo mismo hizo con los menores

denominados habilitados. Tuvo disposiciones sobre guaneras y caletas, sobre comercio de cabotaje y puertos de Cordillera. En cuanto a los derechos de internación, determinó que todo producto de procedencia extranjera pagase un 25% de derechos sobre *avalúo*, con excepción de los a que la ley fijó el 15% (acero, alquitrán, hierro, etc.) y entre los cuales no figuraba ya la seda. Enumeró también los artículos que pagarían derecho *específico* (cigarros, ron, té, vinos, etc.), y los que quedaban libres de impuesto (algodón, cereales, efectos destinados al culto divino, libros, máquinas industriales, etc.) Fijáronse igualmente los derechos de exportación, no exceptuándose el cobre, que hacía poco se había declarado libre de imposición: ahora se pagarían 65 centavos por cada 100 kilógramos de minerales de cobre calcinado o en ejes, 30 centavos los minerales de cobre crudo y 3% el cobre en barra o rieles según avalúo. Fijáronse asimismo los derechos de exportación de la plata en barra, piña y chafalonía.

Esta Ordenanza, *que establecía ya franca y completamente la libertad de cabotaje en nuestras costas*, empezaría a producir todos sus efectos en 1866. En materia de legislación marítima y comercial, se completaba con ella la serie de medidas que tendrían por efecto el aniquilamiento de la marina mercante nacional. Se consumaba con ella la falta de equidad que significaba el dejar actuar en iguales condiciones a los buques nacionales, que pagaban en el país la contribución de patente, y a los buques extranjeros, que no la pagaban; a los buques nacionales, que pagaban aquí los impuestos de alcabala por transferencia de dominio, y a los buques extranjeros, que no los

pagaban; a los buques nacionales, que pagaban los impuestos al consumo (15%) en el país, y a los buques extranjeros, que no los pagaban, pues de ordinario traían sus artículos de fuera. El señor Reyes, Ministro de Hacienda, trataba de justificar la medida tomada y de rebatir las críticas que se hacían; pero la experiencia ha demostrado que estaba en un error, que las críticas eran justas y que los legisladores de 1811 y 1834 tenían la razón.

Muchas esperanzas se cifraban en esos tiempos en el porvenir de la agricultura. Don Alejandro Reyes decía que los agricultores, que se contentaban únicamente con el laboreo de sus tierras, principiaban a comprender que esa rama de la producción estaba llamada a ser *el principal elemento* de riqueza, explotando las diversas industrias de que es susceptible. «No de otra manera se explica, agregaba, la grande exportación de artículos que antes figuraban en muy reducida escala». Verdad era, en efecto, que la exportación de productos agrícolas había aumentado; pero ello se debía en esencial al desarrollo natural y progresivo de toda la vida económica nacional, teniendo parte principalísima el aumento de la población y el aumento del comercio de importación. En cuanto a que la agricultura estuviera llamada en Chile a ser «el principal elemento» de riqueza, parecía aún entonces, sometiendo el juicio a un criterio económico imparcial, un exagerado optimismo de agricultor, pues la existencia comprobada, la explotación, el comercio, el uso y la exportación de productos mineros daba valores totales inmensamente superiores a los de la riqueza agrícola. El país era y ha sido francamente minero. Baste saber que en el año anterior, 1863, la

exportación de productos de la minería llegó, según la Estadística Comercial, a $ 15.274,969, y la de productos agrícolas a sólo $ 3.604,685. En 1864 estas cifras fueron de $ 19.725,146 y $ 6.714,368. Esto no quiere decir, naturalmente, que la agricultura chilena no sea importante y no merezca el más decidido apoyo, ya que nos da la base y la independencia de la vida, en cuanto el país puede bastarse a sí mismo. Pero en la calificación económica se toman en cuenta los valores de los productos salidos al comercio, sobre todo al comercio internacional. La suma nunca alcanzada a que en el **intercambio comercial** llegaron las exportaciones totales de 1864, $ 27.242,853, contra $ 18.867,365 de importaciones, se debió principalmente al aumento de la salida de cobre en barra y ejes y de harina flor, sobrepasando sólo esta última en $ 1.699,426 a los valores del año anterior. Mucho se discutía en aquel entonces sobre la necesidad de imponer de nuevo una *contribución a la exportación del cobre*, suprimida, como se recordará, en 1862. Impuesto el derecho de exportación por la ordenanza de aduana de 23 de Agosto de 1851, había proporcionado entradas que se consideraba como necesarias para el equilibrio de los presupuestos. Se daban como razones en pro del impuesto: que desde ese año de 1851, en que se le gravó, el precio del metal había subido gradualmente, y que la producción, lejos de entrabarse con el gravamen, había aumentado a $ 16.000,000. El señor Reyes era decidido partidario de gravar nuevamente la exportación del cobre.

La disminución que, en cambio, esperimentaron las importaciones de 1864 con respecto al año ante-

rior, tuvieron como efecto el producir también una disminución en las entradas de aduana, ya que en éstas tomaba parte muy principal el pago de derechos de internación, lo que no debía ocurrir, por cierto en igual forma, después de la guerra del Pacífico, en que los derechos de exportación hubieron de superar fuertemente a aquéllos.

Las entradas de Aduana de 1864 fueron inferiores en $ 211,746.01, a las de 1863, que llegaron a 4 millones 259,533 pesos 92 centavos, y la suma total de las **rentas** fiscales de 1864 decreció en $ 125,740.96 con respecto a la del año anterior, llegando a un valor de $ 6.574,918.31. El total de recursos de que se dispuso en 1864 llegó, sin embargo, a $ 9.274,920.90, lo que ocurrió por haberse dispuesto de depósitos, reintegros y otros. Como los gastos hechos ese año ascendieron a $ 10.986,358.49, hubo *un déficit* de 1.711,437 pesos 59 centavos.

La contratación del *empréstito autorizado* corría prisa: había que hacer pagos urgentes. Después de algunas incidencias, se consiguió por fin en 30 de Junio de 1865 hacer la contratación con Thompson, Bonar y Cía. por la suma de $ 3.000,000 nominales, al 94% de colocación, 8% de interés y 3% de amortización, pagaderos por semestres, con una comisión de lanzamiento de 2½% y empezando la amortización el 1.° de Marzo de 1867. El empréstito dió en efectivo $ 2.820,000. La deuda se extinguiría en 16 años 318 días. En el contrato que alcanzó a proyectarse con la firma de Don Gregorio Ossa y Cerda se estipulaba un 8% de interés y amortización anual, extinguiéndose la deuda en el plazo de 23 años 285 días. La contratación del empréstito dió lugar a acer-

bas críticas, sobre todo por haberse contratado otro en mejores condiciones que éste.

Móviles de naturaleza económica y técnica local, ya que no podían ser de prosecución de política comercial, indujeron a dictar una ley que prescribía que todo buque que entrase en un puerto mayor de la República pagaría, una sola vez al año, *diez centavos por cada tonelada de registro* que midiese, cuyo producto se destinaría al hospital de caridad que en el puerto respectivo hubiese. Suprimióse, empero, la contribución de *sisa*, impuesta en 1860.

En el orden monetario, se concedió al Banco Nacional de Chile la facultad de emitir *billetes al portador* hasta el 50% de su capital suscrito. Dispúsose que esos billetes fuesen recibidos en arcas fiscales por su valor nominal, alterándose la disposición de la ley de Bancos de Emisión en el sentido de que los billetes de banco fuesen en adelante de un peso hasta quinientos. Dispúsose igualmente que mientras durase la autorización concedida a esa institución, la tasa de su descuento no podría exceder del 10% al año. En ese año de 1865 se fundó el Banco Garantizador de Valores, destinado a servir a la industria.

Como un acontecimiento extraordinario que podía tener honda influencia en la vida económica nacional, perturbándola intensamente, debemos recordar aquí la declaración, hecha por Chile, de **guerra a España,** país que, con el fin de obtener del Perú el reconocimiento de cuentas que, según decía, habían dejado pendientes los Gobiernos coloniales, mandó a las costas del Pacífico un comisario con una considerable escuadra a objeto de imponer su voluntad. Declara-

da la guerra a nuestros vecinos del Norte, la escuadra española provocó también a Chile, enviándole el 18 de Septiembre, aniversario de nuestra independencia, un ultimátum en que España desconocía el convenio celebrado con su plenipotenciario en este país y en que el jefe de la escuadra exigía que en el término de 4 días Chile saludase la insignia del almirante español con 21 cañonazos, a lo que se respondió con el rompimiento de las hostilidades. Autorizóse al Ejecutivo para que gastase los caudales públicos sin sujeción a presupuesto; para que levantase empréstitos hasta por la suma de $ 20.000,000, hipotecando para su pago las propiedades del Estado; para que impusiese una contribución de guerra que no excediese del 5% de la renta anual de los contribuyentes, y para que disminuyese en un 10% los sueldos, pensiones y jubilaciones que no bajasen de $ 300 y no excediesen de $ 1,000, de modo que los que subiesen de esta última cantidad tuviesen un descuento de 10% en todo lo que excediese. Para facilitar la circulación interna y crear mayores recursos se acordó que los billetes que emitiesen los bancos de emisión gozasen del privilegio de *no ser convertibles* en dinero hasta seis meses después de concluída la guerra con España, o a más tardar el 30 de Junio de 1867, y de ser recibidos en pago de los créditos del Estado en las oficinas fiscales por su valor nominal como moneda corriente. En cambio de estos privilegios, los bancos de emisión prestarían al Estado, sin interés, la tercera parte de los billetes que emitiesen. Fue esta la *primera ley de inconvertibilidad y de curso forzoso.* La guerra terminó en 1866 con el retiro de la escuadra española de las aguas del Pacífico, quedando to-

talmente frustrada la tentativa que se le había confiado realizar.

Prosiguiendo el país en su labor legislativa, promulgó en 1865 el *Código de Comercio*, obra importante de regulamiento mercantil, pero que aparecía con el defecto de dificultar la trasmisión de la propiedad, al ofrecer disposiciones reñidas con la celeridad en que tienden a practicarse los actos comerciales. Don Melchor Concha y Toro, Ministro de Hacienda de 1869 y 1870, le hizo también la objeción de que iba demasiado lejos en la intervención que daba al poder en la formación de las sociedades comerciales, tendiendo a constituir a la autoridad en tutor del público e imponiéndole, en consecuencia, responsabilidades que no podían hacerse efectivas.

La vida económica interna seguía su curso regular. El cambio internacional no había desmejorado: estaba en 1865 a 45 13/16 peniques por peso. Los **precios corrientes** en plaza se mantenían: los 100 kilos de trigo valían $ 3.50; los 100 kilos de cebada, $ 3.00; los 100 kilos de frejoles, $ 4.00; los 100 kilos de harina flor, $ 6.00; los 100 kilos de maíz, $ 4.00; los 100 kilos de patatas, $ 2.00.

A pesar de las perturbaciones que necesariamente trae consigo un conflicto internacional como el de que nos hemos ocupado, el desarrollo del **comercio exterior** no sufrió, como puede verse en el detalle, en que las exportaciones llegaron a $ 25.712,623 y las importaciones a $ 21.240,976. Debióse ello al buen efecto político y moral que causó el hecho de que estos países estrecharan vínculos de unión para la defensa en los ataques del exterior. El detalle del intercambio comercial de 1865 fue el siguiente:

Naciones europeas	Exportación	Importación
Inglaterra	$ 14.274,691	$ 9.531,162
Francia	1.315,726	3.684,764
Alemania	333,828	1.811,848
Bélgica y Holanda	....	782,064
España	308	192,675
Italia	240	135,060
Naciones americanas		
Perú	4.770,364	1.436,133
Norte América	718,053	1.005,094
California	457,379	275,547
Bolivia	362,841	8,477
Brasil	226,605	854,927
Ecuador	150,252	137,041
Argentina	108,038	1.199,177
Otras naciones	163,667	72,688
Naciones del Asia, Africa y Australia		
Australia	2.080,631	4,464
Cabo de Buena Esperanza	186,260	....
China	58,415	13,674
Mauricio	48,976	....
Polinesia	39,964	70,224
Pesca en buques nacionales	....	25,975
Rancho de buques	416,385	....

En materia de tratados comerciales, era menester estudiar la posibilidad de realizar algunos con Bélgica, Holanda y Alemania en Europa, y con Brasil y Argentina en América. La desproporción de las exportaciones de esos países hacia el nuestro con las importaciones de procedencia chilena, ofrecían la oportunidad de hacerlo con evidente beneficio nacional.

Las estadísticas de las **rentas** públicas de 1865 daban la cifra de $ 7.301,043.87, superior en 726,125 pesos 56 centavos a la del año anterior. El abulta-

miento se debió al hecho de que ese año se cargó como entrada el producto bruto del ferrocarril de Santiago a Valparaíso (llamado entonces Ferrocarril del Norte) y el valor de sus existencias, en vez del producto líquido ingresado a arcas fiscales, como se hacía antes.

La situación precaria de las rentas frente a los gastos hizo que en 1866 se dictase un decreto, en uso de autorización legal dada al Gobierno el año anterior, con motivo de la guerra con España, imponiendo **una contribución a la renta.** Fueron gravadas con 5% anual las rentas provenientes del goce o arrendamiento de la propiedad mueble o inmueble, fuese urbana, rústica o minera; de los capitales puestos a censo y dados en préstamos; de los establecimientos comerciales, fábricas y talleres; de las profesiones liberales y de cualquiera otra ocupación. Se exceptuaron las rentas asignadas a los establecimientos públicos, las necesarias para los gastos del culto divino y las inferiores a $ 200 en algunas provincias.

La reforma de la ley de papel sellado, que adolecía de numerosas deficiencias a causa del desarrollo de los servicios públicos, se hacía necesaria. El 1866 se dictó una nueva ley. La contribución se cobraba ahora por medio de estampillas, papel sellado o timbre especial, quedando a elección del interesado hacer uso de cualquiera de estos medios. Quedaban exentos del impuesto, que pasó a llamarse de *papel sellado, timbre y estampillas*, los documentos cuya cuantía bajase de $ 10, los cheques de banco, los escritos y memoriales que se elevasen a las autoridades.

También se reformó la *ley de patentes*, que era más criticada que la anterior, a causa de deficiencias que la hacían odiosa y poco equitativa. Sujeto al impues-

to quedaba ahora el ejercicio de toda profesión, industria o arte. Para el pago de él, se dividieron los departamentos en cinco órdenes, perteneciendo al primero Santiago y Valparaíso, y al segundo Copiapó, Serena, Talca y Concepción. Para las profesiones e industrias peculiares a puertos de mar, se dividieron también los puertos en igual número de categorías. Los abogados pagaban en la primera $ 100 al año en el primer orden, $ 50 en el segundo, $ 25 en el tercero, $ 10 en el cuarto y $ 5 en el quinto; las ajencias de compañías de seguros $ 200, 100, 50, 25 y 12 respectivamente; las compañías de seguros, los bancos, las sociedades anónimas y las empresas de ferrocarriles pagaban el 2% sobre su renta neta. Eran éstas las patentes más elevadas. La ley fue hecha sin tomar en cuenta en las profesiones y los ramos medios e inferiores de la industria la renta que los interesados percibían, por lo cual seguía siendo arbitraria.

La guerra de Chile con España (1865-66) no tuvo mayor trascendencia, y el **comercio internacional** de nuestro país no sufrió perturbaciones dignas de mención: las exportaciones de 1866 llegaron a 26 millones 680,510 pesos y las importaciones a $ 18.757,345. Hay que anotar, sí, una modificación en la procedencia de las importaciones, pues disminuyeron las de los países europeos (Inglaterra, en $ 1.111,973; Francia, en $ 702,708; Alemania, en $ 420,880), y aumentaron las de los países americanos, especialmente las de los limítrofes (Argentina, en $ 196,697; Bolivia, en $ 169,279; Perú, en $ 116,697). Parece, no obstante, que la causa de la disminución de las importaciones de Europa no fue tanto la guerra de Chile con Es-

paña, como la inquietud provocada allá por los movimientos de Alemania en ese año. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que en ese tiempo cesó en sus efectos el tratado de comercio con la Argentina, quedando las exportaciones de ella a Chile gravadas aquí con los derechos correspondientes de internación. Esto, sin embargo, no tuvo mayor efecto en los valores de importación procedente de ese país. En 1868 se volvió a la libertad de cordillera.

Tampoco hubo perjuicio mayor para las **rentas** públicas, que en 1866 llegaron a un total de 6 millones 197,111 pesos 74 centavos, habiéndose palpado una disminución de sólo $ 711,330.17 en las entradas de Aduanas, motivada en esencial por la disminución de $ 2.483,631 que experimentaron las importaciones generales.

Con el propósito de satisfacer compromisos más o menos cuantiosos y urgentes que comprometían el crédito nacional, se mandó a fines de ese año a Europa un agente, Don Maximiano Errázuriz, con la comisión de contratar allí un **empréstito** por $ 10.000,000. Después de laboriosas negociaciones, dicho empréstito se ofreció en Londres el 17 de Enero de 1867 al tipo de colocación de 84%, con 6% de interés, 2% de amortización y 2% como comisión de lanzamiento. Para el servicio de la deuda, (pago de intereses y amortización), se remitirían anualmente a Londres £ 160,000; la cantidad que no se destinase al pago de intereses se emplearía en redimir el empréstito a la par, determinando a la suerte los bonos que se adquiriesen con ella. El empréstito, contratado con J. S. Morgan y Cía., produjo $ 8.000,000, y tuvo, entre otros objetos, el de pagar el de Thompson, Bonar

y Cía., de 1865, que, como se recordará, había sido contratado con una fuerte cuota de amortización, que el Gobierno con las exigencias de la guerra no podía fácilmente cumplir.

Con el propósito de facilitar la navegación por el sur del país y dar mayor vida al puerto austral de la República, se autorizó al Presidente para conceder a la línea de vapores que estableciese su servicio por el Estrecho de Magallanes una subvención de 100 mil pesos anuales por doce años. Las condiciones económicas habían mejorado y permitían atender necesidades que antes no era posible satisfacer.

Notable aumento tuvieron en 1867 **el comercio exterior y las rentas públicas**, habiendo llegado el primero a un valor total de $ 65.550,403: exportaciones, $ 30.686,930; importaciones, $ 24.863,473; y alcanzando las segundas a $ 9.756,838.03½. Las entradas de aduana, con el gran movimiento del comercio exterior y la reforma de la ordenanza, fueron superiores en $ 2.624,806.57 a las del año anterior. La reforma de la ley de patentes tuvo también parte importante en el aumento general, habiendo quintuplicado su producto. Por primera vez figura en el cuadro de entradas la renta que empezaba a dar al Fisco la explotación de las guaneras de Mejillones, que ese año llegó sólo $ 8,466.75. Efecto inmediato del aumento total de entradas fue el restablecimiento del equilibrio financiero, que se había perdido hacía algunos años.

Hubo el 1867 un gran resurgimiento en la economía nacional, resurgimiento que se apoyaba en el libre juego que, pasada la guerra con España, tuvieron las fuerzas retenidas en su desarrollo natural.

La guerra no dejó tras de sí el empobrecimiento económico que de ordinario dejan estos conflictos. Baste saber que se contó para ella con los recursos siguientes: donativos, $ 529,372.14; subsidios y conversión de subsidios, $ 495,775.87; censos, $ 1.872,755.04; descuentos de sueldos, $ 475,608.73; empréstito Morgan, $ 8.216,285.31; empréstito Thompson Bonar, $ 1.889,599.20; empréstito de los banqueros, 4 millones 539,000 pesos; *total: $ 17.918,396.29.* Y baste saber que los gastos de ella fueron: en 1865, 824,744 pesos 47 centavos; en 1866, $ 6.492,367.75, y en 1867, $ 5.429,519.88; *total: $ 12.746,632.10.*

La holgada situación permitió que en 1868 se declararan nuevamente libres de derechos los minerales y pastas metálicas que se introdujesen por la cordillera; se declaró libre también el comercio de tránsito de mercaderías extranjeras para la Argentina. Sobre la internación de ganado, se acordó que en el término de tres años pagase éste un 10% sobre el avalúo de la tarifa respectiva, no pudiendo cobrarse el derecho en los boquetes que no fuesen carreteras.

La legislación económica de ese año fue pobre: no se dictó otra ley de tal carácter que la anterior. El **intercambio comercial** seguía en 1868 su curso regular: las exportaciones ascendieron a $ 29.518,817 (1) y las importaciones a $ 25.839,801. Aun cuando las **rentas** del año anterior (1867) habían sido superiores a las de 1866 en una suma tan considerable como la que hemos conocido, motivo por el cual hubiérase esperado un estagnamiento para 1868, al igual de lo

(1) La estadística de 1868 da esta cifra, la de 1870 da para 1868 la cantidad de $ 26.196,325. En esos años hubo irregularidades en la recopilación de datos. Así lo corrobora también el Ministro de Hacienda de entonces.

que había ocurrido en otras ocasiones, fueron las de éste último bastante superiores a las de 1867, pues llegaron a $ 10.694,974.04, habiendo alcanzado sólo las de aduana a $ 6.036,839.55. El aumento provino de estas últimas y de las especies estancadas. Las entradas de la explotación de las guaneras de Mejillones, que figuraron por primera vez sólo el año anterior, habían aumentado ya a $ 15.433.55.

Tócanos consignar aquí dos palabras en recuerdo del Ministro de Hacienda que concluía su misión en 1868, Don **Alejandro Reyes.** Con un inteligente y tesonero trabajo, iniciado en ese Departamento en 1864, tuvo la satisfacción de ver realizadas sus predicciones de mejoramiento económico, a pesar de haber sido entorpecida su labor por las perturbaciones y azares de la guerra. Fue un Ministro afortunado, que logró que sus medidas y reformas en el ramo de hacienda le fuesen aceptadas y fuesen seguidas de éxito, sobre todo al producir un aumento efectivo en las rentas fiscales. Las Memorias que presentó al Congreso, aunque pudieran ser objetadas de faltas de método, revelan una gran dedicación y un positivo entusiasmo por la tarea que le estaba encomendada.

En cuanto a la legislación económica y financiera de 1869, debemos constatar que fue pobre, casi como la del año anterior. Lo poco que se hizo fue modificar algunos derechos de internación, liberando de ellos a artículos como el alquitrán, las anclas, boyas y cadenas, la estopa, las planchas de cobre para forro de buques, etc., artículos todos de navegación y puertos; autorizar al Presidente para que contratase *otro empréstito*, dentro o fuera de la República, que produjese $ 4.000,000 efectivos, para destinarlos a la cons-

trucción del ferrocarril de Chillán a Talcahuano, emitiendo bonos cuyo fondo de amortización anual no podría exceder de 2%, y abriendo una cuenta corriente en alguno de los Bancos del país hasta por la suma de $ 1.000,000 a un interés de 7%, deuda que sería cancelada con el producto del empréstito; y disponer que el cobre que se exportase por la provincia de Coquimbo sólo pagase los derechos establecidos por la Ordenanza de Aduanas de 1864, cesando de cobrarse el impuesto de 18¾ centavos creado por el Senado Consulto de 1823.

Por lo que respecta al desarrollo **del intercambio comercial y de las rentas** de 1869, notóse en el primero un aumento de importaciones; las exportaciones llegaron a $ 27.725,778 y aquéllas a $ 27.232,218. Exceso general hubo en las entradas, que llegaron a un valor total de $ 11.484,806.75. Fueron superiores principalmente las rentas de aduana, las especies estancadas y las alcabalas, habiendo crecido éstas últimas en $ 278,775.74, lo que se debió a la enajenación de una valiosa propiedad.

El notable desarrollo del espíritu de progreso material que se dejaba sentir en los últimos años, era causa constante de que el aumento de las rentas crease siempre un marco estrecho de satisfacción de los gastos requeridos por las necesidades. Y los dirigentes no han podido sino que estar preocupados perennemente en buscar con incremento de entradas el equilibrio de la situación financiera. Don Melchor Concha y Toro, Ministro de Hacienda de 1868 y 1869, que aparece en nuestra historia financiera como un funcionario de marcadas iniciativas y de originalidad, declaraba que el mejor medio para nivelar de

modo permanente los gastos con las entradas, era la creación del *impuesto sobre la renta*, con cuota movible, fijada por el Congreso según los gastos que autorizase.

Era este un magnífico pensamiento, pues si existe alguna contribución que pueda presentar elasticidad en los medios suministrados, como lo requieren tan a menudo las circunstancias, es el impuesto a la renta. Si la idea no tuvo mayor impulso y no salió de esos límites, fue en gran parte porque el propio Ministro declaraba no ser oportuno el momento para propiciarla, porque la Administración estaba próxima a espirar en su período constitucional y el establecimiento de la contribución requería que las autoridades que la plantearan prestasen garantías de permanencia y estabilidad. Fue ésta, sin duda, una declaración que no debió hacer, pues el impuesto no podía afectar a una Administración determinada, sino a la vida permanente de la nación.

Otra idea del señor Concha y Toro era la de imponer la *contribución de herencias*, que no existía y que, según la escala que se adoptase, podría dar recursos más o menos apreciables. A este respecto hay que tener presente, sin embargo, que en algunos países se ha dado grande importancia a esta fuente de recursos, como, por ejemplo, en Inglaterra, por existir una población rica y numerosa. Entre nosotros, en que la distribución de las riquezas es escasa y en que, por lo tanto, la gran masa de la población es relativamente pobre, la contribución de herencia no ofrecerá los recursos que ofrece en países como aquél.

Preocupado aparecía el Ministro con los fondos de que se debía disponer para la construcción y termi-

nación de diferentes y costosas obras públicas, como ser el ramal de ferrocarril de Llay-Llay a San Felipe y el ferrocarril del Norte. A satisfacer estas necesidades en un período de grandes empresas ferroviarias, como era el en que se encontraba, obedecían sus proyectos y sus esfuerzos.

El señor Concha y Toro fue también partidario de la abolición del *impuesto de alcabalas*, que no hacía, en su concepto, sino entrabar la trasmisión de la propiedad, que se verificaba o por apremiantes necesidades del vendedor, constituyendo una injusta exacción, o porque éste buscaba una industria más lucrativa, caso en que la contribución se hacía «antieconómica», pues entorpecía la libertad de las transacciones. Creía, en fin, que con la contribución de herencias, la anterior y la reforma de la ley de papel sellado, podría suprimirse la de alcabalas.

En cuanto a la renta aduanera, tuvo la idea de rebajar gradualmente los derechos de internación sobre artículos de consumo reproductivo, hasta llegar a la exención completa en tres años. Quería así estimular la producción nacional abaratando los costos. La conveniencia de esta medida no aparece, sin embargo, tan clara como en las ya tratadas, porque aquí se ha divisado siempre el peligro de que las rebajas no aprovechen a la generalidad, sino a unos pocos. Esa norma, bien aplicada y controlada, puede, no obstante, llegar a ser de los más positivos beneficios para la comunidad.

Por lo que atañe a la deuda pública, hay que anotar aquí que en el presupuesto de ese año, 1869, *figuró por última vez la cuota correspondiente al empréstito de 1822*, extinguiéndose la deuda, por fin, en el término de 46 años.

La legislación económica y financiera de 1870 fue, como en los dos años que le precedieron, escasa. Al período de agitación política, tanto de carácter ejecutivo como de carácter legislativo, producida por la guerra con España, sucedió, naturalmente, uno de reposo, que hubo de reflejarse en la legislación económica. Dictóse ese año en materia monetaria, y ocupando la Cartera de Hacienda Don José A. Gandarillas, una ley que autorizaba la fabricación y emisión de una moneda de vellón que reemplazaría a la antigua de cobre: la moneda sería de 2, 1 y ½ centavos de valor; de 25, 21 y 19 milímetros de diámetro; de 7, 5 y 3 gramos de peso, y de una ley de 70% de cobre, 20% de níquel y 10% de zinc. No era obligatorio recibir en esta moneda más del 1% del pago, sin exceder de $ 10. Otra ley declaró libres de derechos de exportación las pastas metálicas que extrajese el contratista del ferrocarril de Chillán a Concepción y Talcahuano, para el pago de materiales, hasta la suma de $ 1.500,000. Libertad de internación se concedió, en cambio, a las lanas cardadas y sin cardar.

Las más fuertes oscilaciones sufrieron en ese tiempo los **precios corrientes**: los 46 kilos de harina se cotizaban en Marzo de ese año a $ 2.62 y $ 2.75, en Julio a $ 6.50 y en Septiembre a $ 7.50; la fanega de trigo, 97 litros, se cotizó a $ 2.87, $ 3.37 y $ 3.75; la cebada, el maíz, las lentejas y los frejoles experimentaron cambios más o menos parecidos. La causa era evidentemente la situación que se producía en Europa con motivo de la guerra franco-alemana.

Por lo que respecta al **comercio con el extranjero** hay que anotar para 1870 una exportación por

valor de $ 26.975,819 y una importación por valor de $ 28.224,139, en la forma siguiente:

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
Inglaterra	$ 16.455,130	$ 12.758,886
Francia	1.785,308	6.054,311
Alemania	126,911	2.687,512
Polinesia	93,814	43,545
San Mauricio	66,651	....
Bélgica	16,260	667,892
Italia	61,413	215,347
China	3,672	73,610
Otras naciones	....	261,331
Naciones americanas		
Perú	$ 5.224,369	$ 1.475,701
Uruguay	938,465	105,991
Bolivia	828,156	161,018
Norte América	261,157	1.491,688
Ecuador	221,112	128,600
Brasil	102,515	554,609
California	86,322	492,182
Argentina	85,775	825,058
Centro América	72,739	156,691
Nueva Granada	47,599	3,231
Paraguay	....	37,932
Rancho	553,451	....
De la pesca	....	29,006

A la constitución de esta balanza de comercio, en que los valores de las importaciones superaban a los de la exportación, contribuía la forma poco equitativa en que se hacía el intercambio con algunos países, como, por ejemplo, con Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Norte América, Brasil, Argentina, California y Centro América. La celebración de tratados mercantiles con ellos habría pertenecido a los buenos pasos que se hubiera dado en materia de política comercial.

Algún estímulo de **expansión comercial** había de envolver la convención de armisticio o tregua in-

definida que con fecha 11 de Abril de 1871 se acordó celebrar entre Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y España, pues se estipuló que cada uno de los beligerantes tendría la facultad de comerciar libremente con las naciones neutrales en todos los artículos considerados de lícito tráfico en el estado de paz, cesando, por lo tanto, toda restricción para el comercio neutral (art. 3.°). Esta convención duró sólo doce años, pues hubo de caducar en virtud del tratado de paz y amistad que se celebró en 1883.

Las **rentas** públicas de 1870 llegaron a 11 millones 537,781.42 y ofrecían el siguiente detalle:

Aduanas	$	6.438,182.16
Estanco		1.407,948.95
Impuesto agrícola		649,838.87
Alcabala e imposiciones		367,500.69
Patentes		347,011.84
Papel sellado, etc.		156,269.88
Correos		160,815.24
Guaneras de Mejillones		91,500 00
Peaje		60,273.88
Casa de Moneda		46,805.39
Telégrafos		27.256.15
Ferrocarril del Norte		1.420,421.30
Ferrocarril del Sur		187,100.00
Otras		176,857.07

Las entradas de los ferrocarriles comenzaron siete años atrás (1863) con la cantidad de $ 112,154.28. En 1870 llegaban a $ 1.607,521.30. El Ministro de Hacienda decía que estaban llamadas a ser «buenas fuentes de entradas para la hacienda pública»... Los derechos de peaje tenían que disminuir a medida que aumentaban las vías férreas. También los va-

lores provenientes de la explotación de las guaneras de Mejillones figuraban como entradas ordinarias, a pesar de ser muy inseguras y vacilantes: en 1861 rindieron $ 131.25; en 1870, $ 91,500.00; en 1871 se remataron 400,000 toneladas de guano fiscal al precio de 15 pesos la tonelada; esta venta representó para el país una utilidad líquida de $ 2.050,000; al explotador se debían pagar $ 2.50 y $ 2.25 por cada tonelada colocada al costado de la nave del comprador.

La **deuda** exterior llegaba a fines de 1870 a $ 27.843,000 y la interior a $ 8.786,000, siendo de $ 19.00 por cabeza de población.

Caracterización del conjunto de la actividad económica nacional durante la Administración Pérez

La Administración de Don José Joaquín Pérez se afanó ante todo por la construcción de obras públicas. Fue, en cierto modo, una continuación del rumbo y de los afanes que sobre este particular tuvo el período anterior. Pero no sólo continuó y terminó en gran parte lo comenzado, sino que tuvo iniciativas propias de todo espíritu progresista en ramas que en el fondo guardaban íntima relación con la anterior.

Pudiéramos decir que la Administración Pérez fue perfectamente consecuente en su acción. Ella obtuvo la dictación de la ley general de los ferrocarriles, que daba las normas a que debía ceñirse el país en este sentido. Ella obtuvo la reforma de leyes tributarias importantes, como las de patentes y papel sellado, que debían tornarse menos arbitrarias y rendir sumas mayores. Ella manifestó laudable afán en la introduc-

ción del impuesto a la renta, de importancia trascendental en la organización de las finanzas nacionales; en todo esto se podía apreciar el conocimiento que el Presidente Pérez tenía de las instituciones económicas extranjeras y el interés palpable de aplicar sus principios y su orden a nuestro país. Ella obtuvo la contratación de varios empréstitos que debían dar medios para impulsar el progreso nacional.

Fue consecuente, decimos, porque todas estas medidas tenían el fin perfectamente claro de conseguir los medios necesarios para realizar ese vasto plan de adelanto material, siendo la inversión, sin duda, más reproductiva de todo fondo público.

Se caracterizó, así, ese Gobierno por el notable desarrollo del espíritu de progreso material, fuerte fundamento de la vida y adelanto culturales. Ocurrieron en su período trastornos que pudieron ser de desastrosas consecuencias para el bienestar de la República, como la crisis de 1861 y la guerra de 1865-66. Pero hubo buena ventura y el desarrollo nacional no sufrió contratiempos que lo afectaran. Lo podemos observar en la marcha que siguieron las entradas ordinarias de la nación durante todo el período de la Administración, que fueron en:

1861.	$	5.850,821.19
1862.		6.287,155.26
1863.		6.700,659.27
1864.		6.574,918.31
1865.		7.301,043.87
1866.		6.197,111.74
1867.		9.756,838.03
1868.		10.694,974.04
1869.		11.484,806.75
1870.		11.537,781.42

Hubo, como puede verse, un aumento equivalente a un 100% en las rentas del decenio. Las entradas por cabeza de población llegaron en 1870 a $ 6.00 de 45 5/8 peniques.

Lo podemos igualmente observar en la marcha que siguió el intercambio comercial, en que, como puede verse a continuación, se nota un progreso considerable:

Año	Exportación	Importación	Total	Cambio
1861 .	$ 20.349,634	$ 16.676,314	$ 37.025.948	44 11/16
1862 .	21.994,432	17.210,955	39.205,387	45 7/16
1863 .	20.118,852	20.487,517	40.606,369	43 1/8
1864 .	27.242,853	18.867,365	46.110,218	44 5/16
1865 .	25.712,623	21.240,976	46,953,599	45 13/16
1866 .	26.680,510	18.757,345	45.437,855	46 9/16
1867 .	30.686,930	24.863,473	65.550,403	46 13/16
1868 .	29.518,817	25.839,801	55.358,618	46 1/16
1869 .	27.725,778	27.232,218	54.957,996	46 1/16
1870 .	26.975,819	28.224,139	55.199,958	45 5/8

La crísis económica de 1860 y 1861 obligó a esta Administración a empezar con déficits en sus presupuestos, situación que hubo de sostenerse durante varios años a causa del grande impulso que se dió a las obras públicas y a causa de los mayores gastos que ocasionaba el estado de guerra que se produjo. Como consecuencia de los empréstitos que hubo de levantar con el fin de estimular esas obras, sobre todo los ferrocarriles, y hacer frente a los gastos de guerra con España, aumentó en ese período la deuda pública, llegando, como hemos visto, a fines de 1870 a $ 36.629,000.

Si en todos los actos anteriores fue previsora y feliz esa Administración, no lo pudo ser, por culpa del «laissez faire» dominante en materia comercial, para la historia de la marina mercante nacional. La ordenanza

de Aduanas de 1864 concluyó de consumar el abandono en que se dejaba a ese factor de la riqueza del país, al sancionar la completa y absoluta libertad de cabotaje en nuestras costas. Como dato ilustrativo sobre el particular, véase la Estadística de nuestra marina mercante nacional, que anota para 1864 un efectivo de 263 veleros con un tonelaje de 61,623 y de 9 vapores con 1,633 toneladas, y para 1868 un efectivo de sólo 19 veleros con 2,780 toneladas y 2 vapores con un tonelaje de 644. Fue quizás esto el efecto de haberse empapado antes el jefe de esa Administración en el espíritu y las tendencias de la Europa, espíritu y tendencias que en otro orden de materias no podían sino que merecer la más amplia acogida en nuestro país.

8. Trabajo económico y situación financiera de la Administración Errázuriz Zañartu (1871-1876)

Al carácter tranquilo del Presidente Pérez sucedió en el Gobierno el temperamento fogoso y un tanto inquieto del Presidente **Errázuriz Zañartu,** que había tomado parte en los agitados movimientos políticos de 1851. Era un liberal de nobles virtudes y de carácter emprendedor. El país cifraba en él las más justas esperanzas.

Tocóle empezar su labor en un tiempo en que la economía recibía un poderoso estímulo con la importación de capitales extranjeros, provenientes en parte de los empréstitos a que ya hemos hecho mención y en parte de la participación que tomaban los

industriales del exterior en la explotación de las empresas mineras en el país. En 1870 se habían descubierto los ricos minerales de Caracoles, y surgía un período de grande actividad en los yacimientos de salitre de Antofagasta. Aunque las salitreras de Tarapacá y gran parte de Antofagasta no pertenecían a Chile, es lo cierto que el impulso que ellas iban alcanzando afectaba favorablemente a la vida económica de Chile, pues apreciable suma de los capitales ahí invertidos y de los brazos ahí empleados era de procedencia chilena.

En materia de obras públicas, las cuales durante los dos últimos decenios habían sido poderosamente impulsadas, se ordenó proceder nuevamente a levantar los planos y formar los presupuestos de un ferrocarril de Curicó a Chillán y de un ramal que, partiendo de la línea de Chillán a Talcahuano y pasando por la ciudad de Los Angeles, llegase hasta el río Malleco.

Siendo Ministro de Hacienda Don Camilo E. Cobo, se declararon libres de derechos de internación los minerales que se importasen del extranjero y los animales que se introdujesen por la Cordillera.

La legislación económica y financiera de 1871 fue escasa. Fuera de esto, no encontramos en la rama que nos ocupa otros hechos que merezcan mencionarse. La **actividad comercial y la situación rentística,** a pesar de las perturbaciones producidas en el continente europeo por la guerra franco-alemana, seguían su marcha. Las exportaciones llegaron en 1871 a $ 31.981,693 y las importaciones a $ 26.631,880. Consecuencia del estado floreciente del comercio exterior era la situación favorable de las rentas públicas. En 1871 alcanzaron las entradas ordinarias a $ 11.681,032

80 centavos. Bastante mayores fueron las de 1872, que llegaron a $ 13.592,410.38, habiendo aumentado las de Aduana en $ 1.430,862.23, efecto a su vez del grande incremento que experimentó ese último año el comercio internacional, que alcanzó a un valor total de $ 71.780,388, siendo las exportaciones de 37 millones 122,460 pesos. En ellas aumentó considerablemente el comercio del cobre en barra, ejes de oro y minerales de plata y cobre, como igualmente el de trigo, cebada, lana y cueros. En la importación aumentó el azúcar refinada, la yerba-mate, el género de algodón, el tocuyo y la joyería.

En cuanto a legislación económica, el año 1872 fue menos inactivo que el anterior, a causa principalmente de haberse dictado una nueva ordenanza de aduanas. Ocupando la cartera de Hacienda Don Ramón Barros Luco, se declaró libres del pago de derechos de internación a diversos artículos y se abolió el derecho de peaje en las carreteras de Santiago a Valparaíso y de Tomé a Chillán. Con la reforma de la ordenanza el comercio obtuvo más facilidades que antes, pues ella se ajustaba a la circunstancia de que los buques de vela habían sido ya substituídos por vapores en el comercio de cabotaje. Se suprimieron también los derechos de internación que pagaba el carbón de piedra extranjero. Ello debía beneficiar, según el señor Barros Luco, considerablemente a la minería.

La legislación económica de 1873 no fue más rica que la de los años inmediatamente anteriores. La mayor parte de las medidas tomadas entonces estaban destinadas a conceder pensiones. Ampliando la política económica anterior, se dispuso hacer exten-

siva a todos los minerales que se importasen del extranjero la liberación de derechos de aduana, quedando exentos de derechos de exportación los ejes o barras que se elaborasen con minerales introducidos del extranjero. No cabe duda que en esta medida había habilidad. El problema era hacerla eficaz. Era una especie de reproducción, aunque en pequeño, de la política económica ejercida por los poderosos pueblos mercantilistas de otros tiempos. En Chile no podría tener éxito. Sólo serviría para salvar dificultades especiales y del momento.

Con el fin de adquirir terrenos, equipo, maquinaria y otros útiles que necesitase la explotación del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, se autorizó la emisión de bonos del tesoro nacional que produjesen $ 2.700,000 efectivos, que ganasen el 6% de interés anual y tuviesen 2% de amortización acumulativa, haciéndose ésta por sorteo. Contratóse también un *empréstito* destinado a la construcción del ferrocarrli de Curicó a Angol y a la compra de buques para la Armada Nacional. Lo tomaron el Banco Nacional de Chile, el Oriental Bank Corporation y el City Bank Ltd. La tasa de interés fue el 5%; la de amortización, el 2%; la comisión de lanzamiento, el 1%, y el tipo de colocación, el 90%, dando un producto líquido de $ 10.232,553.65 de 44 13/16 peniques por peso. Concediéronse también permisos para construir diversos ramales y pequeños ferrocarriles, como, por ejemplo, entre la hacienda de Raimenco y las caletas de Trana y Trauco, entre Concepción y Coronel, entre La Higuera y La Serena, entre La Higuera y Totoralillo y entre Maquehua y el puerto de Arauco.

En otro orden de actividades económicas, se

autorizó al Presidente de la República para que permitiese el *cultivo de tabaco* y para que tomase las medidas necesarias con el fin de evitar que el artículo cosechado se consumiese sin intervención de la Factoría del Estanco. En materia de *finanzas municipales*, se acordó cobrar en todos los mataderos de la República un impuesto hasta de $ 0.30 a $ 0.45 por cada 100 kilos de peso bruto de los animales beneficiados, prohibiéndose se expendiese carne que no procediese de los mataderos municipales.

Las *rentas* fiscales de 1873 subieron a $ 15.265,531 75½ centavos, correspondiendo a las de aduana $ 8.145,353.07. El producto de las guaneras de Mejillones llegó a $ 300,000. La estadística de las entradas ordinarias aparecía con algunas partidas que claramente debían figurar entre las extraordinarias, como la referente a la venta de bienes nacionales. El alza experimentada por las rentas se debía en esencial al aumento del **intercambio comercial**. Las exportaciones llegaron a $ 38.810,271 y las importaciones a $ 37.928,427.

Fuerte contraste con los anteriores forma el año 1874 en materia de legislación económica, en que fue activísimo. Empezóse por dictar una ley que ordenaba revisar *el avalúo* del canon efectivo o calculado de todos los fundos rústicos para el cobro de la contribución agrícola. El Presidente determinaba la cuota que debía pagarse, no pudiendo exceder el producto total de $ 1.200,000 y no tomando en consideración los fundos cuyo canon bajase de $ 100 anuales. A la revisión del avalúo siguió la de la ley de papel sellado, timbre y estampillas, haciéndose un detalle más minucioso del gravamen y aumentando las tarifas.

En lo referente al comercio marítimo, se estableció una contribución de $ 0.50 sobre cada lanchada de *madera de reconstrucción* que se exportase de Ancud para las costas de Chile o para el extranjero. Gravóse igualmente la exportación de maderas del departamento de Valdivia a beneficio de la Municipalidad, con una contribución de 3 centavos por tonelada. Libres de derechos de internación se declararon, en cambio, diversos ingredientes y tintas, como los aceites y las anilinas.

A la dictación de tres leyes en 1874 que reformaban artículos de la Constitución siguió, con fecha 12 de Noviembre, la promulgación de dos códigos importantes: el penal y el de minería, en el último de los cuales se introdujeron modificaciones importantes, como la que estableció que la explotación del carbón cedía al dueño del suelo. Siguió también la promulgación de una ley que ordenaba se abriese un registro para inscribir las *marcas de fábrica o de comercio* tanto nacionales como extranjeras, debiéndose pagar como derecho a la Sociedad Nacional de Agricultura $ 12 por la inscripción de una marca de fábrica, $ 3 por la de comercio y $ 1 por la copia autorizada de una u otra. Se ordenó, por último, establecer en las tesorerías departamentales un registro público de las marcas con que se distinguiesen los animales vacunos y caballares.

A ese año de 1874 pertenece la primera iniciativa de carácter legislativo para construir **ferrocarriles transandinos.** Se dictaron dos leyes: una que autorizaba a la compañía del ferrocarril de Copiapó para construir y explotar una vía férrea de un metro de trocha a través de la Cordillera de los Andes, arran-

cando de la estación de Puquios hasta empalmar con el ferrocarril central argentino, proyecto que nunca llegó a realizarse; y la otra que autorizó a Clark y Cía. con igual fin, poniendo en comunicación ferroviaria a Chile con las provincias de Mendoza y San Juan en la vecina República. Este ferrocarril se construyó más tarde sobre la base definitiva de una ley de 1903, inaugurándose en el aniversario de nuestro primer centenario de vida independiente.

En el tratado de límites celebrado entre Chile y Bolivia el 6 de Agosto de 1874 se estipuló que los *depósitos de guano* existentes entre las líneas de los paralelos 23 y 24 serían partibles por mitad entre ambos países (art. 3.°) y que los derechos de exportación que se impusieren sobre los *minerales* explotados en esa zona no excederían la cuota que entonces se cobraba, no quedando las personas, los industriales y los capitales chilenos sujetos a más contribuciones que a las que en ese tiempo existían (art. 4.°).

También en materia a finanzas se tomaron ese año medidas importantes. Con el fin de amortizar el empréstito del 7% emitido en Londres en 1867 y convertir en deuda exterior todas las emisiones de bonos que, por autorización del Congreso, debían hacerse en Chile para obras públicas, se dictó, así, una ley que autorizaba al Presidente de la República para contratar *un empréstito* que produjese hasta la suma de $ 9 millones 500,000. El monto de **las rentas fiscales y el comercio exterior** de 1874 llegaba a $ 15.661,724.23 en las primeras, a $ 36.540,659 en las exportaciones y a $ 38.417,729 en las importaciones. Las relaciones mercantiles del país con el extranjero habían sufrido en esos tiempos a causa de la baja experimentada por la

plata en Europa. Se produjo un desequilibrio entre las importaciones y las exportaciones y fue general aspiración restablecerlo con el aumento de las últimas.

Con el laudable propósito de dar a conocer los productos y el desarrollo de la industria chilena en sus diferentes manifestaciones, se preparó una **Exposición Internacional** en 1875, que tuvo bastante éxito, llegando el número de exponentes a 3,003 y el de naciones representadas a 28. Chile dió a conocer en esa ocasión los progresos que había hecho especialmente en la agricultura y en la minería, en que exhibió maquinarias y artículos que se consideraba podían competir con los similares extranjeros. El gasto hecho en ese certamen llegó a $ 447,352. El palacio que para el efecto se construyó costó $ 350,000 y se destinó luego después para el Museo de Historia Natural.

El año de la Exposición fue mucho más pobre que el anterior en materia de legislación económica. Los poderes concentraron en gran manera su atención a otros objetos, como por ejemplo, al estudio y despacho de la ley de organización y atribuciones de los tribunales, materia importante y urgente en el orden jurídico. En el orden económico se concedió por 10 años una subvención anual de $ 50,000 para abrir un *canal* permanente en la barra del río Maule, manteniéndolo con 18 pies de profundidad y estableciendo a beneficio fiscal un impuesto de 1% sobre el valor de los productos que se exportasen por el puerto de Constitución al extranjero, puerto que por aquellos años tenía mayor movimiento comercial que hoy, en que predomina su carácter de balneario. Se organizaron *las oficinas de hacienda*, quedando la administración general de ella a cargo de una Corte de Cuentas, de una Dirección de

Contabilidad General, de una Dirección del Tesoro y de Amonedación, de una Dirección de Impuestos y de Crédito Público, de una Dirección de Aduanas y de las Tesorerías provinciales y departamentales.

Desfavorable, en cuanto la estadística daba mayores cifras de importaciones que de exportaciones, era la **balanza comercial** de 1875. Hay que tener presente a este respecto que en los últimos años se había operado un cambio trascendental como consecuencia de la crisis económica que afectaba a la Europa y al mundo entero por la guerra franco–alemana de 1870–71, crisis que se hizo sentir principalmente en 1873. Reinaba una inquietud manifiesta en los círculos mercantiles. Al trastorno de los negocios en los años de la guerra, siguió el alza de los precios de los artículos, siguieron las huelgas y aumentos de salarios; hubo especulaciones febriles, impulsadas en gran manera con la construcción de ferrocarriles en todos los países de mayor cultura, motivo por el cual subió considerablemente el hierro y el carbón. La depreciación de la plata, a que ya hemos tenido ocasión de llamar la atención, trajo consigo una limitación en la acuñación de moneda de ese metal, para evitar mayores perturbaciones. Alemania había adoptado el sistema del padrón de oro en ese último año. Chile, buen productor y exportador del metal blanco, tuvo que sufrir las consecuencias de los cambios, deteniendo sus exportaciones. La participación de las diversas naciones en el total de exportaciones ($ 35.927,592) e importaciones ($ 38.137,500) de Chile en 1875, era la siguiente:

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
Inglaterra	$ 21.033,490	$ 15.702,808
Francia	3.006,850	7.814,811
Alemania	927,810	4.162,134
Bélgica	1,754	786,808
España	.....	329,879
Italia	.....	283,015
Polinesia	100,164	57,394
Portugal	2,668	56,250
China	.....	15,989
Australia	19,966	.....
Cabo Buena Esperanza	10,571	.....
Naciones americanas		
Perú	5.441,641	2.410,637
Bolivia	2.288,875	578,456
Uruguay	1.176,286	98,780
Argentina	241,314	2.727,262
Estados Unidos	417,816	2.133,443
Brasil	286,234	272,776
Ecuador	175,728	198,615
Centro América	77,568	133,098
Paraguay	.....	39,088
Colombia	54,286	25,316
Méjico	12,006	.....
Rancho	652,565	.....
De la pesca	.....	90,941

Era oportuno celebrar tratados comerciales con Alemania, Francia, Argentina y Estados Unidos de Norte América. Precisamente el comercio de esos países provocaba el marcado desequilibrio de nuestra balanza. Si el intento, que no se hizo, de formalizar algún pacto no hubiera dado resultados, no quedaba otra solución que cercenar los consumos. Los **precios corrientes** de 1875 experimentaban alza en diversos artículos: el trigo valía $ 4.35 los 100 kilos; la cebada común, $ 3.00 los 100 kilos; los frejoles, $ 7.00 los 100 kilos; la harina flor, $ 7.00 los 100 kilos; el maíz, $ 3.00 los 100 kilos; las papas, $ 2.00 los 100 kilos.

Como consecuencia de la revisión y reforma del

avalúo, aumentó el rendimiento del impuesto agrícola. Las **rentas** llegaron en 1875 a $ 16.350,119 07½, en la forma que sigue:

Aduanas	$ 7.801,489.07
Estanco	1.726,181.66
Impuesto agrícola	1.044,107.21
Alcabalas e imposiciones	458,087.96
Patentes	430,586.27
Papel sellado, timbres, etc.	417,526.09
Correos y telégrafos	68,927.80
Casa de Moneda	106,755.62
Peaje	37,009.70
Ferrocarriles	3.144,050.26
Arriendo de fundos fiscales	15,653.28
Intereses y descuentos	219,918.83
Venta de bienes nacionales	254,918.09
Guaneras de Mejillones	175,375.00
Redención de censos	21,062.61
Reintegro hecho por el Perú por gastos de la escuadra aliada	368,758.16
Otras	60,611.46½

La forma en que aparece elaborado este cuadro, que tomamos de la Memoria de Hacienda de 1875, nos demuestra la poca importancia que aún entonces se daba a la división de las entradas en ordinarias y extraordinarias. Es esta una cuestión de importancia en la organización de la hacienda pública, que prescribe que los gastos ordinarios se deben hacer con entradas ordinarias, para que exista un orden que evite desequilibrios perjudiciales a la economía. Debemos advertir a este respecto que la confusión se había producido particularmente en los últimos años a causa de los cuantiosos gastos en cierto modo inesperados que ocasionaba la adquisición de material de guerra y la prosecución

de obras públicas, sobre todo de ferrocarriles, que aunque se satisfacían en su mayor parte con empréstitos externos, dejaban margen para imprevistos que se solían satisfacer con recursos ordinarios o de otra procedencia. De ahí el cuadro precedente. Como consecuencia de esos empréstitos y del fomento general de las instituciones de carácter económico en el país, la **deuda pública** alcanzaba a fines de 1875 a $ 10 millones 509,600 la interior, y a $ 40.168,000 la exterior, sumas que en una población de 2.048,931 habitantes que el país tenía entonces, daban una deuda de $ 24.70 de $43^{13}/_{16}$ d por cabeza.

Juicio crítico del conjunto de la acción gubernativa de Don Federico Errázuriz Zañartu en la vida económica nacional.

Si hemos de considerar el total de la actividad gubernativa y legislativa durante la Administración Errázuriz Zañartu en materia económica y financiera, tendremos que reconocer que ella fue fructífera, a pesar de haberle precedido un período de tres años de escasa intensidad de trabajo en el terreno que nos ocupa y de haber transcurrido en seguida un tiempo más o menos igual de perturbaciones económicas mundiales provocadas por la declaración de guerra entre alemanes y franceses.

No podemos, sin embargo, decir lo mismo en lo referente a la política comercial y a la celebración de tratados comerciales, en que poco o nada se hizo; pero esta no es una crítica que afecte sólo a esa Administración: las afecta a casi todas. Quizás como consecuencia de un «laissez faire, laissez passer» general a me-

diados del siglo XIX en las cuestiones económicas y política consiguiente de libre cambio, se mostró en ese Gobierno demasiada liberalidad en nuestras aduanas, que exoneraron del pago de derechos a muchos artículos de gran valor.

Esa atmósfera de tranquilidad y de quietud se respira también en las Memorias de Hacienda de ese período. Comparadas con las anteriores, ellas son en general lacónicas, de escasa dilucidación de los problemas económicos de la época o de los que se podían vislumbrar. La naturaleza reposada del Ministro Barros Luco les dió quizás ese carácter que las hace diferenciarse tanto de la viveza, si se quiere, de las de Don Manuel Camilo Vial y del método de Don Manuel Rengifo el padre. Pero dan los datos completos de la marcha progresiva de la nación en los ejercicios correspondientes. La falta de actividad en materia de legislación económica en algunos de esos años, y esto es extensivo también a los últimos de la Administración anterior, parecía dar la impresión de que la organización económica de la nación estaba ya terminada. La verdad es, sin embargo, que ella no se considera ni debe considerarse jamás realizada, porque los Estados son organismos vivos, que se desarrollan constantemente y evolucionan en múltiples sentidos.

Ampliamente memorable es la Administración Errázuriz Zañartu en materia de legislación constitucional, pues en su período se dictaron, como hemos visto, tres leyes importantes de reformas sobre el particular. Fueron cambios que modernizaron la Constitución Política del 33 y que adaptaron sus prescripciones a la época. La naturaleza del Mandatario se revelaba más en ésta que en las demás actividades.

De carácter cultural y de trascendencia jurídica fue

la elaboración y promulgación del Código Penal, como fue de trascendencia económica nacional la aprobación del Código de Minas, promulgado en el penúltimo año de ese Gobierno. A la liberalidad de los preceptos de este último, hoy claramente anticuado, se debe, sin duda, el estímulo que entonces recibió esa rama tan importante de la riqueza y que preparó el desarrollo que más tarde tuvo. Fue esta, incuestionablemente, una medida de importancia en la vida económica durante la Administración Errázuriz Zañartu. La explotación y el comercio de los productos de la minería había tomado gran desarrollo, ocupando parte esencialísima en las exportaciones. El total del comercio exterior durante este período experimentó un aumento consolador, como puede verse en seguida:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1871.....	31.981,693	26.631,880	58.613,573	45 15/16
1872.....	37.122,460	34.657,928	71.780,388	46 3/8
1873.....	38.810,271	37.928,427	76.738,698	44 13/16
1874.....	36.540,659	38.417,729	74.958,388	44 5/8
1875.....	35.927,592	38.137,500	74.065,092	43 13/16

Desfavorable fue, sin embargo, la circunstancia de haber aumentado las importaciones al extremo de sobrepasar a las exportaciones. En tiempos en que la economía, a causa del desarrollo del crédito y la contratación de empréstitos, se hacía más y más complicada, ello tendría su alcance perjudicial en el cambio, y así lo vemos corroborado. También las rentas públicas tuvieron su desarrollo apreciable, pues llegaron

En 1871 a.....	$ 11.681,032.80
» 1872 ».....	13.592,410.38
» 1873 ».....	15.265,531.75½
» 1874 ».....	15.661,724.23
» 1875 ».....	16.350,119.07½

Es halagador constatar el hecho que por cabeza de población las entradas llegaron, al final de este período, a $ 8.00 de 43 13/16 peniques por peso. El punto que, en cuanto al trabajo económico y financiero de la Administración Errázuriz Zañartu, quisiera un crítico parcial explotar en contra, sería el del aumento de la deuda pública, que fue consecuencia de los empréstitos. Pero sería esta una crítica injusta, pues el producto de ellos se invirtió en obras altamente reproductivas para la economía nacional, como fueron los ferrocarriles, y en el robustecimiento de la defensa del país, lo que también sometido al concepto de la utilidad económica, era perfectamente reproductivo en tiempos en que se carecía casi en absoluto de lo más indispensable para la seguridad de la patria y el mantenimiento de la soberanía. Fueron estos mismos elementos de defensa los que no mucho después se utilizaron para obtener el triunfo en la contienda del Pacífico.

9.—Papel que desempeñó la Administración de Don Aníbal Pinto (1876-1881) en el desarrollo económico de la nación.

No era sencilla la solución de los problemas que se presentaban para el futuro, tanto en los dominios de la economía como en los de la política internacional, sin dejar de ser del todo ajena esta última a la influencia de la primera. Ocurría que en las salitreras de Tarapacá y Antofagasta, los centros industriales del nitrato, adoptaban los Gobiernos del Perú y Bolivia me-

didas que perjudicaban los intereses chilenos con condiciones y gravámenes arbitrarios. Como consecuencia del descontento, de las perturbaciones sufridas en la Europa por el conflicto de 1870–71, que aún perduraban, y por el cambio de régimen monetario de Alemania, que adoptaba el padrón de oro, las industrias chilenas, sobre todo las mineras, se abatían y producían una crisis económica de dificultosa y larga solución.

Concluído el período constitucional del Presidente Errázuriz Zañartu, correspondía encontrar al hombre que en estas condiciones se hiciese cargo de la administración del Estado. Recayó la elección en Don **Aníbal Pinto**, llevado al poder por reconocerse en él a una personalidad de amplia ilustración, de vasto conocimiento del exterior y de carácter moderado, que le colocaría en situación más ventajosa que a otras para emprender la solución de intrincados problemas que reclamaban prudente solución.

En cuanto a la crisis económica, nada se pudo hacer en 1876, año de la trasmisión del mando, por conjurarla, lo que, sin duda, contribuyó a ahondarla. La legislación financiera dormía y el cambio internacional bajaba a 40 9/16 peniques por peso. **Las rentas nacionales y el comercio exterior** de 1876 habían disminuído: los valores de las primeras llegaron a $ 15 millones 360,158.38 y los del segundo a $ 76.986,554, siendo las exportaciones de $ 37.771,139 y las importaciones de $ 39.215,415.

El comercio agrícola sufrió por malas cosechas. Más vida tuvo la minería. En ésta existía la preocupación de fomentar la explotación del carbón. El problema que al respecto debía resolverse nacía del hecho de que para estimular la explotación de minerales de cobre,

plata, etc., se permitía la entrada libre del carbón extranjero, el cual en tales condiciones hacía una arruinadora competencia a la extracción del nacional.

El Ministro de Hacienda, Don Rafael Sotomayor, no era partidario de emprender una reforma del sistema tributario nacional, dadas las condiciones económicas en que se encontraba la nación. «Es prudente, decía en su Memoria, dejar que el país vuelva a su estado normal, a su anterior prosperidad por el trabajo, y en la tranquila posesión de sus fuerzas productoras podrá esperar con menos alarma la modificación radical de sus contribuciones». La esperanza que el señor Sotomayor abrigaba era la que emanaba de la pronta terminación de las obras públicas que se habían emprendido, circunstancia que disminuiría fundamentalmente la suma de gastos públicos, con lo cual se fomentaría la industria y el comercio y se incrementarían las rentas, además de obtenerse los frutos de las propias obras realizadas. El espíritu reposado con que el señor Sotomayor aparecía en medio de la crisis, le hacía desconocer mayores motivos de preocupación y pensar en que las perturbaciones económicas eran reacciones que refrenaban transitoriamente «la exuberante actividad industrial y comercial», pero que sólo detenían por corto tiempo a los pueblos laboriosos.

Por ese tiempo se hicieron grandes **descubrimientos de depósitos de salitre** y guano en la provincia llamada entonces de Atacama, riqueza comprobada en el informe que pasó al Gobierno el profesor A. Pissis y que ofrecía facilidades de explotación, pues encontraba su natural salida al mar por el puerto de Taltal, que ya tenía su movimiento y en donde se imponía la construcción de un ferrocarril. Según el Ministro

de Hacienda, el Estado debía proteger las obras que fuese necesario emprender para la explotación correspondiente. Este solo pensamiento, en tiempos de casi completo liberalismo económico, era revelador de la trascendencia que desde un principio se dió a la riqueza salitrera que efectivamente se había descubierto en aquel lugar y que más tarde había de contribuir con valores tan poderosos en la economía. En poco tiempo se midieron 70.500,000 metros cuadrados de campos de salitre en Cachinal de la Sierra y Aguas Blancas.

Comprobóse también la existencia de guano junto a las salitreras. La dispersión con que se presentaban los depósitos correspondientes, hizo dificultoso el plan que debía seguirse en su explotación, tardándose en resolver por el Gobierno la manera de proceder.

Por otro lado, se autorizaba a éste para que levantase dentro del país *un empréstito* que produjese la cantidad efectiva de $ 5.000,000, emitiendo bonos que ganasen el interés anual del 8% y tuviesen una amortización acumulativa de 2%, que serían pagaderos por semestres vencidos, por sorteo y a la par. Tres millones de esa suma se destinarían a la cancelación de la deuda flotante creada el año anterior.

La difícil y extraordinaria situación originada por la crisis económica general fue causa de que en Enero de 1877 se ordenase que las mercaderías gravadas con derechos de internación pagaran durante año y medio *un décimo adicional* sobre esos derechos. Algunos artículos que en virtud de la Ordenanza de Aduanas estaban libres de gravamen pagarían el 10% sobre su valor.

Con el fin de estimular en el país la **fabricación de**

papel, cuya materia prima existe en grande escala en los bosques del Sur, se declaró libre de derechos de internación por diez años una serie de artículos necesarios a ella. La concesión recayó a favor de la fábrica de San Francisco de Limache. A pesar de estas facilidades, de la abundancia de materia prima en Chile y del gran consumo nacional de papel, esta industria no ha llegado entre nosotros a crearse una situación que le permita competir con la extranjera.

Los valores del **intercambio comercial con el extranjero y las rentas públicas** en 1877 habían disminuído considerablemente con respecto a los del año anterior: las exportaciones llegaron a $ 29.715,372 y las importaciones a $ 29.279,113; sólo la salida de productos mineros disminuyó en $ 5.172,031. Las entradas fiscales alcanzaron a $ 13.688,852.05, habiendo decrecido las de Aduana en $ 1.040,552.21. El presupuesto de gastos para ese año había alcanzado a $ 17 millones 984,989.84. Hubo que hacer economías considerables.

En el impuesto agrícola subsistía el inconveniente de que en algunas partes se había tomado como base para el gravamen sólo la renta de la tierra, y en otras, además de ésta, la de diferentes factores. En esta situación, existía la duda sobre si era más conveniente gravar en definitiva la renta o el capital. El Ministro de Hacienda, Don Augusto Matte, era partidario de tomar como base para el efecto el capital, porque estimaba su apreciación más certera, y, por lo tanto, menos sujeta a arbitrariedades. Aconsejaba no precipitarse en la solución, para no obtener funestos resultados.

Recomendaba el señor Matte la formación de la

carta catastral de la República como indispensable auxiliar de avalúos en el impuesto territorial. Nada más útil. El Ministro advertía con ello una preocupación de trascendencia en sus tiempos, una preocupación cuya solución ofrecería el fundamento más seguro en el régimen tributario, pues afectaba a la contribución agrícola y territorial en su esencia para los fines de la constatación del monto legítimo del impuesto. No tuvo necesidad el señor Matte de decir, en apoyo de su idea, que se trataba de un «país esencialmente agricultor», porque ello, además de envolver un concepto errado, pues Chile es esencialmente minero, no allegaba una mayor razón a una aseveración que la tenía toda.

Parece también que había acuerdo en ese tiempo por someter al gravamen agrícola a los fundos que producían menos de $ 100, que entonces estaban exentos. «Así como todos alcanzan los beneficios sociales, todos deben concurrir también a la satisfacción de las necesidades comunes», decía el Ministro. Para que no se menoscabara el principio de la justicia que el señor Matte hacía valer, era menester, sin embargo, que el gravamen no se ciñera a la cuota proporcional, porque en tal caso se exigiría un mayor sacrificio a los más débiles que a los más fuertes, sino a la regresiva, de manera que, dirigida a los propietarios mayores, resultara progresiva.

Con correcta argumentación de financista nos parece, en cambio, que opinaba el Ministro al decir que era necesario aumentar las entradas por medio de contribuciones, «con tanta mayor razón, cuanto que una buena parte de las dificultades económicas que nos asedian, decía, trae su origen de los fuertes desembol-

sos que demanda el servicio de las deudas contraídas para fomentar el progreso del país y, por consiguiente, los haberes de los ciudadanos». Era partidario de que se aprobara un proyecto que alzase los derechos de Aduana en algunos artículos, fijando el 15% para la internación de herramientas y maquinarias y liberando totalmente a las materias primas. Era también partidario que se gravasen *las rentas de los ciudadanos.*

Notable interés manifestaba el Gobierno por proseguir y terminar los ferrocarriles estudiados o iniciados. En 1878 se autorizó al Presidente para emitir obligaciones del tesoro que ganasen el 9% de interés anual, que tuviesen el plazo de dos años y que produjesen la suma máxima de $ 3.000,000, lo que dió lugar más tarde a la celebración de un contrato entre el Gobierno y los Bancos Nacional de Chile, A. Edwards y Cía., D. Matte y Cía., Consolidado, de la Alianza, Agrícola, Ossa y Cía., Mobiliario y de la Unión, que gozarían, hasta el 7 de Agosto de 1888, del privilegio de que sus billetes fuesen recibidos en las oficinas del Estado por su valor nominal, no pudiendo emitir por una cantidad que fuese cuatro veces superior a la tomada por cada uno en este empréstito (el producto total alcanzó a $ 2.525,000). Junto con esto, se le autorizó para contratar un empréstito interior que produjese $ 500,000 por medio de la emisión de bonos del 8% de interés anual y 2% de amortización acumulativa, pagaderos por semestres vencidos, haciéndose la amortización previo sorteo y a la par, con el fin de hacer frente a los gastos de las obras del ferrocarril de Curicó a Angol.

De bastante actividad legislativa en materias eco-

nómicas fue el año de 1878. La crisis por que atravesaba el país causaba cada vez mayores males, y era menester tomar medidas de orden y de robustecimiento económico. Se empezó por dictar en el ramo de *navegación* una ley que determinaba con mayor precisión la nacionalidad de las naves de chilenos, los requisitos para obtener la patente de capitán, el transporte de pasajeros y correspondencia, la ingerencia de los buques de guerra en los mercantes, etc.

En armonía con los propósitos y las ideas sustentadas por el Ministro, se dictó con fecha 6 de Julio una ley en virtud de la cual los productos procedentes del extranjero pagarían en su internación el *25% sobre su avalúo*, fijándose también el 35%, el 15% y el 4% para una gran cantidad. Esa ley declaró en su artículo 4.° que quedaban abolidos los derechos de exportación sobre el cobre en barra, rieles o retalla y sobre los minerales de cobre crudos, calcinados o en ejes, disposición que comenzaría a regir desde el día en que se estableciese un impuesto directo sobre la minería de cobre.

El desequilibrio de la balanza comercial en los últimos años, en que las importaciones superaban a las exportaciones, hubo de dejar sentir sus efectos sobre la relación de créditos y débitos con el extranjero, efectos que en un principio, tratándose de un país en que de ordinario las exportaciones eran superiores a las importaciones, no se manifestaron en la forma apremiante en que hubieron de manifestarse en los días a que nos referimos. El desequilibrio de la balanza comercial y económica trajo como consecuencia una **crisis monetaria** en el país, pues empezó a exportarse el oro y la plata amonedada en grande escala. Fue es-

caseando más y más la moneda metálica y subiendo de valor, y se producía una situación que se prestaba para ser aprovechada por los especuladores. La estabilidad del régimen de conversión del billete en valores metálicos era un problema que hacía cavilar y que despertaba en muchos un justo temor.

Los apremios habían llevado al Gobierno, como hemos visto, a pedir auxilio a las instituciones bancarias, las que bajo condiciones no siempre equitativas, se lo habían otorgado. El poder de independencia del Fisco frente a los Bancos se iba debilitando, y llegó un momento en que no se encontraba otra medida que la de declarar la **inconvertibilidad de los billetes de banco** como único recurso de salvar la difícil situación creada al comercio y al país entero por la falta de medios. En efecto, el 23 de Julio de 1878 y ocupando la cartera de Hacienda Don Augusto Matte, se dictó una ley que declaraba como moneda legal, para la solución de todas las obligaciones que debían cumplirse en Chile, contraídas antes o con posterioridad a esa fecha, y cualquiera que fuese la forma en que se hubiesen otorgado, los billetes a la vista y al portador emitidos por los bancos que firmaron con el Estado el último contrato de préstamo. Los sujetos a la ley no quedaban obligados a convertir en moneda metálica, hasta el 31 de Agosto de 1879, los billetes que emitiesen, que en total no podrían exceder de una cantidad cuatro veces mayor a la tomada por cada banco en el último préstamo hecho al Fisco; pero quedaban obligados a pagar mensualmente a éste el interés del 4% anual sobre el monto de los billetes que apareciesen en circulación en los balances mensuales. El Estado prometía convertir en metálico en aquella fecha

los billetes puestos en circulación en tales circunstancias.

Una ley de 6 de Septiembre de 1878, que lleva la firma de Don Julio Zegers como Ministro de Hacienda, derogó la anterior y dispuso que los bancos de emisión podrían hacer inconvertible por moneda de plata hasta la suma de $ 15.010,000 a que los autorizaba la de 1860, fijando como cuota máxima de la emisión inconvertible para el Banco Nacional de Chile, $ 4.400,000; para el de Valparaíso, $ 4.000,000; para el de A. Edwards y Cía., $ 2.160,000; para el Consolidado de Chile, $ 1.000,000; para el de Matte y Cía., $ 800,000; para el de la Alianza, $ 600,000; para el Agrícola, $ 600,000; para el de Concepción, $ 500,000; para el Mobiliario, $ 400,000; para el de la Unión, $ 300,000; y para el de Ossa y Cía., $ 350,000.

Los billetes inconvertibles llevaron la inscripción: «garantido e inconvertible por la ley» y debieron considerarse como moneda legal para la solución de todas las obligaciones que debían cumplirse en Chile, contraídas antes o después de la promulgación de esa nueva ley y cualquiera que fuese la forma en que se hubiesen otorgado. Dispuso también que desde el 30 de Julio de 1879 los bancos entregasen mensualmente a la Casa de Moneda, para ser destruído, el 100% de su emisión inconvertible o reemplazasen la garantía prendaria en títulos de crédito exigidos por la ley, con moneda o pasta de oro o plata, a razón de 4% mensual, del monto de los billetes inconvertibles que tuviesen vigentes. También dispuso esa ley que la inconvertibilidad y el curso forzoso de los billetes cesaría el 1.° de Mayo de 1880, volviendo a ser únicas monedas legales las de oro y plata y quedando los

bancos obligados a convertir en ellas todos sus billetes. El Estado declaraba afianzar el pago en esas monedas metálicas, de los billetes inconvertibles. El interés que pagarían los bancos al Estado sería el mismo fijado en la ley anterior, el 4% anual, sobre el máximum de la emisión registrada en el mismo mes y vigente como inconvertible.

La declaración de inconvertibilidad y curso forzoso del billete de banco en 1878 fue el **principio del régimen del papel moneda** en Chile, pues antes de cumplirse los plazos fijados por la ley (30 de Julio de 1879 y 1.° de Mayo de 1880) para que los bancos entregasen al Gobierno el 100% de su emisión inconvertible con el fin de ser destruído y cesase la inconvertibilidad y el curso forzoso de los billetes, estalló la guerra entre Chile, Perú y Bolivia, en que hubo necesidad de mantener indefinidamente esa situación y aún de hacer emisiones de papel moneda liso y llano (1).

Pero la actividad legislativa de carácter económico y financiero de ese año no se detuvo aquí. Junto con emitir moneda de vellón de cobre de 95% y de plata y con el fin de amortizar bonos de la deuda interior y facilitar con ello la situación del circulante, se autorizó al Presidente de la República para levantar un *empréstito exterior* que produjese hasta £ 1.000,000 en efectivo o su equivalente en francos, al interés, al plazo y con la amortización que creyere más conveniente al Estado. Se impuso, además, un gravamen de

(1) Otros pormenores sobre la declaración de inconvertibilidad y curso forzoso de billetes bancarios pueden encontrarse en el libro de Don Guillermo Subercaseaux: «El sistema monetario y la organización bancaria de Chile», que es el mejor estudio especial que conocemos sobre la materia.

35% sobre su valor a los *azúcares* y chancacas que se internasen para el consumo nacional.

En materia de fomento industrial y sobre la base de los reconocimientos hechos sobre la riqueza de los nitratos en la región interior de Taltal, se autorizó al Ejecutivo para invertir hasta la suma de $ 20,000 en hacer los estudios preliminares de la construcción de ferrocarriles que comunicasen los puertos de Taltal y Blanco Encalada con esas salitreras.

De alcance social, en cuanto afectaba más a unas clases que a otras, fue la ley dictada en 1878 que imponía, por primera vez en el país, una **contribución sobre las herencias y donaciones,** la cual recaería sobre el monto líquido de toda asignación por causa de muerte y de toda donación irrevocable, impuesto que ascendería al 1% en las asignaciones o donaciones a favor de los descendientes legítimos, al 2% en las de los ascendientes legítimos, hijos y padres naturales, al 3% en las de los cónyuges y hermanos legítimos o naturales (gravándose sólo con el 1% la parte que correspondiese al cónyuge por asignación forzosa), al 5% en las de los otros colaterales, al 8% en las asignaciones y donaciones hechas a personas no comprendidas en los casos anteriores.

Presión ejerció en la aprobación de la ley de contribución de herencias la situación excepcionalmente precaria en que se encontraba el fisco, pues las entradas ordinarias no aumentaban en la forma en que aumentaban las necesidades públicas, y, por lo tanto, los gastos. La población era reacia a aceptar contribuciones. Es verdad que en todo tiempo lo ha sido. Pero circunstancias de apremio aconsejaban imponerlas. A este efecto contribuía la palabra y la opinión presti-

giosa de algunos hombres. Así, por ejemplo, Don Alberto Blest Gana, en correspondencia dirigida desde Europa al Presidente Pinto, le decía en 1878 que como satisfacción en la tarea de gobernar en situación tan precaria, con las arcas vacías, había «la empresa de enseñar al país que es menester que se resigne a contribuir para las necesidades del Estado». Pensaba, además, el señor Blest Gana que, no siendo la producción de cobre y plata, que entonces estaba sometida a grandes oscilaciones en su venta y precio, la única fuente de entradas del país, podía hacerse menos sensible su influencia en el equilibrio financiero introduciendo algunas modificaciones en nuestro sistema rentístico. Apoyaba su opinión en igual parecer de Courcelle Seneuil, con quien estaba en relación. «Si todo lo humano es imperfecto, decía el señor Blest Gana, refiriéndose a la necesidad de imponer contribuciones, nadie ha encontrado todavía el modo de crear recursos pecuniarios a un Estado en angustia sin descontentar a muchos». El no creía que el remedio de la situación por que atravesaban las finanzas era en gran manera la economía en los gastos públicos, «la economía a toda costa», como la llamaba, porque «digan lo que quieran los apóstoles de la administración gratuita, la máquina administrativa tiene necesidad de ciertos rodajes indispensables para funcionar con provecho del Estado, y lo que se ahorra suprimiendo empleos, se perderá con intereses con lo que va a sufrir el servicio. La salvación está en nuevas contribuciones» (1). Los principios y prácticas dominantes en

(1) Alberto Blest Gana, REVISTA CHILENA, de E. Matta Vial. Santiago, Abril de 1922 (págs. 285 y siguientes).

los países de viejas culturas revelaban que el señor Blest Gana estaba en lo justo. Los Estados no pueden vivir de otra manera, por lo menos de modo permanente, sin que ello quiera decir que no se supriman los puestos innecesarios o inútiles.

Las **rentas** de 1878 llegaron a $ 14.031,867.92, habiendo disminuído considerablemente las procedentes de aduana, pero aumentado las del Estanco y las de las Guaneras de Mejillones, las últimas de las cuales llegaron ese año a $ 437,762.50. Por lo que respecta al funcionamiento de la Casa de Moneda, que adquiría entonces una mayor actividad, a consecuencia de las últimas leyes de carácter monetario, debemos anotar que ese año se hizo una fuerte acuñación de oro y de plata. Por efecto de la situación de crisis y especialmente de la ley de inconvertibilidad del billete, la moneda metálica tendía con rapidez a desaparecer de la circulación, aún la de plata, a pesar de habérsela fabricado con un 8% de menos en el peso para evitar su exportación.

Los valores del **intercambio comercial** de 1878 ascendieron a $ 31.695,859 en su exportación, y a $ 25 millones 216,554 en su importación, habiendo mejorado la situación de débitos en el extranjero por causa del aumento de la primera y la disminución de la segunda. Hubo un aumento en la exportación minera, que llegó a $ 17.525,866, y una disminución en la agrícola, que alcanzó a $ 8.673,561.

La legislación económica de 1879 hubo necesariamente de ser influenciada y dominada por la **declaración de guerra al Perú y Bolivia** y su prosecución hasta obtener el triunfo. El conflicto, que fue de origen económico, se produjo luego que estos países empeza-

ron a tener dificultades financieras más o menos difíciles de solucionar, como fueron las producidas por la larga crisis que llegó al máximum de su intensidad en ese tiempo. Los apremios económicos les obligaban, como también a Chile y a la Argentina, a explorar y explotar todas las regiones que ofreciesen alguna riqueza. Como los límites entre ellos no habían sido fijados con precisión en muchos puntos, situación que había creado la dominación española y que se había mantenido mientras no se producía una causa que obligara a variarla, el reconocimiento y explotación de muchos lugares situados en las inmediaciones de las fronteras daba lugar a agitadas discusiones sobre la soberanía y, por lo tanto, sobre los derechos correspondientes. Para evitar la prosecución de conflictos jurídico-internacionales con Bolivia, que era el país con que por el norte deslindaba Chile, se había firmado un tratado por el cual se reconocía que el límite entre ambos países era el paralelo 24 de latitud sur, creándose una zona común entre los paralelos 23 y 25 para los efectos del producto de las guaneras ahí existentes y de los derechos de exportación de los minerales de esa región, producto que se asignaría por mitades a cada país.

La celebración de ese tratado de límites no concluyó con las dificultades de derecho y soberanía. Bolivia no lo tomaba mucho en consideración y trataba de imponer su voluntad y sus conveniencias económicas. Celebróse posteriormente otro tratado en virtud del cual Chile renunciaba a su ingerencia en el territorio que pasaba al norte del paralelo 24 y Bolivia a la imposición de nuevas gabelas a los industriales chilenos del desierto. Pero el Gobierno de la altiplanicie, al cabo

de cuatro años, rompió este nuevo compromiso imponiendo otra contribución a la Compañía Chilena de Salitres.

Por su parte, el Perú, que había celebrado en 1873 un tratado secreto de alianza ofensiva y defensiva con Bolivia, dictó una ley de expropiación de las salitreras de Tarapacá, su provincia más austral, con el fin de establecer el monopolio del Estado. Los perjuicios sufridos por Chile con ese motivo fueron serios, pues en esas salitreras había intereses cuantiosos de industriales y capitalistas nuestros, que debían aceptar los precios de venta que voluntariamente fijara el Perú.

La nueva contribución que Bolivia impuso a la Compañía Chilena de Salitres y el rompimiento que tal medida significaba de lo pactado, produjo el conflicto bélico, pues la empresa se negó a pagar el nuevo gravamen y el Gobierno de la altiplanicie ordenó el embargo de sus bienes y su venta en subasta pública.

Chile dispuso inmediatamente el envío de tropa a Antofagasta, la que en Febrero de 1879 tomó posesión de la ciudad e impidió el remate de los bienes de la compañía. La guerra quedaba de hecho iniciada. Oficialmente fue declarada por Chile el 3 de Abril de ese año. Como en virtud del tratado de alianza ofensiva y defensiva firmado entre Bolivia y el Perú, éste último debía entrar a la lucha al lado de Bolivia, Chile también declaró al día siguiente, 4 de Abril de 1879, la guerra al Perú.

La población de Chile era de 2.500,000 habitantes. La de Bolivia de 2.000,000 y la del Perú de 3.000,000. A una población doble se agregaba un número de fuerzas beligerantes aun mayor en el enemigo, explicándose esto último por la situación de agitación en que

se hallaban esos países, situación que les obligaba a mantener un ejército superior al de Chile (1).

Con fecha 16 de Enero de ese año se había dictado una ley que autorizaba al Presidente para emitir obligaciones del tesoro que produjesen hasta la suma de $ 500,000. El plazo sería de un año y el interés del 10% anual. Declarada la guerra contra el Perú y Bolivia, la necesidad de recursos era apremiante. El 10 de Abril de 1879, ocupando la cartera de Hacienda Don Julio Zegers, se dictó la **primera ley de papel moneda,** autorizando al Presidente de la República para emitir hasta $ 6.000,000 en billetes al portador, de curso forzoso, que serían moneda legal para la solución de toda especie de obligaciones. Sobre el rescate de estos billetes, la ley determinó que se fijase anualmente en el presupuesto de gastos la suma que debía retirarse de la circulación.

La emisión se haría de modo directo por el Estado o por intermedio de los bancos. El Gobierno intentó realizar la operación por conducto de las instituciones bancarias, exigiendo de éstas que se obligasen a prestar al Estado, sin interés, el 40% de la suma que a cada una asignó la ley de 1878, pudiendo el Estado emitir bonos a favor de los bancos prestamistas, pagaderos en 1884, que servirían para garantizar la emisión inconvertible de 1878, la que quedaría exenta del impuesto del 4% y del retiro gradual entonces fijado. Pero los bancos no dieron las facilidades que el Gobierno esperaba, y éste hubo de recurrir a la emisión directa.

El Gobierno se mostraba preocupado con los peli-

(1) Las cifras que dan algunos historiadores nuestros, de que a un ejército chileno de 2,500 hombres, oponía el Perú *uno de 8,000* y Bolivia *uno de 3,000*, son bastante decidoras.

gros de la emisión y se hacía el propósito de salir pronto de ella. Don Augusto Matte, Ministro de Hacienda, decía en su Memoria de 1.° de Agosto de 1879: «Lanzado el país, no por su propia voluntad, sino por las más legítimas exigencias del decoro nacional, a un régimen de excepción muy diverso de aquel a cuya sombra hemos visto prosperar la riqueza particular y pública por largos años, no debe echarse en olvido que su más constante anhelo debe ser, una vez que la guerra llegue a su término, volver al régimen de la circulación metálica, única base estable para las transacciones del comercio y de la industria». Junto con hacer estas reflexiones y dar esas esperanzas, hacía atmósfera para que el país aprobase nuevas contribuciones, como complemento indispensable para sobrellevar la inmensa carga fiscal que demandaba el estado de guerra y como medio de ampliar la confianza en el papel moneda emitido y en el que pudiera emitirse. «Si el impuesto, decía, no es hoy un recurso inmediato, es, a no dudarlo, una garantía poderosa que sirve para sustentar las obligaciones que el Estado subscribe con motivo de las exigencias de la guerra. La promesa de pago que ellas importan debe ser complementada con los medios de llenarla». El señor Matte estaba, sin duda, en lo correcto. Un país que en caso de necesidades extraordinarias acude al préstamo y toma medidas que garanticen o den confianza positiva de obtener más adelante los medios de cumplir con sus obligaciones de pago oportuno, ese país procede con seriedad e inteligencia.

Dictóse también una ley que autorizaba al Presidente para celebrar contratos con los tenedores de bonos de la deuda pública, a fin de modificar los inte-

reses, los plazos y las demás condiciones de esas obligaciones, no imponiendo mayor gravamen que el existente.

En armonía con los propósitos ya manifestados, de imponer contribuciones, sobre todo, a los capitales, y bajo el apremio de la necesidad de recursos en tiempos en que toda entrada era insuficiente, se consiguió establecer por primera vez el 20 de Mayo de 1879, en la víspera del memorable combate naval de Iquique, y ocupando la cartera de Hacienda Don Augusto Matte, una **contribución mobiliaria** de 3°/₀₀ anual, quedando afectos a ella los capitales impuestos a censo sobre propiedades raíces, los invertidos en toda clase de títulos o dados en préstamos, los de los bancos de emisión y compañías de seguros, los sueldos, las rentas, pensiones, gratificaciones, jubilaciones, montepíos y demás emolumentos que se percibiesen del Erario Nacional o municipal y los sueldos particulares. Se exceptuaron los capitales fiscales y los destinados al culto divino. Para fijar el valor de que debía deducirse la contribución, se multiplicaba el interés a que estaban invertidos los capitales por 12½, de modo que, por ejemplo, un capital de $ 1,000 colocado al 10% se estimaba en $ 1,250; uno de $ 1,000 colocado al 9% se estimaba en $ 1,125, etc. La ley determinó el interés que se aceptaría para cada clase de capitales. Las rentas se consideraron como interés de 10% anual en un capital dado; su contribución se debía pagar con estampillas de impuesto sobre el capital que resultase.

Muchas objeciones se hicieron a esa ley, que contenía, según se decía, prescripciones odiosas e ineficaces, como, por ejemplo, la declaración anticipada de los jefes de servicios sobre sueldos y emolumentos que no

siempre eran fijos. Aunque entonces no se llamó la atención a ello, la ley, *que en el fondo era de impuesto a la renta*, ya que tocaba los sueldos, remuneraciones, etc., y los capitales que arrojaban rentas, tuvo defectos de consideración, pues en el gravamen de éstas no tomó en cuenta la capacidad económica de cada cual o la medida del sacrificio que para el contribuyente significaba el pago de la contribución, sino que se hizo una distribución proporcional a un haber imaginario. No se podía, sin embargo, poner en duda la necesidad que había del gravamen general. Por eso, la reforma se hacía esperar.

Autorizóse luego después (Junio de 1879) la emisión por cinco años de dos millones de pesos en *moneda divisionaria* de 20, 10 y 5 centavos, con un peso de 5, 2,50 y 1,25 gramos, una ley de 500/1000 y una tolerancia de 15/1000 en la ley y de 10/1000 en el peso, no quedando nadie obligado a recibir en ella más del 5% del importe de cualquier pago, ni pudiendo exceder de $ 50 la cantidad que hubiese obligación de recibir. Al año siguiente se complementó esa suma con la emisión de un millón de pesos más.

Los gastos de guerra urgían más y más. Con fecha 26 de Agosto de 1879 se autorizó al Ejecutivo para que de fondos nacionales invirtiese hasta la suma de seis millones de pesos en continuar las operaciones bélicas. Acto continuo se aprobó otra ley que lo autorizaba para emitir hasta $ 6.000,000 en vales del tesoro, al portador y de curso forzoso, siendo moneda legal para la solución de toda clase de obligaciones. Fue ésta la **segunda emisión de papel-moneda** que se hacía en el país, y que encontraba su justificación en la situación de guerra de la nación. Si con la primera emi-

sión desapareció de la circulación la moneda metálica, con la segunda se alejó más y más la esperanza de volverla a tener en breve plazo.

La circunstancia de haberse dictado primero una ley de inconvertibilidad de los billetes de banco y después dos leyes de emisión de papel-moneda, hacía necesario tomar medidas conducentes a atraer la *moneda metálica expulsada*. Dispúsose así que los derechos de Aduana, de internación y almacenaje, se pagasen recargados con un porcentaje equivalente a la cantidad que fuese necesaria para colocar en Londres el producto de tales derechos al cambio de 38 peniques por peso en giros a noventa días vista, y que los internadores de mercaderías que pagasen los derechos en pesos fuertes no quedasen sujetos a ese recargo.

Derivada de la situación creada por los sucesos bélicos fue también la disposición legal de fecha 11 de Septiembre de 1879, que como Ministro de Hacienda lleva la firma de Don Augusto Matte, en virtud de la cual se estableció un **derecho de exportación del salitre** de 40 centavos por quintal métrico, exceptuando el elaborado al sur del paralelo 24, que quedaba libre por dos años. Fue éste el comienzo de una nueva fuente de entradas para Chile, de una fuente de entradas de significación trascendental, que con el trascurso de los años habría de llegar a ser no sólo la primera en la República, sino la que constituyera casi los dos tercios del total de las rentas fiscales, como ha ocurrido durante tantos años, sobre todo anteriores a la crisis salitrera que empezó el año pasado.

De vasto efecto fue la legislación financiera de 1879 en cuanto afectaba profundamente a la organización de la vida económica de entonces y del futuro. En

otras ramas de la vida nacional, fue también de amplia trascendencia la dictación de la ley de instrucción superior y secundaria por que aún se rigen las instituciones educacionales de Chile.

Por lo que respecta a las **rentas** fiscales de 1879, que llegaron a $ 15.396,568.08½, se constató un aumento apreciable sobre las del año anterior en el ramo de aduanas y en el de la Casa de Moneda, habiendo aumentado en $ 552,664.28 sólo en este último, con motivo de la acuñación de moneda divisionaria. La *contribución de haberes*, que aparece por primera vez, arrojó $ 196,911.88. El *impuesto de herencias*, que igualmente se inició entonces, dió $ 16,662.87. Entre las entradas extraordinarias figuraron donativos de guerra por valor de $ 132,702.82. Los gastos ordinarios y extraordinarios de 1879 alcanzaron a $ 24 millones 810,340.03.

Fue tarea especial de orden administrativo financiero para el Gobierno de ese año organizar con rapidez el régimen de aduanas en los puertos del territorio ocupado por el ejército chileno, a saber, Antofagasta, Tarapacá, Tacna y Arica. De esa manera tendría el Estado rentas especiales con qué incrementar los fondos nacionales para hacer frente a los gastos de guerra. Un decreto de Noviembre de 1879 declaró puerto mayor al de Iquique y menor al de Pisagua, que eran de grande importancia en la exportación de salitre. Para evitar mayores complicaciones, se dejaron en un principio subsistentes las disposiciones peruanas en cuanto a la salida del producto al extranjero y se dictaron prescripciones para que pudieran entrar libremente las mercaderías chilenas y nacionalizadas al territorio ocupado. Estas oportunas medidas

tuvieron por efecto robustecer, por un lado, las entradas financieras y activar, por el otro, el mercado interno. Otro importante decreto dispuso en Diciembre de igual año que el comercio de Tarapacá podría pagar los derechos en Valparaíso, sujetándose, en las mercaderías que se internasen, al recargo establecido por la ley.

En lo concerniente al salitre, la riqueza matriz de la región, se ordenó que el que se exportase por los puertos del territorio de Tarapacá pagase *un gravamen de $ 1.50 por quintal.* El fisco peruano, en virtud de las medidas tomadas para establecer en poder del Estado el monopolio de las salitreras de Tarapacá, había celebrado contratos para la elaboración del nitrato a razón de $ 1.45 de 44 peniques por quintal, sumas que daba el poder público a los particulares a cambio del producto elaborado, que él se encargaba de vender. Ocupadas esas salitreras por Chile, el Gobierno no exigió la entrega del nitrato a esos contratistas, pero impuso el pago de un derecho de exportación ascendente a $ 1.50, dejando que hubiera libertad de explotación y de venta por los particulares. Calculóse ese gravamen sobre la base del precio de venta del producto; para el particular quedaba la diferencia, que no era inferior a esa propia suma. La medida parecía entonces atinada. En efecto, con cuántas dificultades no habría tropezado el Estado chileno si hubiera adoptado desde un principio la política de vender él directamente el producto, sobre todo en circunstancias en que había sido un Gobierno extraño el que había organizado de modo inmediato el comercio del salitre con el extranjero. La medida no es, naturalmente, tan complicada cuando es un mismo país el

que introduce el cambio, monopolizando la industria.

Por lo que respecta a los antiguos impuestos, hay que mencionar en este lugar el hecho de que, con el propósito de acelerar la abolición del estanco del tabaco, que era cada vez más combatido, se había encomendado a la Sociedad Nacional de Agricultura dispusiera ensayos de cultivo de esa planta en las diversas zonas del país. Los resultados fueron favorables a la plantación, y la abolición del estanco se hacía inminente. El Ministro señalaba aún como obstáculos por salvarse, por un lado, la organización de las oficinas recaudadoras que debían substituir a las administraciones del estanco y, por el otro, el reemplazo de la renta. En cuanto al primer punto, no podía solucionarse sin aumento de gastos. En cuanto al segundo, había conveniencia en imponer una nueva contribución para que las entradas ordinarias no sufriesen notable trastorno, que llevaran un perjudicial desequilibrio a la constitución de las finanzas. Proponía el Ministro Matte un gravamen moderado sobre la propiedad urbana, que hasta entonces no había concurrido a sobrellevar las cargas comunes, si se exceptuaba el impuesto municipal. La fuente nueva daría, según él, unos seiscientos mil pesos.

Interesante es aquí observar el movimiento del **comercio con el extranjero** en 1879, sobre todo si consideramos que de ordinario la situación de guerra es causa de hondas perturbaciones y que las medidas de carácter legislativo tomadas ese año modificaban las relaciones mercantiles de la zona, que estaba ocupada ahora por Chile. Las exportaciones ascendieron a 42 millones 657,839 (Estadística Comercial, año 1880), superiores en $ 10.961,980 a las del año anterior. Las

importaciones llegaron a $ 22.794,608, inferiores en $ 2.421,946. La balanza experimentaba un alivio trascendental.

Jamás se había llegado a semejante resultado. ¿Debía ese aumento atribuirse a una mayor exportación efectiva de productos al extranjero o al alza del precio de las mercaderías exportadas como consecuencia de las emisiones de papel moneda, que llevaron el cambio de 39.6 peniques por peso, término medio de 1878, a 33 peniques, término medio de 1879? (1). Del examen que hemos hecho de la estadística comercial de esa época, resulta que el aumento se debió al imperio de ambos factores. Hubo, en efecto, incremento considerable de cantidades exportadas, como en la agricultura el trigo, que en 1878 llegó a 37.563,877 kilos con un valor de $ 1.944,847, y en 1879 a *142 millones 182,985 kilos* con un valor de $ 7.110,183; y en la minería el salitre, que en 1878 llegó a 741,470 kilos con un valor de $ 40,262, y en 1879 a *59.344,115 kilos* con un valor de $ 4.747,529. Basta tener presente las medidas tomadas con respecto a la exportación por los puertos de la zona ocupada, para comprender que las cantidades efectivas y los valores que Chile aparecía exportando eran de seguro superiores.

Pero junto con el aumento de la exportación efectiva hubo aumento de valores de exportación por el alza de los precios en los artículos correspondientes, alza que fue motivada por la depreciación de la moneda nacional, que bajó de 39.6 a 33 peniques por peso, a causa de las emisiones de papel moneda. Es éste un

(1) En Agosto de 1879 alcanzó el cambio a 27 peniques, en Septiembre a 25.5. En Diciembre estaba otra vez a 36.5 peniques.

fenómeno que tiene que producirse irremediablemente cuando decrece el poder adquisitivo de la moneda; en ese entonces se pudo observar en casi todos los artículos.

La introducción del papel en nuestro régimen monetario había producido, así, un descenso considerable en el valor del dinero y había expulsado de la circulación a la moneda metálica. En la acuñación de moneda feble de 20, 10 y 5 centavos que fue necesario hacer para evitar la escasez o la carencia de circulante de valores pequeños, existía el peligro de que se importara del extranjero, lo que ofrecía para los que tal hiciesen un beneficio cierto, dada la baja cantidad de fino que fijaba a esa moneda la última ley (500/1000). Penetrados el Gobierno y el Poder Legislativo del ejercicio de tal especulación, prestaron su aprobación con fecha 3 de Enero de 1880 a una ley en virtud de la cual no podría introducirse en el territorio de la República, bajo pena de comiso, moneda de plata de los tipos de 5, 10 y 20 centavos que llevase el cuño nacional y cuya ley fuese inferior a 900/1000 de fino. Un decreto reglamentario del mes de Febrero siguiente fijó la forma en que debía transportarse de un puerto a otro la moneda acuñada en el país, con el fin de evitar el fraude de los importadores de la de procedencia exterior.

Por otra parte, el régimen monetario del papel, que había producido el fenómeno de la depreciación del circulante, creaba una serie de necesidades que debían satisfacerse para evitar que sus malos efectos causaran mayores daños a la vida económica general de la nación. Fue así cómo nació la *Oficina de Emisión de Billetes Fiscales*, destinada a velar por la corrección de las emisiones, dando toda clase de garantías

en el lanzamiento, custodia, canje, renovación y retiro de los billetes. Creado este servicio por decreto de 16 de Enero de 1880, inició sus labores luego que llegaron, al mes siguiente, algunas remesas de billetes fiscales que se habían hecho imprimir en los Estados Unidos.

No era extraño, por lo demás, que en aquel entonces se acudiera al extranjero para la fabricación de billetes fiscales, pues no habiendo existido anteriormente, no se había palpado la necesidad de adquirir maquinaria adecuada al caso. Extraño sería que ello se hiciera hoy, pues existiendo desde esos tiempos (con alguna pequeña interrupción) la moneda de papel, se ha provisto el país de buena y perfeccionada maquinaria, que puede trabajar con rapidez. Se tiene también experiencia en la materia.

Efectivamente, hoy se fabrica todo billete o vale del tesoro en talleres nacionales, contándose con una magnífica instalación de maquinaria en la Oficina de Especies Valoradas, en donde se fabrican, además, los sellos, las fajas de impuesto y demás artículos impresos que han menester los servicios de hacienda y de otras reparticiones públicas, constituyendo esa organización una positiva y grande economía para el Estado en cuanto evita el encargo de esos útiles al extranjero.

Entrado ya el año 1880, bajo un nuevo imperio de sucesos político-económicos, se iban dejando ver algunos inconvenientes ocasionados por las primeras medidas tomadas en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Púdose, así, observar que la exportación del salitre, que quedó a cargo de los particulares, los cuales debían pagar un derecho de salida de $ 1.50 al Estado chileno, no marchaba en buenas condiciones. Parece que el Gobierno del Perú amenazaba severamente

a los industriales salitreros que contribuyesen a la exportación del nitrato. En vista de las dificultades producidas, el Gobierno de Chile ordenó en Febrero de 1880 a todos los particulares que tenían contratos de elaboración de salitre con el Gobierno del Perú, la entrega del producto al Estado chileno, debiendo éste, de acuerdo con los convenios celebrados por ellos con aquél, abonarles el costo de producción. La solución buscada por nuestro Gobierno consistía en hacer acopios de salitre para venderlo en subasta pública, estableciendo, así, aunque momentáneamente, el **monopolio del nitrato** por el Estado. En Marzo y Abril de ese año se expidieron siete decretos que ordenaban el remate de salitre en Valparaíso, vendiéndose 289 mil 603 quintales a un precio que fluctuó entre $ 3.65 y $ 3.85, estando el cambio en Marzo a 34.1 y en Abril a 32 peniques por peso. La suma total de la venta fue de $ 1.087,524.03, ingresando al tesoro nacional $ 469,044.10; el resto correspondía a los costos.

Como puede observarse, el primer ensayo del nuevo sistema de pagar la elaboración a los particulares y de venderse el nitrato por el Estado, tuvo éxito, pues la utilidad de éste fue superior a la que habría obtenido con la exigencia de $ 1.50 de derecho de exportación (1). Pero, habiendo aumentado la oferta y decrecido la demanda de salitre, el Gobierno acordó fletar buques por cuenta fiscal para atender a la exportación. Con el propósito de llegar al mejor sistema de venta en el extranjero, se buscó la cooperación de la firma Vor-

(1) Según la Memoria de Hacienda de 1880, en Iquique se había cobrado por derechos de exportación la suma de $ 138,135.25. Interesante es sobre el problema salitrero de entonces el informe de la Comisión Consultiva que presidió Don Alvaro Covarrubias en ese año, informe que se encuentra entre los Anexos de esa Memoria.

werk y Cía., que se obligaba, en virtud de un contrato, a hacer todas las operaciones de venta, seguro y demás menesteres, mediante la comisión de 2½% sobre el producto bruto de la venta, quedando así provisionalmente organizada la industria como monopolio del Estado.

Con fecha 3 de Enero de 1880 se había autorizado otra vez al Ejecutivo para que, de fondos nacionales, invirtiese hasta la suma de $ 6.000,000 más en la continuación de la guerra. El 10 del mismo mes se le autorizó para hacer la **tercera emisión,** que fue de $ 4.000,000 en vales del Tesoro al portador, de curso forzoso y aptos para la solución de toda especie de obligaciones.

El pabellón chileno flameaba triunfante en cada combate; pero las necesidades de la lucha requerían más y más recursos: con fecha 19 de Julio se autorizó nuevamente al Presidente de la República para invertir, de fondos nacionales, hasta la suma de seis millones de pesos en su prosecución. Igual fundamento tuvo la ley dictada poco después, el 19 de Agosto, que autorizaba la **cuarta emisión** de papel moneda, ascendente a $ 12.000,000 en billetes del mismo carácter legal que los emitidos anteriormente. Ella tuvo la particularidad de disponer que las oficinas fiscales recibiesen en depósito, hasta por la suma de doce millones de pesos, billetes de la emisión por sumas superiores a cien pesos y a un plazo no inferior a treinta días, depósito que ganaría el interés anual de 5% si fuese a seis meses, de 4% si fuese a cuatro meses y de 3% si fuese a menor plazo. Tales disposiciones dieron carácter de empréstito a la emisión, lo que debía producir sus efectos sobre la valorización del billete.

El cambio de la situación financiera del país ocasionado por las nuevas entradas fiscales como consecuencia de la guerra, hizo que se tomara la resolución de abolir en 1880 *la alcabala sobre arrendamiento de propiedades* raíces, contribución que ese año arrojó una renta de $ 415,159.26, que los nuevos recursos hacían prescindibles. Esa ley, como la anterior y la que sigue, lleva como Ministro de Hacienda la firma de Don José Alfonso.

Abolióse también **el Estanco,** en 1880. La disposición legal correspondiente, que lleva fecha 2 de Septiembre, era esperada con vehemencia desde hacía muchos años, muchos decenios: desde que se declaró la independencia nacional. Fue, sin embargo, un paso en cierto modo temerario, a causa de las fuertes entradas que proporcionaba al Erario Nacional. En 1879 produjo $ 1.829,287.37½, suma que en un total de rentas de $ 15.396,568.08½ representaba una cuota respetable en cualquiera situación de prosperidad. La ley dispuso la libertad del cultivo del tabaco y de su expendio. En la importación se ordenó que el habano pagase $ 1.50 por kilo y las demás clases $ 1. Los fundos rústicos, exentos entonces del impuesto agrícola, quedaron obligados a pagarlo. La Factoría General y las Administraciones del Estanco se irían suprimiendo a medida que la realización de las especies lo permitiese.

Creado el Estanco en 1753, había tenido 127 años de existencia, si prescindimos del corto período de dos años en que O'Higgins lo abolió. En otros países se ha sostenido hasta hoy. La ley dispuso igualmente la libertad de fabricación y expendio de naipes.

Fueron las rentas del salitre, esa inconmensurable

riqueza, las que dieron muerte al Estanco y las que transtornaron totalmente la organización de la hacienda pública, creándole otros problemas, como con minuciosidad veremos más adelante.

El monopolio de la venta del salitre por el Estado había llevado hasta aquí una existencia de ocho meses. Mediante la consignación confiada a la firma Vorwerk y Cía. se habían remitido 1.500,746 quintales españoles de nitrato a Europa, y por medio de Hemmenway y Cía. 183,361 quintales a Estados Unidos. La entrada líquida obtenida por el Estado había llegado a $ 2.042,061.95 en la consignación de Vorwerk y $ 262,119.59 en la de Hemmenway. Si a estas sumas agregamos las obtenidas directamente en subasta pública en los primeros meses del año, ascendentes a $ 469,044.10, obtendremos un total general de $ 2.773,225 percibidos por el Estado en la forma del monopolio establecido por él en las ventas del nitrato.

La explotación y venta del salitre por el Estado demandaba esfuerzos considerables para que se mantuviera en los límites de la conveniencia de tal organización. Húbose de pensar constantemente en las ventajas que traería consigo el abandonar a los particulares la explotación y la venta del nitrato. Vastos eran, por otra parte, los problemas y las preocupaciones del Gobierno, en momentos en que toda su atención debía concentrarse en el éxito definitivo de la guerra, para pensar en dirigir y mantener explotaciones industriales y contratar la venta de sus productos en el exterior. En tiempos de paz, en que nada perturba la tranquilidad del Estado, ello es posible y muchas veces conveniente, sobre todo cuando se trata de productos que constituyen un monopolio natural en el mundo, en

que las utilidades caen mejor en poder del Estado que de los particulares, pues van en beneficio de la comunidad entera. Si a la circunstancia de la situación de guerra agregamos la de que en esos tiempos el país contaba con un personal de empleados mucho menos preparado que hoy, podremos fácilmente convencernos de que el mantenimiento del monopolio ejercido por el Estado en la explotación y venta del salitre era difícil y se hacía insostenible.

Así ocurrió que, después de largas discusiones, en que, a pesar de todo, se manifestó la confianza de que el Estado podría seguir con ese monopolio, volvióse con fecha 1.° de Octubre de 1880 al sistema del cobro de **derechos de exportación de salitre,** dictándose una ley que los fijó en $ 1.60, o su equivalente en papel de curso legal, por cada cien kilógramos. Comprendióse también al yodo, que pagaría a su exportación $ 0.60 de peso fuerte, o asimismo su equivalente en papel de curso legal, y en que el Ejecutivo fijaría la diferencia entre el precio corriente del peso fuerte y del billete de curso legal. Exento de este derecho de exportación quedaba hasta el 11 de Septiembre de 1881 el salitre que se elaborase al sur del paralelo 24. La ley, que lleva la firma del Ministro de Hacienda Don José Alfonso, exoneró del pago de la contribución de haberes mobiliarios a las sociedades anónimas que explotasen nitrato.

Sancionóse así el régimen de la libre explotación en la industria del salitre. Ahora podía el país también dedicarse a solucionar el problema que se presentaba sobre la *constitución de la propiedad salitrera* en los terrenos situados al norte del paralelo 23, asunto complicado por diversas razones, no siendo de poca

importancia la cuestión relativa a la propiedad en el Toco, en que había puntos que esclarecer en cuanto a los derechos de los particulares frente a los Gobiernos del Perú y Bolivia. Tratóse en ese tiempo de facilitar la constitución de esa propiedad aseverando que los yacimientos de nitrato de esa zona eran «en su totalidad» conocidos, no habiendo «nada por descubrir». El Ministro de Hacienda, Don José Alfonso, a quien pertenecían estas aseveraciones, decía además: «Si Chile es el único país que produce el salitre, ya en su territorio propio, ya en el que ocupa militarmente y que no debe salir de su poder por muchas y poderosas consideraciones, lo que conviene es que, declarándose de propiedad del Estado todos los yacimientos salitreros, vaya éste enajenándolos, a medida que las necesidades de la industria lo requieran, por licitación pública que determinará el precio que obtenga el Fisco por ellos... El libre denuncio no puede producir, agregaba, ninguna ventaja para la industria, que no necesita actualmente de él para alcanzar su mayor desarrollo e incremento». Descúbrese aquí una contradicción de antecedentes que debían servir de base en la organización general de la propiedad salitrera, pues si afirmaba que no había en esa zona de nitratos «nada por descubrir», no era lógico combatir o seguir combatiendo el «libre denuncio», que incluía por lo menos la posibilidad de que hubiera yacimientos no considerados, no conocidos o no descubiertos. La verdad es que no se podía aseverar que nada hubiera por encontrar. Por otra parte, existía un peligro, previsto con clara visión por el Ministro Alfonso: personas que se decían antiguos denunciantes de salitre reclamaban la entrega de sus presuntas posesiones. Con fundamento

indiscutible recomendaba el Ministro que no se reconociesen otros títulos y derechos que los resultantes de los contratos reales emanados del Gobierno del Perú, que había implantado el régimen del monopolio fiscal. No debía, en consecuencia, reconocerse por el Gobierno de Chile otra posesión que la que se desprendiese de esos títulos o de un dominio incontestable, fundado en una explotación efectiva. «Separarse de estas reglas, decía, puede importar la sanción de un germen de abusos de todo género y la entrega de todos los yacimientos no explotados a los especuladores más audaces». El principio sustentado por el Ministro tenía justificación manifiesta en cuanto al peligro que envolvía cualquiera debilidad de parte del Gobierno en el reconocimiento de títulos que no tuviesen claros precedentes de autenticidad.

Tócanos ahora echar una mirada a la constitución de las **rentas** de 1880, en que, como consecuencia de los hechos de que nos hemos ocupado en las páginas anteriores, hubo cambios transcendentales. He aquí el detalle de las entradas ordinarias y eventuales que en su total llegaron a $ 25.941,977.03:

Derechos de internación	$ 8.831,780.51
Derechos de exportación	438,382.72
Salitre, derechos de exportación	1.336,880.64
Ferrocarriles	3.912,610.83
Impuesto agrícola	1.055,409.93
Alcabalas	640,438.80
Contribución de haberes	629,490.77
Papel sellado	201,128.50
Correo	222,150.69
Estampillas de impuesto	160,783.06
Almacenaje, faros y muelles	183,595.73
Contribución de herencia	49,860.30

Patente	294,056.17
Exportación de guano	65,981.31
Peaje	18,822.79
Telégrafos	28,855.07
Venta de salitre	4.130,322.87
Casa de Moneda	531,305.18
Venta de especies estancadas	2.636,653.03
Arriendo de salitreras del Toco	120,000.00
Contribución de guerra	60,891.31
Otras	393,576.25

El aumento de las entradas de 1880 llegó a la suma de $ 10.233,731.13, proviniendo principalmente de un exceso de $ 2.703,168.97 en los derechos de internación, de $ 432,578.89 en la contribución de haberes, y de rentas que figuraron por primera vez o que fueron eventuales, como los derechos de exportación de salitre, las entradas de la venta de éste, los valores de la exportación de guano, los de la contribución de guerra y otros. Por emisiones, empréstitos y redención de censos entraron *extraordinariamente* 18 millones 468,440.79, cantidad que sumada a las rentas ordinarias y eventuales, hizo un total de $ 44.410,417.82. Los *gastos* ordinarios y extraordinarios llegaron a $ 31.754,899.79 en el país; a Europa se remitieron $ 11.354,184.85½ para ser invertidos principalmente en material de guerra.

Por la supresión del Estanco se hacía cada vez más urgente la reorganización de las oficinas de Hacienda. Propúsose por una comisión del Senado la creación de una Dirección del Tesoro y Rentas para reemplazar a las oficinas suprimidas de aquella institución. El Ministro de Hacienda deseaba la reforma total de los servicios de su dependencia y, por lo menos, la funda-

ción de una Dirección de Impuestos y Rentas. En su concepto, se había descuidado la preparación metódica de los roles y matrículas que debían ser la base de diversas contribuciones; se había descuidado la fiscalización rigurosa de los funcionarios públicos encargados de la recaudación e inversión de los fondos del Estado. En el Parlamento no se tomaba, sin embargo, resolución, porque las múltiples preocupaciones de la guerra se lo impedían.

Interés especial ofrece el conocimiento de la participación que en el comercio exterior de Chile tuvieron las diversas naciones. Hela aquí:

Naciones europeas	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 40.097,203	$ 13.398,324
Alemania	2.128,180	4.785,642
Francia	1.987,236	4.399,035
España	112,025	603,028
Bélgica	26,710	484,497
Cabo Buena Esperanza	141,291	.....
Otras	60	531,849
Naciones americanas		
Estados Unidos	$ 2.490,936	$ 1.667,078
Argentina	1.111,016	1.465,063
Perú	857,755	1.313,726
Ecuador	583,684	218,865
Uruguay	479,029	54,099
Colombia	305,671	.....
Brasil	198,471	521,657
Otras	88,570	238,605
Rancho	1.041,712	.....
De la pesca	.....	34,536

En las exportaciones, que llegaron a $ 51.648,549, formaban el 73.21% los productos de la minería, y sólo el 22.58% los de la agricultura. El total de los artículos exportados sobrepasó en $ 8.990,710 al del año anterior. En las importaciones, que alcanzaron a 29

millones 716,004, no figuran las de la Colonia de Magallanes, que llegaron a $ 70,193, y las mercaderías avaluadas según las tarifas boliviana y peruana, que alcanzaron a $ 377,224. La **balanza comercial** de 1880 apareció, así, con un exceso de exportaciones sobre importaciones ascendente a $ 21.485,128. Débese, sin embargo, tener presente que en las sumas de la importación no figura el valor del material de guerra que se adquirió en Europa, valor que recargó la internación, aunque en cantidades bastante inferiores a la diferencia anotada entre exportaciones e importaciones. El **comercio de cabotaje** aumentó ese año de modo desproporcionado, pues de $ 35 millones 618,119, a que llegó en 1879, pasó a $ 53.558,637 al año siguiente, lo que se explica por el hecho de haber sido ocupadas por las fuerzas chilenas las provincias de Tarapacá y Tacna, regiones que mantenían un vivo comercio marítimo y que pasaron a ser consideradas como territorio nacional. Natural es también que en el comercio de exportación de Chile al Perú haya que anotar disminuciones considerables ese año, pues lo que antes iba a este último en Tarapacá y Tacna, ahora iba al propio Chile.

La **deuda pública** de 1880 llegaba ya a la suma de $ 94.244,686.85, ascendiendo la interior a $ 59 millones 374,686.85 y la exterior a $ 34.870,000. Por cabeza de habitante era de $ 42.

El descenso del cambio internacional, que en 1880 llegó, por término medio a 30.9 peniques por peso, debido a los temores que para el extranjero resultan de toda guerra y de modo principal a las emisiones de papel moneda, hubo de tener influencia en el nivel de los **precios corrientes**. Los 100 kilos de cebada co-

mún valían $ 4 (en 1879 sólo $ 3.50); los 100 kilos de frejoles, $ 6.75; los 100 kilos de harina flor, $ 8.75 (en 1879 sólo $ 7.50); los 100 kilos de lentejas, $ 7; los 100 kilos de maíz, $ 3.65; los 100 kilos de papas, $ 1.80; los 100 kilos de trigo, $ 5.50 (en 1879 sólo $ 5) los 100 kilos de cobre en barra, $ 42.80 (en 1879 sólo $ 36.90).

El cambio internacional había bajado de 30 peniques desde Julio de ese año y siguió en tales condiciones hasta igual mes de 1881, siendo el nivel inferior el de 25.7 peniques. Natural era que la situación de encarecimiento de la vida se mantuviese en el año de 1881.

La guerra seguía adelante y demandaba más y más gastos. Con fecha 5 de Enero de 1881 se autorizó al Presidente de la República para que, de fondos nacionales, invirtiese hasta la cantidad de *doce millones de pesos* en su continuación, facultándosele para que emitiese esa suma en vales o billetes de la condición de los autorizados por la última ley de emisión, billetes que ganarían el 5%, 4% y 3% de interés si el plazo del depósito fuese de seis, de cuatro o de menor número de meses, respectivamente. Fue ésa **la quinta ley de emisión**, y llevó la firma de Don José Alfonso como Ministro de Hacienda.

La escasez de moneda divisionaria de plata hizo nuevamente necesaria la emisión de millón y medio de pesos en las mismas condiciones de fino y de peso que se fijaron para las dos últimas emisiones de ese circulante. Los menesteres de la guerra obligaron asimismo a renovar el plazo en vigencia del *décimo adicional* con que se cobraban los derechos de Aduana en las mercaderías sujetas al 25% y 15%.

Para evitar, por otro lado, mayores perturbaciones

en algunas ramas de la administración financiera, pues estaba pendiente la solución del problema del *reemplazo de las oficinas de recaudación de las patentes, de las alcabalas, del impuesto agrícola, de la venta del papel sellado y estampillas de impuesto*, etc., funciones que hasta entonces habían sido desempeñadas por las administraciones del Estanco, se dictó con el carácter de transitoria una ley, que lleva fecha 7 de Enero de 1881, en virtud de la cual los administradores de especies estancadas continuarían ejerciendo las funciones que, fuera de las relativas al expendio de esas especies, habían desempeñado en conformidad a las prescripciones que hasta entonces estaban sujetos, dejándose subsistente la Factoría General del Estanco en lo concerniente a los demás impuestos. En el plazo de vigencia de esa ley se irían suprimiendo los empleos que se considerase innecesarios para el futuro.

El éxito de las armas permitía ya al Gobierno dedicar su atención a la obra de progreso de la viabilidad nacional. Preocupábase en cimentar sobre bases eficientes las vías de transporte aun en aquellas regiones que por el momento no ofrecían beneficios inmediatos, como era la prosecución de la línea férrea a través de los bosques del sur. Así ocurrió que a principios de 1881 se autorizó la inversión de la suma necesaria en los estudios, presupuestos y planos que debían hacerse para la construcción del *ferrocarril de Angol y Valdivia*. Quedaba, sin embargo, subsistente la necesidad de proveer de carros de carga a las líneas que ya se habían construído desde Curicó al sur, pues la producción aumentaba más y más, y el escaso material rodante no satisfacía ni con mucho las exigencias del desarrollo económico nacional.

Al llegar a este punto de nuestro desarrollo económico y antes de hacer un juicio crítico general de la Administración de Don Aníbal Pinto, debemos caracterizar, aunque sea en pocas palabras, la actuación de los Ministros de Hacienda Don **Augusto Matte** y Don **José Alfonso**. Dirigió las finanzas el señor Matte desde principios de 1878 hasta principios de 1880, y el señor Alfonso desde los comienzos de 1880 hasta Septiembre de 1881, fecha en que terminaba el período presidencial que en estas páginas examinamos.

Parécense ambos en la intensidad de estudio que manifiestan en su respectiva actuación: tanto el señor Matte como el señor Alfonso revelan interés y empeño especiales en plantear los problemas financieros y económicos que en su época surgían o se vislumbraban, y en proponer las soluciones que más conveniente creyeron, que fueron, sin duda, inteligentes y discretas.

Las Memorias del señor Matte son valiosos documentos de exposición y estudio de las cuestiones de hacienda de su tiempo. Quien se interese por conocer en buena forma las circunstancias que llevaron y acompañaron a la adquisición de nuestra riqueza salitrera, encontrará en la última Memoria del señor Matte un excelente estudio de la cuestión. La del señor Alfonso es de inapreciable valor en cuanto se refiere a casi todos los problemas que en el dominio de la economía y finanzas merecían en esos días la atención del Gobierno. Es una revista de meditación que hace de los asuntos que en su concepto debían considerarse y solucionarse en el sentido que él indica.

Si es verdad que ambos se parecen en la intensidad con que emprendieron su labor, también lo es que di-

fieren en el carácter que revelan y en el modo de concebir sus pensamientos. Don Augusto Matte aparece rodeado de una aureola de serenidad, de calma y circunspección manifiestas en sus exposiciones y argumentaciones, predominando en él el criterio económico al de cualquier otro género: fue esa la norma de su proceder. Don José Alfonso, en medio de sus sólidos estudios y de su admirable concepción de las materias, aparece premunido de cierta fogosidad que lo hace contrastar con su predecesor: sus afirmaciones, hijas de una labor intensa, son de ordinario enfáticas, como se habrá podido observar en la aseveración a que antes aludimos respecto de los reconocimientos salitreros, o como puede verse al negar con las siguientes palabras el efecto perturbador de la moneda de curso forzoso en el cambio: «Que el curso forzoso haya ejercido una influencia perturbadora en el cambio internacional, es atribuirle evidentemente una consecuencia que él no ha producido, es tomar el efecto por la causa». Las caracterizaciones que intenta hacer son precisas y muchas veces contundentes. En él predomina el criterio jurídico, en que nos parece insuperable por sus contemporáneos, criterio que en esos tiempos fue de la mayor eficacia para robustecer la causa, para despejar el porvenir y para cimentar los destinos de la patria.

Juicio crítico del papel que desempeñó la Administración Pinto en el desarrollo económico de la nación.

Pocas Administraciones tuvieron un papel tan determinado que desempeñar en el desarrollo de la vida económica del país como la de Don Aníbal Pinto.

La gran tarea que tuvo en la primera mitad de su período constitucional fue la de afrontar los problemas de la crisis económica en que se mantuvo y con que se despidió la Administración anterior, crisis que encontró, sin duda, sus más fuertes raíces en el conflicto franco-alemán de 1870-71 y que en el orden de materias que nos ocupan trajo como consecuencia transcendental la del cambio de régimen monetario de la Alemania, fenómeno éste último que hubo de repercutir hondamente en la economía de estos países, dificultándola en gran manera.

La gran tarea de orden económico que tuvo en la segunda mitad de su período fue la de afrontar los problemas financieros derivados de la guerra contra el Perú y Bolivia, que hubo de quedar pendiente a su salida del poder.

Jamás una Administración se había encontrado en situaciones más delicadas y transcendentales para la vida económica de la República que la de Don Aníbal Pinto. Pero jamás una Administración fue más favorecida en la solución de una grave crisis que la de este Presidente. La crisis económica que había llegado a su cúspide con la declaración de la inconvertibilidad del billete de banco en 1878, encontró un término inesperado con la guerra del Pacífico a principios de 1879. Y encontró un término inesperado porque ésta puso al país en posesión inmediata de inmensos recursos.

Pero la circunstancia de haber estallado el conflicto no dejó las enseñanzas que de ordinario deja la experiencia. Y en el caso de la crisis del 78 esas enseñanzas y sus beneficios habrían sido considerables. La solución normal de la crisis habría dejado prácticamente

en evidencia hasta qué punto las medidas que se tomaron eran eficaces o conducentes al fin. La solución regular de la crisis del 78 habría tenido quizás influencia en la constitución del régimen monetario posterior, al posibilitar o nó el rescate o la extirpación de los billetes de curso forzoso, que con las emisiones lanzadas durante el conflicto se hicieron más y más cuantiosos.

La crisis de 1878 no tuvo, así, una solución buscada por el estudio y aplicación de medidas de carácter económico o por la prosecución de un plan determinado cuya realización condujese con mayor o menor éxito al fin deseado. Tuvo la solución imprevista de los acontecimientos guerreros y de sus triunfos. Naturalmente que esta circunstancia en nada aminora los valores de la dirección inteligente y eficaz que tuvieron las medidas económicas tomadas en el conflicto.

Durante la Administración de Don Aníbal Pinto el comercio exterior se desarrolló en forma decreciente en los primeros tres años. No así durante los dos finales, en que la posesión de las grandes entradas salitreras lo incrementaron de modo extraordinario, sobre todo en el último. Sus valores, como la cotización del peso chileno en esos años, son los que consignamos en seguida. Su consideración es decidora:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1876..... $	37.771,139	39.215,415	76.986,554	40 9/16
1877.....	29.715,372	29.279,113	58.994,485	42 1/16
1878.....	31.695,859	25.216,554	56.912,413	39.6
1879.....	42.657,839	22.794,608	65.452,447	33
1880.....	51.648,549	29.716,004	81.364,553	30.9

La escala descendente que siguió el total del comercio exterior hasta 1878 y la escala ascendente que to-

mó en seguida es, por un lado, la manifestación clara de los efectos de la crisis económica de ese año y, por el otro, la comprobación de que encontró su solución con los acontecimientos de la guerra y el resultado económico de sus triunfos.

El descenso que experimentó el cambio internacional era efecto de la depreciación de la moneda nacional por la declaración de inconvertibilidad del billete de banco, primero, y por las emisiones de papel moneda después. Por otra parte, era efecto de las incertidumbres y desconfianzas que acarrea toda guerra. Es menester en este punto dejar constancia que los triunfos de ésta proporcionaron a Chile medios que hubieron de servir ampliamente para satisfacer, no sólo la compra del material bélico necesario, sino para hacer el servicio de la deuda exterior. Con ello se evitó una fuerte demanda de letras sobre el extranjero, eliminándose un importante factor de mayor empeoramiento del cambio internacional.

Intima relación con el desarrollo del comercio exterior hubo de guardar el desarrollo de las rentas públicas en ese período. Ellas ascendieron:

En	1876 a..... $	15.360,158
»	1877 a.....	13.688,852
»	1878 a.....	14.031,867
»	1879 a.....	15.396.568
»	1880 a.....	25.239,509

Tuvieron más o menos la misma evolución que el comercio con el extranjero. Claro está que nos referimos al movimiento de sus cantidades, pues en cuanto a su constitución debemos anotar la gran transformación que sufrió, o, más bien, que empezaba a sufrir el

régimen financiero nacional con las entradas del salitre, que desde un comienzo figuraron entre las rentas ordinarias. Las de 1880, que por cabeza de población alcanzaban ya a $ 11.23 de 30.9 peniques, dan en su total de $ 25.239,509 testimonio elocuente de esta observación. A partir de entonces, las finanzas de la nación, poderosa y extraordinariamente robustecidas, experimentaron un transtorno completo en cuanto a la regularidad y seguridad de una suma dada de recursos con que se podría contar para cada año, desapareciendo con ello la certidumbre y la confianza con que los Ministros de Hacienda hacían sus cálculos, saldaban los Presupuestos y equilibraban normalmente las finanzas.

No cerraremos este capítulo sin recordar que a esa Administración correspondió la primera proposición de paz, en que Chile exigía, en compensación de los sacrificios hechos durante la guerra y para seguridad posterior, la cesión definitiva de Antofagasta y Tarapacá (Conferencia de Arica, celebrada en Octubre de 1880).

10.—Capacidad económica y política financiera de la República durante la Administración Santa María (1881-1886). Desarrollo comercial y rentístico.

El régimen de gobiernos liberales que desde hacía veinte años se había arraigado en el país, llevó el 18 de Septiembre de 1881 a la Presidencia de la República a Don **Domingo Santa María**, que era activo y de gran sagacidad, que había tomado parte impor-

tante en los sucesos políticos de su tiempo y que revelaba energía y tino en sus actividades. Su Administración fue efectivamente fructífera en alto grado. Sus proyectos fueron inspirados en el más elevado espíritu público.

En materia de legislación económica, podríamos decir que se inició su Administración con la inversión de $ 340,000 en la compra de gran número de carros de carga y de algunas locomotoras para el ferrocarril central de Curicó y Angol. La adquisición de *material rodante* obedecía a necesidades concretas, e hizo bien, aun en medio de la lucha internacional, en dirigir también allí su atención, lo que completó con la inversión de $ 50,000 más en la formación de los planos y presupuestos de las líneas férreas cuya construcción se considerase más importante. En la zona salitrera creyó igualmente de necesidad y conveniencia imponer al *salitre* que se exportase por el puerto de Antofagasta, procedente del distrito de Aguas Blancas, un derecho de salida inferior en un 50% al fijado para el resto de las salitreras. Igual medida se tomó al año siguiente, aunque esta vez sólo por cinco meses y medio, respecto del salitre que se exportase por el puerto de Taltal y las caletas de su dependencia.

Con los pasos económicos dados y la adopción de una política internacional tan enérgica y eficaz para el robustecimiento de la República como la que se seguía, los valores del **comercio exterior** habían ascendido en 1881 a un total de exportaciones de $ 60.519,827 y a uno de importaciones de 39 millones 341,351. En cuanto a estas últimas, débese tener presente que en esa cifra no figuraron los valores

de los elementos bélicos adquiridos por el Estado en el extranjero, por lo cual el aumento de ellas sobre el año anterior debe encontrarse en un mayor consumo de productos regulares. Pero ¿a qué causa debe atribuirse un exceso tan considerable de $ 9.177,930 sobre el consumo del año anterior? Creemos que la razón fue doble: por un lado hubo, en efecto, una reacción en la restricción que tuvieron las importaciones de 1880 y 1879 por causa del conflicto bélico y de 1878 por motivo de la honda crisis económica; por el otro, hubo un estímulo provocado por el aumento de las exportaciones de ese año de 1881 y del anterior, estímulo que había de traer como efecto el aumento de las importaciones, ya que en el desarrollo del comercio internacional los productos tienden a pagarse con productos: si vendíamos mayores cantidades, era natural que compráramos mayores cantidades.

Si el cambio internacional no se hubiese desmejorado tanto como se desmejoró en ese tiempo, manteniéndose en 1881 en un término medio de 30.9 peniques, las importaciones habrían sido aún superiores, pues la depreciación de la moneda nacional había de significar, por el encarecimiento de la vida, una disminución del poder de compra en la población. Lo normal en las relaciones comerciales con el extranjero es que los aumentos de la importación se produzcan como efecto de los aumentos de la exportación, y no a la inversa, como lo enuncia en su extensa e interesante Memoria el Superintendente de Aduanas de 1882, señor Lorenzo Claro, que decía que «no pagando nuestras importaciones sino con productos, al incremento de ellas corresponde por fuerza una mayor producción». Distinta es la cuestión cuando, por falta

de mayor producción, se mantiene una vida económica lánguida o pobre (en lo cual también las importaciones tienden a languidecer), pues en tal caso pertenece a la iniciativa de espíritus inteligentes y activos el propender por todos los medios que sea dable al aumento de la producción, para obtener, por una parte, mayores riquezas, y para contrarrestar, por otra, el efecto de una mayor importación. Sólo en este sentido son lógicas las observaciones bien inspiradas que hace a continuación el Superintendente de Aduanas, al decir que «una producción mayor importa mayor trabajo ofrecido al proletariado, una aplicación más extensa, más completa o más intensa de nuestra actividad y de nuestras fuerzas productivas, de modo de obtener de ellas su mayor resultado útil, lo cual interesa profundamente a la prosperidad de la nación» (1).

Interés especial nos ofrece, por ser de mayor transcendencia para nosotros, el conocimiento de la composición de las exportaciones de 1881, que fue de $ 47.100,000 en productos de la minería, de 10 millones de pesos en productos de la agricultura y de $ 3.000,000 en productos varios, de modo que en el total figuraban los productos mineros con el 78½%, llegando los agrícolas sólo a un 16½% y los demás a un 5%. Las exportaciones de salitre y yodo alcanzaron a $ 25.850,000; las de cobre, a $ 16.300,000; las de trigo y harina, a $ 5.500,000; las de frejoles, a $ 350,000.

Hubieron de subir, por fuerza del aumento del co-

(1) La Memoria del señor Claro es un estudio valioso sobre todas las materias que correspondían a ese ramo. Ella se encuentra impresa entre los documentos anexos de la Memoria de Hacienda de 1882.

mercio exterior y de modo relativamente considerable, las **rentas** de 1881, que ascendieron a un total de $ 36.434,721.01, cifra en que se comprenden las propiamente ordinarias y las entonces llamadas eventuales, que no incluían a las extraordinarias. Su aumento, de $ 10.492,743.98 sobre las del año anterior, se debió a las mayores sumas por derechos de exportación de salitre y de internación general. También tuvo parte importante en el aumento la venta y la regalía por exportación de guano. A esto hubo que agregar una mayor contribución de guerra de $ 2.106,594.52 sobre la del año precedente (1).

En cuanto al producto de *la explotación del guano*, que había aumentado en forma considerable con la posesión del territorio de Tarapacá, habíase tomado por el Gobierno de Chile, y mientras durase la guerra, el acuerdo de permitir a los acreedores del Perú que invocaban derechos de preferencia para pagarse con el producto de este abono, que pudiesen exportarlo mediante el pago de una regalía de 20 a 30 chelines por tonelada, según fuese el precio de la tonelada de guano en el mercado inglés, poniéndose a disposición de los tenedores extranjeros de bonos peruanos los depósitos de Punta de Lobos, Pabellón de Pica y Guanillos. La exportación del guano se dió en consignación a la Casa Antonio Gibbs e Hijos. En Octubre de 1882 se habían consignado 134,009 toneladas, que debieron producir como regalía alrededor de £ 200,000. En 1881 hubo una entrada fiscal ascendente a $ 790,716.19 por venta y regalía de exportación de guano.

(1) Las entradas de la aduana del Callao, puerto ocupado entonces por Chile, ascendieron de Febrero a Junio de 1881 a $ 748,698.53, y de Julio a Agosto a $ 912,289.

Los gastos ordinarios y extraordinarios de 1881 ascendieron a $ 35.386,415.29, perteneciendo a los primeros $ 15.853,043.74.

Las rentas propiamente ordinarias de 1881 fueron de $ 21.603,586, cifra que resulta deduciendo de la suma de rentas totales de la República el producto de los derechos aduaneros del litoral del norte, el de la venta de salitre hecha por el Estado, el del guano del territorio antes peruano, el de los censos redimidos en arcas fiscales, el de los empréstitos y emisiones internas y el de las contribuciones de guerra. Podíase constatar que durante los últimos dos años había habido un incremento de 40% en las entradas ordinarias, pues las de 1879 llegaron a 15 millones 355,580. Tal aumento provino en gran parte del recargo autorizado por la ley en los derechos de Aduana para convertirlos en metálico y del mayor producto de las aduanas ocasionado por la mayor importación de mercaderías extranjeras y por un superior consumo. Parte importante debieron tener también las superiores entradas de los Ferrocarriles del Estado, la contribución de haberes y la venta de bienes nacionales.

Tranquilizados ya en gran manera los ánimos por el completo triunfo y el fin próximo de la guerra, en 1882 se encuentran los círculos industriales y comerciales con **la preocupación de la vuelta al régimen monetario normal**. El Ministro de Hacienda de entonces, Don Pedro Lucio Cuadra, al reconocer la acción perturbadora de la moneda de curso forzoso y la necesidad de dar fijeza de valor al medio de cambio, dice en su Memoria de 20 de Octubre de ese año: «Por grandes que sean los bienes que puedan esperarse de

obras públicas que el aumento creciente de nuestra riqueza exija, nada absolutamente puede tener tanta significación para nuestro crédito, nuestra grandeza y porvenir, como dar el bello ejemplo de haber vuelto, en breve tiempo, al régimen metálico, merced a nuestra discreción y a la firme perseverancia en tener un presupuesto equilibrado, sin lo cual no podremos decir que anhelamos seriamente salir del curso forzoso. El cuerpo social no puede crecer ni desarrollarse en las múltiples esferas de su riqueza sobre bases sólidas y duraderas cuando el agente general de todos los cambios, que es la moneda, acusa un estado económico anormal y enfermizo». Cuadra se refería al equilibrio de los presupuestos, más como prevención para el futuro, en que existía la tentación de mayores recursos provenientes de la fuente adquirida, que como lamento de la relación de las entradas y los gastos de su tiempo, en que no había base para ello. Consecuente con su intención de robustecer las finanzas para llegar a la conversión, fue enemigo de disminuir en ninguna de las ramas de la riqueza pública las contribuciones que entonces pesaban sobre ellas. Aceptaba, sí, que se fuesen reemplazando algunas, por ejemplo el décimo adicional, por recargos equivalentes en los impuestos directos, como el de haberes o el de patentes.

En cuanto a los gravámenes en general, encontraba absurdo en su base e inoportuno en su recaudación al impuesto de la alcabala, del cual creía que debía desaparecer de nuestro sistema tributario, reemplazándolo por un recargo en la contribución agrícola y por un gravamen sobre la propiedad urbana, esta última hasta entonces sin gabelas. Su abolición debía

tener como efecto la mayor valorización de los bienes inmuebles. Luego después fue efectivamente suprimida.

En los primeros días de ese año de 1882, y en vista de los recursos obtenidos durante la guerra en los últimos tiempos, se acordó *una prórroga* por doce meses en la inversión, autorizada hacía un año, de doce millones de pesos, de los fondos nacionales para la continuación de aquélla y en la emisión de igual cantidad de billetes. En los últimos días de ese año quedó autorizada hasta por la cantidad de $ 34.000,000 la inversión que de fondos nacionales hubiese hecho o hiciese el Presidente de la República hasta entonces en *los gastos de la guerra* sobre las sumas acordadas por las leyes.

De igual modo, acordóse prorrogar por seis meses la acuñación de un millón y medio de pesos en moneda divisionaria de plata, autorizada asimismo por la ley del año anterior, después de lo cual (transcurridos once meses) se dispuso el retiro de un millón de pesos de la circulación de tal moneda. Con el propósito de mantener las contribuciones vigentes y no disminuir las entradas fiscales, dispúsose, por fin, una prórroga, por diez y ocho meses, del décimo adicional que en forma transitoria continuaban pagando las mercaderías que en su importación estaban gravadas con un derecho de 15 y 25%. En ese año se autorizó también a dictación de una nueva tarifa de avalúos, sujetándose a las formalidades prescritas por la Ordenanza de Aduanas.

Con el fin de amortizar la deuda interior del 8% de los años 1876-77, se autorizó al Ejecutivo para que pudiera emitir hasta la suma de $ 6.174,700 en bonos

del 6%, pagaderos por trimestres vencidos y con amortización anual de 1%. La situación de relativa tranquilidad en que se encontraba el Gobierno a causa de los triunfos bélicos, le llevó a pensar igualmente en la marcha de los ferrocarriles, concediendo, por un lado, permiso para construir uno entre Antofagasta y las salitreras de Aguas Blancas; renovando, por otro, el compromiso que se había constituído para liquidar el contrato y recibir el ferrocarril de Curicó a Chillán y de San Rosendo a Angol y a Los Angeles, conviniendo en las condiciones del pago; concediendo, por otro, privilegio a la Sociedad Ferrocarril de Elqui para construir y explotar uno entre La Serena y Rivadavia; y dando, por último, permiso para tender una línea que condujese de Santiago a Valparaíso por Melipilla.

En materia de fomento de la industria nacional, se declararon libres de derechos de importación por diez años, con el fin de favorecer la *fabricación nacional de fósforos*, el bicromato de potasa, el clorato de potasa, la parafina en pasta, el fósforo común y amorfo, etc.

Las **rentas** ordinarias y eventuales de 1882 llegaron a $ 40.107,209.77, habiendo aumentado principalmente en los derechos de internación, por causa de una mayor importación, y en los derechos de exportación de salitre y yodo. Con las entradas extraordinarias se tuvo la suma total de $ 41.957,035.45. Los *gastos* ordinarios y extraordinarios de ese año alcanzaron a $ 41.620,137.52. En obras públicas se invirtieron $ 839,617.53.

En cuanto a los derechos de exportación del salitre y yodo, debemos llamar aquí la atención a la circuns-

tancia de que en la discusión que se produjo hasta fijar un peso sesenta centavos como gravamen por quintal métrico, se hizo ver la conveniencia y justicia que había en imponer un derecho menor a la provincia de Antofagasta que a la de Tarapacá, pues en la primera la producción oscilaba y tendía a disminuir, en tanto que en la segunda el aumento era cada vez mayor y más seguro. Se daba la idea de reducir en una suma de diez a veinte centavos por quintal los derechos de exportación del nitrato de la provincia de Antofagasta. En cambio se insinuaba la conveniencia de alzar el derecho de exportación del yodo, que era de sesenta centavos fuertes por kilógramo, que se vendía a un alto valor y que era monopolio exclusivo de Chile.

Por lo que respecta a los derechos con que entonces estaba gravada la exportación del cobre, gravamen que fijó la ley de 24 de Diciembre de 1872 en sesenta centavos por quintal (en barras, rieles o retalla) y que abolió la de 6 de Julio de 1878 con la condición de que se estableciese un impuesto directo sobre la minería de ese metal, ellos dieron en 1882 la suma de $ 274,134. El Superintendente de Aduanas de ese tiempo, Don Lorenzo Claro, hacía la observación de que, como el consumo nacional del metal rojo era pequeño, se corría con la exigencia del pago de aquellos derechos el riesgo de agotar el poder productivo de las minas que se trabajasen sin beneficio, pues los derechos concurrían, decía, con los gastos de explotación «a devorar el capital que las sustentaba». Su intención era no formar atmósfera en favor de aquel gravamen directo que ponía como condición la ley de 1878 para abolir el impuesto de exportación del cobre.

Explícase el razonamiento del señor Claro por las situaciones desfavorables y en cierto modo inesperadas que se producían en la industria del cobre en esos tiempos. A ello se debía, sin duda, su resistencia para aconsejar y sostener un gravamen a esa industria. Distinto es el caso de una explotación más o menos regular por ventas también más o menos regulares del producto, como ha sido en buena parte posteriormente. Justo creemos en este punto llamar también la atención hacia la ilustrada Memoria de más de 600 páginas que el señor Claro presentó en 1883 sobre la Superintendencia de Aduanas: es un trabajo concienzudo y detallado como pocos en las materias encomendadas a su cuidado.

Desarrollo notable tuvo el **comercio exterior** de 1882, cuyas exportaciones llegaron a $ 70.278,347, cifra compuesta, aproximadamente en la mitad, de los valores de salitre y yodo ($ 32.600,000), en un tercio de los minerales ($ 23.500,000) y en el resto de los de la agricultura e industrias derivadas ($ 14.200,000) (1).

(1) En los valores de la exportación de los minerales figuró el cobre con $ 17.600,000; la plata, con $ 3.900,000; el carbón, con $ 741,000; el borato de cal, con $ 862,000; y otros minerales, con $ 397,000. Como principales provincias de producción y exportación de cobre figuraban Atacama, Coquimbo y Concepción. El carbón se producía principalmente en Lota. El borato en Atacama.

En los valores de la exportación de productos agrícolas corresponden $ 8 millones a la de trigo y harina; $ 1.085,000 a las suelas; $ 400,000 a la lana; $ 207,000 a los frejoles; $ 120,000 a la cebada. La vid experimentaba también progresos en su cultivo y explotación: en 1882 se produjeron 28.233,835 litros de vino y mosto; 3.660,889 litros de vino Burdeos; 22.042,239 litros de chicha; 17.267,736 litros de chacolí y 6.017,562 litros de aguardiente. En los valores del comercio exterior los vinos chilenos no figuraban sino con $ 60,000: la producción se ha consagrado en gran manera, más de lo conveniente, al consumo interno. En ese tiempo se hacían ensayos de cultivo de betarraga sacarina, constatándose que la cantidad de azúcar con relación al peso de la betarraga era igual y aún superior a la mejor producción de Alemania, que en esta materia ha llevado la delantera.

Las importaciones alcanzaron a $ 50.434,331. La renta producida al Fisco por este comercio fue de $ 24.018,595 (1).

El considerable aumento de las exportaciones debió traer consigo un fuerte aumento de consumo de productos extranjeros en el país. Según la estadística comercial de ese año, creció de modo especial la importación de tejidos, de máquinas y herramientas, de vestuario y objetos de uso personal, de menaje y artículos de uso doméstico, de artículos alimenticios, etc. En todas las clases sociales empezaba a ostentarse mayor holgura. Los progresos nacionales tuvieron un visible aceleramiento. Marcadas diferencias hubieron de producirse en la vida de innumerables familias, que encontraron con el enriquecimiento general del país mayores facilidades y comodidades. Es éste, por lo demás, un fenómeno social perfectamente natural al terminarse o aproximarse el fin de una guerra victoriosa, en que recaen fuertes indemnizaciones económicas en favor del vencedor. Eso ocurrió en Alemania después de la guerra de 1870-71, en que la población dió un gran paso en la obtención de comodidades no sólo públicas, sino privadas.

El Ministro de Hacienda, Don Pedro Lucio Cuadra, no ocultaba sus temores ante un aumento tan

(1) Como es interesante conocer su detalle, lo damos en seguida:

Internación	$ 11.802,499.67
Recargo por cambio	1.493,°44.77
Décimo adicional	639,343.24
Exportación	609,607.93
Almacenaje y muellaje	182,202.52
Faro y tonelaje	71,907.49
Comisos y multas	4,531.11
Exportación de sali tre	7.592,334.85

La renta fiscal producida por el comercio exterior en 1878 había llegado sólo a $ 6.188,126.

considerable de internaciones, aumento que demandaba, en su concepto «una fuerza de producción extraordinaria y con la cual no se puede contar siempre para equilibrar nuestra importación con la exportación». No debe olvidarse que en el comercio exterior los aumentos de la importación son regularmente una consecuencia y no una causa: son una consecuencia de los aumentos de las exportaciones, de manera que reduciéndose éstas, se reducen aquéllas, aunque no siempre con igual prontitud: la disminución de las importaciones es más lenta.

Por lo demás, ningún efecto parece que tuvo en los consumos el alza de los derechos de internación que se hizo en 1878, a pesar del otro factor que pudo haber tenido en su favor, a saber, el encarecimiento de las mercaderías extranjeras provocado por la depreciación de la moneda en el régimen de curso forzoso.

En lo que respecta a la política que el Gobierno seguía en la propiedad y explotación de las salitreras de Tarapacá, debemos hacer mención aquí de los decretos dictados con fecha 28 de Marzo y 31 de Julio de ese año, en virtud de los cuales se trataba de subastar algunas oficinas y de satisfacer los certificados u obligaciones contraídas por el Estado peruano, al expropiar, siguiendo sus planes de monopolio del nitrato, muchas salitreras de esas provincias, rescatando buena cantidad de ellas. Conforme a esas disposiciones se rescataron 27 oficinas, mediante la entrega y cancelación a favor del fisco de los certificados correspondientes por un valor de 6.096,600 soles, y se subastaron 18, por un valor de 1.844,975 soles (1).

(1) El Estado tenía, además, 88 oficinas, de las cuales 19 fueron explotadas por contratistas y 69 estuvieron paralizadas, habiéndose avaluado para la venta en 12.149,547.20 soles.

En obedecimiento al propósito de establecer normas de equidad en la exigencia de medios procedentes de la agricultura, se declaró por ley de 1883 *exención del impuesto agrícola* a los fundos rústicos cuya renta anual avaluada no alcanzase a la suma de $ 25. El trabajo de inscripción y avalúo de esos fundos se hizo bajo la dirección de la Sociedad Nacional de Agricultura. Con esa prescripción legal, los fundos matriculados se redujeron a sólo 19,890, quedando libres del pago del impuesto más de 70,000. La renta determinada para los primeros fue de $ 1.298,452 al año, rindiendo una contribución anual de $ 116,860. Fue esa una medida que se consideró de importancia para el bienestar del pequeño propietario agrícola, medida que pudo tomarse gracias al relativo desahogo de las finanzas nacionales.

Los servicios de hacienda clamaban, desde hacía tiempo, por modificaciones urgentes. La amplitud y complejidad que como consecuencia de la suerte guerrera con sus nuevas riquezas empezaban a tomar las finanzas, aceleraban la adopción de medidas tendientes a dar nueva organización a esos servicios, o, por lo menos, a crear cargos importantes en el ramo. Pero la necesidad no era sólo reciente. La administración financiera no había sufrido durante toda la segunda mitad del siglo XIX cambio alguno que se tradujese en adaptación de los organismos de fiscalización a las exigencias de la época, exigencias que fueron siempre crecientes por el desarrollo que experimentaron las actividades agrícolas, mineras, industriales y comerciales, y con ellas los recursos de la nación. Aun en la primera mitad de ese siglo se ejerció el control de las finanzas y la percepción de sus medios sobre la

base de una organización colonial, desde muchos puntos de vista enteramente inadecuada.

Las nuevas fuentes de entradas, proporcionadas por el desenlace de la guerra contra el Perú y Bolivia, trastornaban de modo fundamental la constitución tributaria de la nación, pues de hecho pasaban los derechos de exportación de salitre a ser los recursos principales. También la abolición del Estanco había creado desórdenes de administración que debían remediarse, ya que había traído consigo la supresión de oficinas recaudadoras de contribuciones.

La reforma se imponía. Era menester buscar mayores seguridades para los intereses fiscales, robusteciendo la responsabilidad de los funcionarios. «La administración de la hacienda pública, decía el Presidente Santa María en su Mensaje de 1.° de Junio de 1882, complicada y difícil por su propia naturaleza, y que tan enorme ensanche de atribuciones, responsabilidades y labor ha tenido durante la última época, reclama imperiosamente una reforma radical en los diversos rodajes de su mecanismo administrativo». A la obtención de esos fines se encaminaba la **ley orgánica de la Dirección del Tesoro y Dirección de Contabilidad**, dictada el 20 de Enero de 1883, que lleva la firma de Don Pedro Lucio Cuadra y que está aún en vigencia. En virtud de ella, el servicio de tesorería y la comprobación de los actos de los administradores de los fondos que causen ingresos o egresos en el Erario, como la contabilidad general de la hacienda, corren a cargo de ambas oficinas, que se comprueban mutuamente, encargándose la primera del manejo de los fondos y la segunda de la cuenta y razón y de la fiscalización de las tesorerías y oficinas

que manejan fondos públicos con el auxilio de inspectores de oficinas fiscales.

A la *Dirección del Tesoro* corresponde, en consecuencia: 1.° dirigir y vigilar la recaudación de las contribuciones y demás entradas nacionales, la conservación y custodia de los fondos recaudados y su distribución; 2.° pasar a cada tesorería un estado de las contribuciones fijas, créditos o entradas que deba recaudar; 3.° distribuir entre las tesorerías el papel sellado, estampillas y demás especies para hacer efectivo el pago de las contribuciones; 4.° remitirles el presupuesto de los gastos que les corresponda hacer; 5.° llevar a cada tesorería una cuenta de la administración de que está encargada; 6.° abrir una cuenta a la deuda nacional, tanto interna como esterna, procedente de empréstitos, emisión de bonos u obligaciones del tesoro, redención de censos y contratos, anotando los pagos que hicieren las oficinas de su dependencia; deberá también hacer las compras de letras para pagos en el exterior conforme a las instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda; 7.° llevar inventario de los bienes nacionales; 8.° pasar cada seis meses al Ministerio un estado de las existencias en papel sellado y estampillas; 9.° hacer depositar en los bancos designados al efecto los fondos que existan en las oficinas de su dependencia. La ley fija igualmente las atribuciones de la tesorería.

La Dirección del Tesoro, como oficina esencialmente controladora, no tiene la atribucion de hacer la venta de las letras provenientes de los empréstitos externos.

A la *Dirección de Contabilidad* corresponde: 1.° anotar los decretos con cargo a las partidas variables de los presupuestos y a las leyes especiales; 2.° intervenir en la entrega del papel sellado, estampillas y demás; 3.° formar anualmente el presupuesto de entradas y pasarlo a la Dirección del Tesoro; 4.° llevar un registro de las deudas del Estado procedentes de empréstitos, emisión de bonos u obligaciones del Tesoro, redención de censos, etc.; 5.° pasar anualmente al Ministerio un estado sumario de la situación fiscal; 6.° llevar la cuenta general de la hacienda, elaborando un balance anual de ella; 7.° preparar el presupuesto anual de gastos; 8.° prescribir un sistema de contabilidad sencillo y uniforme en las diversas oficinas.

A pesar de que estas dos oficinas parecieron completarse y ayudarse mutuamente, haciendo la una las veces de cajero y la otra de contador, ello en muchos casos no era sino aparente. Más bien se han entorpecido, dando lugar en ocasiones a invasión de atribu-

ciones y a tramitaciones innecesarias. Cuadra estimaba que a la reorganización de las oficinas de hacienda estaba vinculado el estudio inmediato de los problemas económicos que se presentaban. La verdad fue que ese objetivo era más difícil de alcanzar. Se hace deseable una simplificación, quizás refundiendo ambas oficinas en un nuevo organismo, en que se deslinden con más claridad las atribuciones y las responsabilidades de los empleados y funcionarios.

A aquellos fines de mejoramiento y adaptación de los servicios a la nueva situación financiera, obedeció también la dictación de la **ley orgánica de la Casa de Moneda,** de igual fecha, y en virtud de la cual se determinaron las secciones de que constaría, a saber: Superintendencia, tesorería, ensayes, fundición, fielazgo, grabadores y maestranza. A la Superintendencia correspondió: comprar las pastas metálicas para la amonedación a los precios establecidos por las leyes, fijar los jornales, autorizar la compra de materiales, hacer comprobar el peso y la ley de las monedas, practicar el inventario de los cuños, fallar las cuentas sobre normas de oro y plata, pasar un balance de las operaciones de tesorerías, comprobar el arqueo de la caja de la tesorería. Como puede observarse, el papel matriz que debía desempeñar la Casa de Moneda era el de la amonedación. Se le quitaron con esa reforma diversas funciones que no pertenecían propiamente a su incumbencia.

Para dar facilidades a las transacciones de valores mínimos se mandó ese año refundir y convertir en moneda de diez y cinco centavos hasta la suma de cuatrocientos mil pesos en piezas de veinte centavos, entonces en circulación.

En materia de *comunicaciones y transporte* se preocupó el Gobierno en continuar la construcción de ferrocarriles y en dar facilidades a la navegación marítima. Se autorizó así la contratación y ejecución del ferrocarril de Talca a Constitución, de Pelequén a Peumo, de Coigüe a Mulchén, de Angol a Traiguén, de Renaico a Victoria y de Valdivia a La Unión, pudiendo prolongarse este último hasta Trumag y Osorno. Autorizóse también la ejecución de los puentes de la Calera sobre el río Aconcagua, de Chocalán sobre el Maipo y de Coelemu sobre el Itata, liberando del pago de derechos de importación al material necesario, tanto para éstos como para los ferrocarriles. Concedióse igualmente y por diez años una subvención de ciento veinticinco mil pesos anuales a la Compañía Sud Americana de Vapores con el fin de que sirviese la vía de Valparaíso al Callao con un viaje semanal, que prolongase la línea del sur hasta Puerto Montt o Melipulli, haciendo un viaje por semana entre Valparaíso y Constitución y uno quincenal entre Valparaíso y uno de aquellos dos puertos, y que estableciese un tráfico para habilitar los canales de Chiloé. La Compañía se obligaba, además, a conducir la correspondencia oficial y particular; a conducir por la mitad del valor de transporte a los empleados, individuos de tropa y carga de envío o de retorno por cuenta del Fisco; a poner a disposición del Gobierno los buques y tripulaciones en caso de guerra; a formar y modificar las tarifas de fletes y pasajes con acuerdo del Gobierno; y a conceder pasaje gratis a todos los empleados diplomáticos de la República, intendentes, gobernadores y jefes de la Escuadra.

Dispúsose también que la descarga y el reembar-

que de mercaderías extranjeras en el puerto de Valparaíso se hiciese en adelante por el muelle fiscal, con excepción de la pólvora y algunos otros artículos. Como *derecho de muelle* pagarían sobre su avalúo: 1/2% la yerba-mate, el azúcar y el arroz; 3/4% las mercaderías exceptuadas cuando pasasen por el muelle y todas las demás; y $ 0.30 por bulto las que se reembarcasen. La consideración de esta ley en la parte a que nos referimos, en que fue modificada luego después, ha perdido su base, porque con las obras que se ejecutan en el puerto, el muelle fiscal desaparecerá, habiendo empezado ya su demolición. De cierta trascendencia fue la prescripción del artículo 11, que suprimió *el impuesto de faro y tonelaje*, refundiendo con el de muelle el derecho de tonelaje; modificó también las disposiciones referentes al derecho de almacenaje, estableciendo para él la base exclusiva del valor de la mercadería, en vez de la de peso, volumen, capacidad y valor que hasta entonces se tomaba en cuenta. Fue esa una simplificación deseada.

Modificóse igualmente en 1883 la *tarifa de avalúo*, introduciendo una reforma de trascendencia en la fijación de la renta aduanera, pues se adoptó la base del peso bruto, que tendía a facilitar el reconocimiento de las mercaderías en la operación del registro general de los objetos contenidos en los bultos. Con tal medida decreció considerablemente el número de partidas de la tarifa: de 5,242 quedaron sólo 2,314, gracias al nuevo sistema de agrupaciones.

Todos estos afanes y preocupaciones del Gobierno tenían, naturalmente, su plena justificación, no sólo desde el punto de vista del necesario desarrollo y perfeccionamiento regular de las instituciones económi-

cas nacionales, sino también desde el punto de vista del orden interno y de la tranquilidad que ya se había apoderado de los ánimos por el feliz término a que llegaba definitivamente la guerra. En efecto, en Octubre de ese año de 1883, y como resultado del triunfo de las armas de Chile sobre las del Perú y Bolivia aliadas, se firmó **el tratado de Ancón,** que sellaba la paz entre las dos primeras naciones, cediendo el Perú a Chile el dominio perpetuo de la provincia de Tarapacá, en que se encontraban las grandes riquezas del salitre peruano, y la soberanía de las provincias de Tacna y Arica por diez años, al término de los cuales se haría un plebiscito de los habitantes de ellas para decidir sobre su dominio definitivo, debiendo pagar el país que en el plebiscito triunfase al que perdiese la cantidad de diez millones de pesos.

Entre las bases esenciales de la paz con el Perú figuró, así, la cesión de Tarapacá a Chile, pues a esa condición aparecía subordinada la tranquilidad futura. Tres razones poderosas hacían ineludible esa solución: 1.° la de asegurar el desarrollo sin traba de los intereses chilenos ahí tradicionalmente vinculados, intereses que, con las medidas tomadas por el Perú con anterioridad a la guerra, fueron fuertemente heridos; 2.° la de asegurar una indemnización positiva y suficiente de guerra, pues los precedentes históricos sobre cumplimiento de compromisos para con Chile y el curso de los sucesos políticos y económicos de ese país, no daban mayor fundamento para esperar la fiel ejecución de las promesas; y 3.° la de asegurar una situación y un desarrollo regular y estable de la vida económica, social y política de ambos países en el futuro, no ofreciendo posibilidades de nuevas discor-

dias por lesión de intereses. Para obtener mayor seguridad de conseguir esto último y en compensación de los sacrificios de la guerra, Chile hizo valer sus derechos sobre Tacna y Arica, territorio que le serviría de separación y de defensa.

La firma del tratado de Ancón marca en la historia financiera de la República una nueva faz, pues dió lugar a una constitución fundamentalmente diversa en sus rentas.

En los cuatro años transcurridos de 1879 a 1882 se habían votado extraordinariamente por el Congreso $ 68.000,000. A esa suma había que agregar las cuantiosas cantidades acordadas en forma de pensiones, montepíos, recompensas y aumento de remuneración militar, naval y civil. Había que agregar también las enormes indemnizaciones que se debían a los nacionales que residían en los países aliados y que tuvieron que regresar abandonando sus intereses. Había que agregar, por fin, los inmensos daños causados a la economía nacional por la introducción obligada del régimen del papel moneda y de la moneda feble y por la paralización del trabajo industrial en sus más variadas y múltiples manifestaciones, sacrificios todos que el país hubo de soportar a riesgo de su ruina completa.

La escala ascendente de los años que le precedieron siguió el **comercio exterior** de 1883. En las exportaciones llegó a $ 79.732,553 y en las importaciones a $ 54.226,501. Como consecuencia de él, las **rentas** del mismo año fueron también superiores: alcanzaron en total a $ 44.248,695, correspondiendo de esta suma a las extraordinarias por contribución de guerra y redención de censos $ 1.391,338. Los gastos ascendieron a $ 41.553,918. Aumento experimentaron las entra-

das de los ferrocarriles, la contribución sobre haberes mobiliarios y las rentas de Aduanas (1).

Por ese tiempo se levantaban quejas contra la organización de la Ordenanza de Aduanas, que había sido dictada un decenio atrás (1872) en situaciones comerciales bastante distintas, pues no existían las ramificaciones que necesariamente debían echar los negocios del salitre. La rapidez que aconsejaba el aumento de los negocios hacía desde luego necesaria una modificación en el plazo del depósito, que se consideraba como demasiado largo.

Preocupación había en la industria salitrera y en el Gobierno en cuanto a la baja de precio que ese año sufría el nitrato en Europa, llegando en Diciembre a 9 chelines 10 peniques por quintal español de 46 kilos y habiendo sido en igual mes del año anterior 12 chelines y medio, y en 1881, 14 chelines 6 peniques. Parecía ser que la causa de tal situación era el aumento de la producción y con ello de la oferta: para 1883 se calculaba un consumo mundial de sólo unos 10 millones de quintales españoles, y se habían exportado, según la estadística, 12.713,009. Se encontraban en situación difícil todas aquellas oficinas que, por carecer de mayores medios de explotación, tenían que trabajar y producir en pequeña escala. Es, por lo demás, lo que constantemente ocurre en las crisis de precios. Pero los efectos de esa pequeña crisis salitrera, la primera que se manifestaba en el ramo, pasaron

---

(1) En las entradas de Aduana, que llegaron en 1883 a $ 30.302,815.63, participaron los derechos de internación con $ 18.711,089.64 y los de exportación de salitre y yodo con $ 10.113,995.82. Dentro del total de las rentas de ese año, las del salitre hacían ya la cuarta parte.

pronto. Los productores se avinieron a reducir la producción a diez millones de toneladas.

El año de 1884, en que en otro orden de acción legislativa, se dictaron las leyes de matrimonio civil, de registro civil y de garantías individuales, fue de paz y concordia. En el mes de Abril se firmó, por fin, en Valparaíso **el tratado de tregua con Bolivia,** que dejaba indefinidamente bajo la soberanía chilena la provincia de Antofagasta. Ese acto no fue sino la confirmación oficial de una cesión territorial que era perfectamente lógica, dentro del concepto de las indemnizaciones y dentro del alcance del tratado de Ancón celebrado el año anterior con el Perú, por el cual éste cedía definitivamente a Chile la provincia de Tarapacá, que estaba al norte de la de Antofagasta. Así quedaba nuestro país con la continuidad natural de su territorio.

En el pacto de tregua se estipuló que los productos naturales chilenos y los elaborados con ellos se internarían en Bolivia libres de todo derecho aduanero, y a la recíproca los bolivianos, fuese que se importaren o exportaren por puertos chilenos. Estipulóse también que la mercadería nacionalizada que se introdujese por el puerto de Arica sería considerada como mercadería extranjera para los efectos de su internación. La mercadería extranjera internada por ese puerto y destinada a Bolivia pagaría derecho de internación conforme al arancel chileno. El rendimiento de la Aduana de Arica se dividiría en esta forma: un 25% para el servicio aduanero y un 75% para Bolivia, reteniéndose la cuarentava parte de este último por la administración chilena para el pago de las cantidades que resultasen adeudarse por Bolivia, y entregándose

el resto al Gobierno boliviano. La mercadería extranjera que se introdujese a Bolivia por Antofagasta tendría tránsito libre.

Por un protocolo complementario de este tratado de tregua, de fecha 30 de Mayo de 1885, se exoneró de todo derecho de exportación e importación a una serie de artículos, en conformidad a lo estipulado en el pacto, entre otros, el arroz, el azúcar, el café, las bayetas, el carbón, la cebada, el maíz, las papas, el trigo, etc., etc.

El Gobierno de Chile se dedicó en seguida a intensificar la labor interna de construcción y organización de obras públicas. Prestó su atención a los ferrocarriles, dictando una **ley orgánica de los Ferrocarriles del Estado,** por la cual su administración sería ejercida, bajo la dirección superior del Gobierno, por un director general y un consejo, y se dividiría en cuatro departamentos: de explotación, de vía y edificios, de tracción y maestranza y de contabilidad. El consejo quedaba compuesto del director general, de los directores de departamento y de tres consejeros nombrados cada dos años por el Ejecutivo. Los Ferrocarriles del Estado, considerados como empresa industrial de acarreo, quedaban en lo demás sujetos a las leyes generales vigentes para esa clase de empresas. Fue esa la primera ley orgánica del ramo.

Acordóse también construir por licitación pública el ferrocarril de Calera a Ovalle, garantizando el Estado al concesionario el interés del 5½% anual sobre el capital invertido y declarando libre de derechos de internación los rieles, máquinas, carros, etc. y libre de derechos de exportación las pastas y metales destinadas al pago de ese material.

La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta tuvo autorización para prolongar su línea en dirección a Bolivia, con las liberaciones anteriores y la garantía de un interés anual de 6% sobre el capital que invirtiese. Igualmente se concedió permiso para construir y explotar un ferrocarril entre Colico y Colcura y otro entre San Javier de Loncomilla y Tomé, pasando por Cauquenes, Quirihue, Villa de Coelemu y Rafael, otorgándose a ambos aquella liberación de derechos. Este último no se ha construído hasta hoy, Concedióse, por fin, permiso para construir una línea en la región del carbón entre Concepción y los ríos de Curanilahue, pasando por Coronel, Lota, Laraquete y Carampangue, otorgándose la liberación del caso y garantizándose el interés de 5% anual al cambio de 36 peniques durante veinte años; quedó obligada a transportar con un 10% de rebaja el carbón destinado a los ferrocarriles del Estado y a la Armada Nacional.

El consignatario de todo buque que atracase al muelle fiscal de Valparaíso a descargar o reembarcar, debía en lo futuro pagar una cuota de sesenta pesos por cada día que permaneciese atracado, duplicándose después del cuarto día para los vapores y después del sexto para los buques. El embarque de productos nacionales se permitiría sólo cuando lo permitiese el movimiento de mercaderías extranjeras, pagando iguales derechos. Los productos que en su internación estaban gravados con los derechos de 15 y 25% continuarían pagando el décimo adicional establecido. Acordóse también invertir hasta tres millones de pesos en la construcción de un dique seco.

En materia de contribuciones, gastos públicos y

organización financiera, dictóse ese año una ley de trascendencia, que, como Ministro de Hacienda, lleva la firma de Don Ramón Barros Luco y que se refiere a la **formación de presupuestos y de cuenta de inversión**. Dispuso que la recaudación de los impuestos se verificase en virtud de una disposición legal que los autorizase por diez y ocho meses; que los gastos de la administración fuesen fijados por la ley de presupuestos y clasificados en fijos, variables y autorizados por leyes especiales; y que en los primeros quince días de las sesiones ordinarias del Congreso se presentase impresa la cuenta general de las entradas y gastos fiscales del año anterior. Dispúsose igualmente que en las partidas de gastos fijos se designase la ley, el contrato o el decreto que autorizase la inversión; en la de gastos autorizados por leyes especiales se citarían éstas, el monto de la autorización y lo que quedase por invertir. Los presupuestos para el año siguiente se debían pasar al Congreso en los primeros quince días de las sesiones ordinarias y debían ser examinados e informados por una sola Comisión de Senadores y Diputados, tanto en las salidas como en las entradas. No podría procederse a la discusión de los presupuestos en el Congreso sin haberse presentado la cuenta de inversión del año anterior. Cuando la Cámara revisora introdujese nuevos ítems, se reputarían como proyectos de ley para los efectos de su aprobación en la Cámara de origen. Toda indicación que se hiciese en la discusión de los presupuestos para aumentar los gastos propuestos debería expresar los recursos con que debía cubrirse. No sería permitido aplicar los ítems del presupuesto a objetos distintos de aquellos a que han sido destinados. La vigencia de la ley de presupuestos sería de 1.° de Enero a 31 de Diciembre de cada año.

Con el fin de cancelar la *deuda exterior del 7%* correspondiente al año 1866, se acordó que el Gobierno pudiese colocar en los mercados de Europa títulos de la deuda pública exterior hasta por la suma de $ 3.420,500, moneda esterlina, con una tasa de 5% de interés y 2% de amortización anuales.

Las **rentas** de 1884 fueron un 10% menores que las del año anterior, pues llegaron a sólo $ 39.910,133.10. Los gastos ascendieron a $ 39.225,118. Hubo disminución de entradas principalmente en las aduanas, a causa de la restricción acordada en la exportación de salitre por razón de la crisis de precios en Europa. Aumento hubo, y muy considerable, en el producto de la explotación del guano, que llegó para el fisco a $ 1.636,975.43. La explotación de las covaderas y la venta de los guanos debía hacerse desde entonces en la forma que lo determinase el Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de Estado, concediéndose a los descubridores de covaderas, siempre que las manifestaciones se refiriesen a yacimientos fuera del radio de cinco kilómetros de los depósitos ya conocidos, un 10% de las utilidades líquidas que reportase al Estado la explotación de ellas.

Los valores del **comercio exterior** de 1884, que llegaron en las exportaciones a $ 55.625,401 de 38 peniques y en las importaciones a $ 52.886,846 de igual moneda, habían disminuído. Fue consecuencia importante de la restricción de la exportación de salitre a que hemos aludido (1). Trascendencia tuvo en

(1) En el cálculo que entonces se hacía del movimiento general del comercio de exportación e importación, el valor de esta última estaba representado por moneda fuerte de plata, en tanto que el de las primeras se encontraba estimado en billetes del Estado. Para buscar una equivalencia de valores se hizo la reducción a 38 peniques por peso.

la disminución del comercio internacional la menor exportación de productos agrícolas que ocasionó la **crisis de precios** del extranjero por razón principalmente del desarrollo extraordinario que allí tomaban las industrias y en especial las manufacturas, y que alcanzó igualmente al cobre y a la plata, descendiendo éstos considerablemente de valores (1). Todo esto produjo como efecto ineludible el descenso del cambio, el cual, asegurado el triunfo de la guerra, incrementadas en gran manera las exportaciones y hechas de modo definitivo las paces, había mejorado, llegando de 30.9 peniques, a que estaba en 1880, a 35.2 peniques en 1883. En cuanto a la baja que había experimentado en 1884, ella no era sino la manifestación de un fenómeno que se repite constantemente entre nosotros en situaciones análogas: descienden notable y rápidamente las exportaciones, pero las importaciones se mantienen o decrecen sólo lentamente: las primeras descendieron en $ 15.099,476 y las segundas en sólo $ 1.560,215. Así se explicaba también que los precios de los artículos extranjeros en Chile no bajasen de modo perceptible: había mucha oferta de ellos en nuestro mercado. Del descenso de las exportaciones y del relativo mantenimiento de las importaciones provenía, pues, el desequilibrio de la balanza de créditos o de pagos. Y, sin embargo, no había, como ha podido notarse, exceso de importaciones sobre exportaciones, pero sí una fuerte disminución del grande exceso que hasta entonces tenían las segundas sobre las primeras. Esta circunstancia, tomada en cuenta en el total

(1) Los 46 kilos de cobre valían entonces $ 10 en Europa, habiendo valido años atrás $ 20. La baja debióse al enorme incremento que por esos años tomó la industria cuprífera en los Estados Unidos.

del movimiento comercial de un país que estaba ya dominado por el régimen del papel moneda, era de positiva influencia en el malestar económico general o en la depresión de nuestro cambio, que había descendido en el curso del año a un término medio de 31.7 peniques por peso, como consecuencia inmediata de la escasez de letras sobre Europa para pagar el valor de las importaciones. Si en algunos artículos exportados las cantidades eran equivalentes o aun superiores a las del año anterior, el valor que ellas representaban era inferior y el importe de los giros debía también ser así.

Para contrarrestar de modo fundamental el efecto de tal descenso en el cambio, habría sido de inapreciable valor el rescate del papel moneda o la vuelta al régimen metálico. El Ministro de Hacienda de entonces, Don Ramón Barros Luco, indicaba, aunque débilmente, la conveniencia de proceder al retiro paulatino de los billetes fiscales de curso forzoso; la indicaba más bien como «prueba evidente de que el Estado no necesitará hacer uso de recursos extraordinarios que tuvieron su origen con motivo de la guerra». La verdad era que en el público, sobre todo en los capitalistas extranjeros en el país, se iba creando más y más una situación de desconfianza en la vuelta del régimen de la moneda metálica, que no se veía clara ni próxima, por cuya razón y principalmente por el temor de que el cambio descendiese mucho más aún, empezáronse a extraer algunos capitales al extranjero, circunstancia que debía afectar de modo positivo a la economía chilena. Esto significaba demanda de letras, que tiraba el cambio hacia abajo.

En cuanto al desarrollo industrial del país, tan de-

seable cuando se trata de dar pasos importantes como ese en el régimen financiero, la crisis de precios lo mantuvo abatido en sus manifestaciones de mayor trascendencia. Púdose notar, sin embargo, alguna expectativa favorable en los últimos días de 1884 con respecto a la explotación de plata, que de una exportación de 100,477 kilos en 1883, pasó a 180,497 kilos en 1885, llegando al máximum, nunca superado hasta hoy, de 214,551 kilos en 1887. Púdose asimismo abrigar alguna esperanza en la fabricación de azúcar de betarraga, ramo en el cual se habían hecho diversos ensayos en diferentes años y que entonces prometía algo más que otras veces. Púdose, finalmente, constatar algún desarrollo futuro en la explotación de carbón, con la introducción de los nuevos mantos de Penco a la explotación general. Pero todo esto era poco y una crisis comercial aparecía como difícil de evitar.

Debemos aquí hacer un recuerdo de la dirección de las finanzas nacionales. Es justo que los que han actuado durante algún tiempo en situaciones de trascendencias sean contemplados en su labor. Don **Pedro Lucio Cuadra**, Ministro de Hacienda desde 1882 hasta 1884, fue una personalidad interesante en la historia de nuestras finanzas. Le correspondió desempañar su labor en una época en que nuevas, imprevistas e inconmensurables riquezas (el salitre) proporcionaban rentas cuantiosas al Erario Nacional. Fue el organizador de las oficinas de hacienda. La ocasión en que le tocó actuar y la actividad que le cupo desempeñar hace recordar un tanto a los tiempos en que se echaban las bases de la organización financiera general. Correspondióle, en efecto, desempeñar

un papel que tiene sus puntos de similitud con la tarea de Rengifo a la época en que se constituían los Gobiernos estables. Rengifo organizó la hacienda estableciendo orden en las entradas y los gastos ordinarios y buscando y fijando las rentas que en su concepto requería la satisfacción de las necesidades de la nación. Cuadra organizó la hacienda buscando y fijando el control que en su concepto debía establecerse entre la percepción y el empleo de los bienes con que el Estado debía hacer frente a sus gastos, adaptando y reformando, para el efecto las oficinas correspondientes del tesoro, de la contabilidad y otras. Fue, sin duda, de mucho mayor significación para el mantentmiento del orden financiero de la República y para asegurar su equilibrio la tarea de Rengifo.

Cuadra aparece en sus Memorias como detallista, especialmente en el examen que hace de las rentas de algunos años y en las estadísticas que corresponden a cada nación en el comercio exterior de la República. Llega hasta a detallar el movimiento de los productos de la agricultura y de la minería en el comercio de cabotaje. No aparece, sin embargo, provisto del método y de la admirable claridad de Rengifo. Se revela también en sus Memorias como fiscalista prudente y previsor, al oponerse a toda disminución de contribuciones ordinarias y al no estimar la renta del salitre como entrada ordinaria, en lo cual tenía plena razón.

Si, continuando nuestro estudio, tenemos que reconocer que los años de 1883 y 1884 fueron de significación en materia de legislación económica y financiera, el de 1885 se nos presenta pobre en alto grado. Fuera de una ley que declaró libre del pago de derechos de internación al *petróleo*, con lo cual no se favo-

recía, sin duda, a la industria del carbón en el país, pero se simplificaban las labores en todos aquellos casos en que la substitución del combustible era posible; y de otra que, con fines principalmente industriales, concedió permiso para construir un *ferrocarril entre Concepción y Penco*, librándose a la empresa del pago consiguiente de derechos de internación por material; fuera de dos leyes más de **empréstitos**, de las cuales la primera autorizó al Ejecutivo para contratar uno de £ 720,000 en el extranjero con el fin de amortizar la deuda de 7% emitida en 1866, el que se hizo por intermedio del Banco Nacional de Chile y el City Bank con una tasa de interés anual de 4½%, una amortización de ½%, una comisión de lanzamiento de 1% y un tipo de colocación de 85,6%, y la segunda ordenó proceder a la cancelación, con fondos nacionales, del saldo de $ 3.350,000 del empréstito interior autorizado por leyes de 1878; y fuera de una ley que dispuso que los *derechos de internación* y almacenaje se pagasen en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre con un recargo de 50, 45 y 40%, respectivamente, quedando con este último recargo para el futuro, fijándose los precios de la tarifa de avalúos en moneda fuerte de plata y suprimiéndose el recargo relacionado con el cambio sobre los derechos de internación y almacenaje y el décimo adicional de algunos artículos; fuera de estas leyes, decimos, que llevan todas como Ministro de Hacienda la firma de Don Ramón Barros Luco, no se dictó en 1885 ninguna otra ley de trascendencia económica y financiera.

La crisis de precios a que nos hemos referido explica en gran manera la decadencia que en 1885 tuvo el

comercio internacional en sus valores: las exportaciones de Chile llegaron a $ 51.243,343 de 38 peniques, menores en $ 6.523,107 a las del año anterior; las importaciones alcanzaron a $ 40.096,629, menores en $ 12.790,217 igualmente a las del año anterior. Los principales artículos que de éstas últimas disminuyeron fueron: las máquinas y útiles para ferrocarriles, el azúcar refinada, el género blanco de algodón, los tocuyos, quimonos y sacos vacíos, el arroz y el vino. Los más importantes de exportación que disminuyeron fueron: el salitre, el cobre en barra, los ejes de cobre, el guano, la cebada común y la harina flor. El detalle de la balanza comercial de 1885 fue el siguiente:

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 39.883,497	$ 15.505,558
Alemania	3.221,970	7.116,525
Francia	2.538,446	6.480,861
Bélgica	37,733	126,563
Italia	27,215	392,733
España	.....	223,875
India	.....	128,345
Otras naciones	30,703	181,960
Naciones americanas:		
Perú	$ 1.710,567	$ 2.645,316
Estados Unidos	1.626,773	2.721,265
Ecuador	452,907	233,463
Uruguay	220,861	217,505
Guatemala	93,690	.....
Colombia	86,869	.....
Brasil	80,546	805,847
Argentina	44,173	3.233,239
Rancho	1.203,677	.....
De la pesca	.....	83,574

En estas cifras de comercio exterior no se incluye el movimiento mercantil de Arica y Tacna, a causa de la imposibilidad que entonces había de hacer una separación entre los artículos destinados al consumo de ese territorio y los destinados a Bolivia, pues en la aduana de Arica, punto de internación, debían pagarse los derechos de importación que imponían las leyes de aduana, prescindiéndose del destino de la mercadería. El producto total de la aduana de Arica fue, por lo demás, de $ 1.863,654.25, correspondiendo a Chile, en virtud del tratado de tregua con Bolivia, la suma de $ 554,134.92.

El estudio del cuadro anterior nos ofrece algunas orientaciones sobre la situación que había en el país por esos años en materia de **política comercial**. Entre las naciones europeas, vemos que es una sola, Gran Bretaña, la que mantenía, con sus cuantiosas importaciones procedentes de Chile, el equilibrio de nuestra balanza de comercio. Todo el continente europeo exportaba a Chile cantidades inmensamente superiores a las que importaba de nuestro país. Los preceptos de política comercial no se conocían prácticamente: se abandonaban por completo en cuanto trataban de regularizar las relaciones mercantiles entre Chile y ese conjunto de naciones, de modo que las ventajas que éstas obtenían en su comercio con nuestro país se hiciesen extensivas también a nosotros. ¿No hubo posibilidad de celebrar tratados comerciales con ellos? ¿O simplemente no se hizo tentativa alguna? La falta absoluta de huellas de tales tentativas nos induce fatalmente a sostener que tales propósitos no existían, por lo menos en forma evidente. Ello encuentra, por lo demás, su explicación. Las enormes riquezas adqui-

ridas por la nación le mantenían tranquila, libre de preocupaciones que naciesen de la lucha económica internacional.

Entre las naciones americanas, continuaba la República Argentina ejerciendo discretamente política comercial respecto de Chile, pues procuraba exportar productos nacionales por sumas cuantiosas hacia nuestro país (ese año mayores que las de cualquiera otra nación americana) e importar sólo valores pequeños, como puede verse en el cuadro anterior. ¿Era imposible obtener la celebración de un tratado comercial con nuestros vecinos del oriente? Fácil, sin necesidad de tomar mayores iniciativas e interés, no era; pero quizás no imposible. En cuanto al Perú, podemos observar en esos años un fenómeno económico sugestivo en sus relaciones con nuestro país: sus exportaciones a Chile aparecen siendo superiores, bastante superiores a sus importaciones de Chile, lo que no sucedía hasta 1879. Ello era natural: la hostilidad comercial, por un lado, y la pérdida de los territorios que limitaban con nuestro país, por el otro, habían producido tal situación. Esos territorios ejercían una poderosa atracción de productos chilenos. De ello provenía el exceso considerable que antes de 1879 tenían las importaciones peruanas procedentes de Chile sobre las exportaciones a nuestro país, o, viceversa, el exceso de las exportaciones chilenas al Perú sobre las importaciones procedentes de ahí.

Tal circunstancia explica también las alteraciones consiguientes en el monto del comercio de cabotaje y de tránsito chilenos y de cabotaje peruano. Nuestro intercambio de **cabotaje**, que en 1878 fue de $ 34 millones 109,477, llegaba en 1885 a $ 73.269,114 de 38

peniques, lo que significa un aumento de más de 100%. Nuestro comercio de **tránsito,** en cambio, descendió de $ 3.413,895, a que alcanzaba en 1878, a $ 1.338,403 en 1885.

Desconsoladora era, finalmente, la situación de intercambio comercial chileno con el Brasil, que seguía remitiendo a nuestro país cantidades muy superiores a las que de aquí importaba.

Los **precios corrientes** de 1885 habían ascendido a las siguientes cifras: trigo, $ 3,07 los 100 kilos; cebada, $ 2.08 los 100 kilos; maíz, $ 3.00 los 100 kilos; frejoles, $ 5.00 los 100 kilos; lentejas, $ 5.00 los 100 kilos; papas, $ 2.00 los 100 kilos; huevos, $ 0.24 la docena; harina flor, $ 6.50 los 100 kilos; azúcar refinada, $ 35.30 los 100 kilos. Los precios en Londres de algunos de nuestros artículos de exportación eran: cobre en barra, £ 62.17 en 1880 y £ 43.18 en 1885 la tonelada de 1,016 kilos; ejes de cobre, £ 13 en 1880 y £ 8.6 en 1885 por unidad o por ciento; plata piña y en barra, 52¼ peniques en 1880 y 48⅔ peniques en 1885 la onza troy (28.77 gramos); trigo, 43 chelines 8 peniques en 1880 y 35 s 9 d en 1885 las 480 libras inglesas; salitre, 15 chelines 7 peniques en 1880 y 10 s 1 d en 1885 las 112 libras inglesas.

En armonía con el descenso del comercio exterior, las **rentas** ordinarias de 1885 llegaron a cifras inferiores a las del año anterior. En su total de $ 36 millones 078,455.21, el detalle fue:

Aduanas	$	23.795,907.36
Ferrocarriles		5.931,857.83
Impuesto agrícola		1.144,646.31
Alcabala e imposiciones		835,385.38

Venta de guano	883,405.11
Correos y telégrafos	555,122.76
Venta de bienes nacionales	485,629.57
Papel sellado	447,750.50
Patentes	408,453.42
Contribución de haberes	346,543.80
Intereses y descuentos	291,144.15
Contribución de guerra	154,390.46
Contribución de herencia	148,012.76
Redención de censos	138,075.53
Casa de Moneda	42,299.67
Arriendo de propiedades	39,900.10
Peaje	26,474.76
Otras	403,455.74

Sufrieron menoscabo principalmente las entradas de aduana, por menor exportación de salitre; la contribución de haberes, la venta de guano y la contribución de guerra. Extraño aparece en esta computación de entradas el hecho de que también se colocase entre las rentas ordinarias a la contribución de guerra. En esos tiempos era, como hemos visto, corriente colocar otras rentas más o menos extraordinarias entre las entradas ordinarias. Con respecto a los derechos del salitre, debemos advertir que su gravamen estaba entonces calculado en pesos fuertes, de manera que si se lo pagaba con papel, se hacía el recargo correspondiente hasta obtener los 38 peniques estipulados. La medida era justificable y conveniente para el fisco. Los derechos de importación se fijaron con un recargo de 40%. Con respecto a la contribución mobiliaria, que ese año tuvo un descenso de más de 100% en su rendimiento, originado por la abolición del gravamen

impuesto a los empleados tanto públicos como particulares, se estimaba necesario substituir la base del capital por la de la renta cuando reemplazaba a la de patentes, porque en las condiciones en que existía no se tomaba en consideración la utilidad rendida, única base equitativa en la exigencia de un derecho. En el de peaje, que se exigía de la internación de ganado argentino por la Cordillera, a razón de $ 0.40 por cada buey, $ 0.25 por cada vaca y $ 0.10 por cada ternero, anotó el Ministro la circunstancia de que con un costo de $ 59,534, había producido ese año $ 26,474...

Escala ascendente, como ocurre de ordinario en casi todos los países, llevaba la **deuda pública,** que a fines de 1885 alcanzaba a un total de $ 83.175,637.46, siendo de $ 33 por cabeza (la población era de 2 millones 527,300 habitantes). La interior, incluso el papel moneda en circulación, que era entonces de 26 millones 687,916, fue de $ 49.917,637.46; la exterior, en oro, alcanzó a $ 33.258,000. El servicio total de la deuda en 1885, contando la pérdida en el cambio, fue de $ 6.067,484.08, lo que correspondió a $ 2.40 por cabeza de población.

La pérdida en el cambio al servir la deuda externa ascendió ese año a $ 2.325,881.45, suma considerable que agregada a las dificultades y entorpecimientos generales que producía el régimen del papel moneda, había de hacer pensar más y más en la conveniencia de proceder cuanto antes **a la conversión metálica.** Desde el mes de Septiembre de ese año se empezaron a retirar de la circulación en forma normal $ 50,000 mensuales de billetes de curso forzoso; pero esa suma no bastaba para obtener un restablecimiento oportuno del valor de la moneda. Consideróse entonces

necesario aumentarla, sobre todo una vez que el Estado había solucionado una serie de dificultades, como las reclamaciones sobre certificados salitreros que se habían levantado, y satisfecho algunos compromisos, como el de tomar en Europa las £ 315,000 que más o menos correspondían a los tenedores de bonos de la deuda peruana.

Ocupando la cartera de Hacienda Don Hermógenes Pérez de Arce, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley en que se proponían las siguientes medidas: retiro de $ 125,000 mensuales en papel de curso forzoso; garantía de la emisión bancaria; suspensión de ésta, mientras la fiscal no quedase reducida a $ 16.000,000; y cobro en metálico de la décima parte de los derechos de aduana. Con ello se tuvo en vista sólo *preparar* la conversión, porque se tropezaba con la dificultad de que el cambio estaba bastante distanciado de la par, y llevándola a cabo sin consideración a esto, se producirían injusticias manifiestas en la situación de débitos y créditos. En atención a los inconvenientes del cambio, que en 1885 estuvo, por término medio, a 25.4 y en 1886 a 23.9 peniques por peso, Pérez de Arce creía necesario limitarse a una incineración mensual de billetes y a una acumulación progresiva de metálico. Con clara visión del peligro, proponía también en su extensa y bien razonada Memoria de Hacienda de 31 de Agosto de 1886 tomar medidas relativas a la emisión bancaria, emisión que podía hacer y hacía ya ilusorios en gran manera los efectos del rescate de papel moneda. Tales medidas consistían en prohibir el establecimiento de nuevos bancos de emisión, en suspender la de los que había entonces, mientras la emisión fiscal no quedase reducida a

diez y seis millones de pesos y en exigir la garantía de la emisión en títulos de la deuda pública, letras hipotecarias o bonos de la deuda municipal. Había hasta entonces libertad para fundar bancos de emisión y facultad para emitir billetes hasta el 150% del capital efectivo. Resulta así que el efecto que hubiera podido tener en la circulación el rescate de papel moneda hecho por el Estado era contrarrestado por las emisiones de esos bancos, que, desde que se dictó la ley de curso forzoso hasta mediados de 1886, habían aumentado considerablemente. Con la libertad de fundar nuevos bancos de emisión sin garantías especiales, decía Pérez de Arce, «no sería extraño que la circulación fiduciaria hubiese podido exceder de las necesidades del mercado y que continúe excediendo más cada día». El presentimiento del Ministro era perfectamente real.

En materia de *fomento industrial* y partiendo de la base de la necesidad de elementos escogidos que tenía la industria, ya relativamente avanzada en el país, el Ministro Pérez de Arce consignaba en su Memoria la idea de favorecer un movimiento inmigratorio que trajese obreros y maestros adecuados. Estos eran necesarios, en su concepto, para la planteación de nuevas industrias y aun para el buen éxito de las ya establecidas. La situación de tranquilidad y de relativo bienestar en que se encontraban las clases trabajadoras, daban al **problema obrero,** que es siempre latente, la solución que da en general el estado de enriquecimiento de una época, y hacía perfectamente posible aquel procedimiento, tanto más cuanto que la guerra había quitado a la agricultura, a la industria y al comercio mucho material de hombres de que ellas

habían menester para su mantenimiento y desarrollo ulterior. ¿De dónde provenía esa situación de tranquilidad y de bienestar de que gozaban las masas populares después de la guerra? La respuesta está contenida en la propia observación que hemos hecho: de que el enriquecimiento general dió lugar a una mayor actividad en todas las manifestaciones de la vida, emprendiéndose trabajos de toda clase y proporcionando oportunidad de participar en él a todos los individuos. Había demanda de brazos. Extraño pudiera parecer que, a pesar del régimen de papel moneda de curso forzoso en que el país vivía, no hubiera malestar en las clases inferiores, pues las consecuencias de la introducción de tal sistema son de ordinario las del encarecimiento de la vida por la depreciación de la moneda. Pero el encarecimiento no se hizo notar, por lo menos de modo que afectara al sustento mismo de la población, a pesar del descenso del cambio, que de 36½ en 1883, bajó a 22½ peniques en 1885. ¿Cómo se explica esto, que en los tiempos que corremos sería casi una aberración? Sencillamente, por la circunstancia de que, habiendo estallado en el extranjero una crisis de precios a causa de una superproducción industrial, nuestras exportaciones hubieron de restringirse, aumentando la oferta interior de productos, y nuestras importaciones, que fueron baratas y que no disminuyeron de golpe con la disminución de las exportaciones, aumentaron considerablemente esa oferta de mercaderías en el país. El enriquecimiento general de éste, por otro lado, posibilitaba y daba lugar a aumentos de salarios, tanto más cuanto que había gran demanda de brazos, demanda que encontraba su explicación, por una parte, en el aumento de las actividades y, por

otra, en el decrecimiento de hombres hábiles y útiles en la guerra.

Desde el punto de vista de la carestía de la vida, las emisiones no produjeron mayores dificultades, y talvez por esa circunstancia, en gran manera por lo menos, no se formó en el país la fuerte y general oposición que corresponde al régimen de curso forzoso. Pero si no hubiese mediado el hecho de aquella superproducción industrial extranjera y no hubiésemos adquirido las grandes riquezas del salitre, las emisiones de papel moneda lanzadas por la guerra habrían producido en esos tiempos el desastroso resultado que producen de ordinario en la vida económica. Los $ 28.000,000 papel emitidos por el fisco constituyeron, por lo demás, una cantidad pequeña con relación al monto de las riquezas obtenidas como resultado de la contienda. El interés del dinero se mantuvo al tipo de los años anteriores, o sea, al 2% a la vista, al 4% a seis meses plazo, y al 6% en los préstamos bancarios.

Si para terminar el estudio de la legislación y demás acontecimientos de naturaleza económica de la Administración Santa María, nos referimos aún a lo aprobado durante ella en 1886, deberemos anotar, además, las disposiciones tomadas para fabricar y emitir *moneda de valor nominal de dos y medio centavos* con ocho gramos de peso y la aleación prescrita en 1878, y para que todo banco que emitiese o hubiese emitido *bonos al portador*, publicase en el *Diario Oficial* una lista semestral no sólo de las letras amortizadas, sino de todas las que se hubiesen sorteado y no hubiesen sido pagadas, no pudiendo negarse a pagar las amortizadas aun cuando hubiese trascurrido el término de la prescripción.

De gran trascendencia para la regulación y organización de **nuestra deuda en el extranjero** fue la ley de Agosto de ese año, que autorizó al Ejecutivo: 1.° para convertir el empréstito del 4½% autorizado en 1857 cambiando los bonos vigentes por otros de igual interés y de amortización acumulativa de ½% anual, concediendo a los tenedores las compensaciones necesarias; 2.° para convertir los empréstitos exteriores del 5% de 1870, 1873 y 1875; 3.° para convertir el empréstito del 6% de 1867; 4.° para emitir bonos que produjesen lo suficiente para atender al aumento de capital que requería la ejecución de esas autorizaciones y a los gastos de emisión del nuevo empréstito; y 5.° para emitir en iguales obligaciones la suma de £ 315,000 para atender al saldo de la liquidación de lo que correspondiese a los tenedores de bonos de la deuda del Perú, en conformidad al tratado de paz con ese país. Los bonos que se emitiesen con arreglo a lo dispuesto en los números 2.° a 5.° tendrían un interés no superior a 5% y una amortización acumulativa de ½% anuales. Esta ley, como las dos anteriores, lleva como Ministro de Hacienda la firma de Don Hermógenes Pérez de Arce, y significó positiva ventaja; fue propuesta por el Gobierno en vista de la constante alza de los bonos chilenos en Europa.

En el dominio de los *ferrocarriles*, se dictaron diversas leyes, con objetos distintos: así, unas que concedían permiso para construir y explotar líneas entre Penco y Talcahuano y entre Taltal y el establecimiento de amalgamación de la Compañía Minera Arturo Prat; y otras que prorrogaban el plazo para iniciar los trabajos de ferrocarriles pequeños en diferentes lugares. En el dominio de la *industria*, se dispuso la

liberación de derechos de internación a diversas maquinarias. Esto estaba en concordancia con el espíritu que entonces dominaba, de fomentar el trabajo industrial del país con la introducción de medios adecuados.

Justo estimamos en este punto dejar consignada la actuación de Don **Hermógenes Pérez de Arce** como Ministro de Hacienda. Como pocos, tenía Pérez de Arce el más claro concepto del alcance de las doctrinas económicas del libre-cambio y de la protección, en tiempos en que reinaba aun casi completa incertidumbre sobre las conveniencias nacionales en materia de política comercial. Las teorías libre-cambistas en Chile, decía, son «incompatibles con el desarrollo industrial de un país cuya cultura técnica está muy lejos de haber alcanzado el nivel necesario para entrar en libre competencia con las naciones que llegan a encontrarse económicamente embarazadas con una exuberancia de producción». Como portador duradero de política comercial pudo haber sido Pérez de Arce el más eficaz protector de los intereses nacionales. Desgraciadamente, su permanencia en el Ministerio fue sólo de pocos meses. Con el vasto estudio que revelaba haber tenido en el ramo de hacienda, alcanzó, sin embargo, a dar ideas, a propiciar rumbos y a tomar medidas de verdadera trascendencia para el porvenir económico y financiero. Fue el gran paladín de los primeros esfuerzos por realizar la conversión metálica, a la vista de las hondas perturbaciones y de los males que produciría el mantenimiento del régimen del papel moneda. Propuso prudentes medidas de rescate periódico de billetes fiscales y de restricción del poder emisor de los bancos. Todas sus ideas y sus planes eran concor-

dantes con el propósito de llegar a la conversión. «Una vez principiada la operación, decía, es necesario que no se retroceda ni paralice un solo momento, porque todo el secreto para ganarse la confianza pública está en continuar perseverantemente el retiro del papel moneda, sea cual fuere el sacrificio que cueste». Digno entusiasmo era ese de un estadista que tenía conciencia de las conveniencias nacionales.

Pérez de Arce tenía también clara comprensión del verdadero alcance de cuestiones que para otros Gobiernos no tenían mayor significación y las abandonaban. Preocupóse así, y con marcado interés, en reorganizar los servicios del Ministerio de Hacienda, en donde muchas veces en el silencio de las oficinas, y sin que el público se dé cuenta, se deciden problemas de trascendental importancia para la economía entera. El que haya pasado por esas oficinas habrá podido pesar bien lo que esto significa. «No son meras cuestiones sobre la marcha ordinaria de la Administración, decía Pérez de Arce, las que diariamente se ventilan en el Ministerio de Hacienda, sino cuestiones en que van siempre envueltos muy graves intereses que hieren al desarrollo de la riqueza pública o al libre ejercicio de la acción individual en sus relaciones con los intereses nacionales». Para hacer frente a esa situación, proponía el aumento y mejoramiento no sólo del personal, sino de su dotación. El régimen de esas oficinas era efectivamente anticuado: regíanse ellas por la ley de 29 de Julio de 1853, en que el movimiento de ese departamento era sencillamente incipiente comparado con el de entonces. La labor del Ministro se encontraba desamparada y notablemente entorpecida.

La Memoria de Pérez de Arce, bastante extensa,

pertenece a aquellas que en su lectura, por muy escaso que sea el tiempo de que se disponga, no se puede prescindir de ningún acápite, como se puede prescindir de muchos en tantas, porque en cada página hay ideas importantes, muchas de ellas nuevas, que producen satisfacción al que estudie estas cuestiones. La actuación de Pérez de Arce habrá de ser siempre recordada.

Juicio crítico sobre la Administración de Santa María en la vida económica de la República

Si grande fue la responsabilidad que asumió el Gobierno de Pinto en la guerra contra el Perú y Bolivia, en que se exponía quizás el porvenir entero de la nación, grande fue también la responsabilidad que pesó sobre la Administración de Santa María, que debía, por un lado, asegurar definitivamente el fruto de los triunfos obtenidos por las armas, y, por el otro, crear una organización estable a las nuevas condiciones de la vida económica nacional.

Apreciando con serenidad las dificultades de organización que había después de una guerra que mantuvo los ánimos en constante e intensa agitación, y contemplando la solución que la Administración Santa María buscó y dió a los problemas matrices de la vida nacional, no podremos menos de reconocer que ese Gobierno tuvo el mérito imperecedero de haber consolidado y afianzado el porvenir económico de la República sobre bases robustas como jamás lo habían imaginado nuestros padres. Porque si hubo una Administración que dispuso de riquezas y ofreció riquezas inconmensurables para el futuro, fue la de Santa María. Los

valores sólo del salitre han representado en los cuarenta años transcurridos desde 1880 hasta 1919 *la suma de $ 5,753.227,902 oro de 18 peniques, proporcionando de esa cantidad al fisco, según nuestros cálculos, unos 1,600.000,000 de pesos oro de igual clase. En un país de rentas más o wenos reducidas, como es el nuestro, esa cifra representa una riqueza fabulosa, con la cual se han podido llevar a cabo obras públicas de gran trascendencia y estimular el desarrollo cultural de la nación en una escala imposible de alcanzar con las fuentes de recursos de que se podía disponer en otra época.* Y el afianzamiento de tales riquezas se hizo definitivamente durante la Administración Santa María.

Más que todo, empero, correspondió a ese Gobierno la organización de la nueva vida económica del Estado, la organización de las finanzas nacionales, a las cuales se habían incorporado los poderosos derechos de exportación del salitre. La Administración Santa María tiene en materia financiera su parecido con la Administración Prieto. A ambas correspondió poner orden a situaciones convulsionadas en el terreno del ánimo público y echar las bases del desarrollo futuro de las instituciones económicas y especialmente financieras.

En la organización de las finanzas, el Gobierno de Santa María estimó conveniente fundar las Direcciones del Tesoro, de Contabilidad y Tesorerías sobre bases que asegurasen o garantizasen el mejor control y la mayor cooperación en la solución de los distintos problemas de orden administrativo financiero. ¿Lo consiguió? Estimamos que sí, sin desconocer que años más tarde tal control y tal cooperación debían someterse a un nuevo examen.

Hay un punto, de grande importancia para la organización y el equilibrio financiero, que dejó pasar la Administración Santa María, debido quizás al cúmulo de problemas que tenía que solucionar, y es el relativo al arraigamiento de la computación de los derechos salitreros como entradas ordinarias de la nación. Si hasta 1879 imperaba una manifiesta normalidad en el monto de las entradas y en el monto de los gastos, pudiéndose prever con regularidad toda falta de recursos venideros, desde ese año hasta hoy ha reinado manifiesta incertidumbre en la seguridad del equilibrio de los ingresos con los egresos, a causa de estar sometidos los primeros, que emanan principalmente de la exportación de salitre, a alteraciones con mucha frecuencia imprevistas y a menudo considerables en el probable rendimiento del año siguiente y aun en el propio de que se trata. Esto ha debido ser desde entonces acá razón de graves trastornos de carácter administrativo-financiero. Distinta hubiera sido la situación si los recursos del nitrato se hubiesen considerado como entradas simplemente extraordinarias, como los apreció, aunque sin mayor insistencia, el Ministro Cuadra.

Otro de los grandes problemas que tuvo la Administración Santa María fue el de preparar la conversión metálica. Durante el último tiempo de ese Gobierno,—antes no era posible exigirlo con mayor insistencia, pues la paz se sancionó de modo definitivo sólo el 83 y el 84,—le vemos decididamente preocupado de llevar a cabo ese ideal. Fe de ello da la actuación del Ministro Pérez de Arce, que proponía y tomaba diversas medidas de importancia encaminadas al fin, poniendo de manifiesto que el Ejecutivo estaba se-

riamente empeñado en el rescate del papel moneda, para lo cual decía el Ministro que no se debía pensar en disminuir uno solo de sus recursos. En la correspondencia particular del Presidente Santa María se ve al mandatario dominado de la idea de la conversión.

Si la conversión del papel moneda no ganó más terreno durante esa Administración, culpa no fue de falta de iniciativas y esfuerzos.

Fue característico de ese Gobierno, en cuanto a los medios de que disponía para la satisfacción de las necesidades del Estado, la holgura de que pudo gozar. Fue realmente el tiempo de las vacas gordas. Se aumentaron los sueldos del personal de los Tribunales de Justicia, del personal de las Cámaras, del personal administrativo en casi todas sus ramificaciones. Se fijaron en las Aduanas remuneraciones equivalentes a las que constituían la norma en el comercio general o en la industria privada, lo que de hecho envolvía un notable mejoramiento de la condición económica del empleado público. Se aumentaron en el ejército las rentas en $ 1.636,000, cantidad que en ese entonces era apreciada como considerable y salvadora de situaciones precarias de mucho tiempo. La deuda pública fue eficazmente reducida. Creáronse nuevas oficinas y termináronse muchas obras públicas. Se adquirió equipo para los ferrocarriles por valor de $ 1.000,000, y se gastaron $ 700,000 en el muelle fiscal de Valparaíso. Se liquidaron las cuentas de la guerra y se consultaron en la ley de presupuestos las pensiones consiguientes. Y con todo esto, al final del ejercicio financiero quedaba un sobrante, que al terminar el año 1885 llegó a constituir una reserva en caja por valor de $ 8.341,633.

En Agosto de ese año Don Ramón Barros Luco, Ministro de Hacienda a la sazón, llegaba a la conclusión de que la administración de la hacienda pública había «entrado ya al período regular de la época de paz». Esta afirmación no era sino el reflejo de las comodidades producidas en el dominio de la economía financiera. No debía interpretarse en el sentido de una regularidad alcanzada en la constitución de las finanzas, sobre todo para el futuro, pues las incertidumbres que seguramente crearían las entradas del salitre, incertidumbres que ya en ese tiempo dieron una muestra de su realidad con la crisis de precios que sufrió por esos días el nitrato, estaban en completa pugna con la regularidad en el desarrollo de los acontecimientos financieros que debían producirse posteriormente.

En los dominios del comercio internacional se notaron en ese período aumentos considerables, nunca alcanzados, que revelaron la extraordinaria actividad económica desplegada por la nación. Los valores, expresados en pesos de 38 peniques, fueron en el quinquenio:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1881.....	$ 48.464,467	$ 39.713,146	$ 88.177,613	30.9
1882.....	66.572,501	50.992,217	117,564,718	35.4
1883.....	70.710,777	54.447,061	125,157,838	35.2
1884.....	57,766,450	52,886,846	110.653,296	31.7
1885.....	51.243,343	40.096,629	91.339,972	25.4

La disminución de valores en los dos últimos años fue originada por la crisis de precios a que dió lugar la superproducción mundial. La Administración Santa María, con clara visión de las conveniencias nacionales, se preocupó en restringir el aumento de los consumos,

con el fin de mejorar en lo posible la balanza de créditos, pues se hizo entonces notar una demanda considerable de letras ocasionada por la salida de capitales, salida que obedecía a su vez a temores de depreciación monetaria y que desmejoraba notablemente el cambio.

Aumentos poderosos y nunca alcanzados se notaron también en las rentas públicas, que pusieron a disposición del Gobierno los medios relativamente cuantiosos de que éste pudo echar mano para atender a la satisfacción de las necesidades de la nación en la forma en que acabamos de ver. Ellas alcanzaron:

En	1881 a.....	$	36.434,721.01
»	1882 a.....		40.107,209.77
»	1883 a.....		44.248,695.00
»	1884 a.....		39.910,133.10
»	1885 a.....		36.078,455.21

Las entradas de este quinquenio llegaron a valores anuales dobles y aun triples con respecto al período anterior. Por cabeza de población llegaron a $ 18 en 1883 y a $ 14 en 1885.

El adelanto de esta Administración en materia de industria nacional, como lo hemos visto, fue igualmente digno de notarse, sobre todo por los esfuerzos que ésta debía demandar. En el último tiempo se instalaron las fábricas de azúcar de los Guindos y de Parral. El adelanto industrial se hacía extensivo a casi todas las ramas de la actividad económica del país: habíase empezado a construir material rodante para los ferrocarriles y maquinaria agrícola e industrial; habíanse perfeccionado las fábricas de tejidos de

lana, las fábricas de vidrios y aun de papel. Para fomentar aún más la industria del país, el Gobierno mejoraba los medios de transporte y la enseñanza industrial; propiciaba la inmigración y acordaba la organización en 1885 de una exposición permanente de maquinarias y herramientas así nacionales como extranjeras, que sirviera de estímulo constante al país. Fue una de las Administraciones más fructíferas que ha tenido Chile.

11.—Situación y actividades económicas de la Administración Balmaceda (1886-1891)

En medio de la crisis general de precios que había estallado en el mundo entero, afectando en no poco a nuestro desarrollo económico, y en medio de los preparativos que el Gobierno de Santa María hacía con el rescate parcial del billete fiscal y con las demás medidas propuestas para solucionar el problema de la conversión metálica, que era la empresa más ardua e importante que debía llevarse a término, subió a la Presidencia de la República Don **José Manuel Balmaceda,** por fuerza tanto de sus méritos, revelados en el Parlamento, en la sociedad y en la Moneda, como de los deseos del Gobierno anterior de que le sucediera en la dirección del país.

Balmaceda hízose cargo de ésta en condiciones económicas llenas de perspectivas halagadoras. Poco tenía que temer al más grave de los problemas de una Administración, el de contar con los recursos necesarios para la buena marcha de los servicios públicos, y pudo, en consecuencia, gracias tambien a su actividad e inteligencia, hacer una obra de adelanto ma-

terial interno de vastas proporciones, especialmente en obras públicas, en que dejó ligado su nombre a los espíritus más emprendedores.

En el año de la trasmisión del mando (1886) nada importante se hizo en materia de legislación económica. Los valores del **comercio exterior y rentas nacionales** habían permanecido más o menos iguales en su monto al año anterior, llegando las segundas a $ 37.116,070.45 y los primeros a $ 51.239,149 en las exportaciones y a $ 43.989,007 en las internaciones.

Importante fue, en cambio, el paso dado en materia de administración financiera, al emprenderse la **conversión de la deuda exterior** de la República, operación para la cual se había autorizado al Gobierno precedente en los últimos días de su administración (ley de 27 de Agosto de 1886). El país gozaba por esos años del merecido crédito que le daban en el extranjero el fiel cumplimiento de sus obligaciones y sobre todo el incremento de sus riquezas. Para la conversión de la deuda presentáronse tres propuestas: una del City Bank, con el cual Chile había tenido ya negociaciones bancarias; una de la firma N. M. Rothschild e Hijos, que ofrecía ventajas especiales; y una del Banco de París y Países Bajos, que no ofrecía mayores ventajas. El Gobierno aceptó en Febrero de 1887 la de Rothschild, que ofrecieron un tipo de colocación de 96%, una tasa de 4½% de interés y una amortización anual de ½%, sin cobrar comisión de lanzamiento y sin dejarle responsabilidad ni aún en las dificultades que pudiera ofrecerle la cancelación del saldo insoluto de las deudas comprendidas en la operación. El capital nominal de esa conversión de deuda ascendió, en oro de 18 peniques, a $ 80.133,333.

Si en materia de legislación económica el año anterior fue pobre, de bastante actividad fue el de 1887. A las leyes importantes dictadas entonces en los dominios de la hacienda, en donde se concentraban los problemas de mayor trascendencia, pertenece la que con fecha 14 de Marzo dispuso que, a contar desde el 1.° de Enero de ese mismo año de 1887, *se incinerase mensualmente la cantidad de cien mil pesos en billetes fiscales*, hasta reducir la emisión a diez y ocho millones de pesos. Con ese paso se daba comienzo a la solución del **problema de la conversión**. Era un problema que preocupaba, ya entonces, intensamente la atención pública. La baja considerable del cambio y las fluctuaciones a que constantemente se veía sujeto el valor de nuestra moneda, ocasionaban perturbaciones comerciales de consideración y menoscababa el crédito nacional. La vuelta al régimen del metal era esperada con vehemencia, sin que ello quisiera decir que no hubiese también entonces voces contrarias a la adopción de esa medida.

Para llevar a cabo la incineración de billetes y realizar la conversión, se prescribieron medidas de importancia. Por un lado, se acordó elevar el recargo de 40% establecido en la ley de 29 de Agosto de 1885 a 45% en el resto del año 1887, a 47% en 1888 y a 50% en 1889 y años siguientes. Esta disposición, sin embargo, no alcanzó a durar dos años, pues por ley de 31 de Diciembre de 1888 el recargo sobre los derechos de internación y almacenaje se redujo al 46% en Enero de 1889, al 45% en Febrero, continuando así la rebaja de 1% en cada mes hasta quedar reducido al 35%. Por otro lado, se acordó que hasta fines de 1888 se invirtiese anualmente la suma de un millón doscien-

tos mil pesos en comprar pesos fuertes o barras de plata, elevándose esa cantidad a un millón quinientos mil en los años siguientes; las monedas o pastas se depositarían en la Casa de Moneda a título de garantía de los billetes fiscales de curso forzoso, no pudiéndose, en consecuencia, usar sino para la conversión de éstos en metálico. Además, se prohibió a los bancos emitir en billetes al portador sumas mayores al monto de su capital efectivo, modificándose con ello la ley de bancos de 1860. Estas instituciones garantizarían también el 50% de la emisión que registrasen en la Casa de Moneda, en donde depositarían pastas metálicas o títulos de la deuda del Estado y de las Municipalidades de Santiago y Valparaíso, cédulas de la Caja de Crédito Hipotecario y demás establecimientos regidos por la ley de 29 de Agosto de 1885. La ley fijaba en seguida la manera cómo los bancos privilegiados y no privilegiados constituirían su garantía y determinaba la forma en que se retirarían de la circulación las diversas clases de billetes.

Esa importante y bien meditada ley de conversión, que lleva, como Ministro de Hacienda, la firma de Don Agustín Edwards, y que en primerproyecto y con la idea matriz del Ministro Pérez de Arce presentó el Gobierno de Santa María al Congreso, ofrecía la evidente ventaja de realizar un magno ideal sin producir perturbaciones demasiado odiosas en las relaciones de deudores y acreedores, pues sería de efecto paulatino y no produciría nivelación forzada y brusca en los valores comprometidos en virtud de los contratos vigentes en la vida económica de la comunidad.

Para regularizar también la constitución administrativa general de la República, adaptando los servi-

cios superiores del Ejecutivo a las necesidades creadas por la natural evolución de las instituciones, se reorganizaron en 1887 los Ministerios, creándose siete Departamentos de Estado a cargo de seis Ministros del Despacho, a saber: 1.° del Interior, 2.° de Relaciones Exteriores y Culto, 3.° de Justicia e Instrucción Pública, 4.° de Hacienda, 5.° de Guerra, 6.° de Marina, 7.° de Industria y Obras Públicas. La ley fijó las atribuciones de cada uno de ellos, correspondiendo al **Ministerio de Hacienda:**

1.° La administración de las rentas públicas y el cuidado de su recaudación e inversión con arreglo a la ley.
2.° La vigilancia e inspección superior sobre todas las oficinas encargadas de recaudación, inversión, administración y contabilidad y fiscalización de las rentas del Estado.
3.° Lo relativo a las Casas de Moneda.
4.° Lo concerniente a los terrenos baldíos y demás propiedades nacionales, cuya administración y conservación no estén especialmente encomendadas a otro Departamento, y al inventario de todos los bienes nacionales de cualquiera naturaleza que sean.
5.° Lo relativo a la deuda pública.
6.° Todo lo concerniente al comercio interior y exterior.
7.° La habilitación de puertos y caletas.
8.° La formación de la estadística de rentas y de la comercial.
9.° Lo concerniente a las instituciones del crédito y sociedades anónimas.
10. La presentación anual al Congreso de los presupuestos de gastos generales y cuentas de inversión.

La nueva organización de los Ministerios quitaba al de Hacienda una multitud de atribuciones que le había fijado la ley de 1837, hasta entonces en vigencia, como ser: todo lo relativo a la pesca marítima, lo relativo a la minería, lo relativo a la agricultura e industria nacional, el cuidado y conservación de los montes y plantíos. Todas estas atribuciones recayeron en el Ministerio de Industria y Obras Públicas.

Otras pasaron a otros, lográndose con el mayor número de Departamentos aligerar, en cierto modo, la pesada carga que con el trascurso del tiempo estaba sufriendo cada uno. Tales distribuciones en las obligaciones ministeriales han sido siempre deseables, pues con el nacimiento constante de nuevos problemas y el avance permanente de los organismos del Estado, se producen situaciones que en definitiva y para conveniencia del país no pueden afrontarse de otro modo. Trascurridos hasta hoy algunos decenios desde la última reforma de los Ministerios, la opinión pública pide la creación del Ministerio de Agricultura. Creemos que en pocos años tendrán que introducirse cambios de consideración en la organización general de los actuales Ministerios, y en especial en varios de ellos, pues hay algunos, como el de Hacienda, que conocemos de cerca por haberlo desempeñado, que se encuentran tan recargados de tareas, por la estrechez cada vez mayor que le va creando la ampliación general de los servicios, el ensanche de la esfera de acción de la economía nacional y las exigencias de la política, que toda variación que se introduzca y que sea capaz de crear armonía entre la labor ministerial y el desarrollo normal de la vida del país es de urgente necesidad.

En atención al orden ya establecido en los servicios internos del trasporte de carga, pasajeros y correspondencia, se autorizó al Ejecutivo para prorrogar el contrato celebrado al efecto con la *Compañía de Navegación a Vapor del Pacífico*, asegurándole una subvención de cincuenta mil pesos anuales y obligándose la empresa a conducir con un 25% de rebaja a los empleados públicos en comisión del servicio.

Para fomentar el acarreo terrestre internacional,

se autorizó en 1887 al señor Juan Clark para construir y explotar un *ferrocarril internacional* que, partiendo de la ciudad de Los Andes en Chile, llegase a la de Mendoza en la Argentina, garantizando el Estado por veinte años el interés de 5%, al cambio fijo de 36 peniques por peso, sobre el costo efectivo de la línea, no pudiendo éste exceder de cinco millones de pesos de igual tipo de cambio. Con fecha 17 de Octubre de ese año se celebró *una convención* destinada a establecer el acuerdo entre los dos países para reglamentar el tráfico y las relaciones internacionales a que diese lugar la construcción de ferrocarriles transandinos. La obra, sin embargo, no se realizó sobre la base de la autorización legislativa de entonces, sino de una que se dió diez y seis años más tarde, que imponía más o menos iguales condiciones y en virtud de la cual se dió principio a los trabajos en 1906, para terminarlos en 1910.

Autorizóse igualmente a la firma Bustamante y Cía. para que pudiese construir una vía férrea entre Chile y la Argentina por el Sur del país, siguiendo la margen del río Laja, para atravesar la Cordillera por el boquete de Antuco, garantizando el Estado a la empresa por veinte años el interés del 6% al cambio de 36 peniques por peso sobre la suma de treinta mil pesos por cada kilómetro de línea que la compañía entregase al tráfico, no pudiendo pasar el capital garantizado de cuatro millones de pesos de igual tipo de cambio. Este ferrocarril no ha sido construído, y dados los proyectos que hay para abrir uno por Curacautín y Lonquimay en el sur y otro que comunique a Antofagasta con Salta en el norte, no se divisa plazo en que se pueda realizar.

En el transporte de carácter puramente interno, concedióse ese año permiso para construir y explotar un ferrocarril entre la bahía de Coronel y Buen Retiro; autorizóse a la Compañía del Ferrocarril de Taltal para prolongar su línea hasta el mineral de Cachinal; y se declararon libres de derechos de Aduana por diez años los materiales de conservación y uso de los ferrocarriles de Coquimbo, Tongoy, Carrizal y Cerro Blanco.

Al propósito de proteger la industria nacional en algunas ramas, obedeció la liberación de derechos que se concedió también por diez años, y hasta por un valor no superior a quince mil pesos por cada fábrica, a las telas metálicas, fieltros, planchas para satinar, ácidos, aceites, resinas, piezas de maquinaria, etc., que internasen del extranjero *las fábricas de papel* del país.

En materia de **rentas,** las de 1887 fueron superiores a las del año anterior: las ordinarias llegaron a $ 45.888,954.07, habiendo aumentado principalmente las entradas de aduana por mayor exportación de salitre. Esta situación de mejoramiento del comercio de nitrato, tuvo también como efecto el que nuestros bonos en Europa tuviesen buena cotización, a pesar de los francos temores que en ese entonces había allí de perturbaciones de la paz y de abatimiento económico. Autorizada la firma Rothschild e Hijos para emitir en Londres un *empréstito* de 4½% de interés con ½% de amortización, obtúvose un tipo de colocación de 96%, resultando un capital efectivo de 14 millones 850,560 pesos oro de 18 peniques.

Los valores del **comercio internacional** de Chile en 1887, superiores a los anteriores, llegaron en la

exportación a $ 59.549,958 y en la importación a $ 48.630,862. Aumentaron en la primera los productos de la minería y de modo muy especial los del salitre. La exportación de plata piña y en barra llegó a un total nunca superado hasta hoy día, pues fue de 193,739 kilógramos; la de salitre llegó a la cantidad de 712,767 toneladas, cifra tampoco alcanzada hasta entonces. Disminuyeron en ella los productos de la agricultura. En las importaciones aumentaron los géneros, el arroz, el azúcar refinada, los sacos, etc. y disminuyeron muy especialmente los animales vacunos en $ 1.991,647, debido a una prohibición temporal hecha por nuestro Gobierno para que se internase ganado de la Argentina por haber estallado allí la epidemia del cólera.

El aumento de los valores del comercio exterior y de las rentas nacionales y la expectativa que ofrecía la economía para el futuro, hizo fácil en 1888 la realización de diversos proyectos tendientes a mejorar notablemente algunos servicios e instituciones de significación para el porvenir económico. Así, para obtener un transporte marítimo de mayor capacidad, dado el incremento de la producción y la necesidad de facilitar el acarreo, acordóse conceder a la *Compañía Sud-Americana de Vapores* una subvención adicional por siete años a la acordada en 1883 de cien mil pesos anuales durante los dos primeros años y de setenta y cinco mil en cada uno de los siguientes. Igualmente se acordó ceder a la Compañía el transporte «Amazonas» de la marina nacional, bajo condiciones que garantizaban al Estado la devolución de la nave. El objeto de esta ayuda era que la Compañía mantuviese un capital social que no bajase de tres mi-

llones de pesos, que estableciese una línea de vapores entre el Callao y Panamá tocando en varios puertos intermediarios, que hiciese la prolongación de sus líneas desde puertos al Sur de Valparaíso y que conectase sus viajes con las líneas transatlánticas del istmo, que pusiese un vapor de carga en la navegación del río Imperial, que aumentase su flota con un vapor de 1,500 toneladas y que mejorase su maquinaria y demás, que asumiese para el nuevo servicio las obligaciones aceptadas en 1883 y que mantuviese finalmente una tripulación compuesta de un 75% de chilenos y a lo menos uno de los oficiales en cada barco.

El pensamiento que inspiró al Congreso y al Gobierno de Chile en la celebración de este contrato no era otro que el de ejercer una bien comprendida supremacía de tráfico y transporte marítimo en la costa occidental de Sud América. Tal intensificación del movimiento marítimo comercial en estas costas constituía **una medida de política comercial** eficaz e inteligente, tanto más cuanto que, encontrándose nuestro país en peores condiciones naturales de tráfico que otros, a causa de las mayores distancias, con la región del istmo de Panamá, hacia donde se dirigían las miradas de muchas naciones, especialmente de los Estados Unidos, y hacia donde convergían grandes intereses económicos universales, podría entablar relaciones internacionales y atraerse negocios que de otro modo no habrían podido llevarse a cabo. A la realización de ese laudable propósito contribuyó asimismo la circunstancia de que el país contaba con los medios suficientes. Los resultados obtenidos fueron, sin duda, positivos. Los países del norte y de ultramar tuvieron la posibilidad de llegar con cierta facilidad

hasta nuestras costas y nosotros pudimos fomentar un intercambio de productos, de ideas y de cultura general que no podía ser sino del más real provecho para Chile.

La celebración de ese contrato, o si quiere, la formación de esa compañía de navegación en que tomaba parte el Estado, significó la realización de un ideal encaminado a producir benéficos resultados en el desarrollo de nuestra vida nacional. Significó la realización de un ideal que en ese tiempo era grande, y que hoy, introduciendo modificaciones al contrato, no podría desdeñarse por injustificado o perjudicial.

Volviendo al *trasporte terrestre*, debemos dejar constancia de que la actividad legislativa y ejecutiva de 1888 fue intensa como pocas veces había ocurrido: se liquidó el contrato de construcción de los ferrocarriles de Angol a Traiguén y de Renaico a Collipulli, se concedieron $ 2.455,650.70 para su conclusión hasta Victoria y $ 180,000 para la explotación hasta Traiguén y Collipulli; se concedió permiso para construir una vía de Traiguén al Oriente, de Collipulli a Santa Julia, del Toco a Tocopilla, de Renca a Las Condes; se ordenó la contratación, en licitación pública, de la construcción de líneas férreas de Victoria a Osorno y Valdivia, de Coigüe a Mulchén, de Tomé por Quirihue y Cauquenes hacia la línea central, de Talca a Constitución, de Palmilla a Alcones, de Pelequén a Peumo, de Santiago a Melipilla, de Calera a Ligua y Cabildo, de Salamanca a Illapel y Los Vilos, de Vallenar a Huasco, de Ovalle a San Marcos, de la estación Mercado en Santiago a Barnechea o el Peñón; para atender a la construcción de estos ferrocarriles se autorizó al Presidente de la República para contratar un em-

préstito que produjese hasta £ 3.000,000, al 4½% de interés y ½% de amortización; se declaró de utilidad pública el ferrocarril de Chañaral al interior; se concedió permiso a la Compañía Huanchaca de Bolivia para prolongar su línea férrea de Antofagasta hasta el establecimiento Rescalli. Concedióse también la suma de $ 1.500,000 para la construcción y reparación de los puentes de los ferrocarriles del Estado y 1 millón 420,000 para aumentar el equipo de éstos. Las leyes que autorizaron las construcciones anteriores, que fueron líneas que en su mayor parte buscaron salida al mar, llevan como Ministro la firma de Don Pedro Montt; la que aprobó el contrato de construcción de varias de ellas lleva la de Don Enrique Salvador Sanfuentes, como la referente a puentes y equipo.

En otro orden de actividades, se dispuso la *canalización del río Mapocho*, obra que habría de ser de positivo beneficio para la capital de la Repúplica, autorizándose el gasto de $ 500,000, y la construcción de un *dique seco en Talcahuano* por un precio que no podría exceder de $ 540,000.

Intensa labor fue la realizada en esos tiempos en materia de obras públicas, especialmente en el fomento de los medios de trasporte interno. Es éste un timbre de honor de esta Administración. A pesar de las ingentes sumas que se requerían para la ejecución de todos estos trabajos, la situación financiera de la República hizo posible en 1888 la **abolición de la alcabala** e imposiciones establecidas por la ley de 1835, contribución contra la cual existía desde mucho tiempo un descontento de triple carácter: estimábase, por un lado, ser sobrellevada de modo principal por la pequeña propiedad, que era más afecta al cam-

bio de dueño que la grande; estimábase, por otro, que entorpecía la trasmisión de la propiedad; y estimábase, por el otro, que recaía principalmente sobre personas poco acaudaladas, que, por circunstancias especiales, se veían obligadas a vender con premura algún bien raíz. Todo esto hacía a las alcabalas profundamente antipáticas, y si se las mantuvo hasta entonces, fue porque ofrecía un rendimiento muy difícil de reemplazar en las entradas fiscales, por su magnitud: en 1887 dieron $ 911,612.40.

Habíanse abolido desde los tiempos de la guerra hasta ahora el estanco del tabaco (1880), los derechos de faro y tonelaje (1883), los derechos de exportación del cobre y de la plata (1884) y las alcabalas e imposiciones (1888). Esto sólo da idea de los desahogos que pudieron tener las arcas fiscales a partir del año 80.

A pesar de todo, se pensó en arbitrar algún recurso que compensara esa nueva abolición de contribuciones. Don Enrique Salvador Sanfuentes, Ministro de Hacienda firmante de la ley de supresión de la alcabala, patrocinaba en su extensa y completa Memoria de 1888 la restauración del monopolio del tabaco por el Estado. El estanco se imponía, en su opinión, porque los tabacos se estaban sembrando en escala muy reducida, daban un producto de calidad inferior y mantenían en el artículo extranjero un precio tanto o más alto que el anterior a la supresión del monopolio. Abolido el estanco, se percibía por este ramo sólo un derecho específico de internación que en 1886 llegó a $ 119,491.50, pudiéndose, con la realización del proyecto de restauración, obtener una entrada diez veces superior.

La idea, que la vimos insinuada ya, aunque sin ha-

cer hincapié, en la Memoria de Don Agustín Edwards, no tuvo, sin embargo, mayor número de patrocinantes, que hubieran podido hacerla triunfar. Estimamos que no debe ser abandonada, pues la vuelta al estanco es conveniente.

En el propósito de mejorar la administración financiera del Estado, dictóse en 1888 una ley que transformaba la Contaduría Mayor en el actual **Tribunal de Cuentas,** que se encargaba del examen y juzgamiento de todas las cuentas que debiesen rendir los empleados y los establecimientos o personas que administrasen, recaudasen o invirtiesen valores fiscales o de beneficencia pública. El examen de las cuentas, recaería, por un lado, sobre la legalidad, veracidad y fidelidad de ellas, y por el otro, sobre la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad.

La ley orgánica del Tribunal de Cuentas lleva, como Ministro de Hacienda, la firma de Don Agustín Edwards. Era una reforma largos años esperada. Muchos esfuerzos se habían hecho en la Administración anterior por llevarla a cabo, pues la fiscalización de los recaudadores y administradores públicos era deficiente en gran manera, no lográndose hacer con oportunidad el examen de las cuentas para su debida sanción. El atraso había sido hasta entonces cada vez mayor, por razón del incremento que tomaban los servicios públicos y, como constataba el Ministro Sanfuentes, por la condición en que actuaba el personal de la Contaduría Mayor, que en cierto modo carecía de autonomía al encontrarse ligado a otras oficinas. Prescribíase ahora el plazo máximo de tres años para que toda cuenta fuese examinada y fallada; transcurrido ese tiempo, cesaba la responsabilidad para quien rindiese la cuenta.

Don **Agustín Edwards,** que como Ministro de Hacienda entró al Gobierno de Balmaceda a fines de 1886, dejando el cargo en el primer semestre de 1888, aparece en su Memoria como atento analizador de cada rama de la producción nacional, y quizás en particular de las oficinas de hacienda, estudiando su organización con decididos propósitos de mejorarla. Fueron de especial importancia los decretos que espidió a este respecto. En el que lleva fecha 12 de Marzo de 1887 trató de poner orden y establecer claridad en las atribuciones de los Directores del Tesoro y de Contabilidad, en que había contradicciones que ocasionaban irregularidades que era menester evitar. Dispuso que fuesen de la incumbencia exclusiva del primero las obligaciones que imponía al Superintendente de la Casa de Moneda el decreto de 1880, la supervigilancia del fondo de amortización y de canje de los billetes deteriorados por el uso y la designación de la cantidad y tipos de billetes que debiesen extraerse del tesorillo para la circulación y cambio de los inutilizados. Al segundo correspondería, en cambio, revisar y comprobar los libros de asiento, registro y movimiento de la emisión fiscal, como deuda del Estado, y cuidar que se llevasen al día. En las destrucciones de billetes continuaría interviniendo el Contador Mayor (Presidente del Tribunal de Cuentas), el Director del Tesoro y el Director de Contabilidad.

La actuación del señor Edwards ha debido quedar, además, íntimamente ligada a la organización del Tribunal de Cuentas, pero de modo muy especial a la preparación de la conversión metálica, acordada en ese tiempo para que se realizase en el futuro.

Las **rentas** de 1888, año en que se dispuso, con

fecha 31 de Diciembre, que los derechos de exportación determinados en la ley de 1880 se pagasen en adelante con el recargo necesario para obtener por cada peso un valor de 38 peniques en giros a noventa días, ya fuese que el pago se hiciese en billetes fiscales o moneda fuerte de plata, quedando facultado el Presidente de la República para fijar el recargo sobre la moneda fuerte, ascendieron a $ 50.182,614.48, habiendo aumentado, sobre el año anterior, principalmente los derechos de internación y su recargo, los de exportación de salitre y su recargo y el producto de los ferrocarriles. En la composición de las entradas de ese año, según la Memoria de Hacienda, correspondían: a las rentas propiamente dichas (derechos de exportación de salitre y demás) $ 20.164,432.71; a las contribuciones (derechos de internación, contribución de haberes, impuesto agrícola, papel sellado, etc.) $ 21.972,193.95; a los servicios (ferrocarriles, correos, Casa de Moneda, etc.) $ 7.714,278.54; y a la redención de censos $ 331,709.28.

Los valores del **intercambio comercial** con el extranjero fueron en 1888 bastante superiores a los del año precedente: las exportaciones llegaron a $ 73 millones 089,935 y las importaciones a $ 60,717,698. Hubo aumento de las primeras especialmente en el cobre en barra, cuya exportación total llegó a un valor de $ 13.878,439; en el salitre, que llegó a 33 millones 866,196, y en el guano, que llegó a $ 1.535,035. En el cobre se presentó en esos tiempos un problema de precios. Formóse un sindicato francés para monopolizar la materia prima por varios años, con el fin de elevar los precios, lo que consiguió durante poco más de un año, haciéndolos llegar de £ 35 y 40 a £ 80

la tonelada en Londres. Transcurrido ese tiempo, fracasó la combinación, debido a diversos factores, perteneciendo a los principales el aumento de la producción mundial (sobre todo en Estados Unidos, Méjico y Japón) de metal rojo y el reemplazo de él en algunos usos por el acero. La consecuencia fue el rápido retroceso del precio y la paralización de muchas faenas en nuestro país. En el salitre el precio también era bajo: fluctuaba en 1888 entre 8 chelines 6 peniques y 11 chelines ½ penique, siendo el término medio de 9s 4d; los países que más lo consumían eran Alemania, Austria y Francia, dedicándose un 80% al abono de los campos de betarraga sacarina. Aumento de importación hubo sobre todo en animales vacunos, cuya internación total llegó a un valor de $ 3.954,490; en carbón de piedra, que llegó a $ 3.387,633; en azúcar, que llegó a $ 5.932,240; en casimires y en sacos vacíos.

Por razones de diversa índole, entre las cuales no son de menospreciar las de amistad tradicional, **la vida económica de Tacna** sufría, después de pasar a manos de Chile, una especie de estagnación, o, con más propiedad, de retroceso, pues el comercio en dirección a Bolivia tomaba en gran manera la vía peruana de Mollendo, Arequipa, Puno y Lago Titicaca. Junto con sustentarse en general la idea de rebajar los derechos de internación a Bolivia, el Ministro de Hacienda Don Justiniano Sotomayor patrocinaba como solución permanente y de eficacia la construcción de un ferrocarril entre Tacna, Corocoro y La Paz, proyecto que encontró su definitiva realización con la inauguración en 1913 del ferrocarril de Arica a La Paz. Patrocinaba igualmente la idea de regar la

provincia de Tacna con las aguas del río Mauri, lo que habría costado, según sus cálculos, unos dos o tres millones de pesos y habría posibilitado el cultivo de la caña de azúcar, del algodón y de otros productos tropicales. De ese modo habría aumentado considerablemente la vida económica y con ello social y política de esa región.

Por lo que concierne al fomento de la vida económica del país en general, es menester anotar que la construcción de ferrocarriles, de puentes y edificios seguía por ese tiempo con la mayor actividad. En la autorización dada para contratar un empréstito que produjese hasta £ 3.000,000 para construir líneas férreas, se aceptó, por decreto de 22 de Mayo de 1889, la propuesta del Deutsche Bank y Mendelsohn de Berlín, para colocar $ 1.500,000, cantidad a que el Gobierno había limitado el empréstito, por creer innecesaria mayor suma, al 97% con 4½% de interés y ½% de amortización anual. Presentaron también propuestas los Bancos asociados Crédit Lyonnais, Société Générale y Crédit Industriel et Commerciel, la firma Rothschild e Hijos, el Banco Nacional de Chile por el City Bank de Londres y algunos otros alemanes y franceses.

La contratación de ese empréstito, destinado a satisfacer gastos de índole reproductiva en tiempos en que había las mejores expectativas comerciales y de producción, el progreso efectivo realizado del intercambio económico con el extranjero, y el rescate que había seguido haciéndose de papel de curso forzoso, quedando en 30 de Abril de 1889 una circulación total de $ 23.287,916, habían de producir su efecto saludable sobre **el cambio internacional:** de 23.937 peni-

ques por peso, a que estaba por término medio anual en 1886, llegó a 26.562 en 1889. Extrañas y absolutamente inaceptables, dentro de los dominios de la ciencia, aparecen acerca de este último factor de entonamiento del cambio, las ideas expuestas en su Memoria por el señor Justiniano Sotomayor G., Ministro de Hacienda en 1889. «Se creía, dice, que era el temor de nuevas emisiones, la acción persistente de los especuladores en letras de cambio, o el exceso de moneda fiduciaria en circulación, lo que depreciaba su valor encareciendo el cambio; se esperaba dar tono al papel moneda incinerándolo progresivamente y haciendo reservas metálicas. La experiencia ha venido a demostrar palmariamente, agrega, que no eran fundadas aquellas apreciaciones ni eficaces estas medidas, puesto que ningún efecto ha producido sobre el valor del papel moneda la incineración de billetes ni la reserva metálica. Es de creer aún, continúa, que el efecto de la última ha sido contraproducente. Ha cesado todo temor de nuevas emisiones. La cantidad de moneda circulante se ha conservado más o menos invariable desde cuatro años atrás. *Debería más bien sentirse escasez de circulante, dado el ensanche de las operaciones comerciales y el gran desarrollo de las obras públicas, y, sin embargo, el cambio ha seguido su curso con absoluta prescindencia de estas causas* y se encuentra hoy (1.° de Junio de 1899) a 25¾ d».. ¿Cómo podía afirmar el señor Sotomayor que la incineración de billetes, que se hacía ya desde algunos años, y la reserva metálica ningún efecto habían producido sobre el valor del papel moneda, cuando el cambio había subido en los tres últimos años de 23.9 a 26.5 peniques por peso? Si bien es cierto que también otros factores influyeron en esa

alza, no puede afirmarse que ningún efecto había de producir el rescate de billetes fiscales, aun en el caso de lo que parece haber ocurrido entonces, de que los billetes de banco reemplazaron en la circulación a los billetes fiscales rescatados,p ues la merma de estos últimos debilitaba más y más la capacidad de emitir de los bancos.

Si, por lo demás, disminuyendo las exportaciones y aumentando las importaciones hasta equipararse o ser superadas las primeras por las segundas, el cambio tuviese naturalmente que tornarse desfavorable, ello no autorizaría para negar el poder tonificante que tiene dentro de un régimen de papel moneda el rescate de billetes de curso forzoso. La afirmación de que ningún efecto había producido sobre el valor del papel moneda la incineración de billetes y la reserva metálica (se habían incinerado $ 4.312,084 en billetes, se incineraban mensualmente «con toda regularidad» $ 100,000 más, y la reserva metálica representaba un valor de $ 2.500,000 moneda corriente), está en completa contradicción con la que hace en seguida, al decir que «debería más bien sentirse escasez de circulante». Precisamente, la escasez de circulante tiene como efecto ineludible, en la gran mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, la mayor valorización de la moneda y con ello el mejoramiento del cambio internacional, lo que se explica por la razón elemental y obvia de que a mayor demanda corresponde mayor precio.

Bien, empero, hacía el señor Sotomayor al llamar en seguida la atención hacia la conveniencia de propiciar las medidas necesarias para aumentar la exportación hasta que superase de modo seguro a la impor-

tación. Patrocinaba, al efecto, la idea de fomentar el consumo del salitre por medio de una propaganda activa, habilitando después de ello nuevas oficinas productoras y dando facilidades en el transporte y embarque del nitrato.

En cuanto a la legislación económica de 1889, debemos reconocer que fue relativamente pobre, formando marcado contraste con la del año que le precedió. Se prosiguió en la dictación de *leyes referentes a ferrocarriles*. Por una se concedió permiso para construir y explotar una línea de Santiago a Puente Alto; por otra se concedió permiso para construir una vía férrea entre Antofagasta y Aguas Blancas, debiéndose tomar en cuenta la mayor extensión de terrenos salitrales que recorriese; y por otra se autorizó la compra de algunos planos y estudios particulares para una línea de Calera a Ovalle y ramales a Illapel y Papudo. También se prosiguió la *canalización del Mapocho*, concediéndose para el objeto la suma de $ 2.900,000, además de los quinientos mil autorizados el año anterior.

Pero el Erario era apreciado en cierto modo como holgado, y lejos de clamarse con desesperación por mayores recursos, se declaraba libre de derechos la internación de una cantidad de artículos, como ser las máquinas y herramientas para uso de la agricultura, la minería, las artes, los oficios y las industrias; el material de hierro para las vías férreas; el hierro en planchas, etc., etc. Todas estas liberaciones constituían gruesas sumas disminuídas en las entradas de Aduana y en algunos casos falta de protección a las industrias nacionales similares, que en ese entonces eran incipientes. Lo prudente hubiera sido, en la con-

cesión de esas liberaciones y tal vez en otros respectos, no olvidar que el Erario tenía fuertes compromisos en la deuda interna y externa, la que había crecido poderosamente en los últimos años. Era, sobre todo, necesario y urgente realizar la conversión metálica.

Superiores a las del año precedente fueron las **rentas** ordinarias de 1889: alcanzaron a $ 54.807,929.91. Provino el aumento, de los derechos de exportación de salitre y del producto de los ferrocarriles. Al abrigo de la situación financiera anterior y en el deseo de proseguir y acelerar la conversión metálica, a fines de ese año propuso el Ministro de Hacienda a la sazón, Don Pedro Nolasco Gandarillas, que a partir del 1.° de Enero de 1890, hasta igual día de 1895, se incinerase anualmente la cantidad de $ 2.000,000 en billetes fiscales; que desde el 1.° de Enero de 1895 los billetes fiscales en circulación fuesen convertibles en moneda de plata; que desde esa fecha se cobrasen los derechos de internación y los de exportación de salitre en moneda de plata de 0,900 de fino, debiéndose pagar los de salitre a razón de 38 peniques por peso; que se acuñasen dos millones de pesos en moneda feble de 20 centavos; que los bancos no pudiesen emitir por más de su capital efectivo, debiéndose convertir sus billetes en dinero el 1.° de Enero de 1895, entregándoseles la reserva metálica que se les exigiría para elevar la garantía de sus emisiones. Fueron éstas, sin duda, buenas ideas. Pero el Congreso no tuvo oportunidad de discutir el proyecto en que se encontraban contenidas, pues los ánimos por aquel entonces empezaban a enardecerse y estallaban más tarde en una revolución.

Decrecieron, en cambio, los valores del **comercio**

internacional de 1889: la exportación fue de $ 65 millones 963,100 y la importación de $ 65.090,013. La forma en que se descomponía la primera daba ahora al país un carácter minero mucho más marcado que antes de la Guerra del Pacífico. Los productos de la minería representaban en la exportación de ese año un valor total de $ 56.452,089, contra $ 7.481,478 los de la agricultura y $ 52,966 los de las manufacturas, llegando el resto, compuesto principalmente de mercaderías de reexportación, a $ 1.976,567.

La principal preocupación de trascendencia económica interna de la Administración Balmaceda fue, sin duda, la construcción de ferrocarriles. A la legislación y a las medidas ya anotadas de ese año, es menester agregar las de 1890, que predominan sobre las demás ramas. Se autorizó, así, la inversión de $ 2.228,896 en la adquisición de nuevo material rodante. Se concedió permiso para construir líneas férreas salitreras entre la oficina Guillermo Matta y la de Santa Catalina, y entre la estación de las Conchas y la oficina Santa Luisa. Se concedió permiso para construir un ferrocarril minero entre Cerro Gordo y el puerto de Mejillones y uno carbonero entre Huena Piden y el puerto de Yáñez en Arauco.

Entre las otras leyes dictadas ese año, merece mención la que aprobó un *protocolo celebrado entre Chile y el Perú* para fijar cantidades y efectos que nuestro país cedía a aquél para el arreglo de su deuda externa, figurando entre las cesiones, fuertes porcentajes del producto líquido de los guanos explotados por Chile. El Perú quedaba comprometido a obtener de los tenedores de bonos la completa cancelación de ellos y el reconocimiento de la irresponsabilidad de Chile.

Con el fin de evitar algunos inconvenientes en servicios de importancia para el ramo de hacienda, se tomó la medida de abolir los *gremios de jornaleros*, lancheros y demás, establecidos en los puertos, declarándose libre para cualquier habitante de la República el embarque y desembarque de las mercaderías. Fue esa una disposición que guardaba íntima relación con el funcionamiento de las Aduanas y, por lo tanto, con el desempeño del comercio.

En cuanto al **intercambio de productos con el extranjero** en 1890, hubo que constatar un pequeño aumento con respecto al año anterior: las exportaciones llegaron a $ 68.391,381 y las importaciones a $ 67.889,097. Su detalle, en pesos de 38 peniques, fue el siguiente:

Naciones europeas y asiáticas	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 46.035,857	$ 29.479,099
Alemania	6.356,470	15.680,331
Francia	2.324,455	6.845,293
Bélgica	136,696	277,717
Italia	43,252	446,326
España	1,910	269,119
India	.....	483,308
Otras	.....	263,102
Naciones americanas		
Estados Unidos	8.540,075	5.216,762
Perú	2.164,725	2.292,645
Ecuador	231,860	292,118
Uruguay	241,578	939,407
Colombia	137,681	703
Brasil	79,548	726,745
Argentina	35,808	4.435,270
Costa Rica	.....	73,012
Bolivia	.....	3,450
Guatemala	35,988	8,740
Otras	25,006	9,189
Rancho	2.000,472	.....
De la pesca	.....	146,743

De malos efectos materiales era la proporción del intercambio comercial de Chile con Alemania, Francia, Italia y España en Europa, y con Argentina y Brasil en América. Los valores que esos países importaban de Chile eran inmensamente inferiores a los que exportaban a nuestro país. Esto les debía colocar en situación de relaciones mercantiles privilegiadas con respecto a Chile. Registrando la estadística del comercio internacional desde 1844 hasta 1891, hemos podido constatar que Alemania exportó hacia Chile en esos 46 años por un valor total de $ 194 millones 775,784 e importó por uno de $ 74.261,416. Las cifras correspondientes a los otros países en igual período son:

Francia.....	$ 220.638,117,	contra	$ 100.418,257
Italia.....	11.533,474	»	1.452,187
España.....	14.584,375	»	1.150,233
Argentina.....	79,875,082	»	6.420,923
Brasil.....	30.251,838	»	8.964,283

La sola observación de la estadística nos dice que en materia de **política comercial** pudo hacerse mucho. No era que no hubiera motivos para proponer y tomar medidas destinadas a regularizar en lo posible esas relaciones materiales, sino que faltaba iniciativa, no existían hábitos comerciales en los Gobiernos, faltaba el espíritu alerta y emprendedor que en este sentido lleva a los pueblos al enriquecimiento superior. Llevábamos vida holgada y no nos preocupábamos de sacar ventajas de situaciones en que las pudiéramos haber sacado. Estábamos tranquilos, porque había cierto equilibrio en la balanza comercial; pero no nos deteníamos a considerar en la circunstancia de que era nuestro intercambio económico casi con un

solo país, con Gran Bretaña, el que nos daba la gran fuerza y nos equilibraba la balanza. Gran Bretaña, en efecto, había exportado en ese período de 46 años hacia Chile, productos por un valor de $ 555.548,026, pero había importado de Chile por uno de **$1,013.060,624.**

Si, por lo demás, quisiéramos buscar la explicación de esa situación de comercio internacional con Inglaterra, habríamos de considerar que la fuerte importación de ese país ha sido principalmente de salitre, comercio en que ha servido en gran manera de intermediario, pues ha revendido o remitido buena cantidad del producto a otros consumidores.

¡Qué grande hubiera sido el robustecimiento económico de Chile, si nuestro país, sobre la base de las relaciones mercantiles tan halagadoras con Gran Bretaña, hubiera hecho valer con respecto a aquellos pueblos y a otros, que no hemos citado, los principios, por lo menos, de la reciprocidad en que se apoyan los tratados comerciales!

El *comercio de cabotaje* había llegado en 1890 a su cifra más alta de $ 103.792,745. Superiores a las anteriores fueron también las **rentas** de 1890, que llegaron a $ 58.574,102.75, total descompuesto del modo siguiente:

Derechos de internación.....	$ 12.605,130.21
Recargo.....	4.552,510.20
Derechos de exportación de salitre...	16.292,934.25
Recargo.....	9.526,393.62
Derecho de exportación de yodo...	250,999.25
Recargo.....	147,966.74
Derechos de almacenaje.....	171,754.15

Derechos de muelle	100,096.34
Ferrocarriles	8.235,796.90
Correos y telégrafos	692,149.35
Venta de bienes nacionales	441,903.20
Peaje	32,920.00
Contribución mobiliaria y herencias	561,063.51
Impuesto agrícola	1.152,569.59
Papel sellado	442,716.86
Redención de censos	107,962.26
Guano	142,668.92
Otras	3.116,567.40

El detalle precedente nos deja ver, comparado con el de las Administraciones anteriores a la guerra, cuán inferior iba siendo el monto total de las rentas emanadas de los impuestos internos frente al monto de las rentas de Aduana, provenientes del intercambio de productos con el extranjero. Como los gastos ordinarios corren por regla general parejas con las entradas totales, resultaba más y más grande el peligro de graves entorpecimientos en la hacienda pública si por cualquier motivo se restringiese o se dificultase el libre ejercicio del comercio con el extranjero, sobre todo en el ramo del salitre, que proporcionaba las mayores entradas de Aduana. Esto lo hemos debido ver corroborado en diversas ocasiones. Y el mal para la seguridad de la hacienda ha debido cundir por el hecho de que al aumento de las entradas de Aduana se seguía la disminución de las entradas procedentes de las contribuciones internas, especialmente de las directas. He ahí el principio del abismo en que iba cayendo el orden de las finanzas nacionales.

Si bien es cierto que toda reducción de cargas au-

menta el poder económico de la población, en lo cual hay un beneficio, también lo es que debilita el espíritu de iniciativa y sobre todo de trabajo en los hombres, en lo cual hay un perjuicio. Esto, naturalmente, además de los defectos que acabamos de anotar en el orden financiero.

Por lo que respecta a los **precios corrientes** de 1890, hemos encontrado los siguientes en pesos oro de 38 peniques: cebada común, $ 3.70 los 100 kilos; frejoles, $ 6.00 los 100 kilos; harina flor, $ 7.00 los 100 kilos; lentejas, $ 10.00 los 100 kilos; maíz, $ 5.00 los 100 kilos; nueces, $ 6.50 los 100 kilos; papas, $ 2.00 los 100 kilos; trigo, $ 5.50 los 100 kilos; huevos, $ 0.24 la docena; lana merino, $ 31.50 los 100 kilos. En los mercados de Londres y Liverpool se cotizaban las 112 libras inglesas de salitre a 8 chelines 2 peniques; la tonelada de 1,016 kilos de cobre en barra a 54 libras 1 chelín; y la onza troy (28.77 grs.) de plata piña y en barra a 47¾ pens.

La **deuda nacional** de 1890 ascendía en 1.° de Enero a un total de $ 93.617,955.22, correspondiendo a la interna $ 46.501,495.22 y a la externa $ 47.116,460. Como la población de ese año llegaba a 2.599,740 habitantes, resultaba que la deuda total por cabeza era de 36 pesos. Durante los últimos tiempos se habían hecho reducciones importantes.

Con estas amortizaciones de la deuda y las que se estimaba conveniente hacer; con el plan de retiro regular de los billetes de curso forzoso, para hacer la conversión; y con las entradas relativamente poderosas con que contaba la nación, recursos que le posibilitaban, no sólo realizar lo anterior, sino que emprender numerosas obras públicas y adquirir costoso material

de toda clase en el extranjero, el país empezaba a llevar una vida llena de desahogos económicos, una vida de esperanzas y halagadoras expectativas, cuando un suceso de carácter político interno vino a dar al traste con toda esa situación, que le habría conducido en breve plazo al más brillante porvenir, que le habría permitido cimentar el futuro sobre bases de inconmovible progreso material e intelectual, que le habría permitido, en fin, labrar la felicidad y la tranquilidad económica y financiera de sus habitantes, evitando muchas miserias y muchos dolores. Estalló **la revolución,** que había de costar muchas vidas y muchos millones. Su causa fue un acto desusado de autoridad ejecutado por el Presidente de la República. Ocurría que éste se encontraba profundamente contrariado con el Congreso, en donde se había formado una mayoría que le era hostil, que no le dejaba gobernar con los Ministros que él deseaba. Se había formado una mayoría que criticaba duramente sus actos y censuraba a sus secretarios. ¿Cuál era la causa de esta actitud? Díjose que había arbitrariedad en los procedimientos gubernativos, que se creaban cargos inútiles y se concedían pensiones de favoritismo en el exterior. Díjose que había exageración en la construcción de obras públicas. Díjose, en síntesis, que había derroche de gastos públicos. Pero la causa fundamental de la oposición parecía ser aquello, que no era por cierto introducción de él, sino de los Gobiernos anteriores, pero que en la práctica se había exagerado cada vez más, a saber que el Gobierno tenía candidato oficial para el nuevo período presidencial.

Toda esta situación llevó al Presidente Balmaceda a prescindir en un momento dado del Congreso en un

acto en que la Constitución exigía la intervención de éste. Habiendo caído un Ministerio de mayoría a fines de 1890 y nombrádose en su reemplazo uno de minoría, o sea, de afección presidencial; encontrándose en receso ambas Cámaras y pendiente la aprobación de la ley de presupuestos para 1891, el Presidente no convocó, como debía, al Congreso para obtener esa aprobación y lanzó el 1.° de Enero un manifiesto al país declarando que para el año de 1891 regiría el presupuesto del año anterior. El Congreso, como contramedida, proclamó la revolución.

Las leyes de carácter económico dictadas por el Gobierno de Balmaceda en 1891 (de Enero a Agosto) no fueron ni pudieron ser de regulación o de incremento de la producción, como son las que se justifican en el desarrollo de la vida de un país, sino de un carácter financiero ocasional, emanado de la necesidad de satisfacer nuevos gastos, gastos para los cuales no se contaba con recursos que de modo natural ofreciese la producción nacional, sino el crédito público, o sea, la facultad o el poder de emitir papel moneda o títulos equivalentes. Estas leyes fueron relativamente numerosas y hubieron de afectar en sus fundamentos a las expectativas de obtener en un plazo prudencial la conversión metálica. Con ellas y los gastos totales hechos por ambas partes en la guerra civil, desvanecióse toda esperanza de realizar aquel ideal a un tipo alto y en forma segura de duración, como habría convenido a los principios de la justicia, de la economía y de la hacienda.

Así, por una ley dictada con fecha 5 de Mayo se ordenó que los bancos existentes en la República retirasen mensualmente el 10% de su emisión, hasta su

total extinción, y que fuese substituída en igual proporción por la *emisión de billetes fiscales*. Por otra, se dispuso el uso y enajenación del depósito metálico constituído por ley de 1887 para preparar la conversión y se autorizó la emisión de un millón de pesos en moneda divisionaria de plata, con ley de 15 peniques, tomando esta cantidad del referido depósito. Otra ley, que daba facultades extraordinarias al Presidente de la República, lo autorizó para invertir los *caudales públicos sin sujeción a presupuestos y procurarse fondos comprometiendo el crédito del Estado* y debiéndose dar cuenta a la Representación Nacional.

Por una disposición de fecha 6 de Junio, se declaró que *los billetes bancarios registrados en la Casa de Moneda* serían considerados como de emisión fiscal para todos los efectos legales, debiendo pagar los bancos mensualmente al Estado, en sus propios billetes, en billetes fiscales o en billetes de otros bancos, el valor de su emisión registrada. El Ejecutivo podría emitir la cantidad que los Bancos dejasen de pagar todos los meses. Por otras leyes, modificáronse los derechos de internación y almacenaje y los que debían pagar ciertas mercaderías. Con fecha 10 de Junio se autorizó al Presidente para *emitir hasta dos millones de pesos en billetes fiscales de cincuenta centavos cada uno*. Cinco días después se le autorizó para emitir *billetes de curso forzoso* hasta la suma de 6 millones de pesos, convertibles en pesos fuertes, con ley de $^{9}/_{10}$ de fino. El 22 de Julio se autorizó nuevamente al Presidente para emitir hasta *dos millones de pesos en moneda divisionaria de plata* con ley de $^{2}/_{10}$ de fino y 1½% de tolerancia en el peso, comprendiéndose en esa autorización $ 383,098.80 que faltaban para completar

un millón fijado antes. Suspendióse durante la guerra civil la *contribución de patentes de minas* en las provincias del norte.

Por fin, con fecha 18 de Agosto, se autorizó al Ejecutivo para emitir de nuevo papel moneda de curso forzoso. Esta vez por la suma de $ 15.000,000.

No nos corresponde tratar de los hechos militares de la guerra civil. Sólo constataremos que el triunfo correspondió a los revolucionarios y que, después de ocho meses de lucha, en que por parte de la dictadura se aprobó una cantidad de leyes que fueron más tarde anuladas, el Presidente abdicó y terminó por suicidarse. La guerra civil costó la vida de unos diez mil hombres, como anota Galdames, y un gasto de más de cien millones de pesos. Así terminó esta Administración, que dispuso de tantos elementos y emprendió tantas obras públicas. Para la historia económica de la nación quedará el recuerdo doloroso de que con los gastos de la revolución pudo haberse hecho cuatro veces la conversión metálica, que no necesitaba ya más de veinte a veinticinco millones de pesos, o haberse cancelado totalmente la deuda pública. Y esto, prescindiendo de la pérdida nacional de diez mil vidas, cuyo valor económico es inconmensurable.

Juicio crítico del conjunto de la situación y actividades económicas de la Administración Balmaceda.

Desde el punto de vista de la economía, podemos distinguir dos etapas en la Administración Balmaceda. La primera, que fue la más vasta, pudiera caracterizarse, con absoluta propiedad, por el espíritu diligente y en alto grado fructífero, de trabajo y de engran-

decimiento material, que fluía, formando para el país un saludable manantial, así de la Moneda como del Parlamento. La segunda, que fue la de menor duración, pudiera a su vez caracterizarse por la pasión de orden político que se apoderó de los ánimos en los círculos, tanto del Parlamento como de la Moneda, pasión que debía estar en completa pugna con los intereses materiales de la nación.

El nombre de Balmaceda aparece, en efecto, íntimamente ligado al desarrollo de las vías y medios de comunicación y transporte, de que en el hecho depende también el desarrollo de la vida económica entera de un pueblo. En esta materia dió grande actividad a la construcción de ferrocarriles, de puentes y demás medios, destinando fuertes sumas a la adquisición de equipo. Correspondióle la iniciativa de dar autorización para construir líneas férreas internacionales a la república del oriente. Dió considerable impulso a las obras de puertos, construyendo muelles y malecones. Mejoró notablemente las Aduanas, dándoles edificios de despacho, avalúo y resguardos, y reformando las de los nuevos territorios, esto es, las de Pisagua, Iquique y Antofagasta. Hizo tender líneas telegráficas en muchos lugares de la República.

También está ligado su nombre al fomento y construcción de obras de trascendencia local. Ahí está la canalización del Mapocho en Santiago, la instalación de agua potable en numerosas ciudades, la construcción de ferrocarriles urbanos. Ahí está la construcción de edificios para escuelas y para establecimientos de beneficencia.

En otro orden de materias, organizó la Dirección de Obras Públicas, reorganizó la Oficina Hidrográfica,

aumentó la remuneración de los intendentes y de otros empleados, invirtió una gruesa suma en cancelar las deudas de todas las Municipalidades de la República, a excepción de las de Santiago y Valparaíso, y en tomar medidas generales de salubridad.

Los gastos hechos por la Administración Balmaceda fueron, a la vista de esta larga lista de obras emprendidas, de mucha consideración. Pero fueron inversiones reproductivas y destinadas a satisfacer necesidades concretas. Tuvo Balmaceda la suerte de actuar en tiempos de gran prosperidad económica, de modo que contó con los medios que tales empresas exigían. La Administración Balmaceda fue heredera de un Gobierno rico en el más alto grado. Basta observar el desarrollo del comercio exterior y de las entradas en su período, para apreciar la situación de auge en que se encontraba. Los valores del primero fueron, en efecto:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1886.....	$ 51.239,149	$ 43.989,007	$ 95.228,156	23.93
1887.....	59.549,958	48.630,862	108.180,820	24.50
1888.....	73.089,935	60.717,698	133.807,633	26.25
1889.....	65,963,100	65.090,013	131.053,113	26.56
1890.....	68.391,381	67.889,097	136.280,478	24.06

Con una pequeña excepción, el aumento de los valores del comercio internacional fue superior de año en año. Esto hubo de tener como consecuencia directa, dada la composición de las rentas nacionales, el aumento de éstas, que llegaron:

En 1886 a.....	$	37.116,070.45
» 1887 a.....		45.888,954.07
» 1888 a.....		50.182,614.48
» 1889 a.....		54.807,929.91
» 1890 a.....		58.574,102.75

Si comparamos estas cifras con las de las Administraciones precedentes, veremos que en el Gobierno que estudiamos se vivía en condiciones económicas y financieras que no podían inquietar el ánimo de nadie ni detener el progreso regular de las instituciones y de los individuos. La causa primordial de tal holgura era, naturalmente, el buen negocio que con el extranjero podía hacer nuestro país en el ramo de salitre. Si junto a esto, consideramos que en ese período se contó, además, con fondos extraordinarios, provenientes de empréstitos, para la realización de vías férreas, comprenderemos en todo lo que corresponde la facilidad que hubo de tener esa Administración para emprender tantos y tan útiles trabajos.

De preocupación podía ser en ese Gobierno la necesidad de pagar cuanto antes el empréstito interno, representado por las emisiones de papel moneda, haciendo para el efecto la conversión metálica. De preocupación podía ser también el aminorar en lo posible el monto de la deuda externa, que había crecido notablemente durante los últimos tiempos. Sin embargo, no eran problemas que inquietaran a la Administración, porque ella había adoptado ya una norma con el fin de satisfacer esas necesidades, siguiendo un plan sistemático de rescate de billetes para el primer caso y cumpliendo formalmente con el pago de intereses y amortización a que estaba obligado para el segundo.

Tal situación de prosperidad económica y financiera hubo de robustecer, en una personalidad de orgullo, de energía y de carácter, el sentimiento de sí mismo, el sentimiento que coloca al hombre en el convencimiento de su capacidad y de su obra. Creóse así en su espíritu una situación que, dada la oposición tenaz que le hacía el poder legislativo, hubo de producir un choque incontrarrestable y estallar la revolución.

Fue este hecho el que constituyó la segunda etapa, a que hemos aludido, de la Administración Balmaceda. En esta segunda etapa, aunque corta en duración, hubo acontecimientos y resultados que, mirados con ojos serenos y apreciados desde el punto de vista de las conveniencias materiales de la nación, en que nos hemos colocado en el estudio que hacemos, están en la más absoluta y total contradicción con la consideración de los intereses económicos del país. La revolución de 1891 es el acontecimiento que más males ha causado a la República. Con ella, por razón de sus costos, desapareció la posibilidad, tan cercana entonces, de hacer en corto tiempo la conversión metálica, que habría traído tantos beneficios para el país en general y para la organización financiera en particular. Con ella, por causa de los sacrificios que significó, desapareció la expectativa que pudo haberse cifrado de disminuir eficazmente la deuda pública o de no haberla, por lo menos, aumentado, pues su servicio impone exigencias que en un momento de crisis o de pobreza constituyen una carga que oprime las iniciativas más fundadas y los espíritus más optimistas, sembrando sobre la masa de la población la desconfianza, no sólo sobre el Estado, sino sobre sí mismo.

Todo un porvenir de gloria económica y financiera para la República se derrumbó con la guerra civil de 1891. Desde el punto de vista de los intereses materiales, base de todas las manifestaciones de la vida de los pueblos, la revolución ha sido y será el mayor azote que haya sufrido jamás el desarrollo de la economía chilena.

12.—Normalización y desarrollo de la vida económica de la República bajo la Administración de Don Jorge Montt (1891-1896). Política financiera.

La mayoría del Congreso había declarado con fecha 1.° de Enero de 1891 que el Presidente de la República, Don José Manuel Balmaceda, estaba imposibilitado para continuar en el ejercicio de su cargo y que, en consecuencia, cesaba en él, designando a Don Jorge Montt para que coadyuvase a la acción del Congreso a fin de restablecer el imperio de la Constitución. Declarada así la guerra al Presidente de la República, constituyéronse los revolucionarios en las provincias del norte del país, eligiendo como cuartel general a Iquique, el puerto de mayor movimiento de exportación de salitre, y llave, por lo tanto, de esa poderosa caja de fierro nacional. Organizóse allí provisionalmente una **Junta de Gobierno** (12 de Abril), compuesta de Don Jorge Montt, Don Waldo Silva y Don Ramón Barros Luco, y se crearon cuatro Secretarías: del Interior y Obras Públicas; de Relaciones Exteriores, Justicia, Culto e Instrucción Pública; de Hacienda, y de Guerra y Marina.

Constituída la Junta, empezó por declarar que *no reconocería deuda alguna* contratada por los agentes de Balmaceda, ya se fundasen ellas en la autorización de 1888, ya en los «acuerdos nulos de la Corporación inconstitucional que se arroga en Santiago la autoridad del Congreso», y que toda negociación que se hiciese sobre las *barras de plata* existentes en la Casa de Moneda, que estaban depositadas como garantía de los billetes fiscales, era nula, impidiéndose su exportación. Igualmente declaró nulos y de ningún valor los actos o contratos en que se enajenasen o gravasen los *bienes nacionales*. Habiendo resuelto la Junta de Gobierno, a principios de Marzo, no admitir en arcas fiscales los *billetes emitidos por la dictadura*, dejó con fecha 9 de Septiembre sin efecto esa prohibición a causa de innumerables reclamos que hubieron de hacerse.

Restablecida ya completamente la paz interna, debieron empezar las preocupaciones del desarrollo económico regular. A fines de ese año se procedió a adquirir, por propuestas públicas, *material rodante* para los ferrocarriles por valor de $ 1.500,000. Fue ese un gasto de indiscutible urgencia; de otro modo, el trasporte no habría podido corresponder en forma medianamente satisfactoria a las necesidades efectivas de él. Poco después se dió permiso para construir un ferrocarril entre Penco y Tomé, dos centros industriales de importancia.

De mucha trascendencia para el orden y progreso locales, fue la ley dictada el 22 de Diciembre de 1891 sobre **organización y atribuciones de las Municipalidades,** ley en vigencia que lleva la firma de Don Manuel J. Irarrázaval y que dispuso en su título

V (Art. 34) que las rentas municipales se compusiesen: 1.° de un impuesto personal de $ 1 a $ 3, que no podría destinarse a otro objeto que al sostenimiento de las escuelas primarias del municipio; 2.° de un impuesto sobre haberes muebles e inmuebles, que no pudiese exceder de un tres por mil; 3.° de un impuesto sobre el expendio de tabacos y bebidas alcohólicas; 4.° de las cantidades que el Congreso votase anualmente a su favor; 5.° de los productos de las propiedades y demás bienes municipales, de las multas y cualquiera otra clase de entradas; 6.° del impuesto de patentes sobre industrias y profesiones.

Como puede verse por la sola enunciación del artículo 34, la ley que creó la comuna autónoma había de tener hondo efecto sobre la cuantía de las contribuciones fiscales internas, pues en virtud de ella pasaban a los municipios los impuestos sobre haberes y los impuestos sobre patentes.

Estos impuestos, el territorial y el de patentes industriales, comerciales y profesionales, habían pasado en Europa, hacia el año de 1890, del Fisco a las Municipalidades, por razón de las necesidades de recursos de estas últimas y por prestarse con más propiedad para ser contribuciones municipales que fiscales, ya que no eran susceptibles de gradaciones o progresiones, de la liberación de un mínimum de existencia en la contribución y de rebajas por situaciones especiales del contribuyente, como ser el número de hijos, los casos de enfermedades duraderas, etc. Siendo éstos un impuesto real, en que se prescinde de la persona, no se apropian para ser contribuciones fiscales, en donde la ciencia y las exigencias modernas aconsejan hacer aquellas consideraciones, estableciendo rebajas y

distinciones que se armonizan con los principios de la justicia. No cabe duda, que la medida tomada entre nosotros, encontraba su origen en lo que ocurría en las finanzas de las entidades de derecho público europeas.

El Fisco hubo de perder desde entonces sumas relativamente subidas, quedando por el capítulo de las contribuciones directas casi sin ellas, y apoyándose, en cambio, substancialmente sobre los derechos de aduana, que debían ser pagados en sus dos terceras partes por los extranjeros (derechos de exportación del salitre) y casi todo el resto por la masa general de la población en forma de impuestos indirectos al consumo (derechos de internación), en lo que no había justicia, pues éstos gravan más a las clases bajas que a las altas.

A fines de ese año tuvieron también lugar las elecciones generales, habiéndose fijado el 23 de Diciembre para el escrutinio de la elección de Presidente de la República. En este cargo fue proclamado el Presidente de la Junta de Gobierno, Don **Jorge Montt**, marino distinguido y hombre virtuoso, que había desempeñado una intensa labor naval y que contaba con las simpatías y la confianza del país, dado el sólido carácter de que aparecía poseído, condición que las circunstancias requerían.

Con la Administración de Don Jorge Montt empieza **la República democrática y el imperio del gobierno parlamentario,** que dió al traste con el régimen de autoridad presidencial. Aquella ley sobre organización y atribuciones de las Municipalidades dividía al país en comunas, que eran administradas por los municipios. A éstos correspondían ahora las

inscripciones electorales y las votaciones para la elección de los miembros del Congreso, del Presidente y los municipales. La comuna autónoma quitó al poder ejecutivo su influencia en la constitución del poder legislativo. Esta independización recíproca de los dos poderes fue robustecida con los efectos de la ley ya dictada de incompatibilidad del cargo de diputado o senador con todo empleo, función o comisión pública retribuída. El Presidente de la República debía ahora gobernar de acuerdo con el Congreso: era ésta la característica del gobierno parlamentario.

No nos corresponde aquí defender uno u otro sistema de Gobierno. Sólo diremos, desde el punto de vista fundamental en que observamos nuestra vida económica activa, que si en el antiguo régimen, en que el Presidente de la República tenía todo el poder, muy poco se hacía en materia de política comercial, en el nuevo, en que el Presidente ha perdido gran parte de él, menos podrá hacer, sin que esto quiera decir, de ningún modo, que no pueda hacer mucho si el Congreso le presta su franca cooperación. La eficiencia sólo es posible con absoluto acuerdo o armonía entre ambos poderes.

Volviendo nuestras miradas hacia la situación y el desarrollo del poder rentístico y comercial de la República en el año de la guerra civil, anotaremos un descenso en el monto de las **rentas** ordinarias. Ellas alcanzaron en 1891 a $ 55.723,310, que fueron percibidas en parte por la Junta de Gobierno, en parte por el Gobierno Dictatorial y en parte por el Gobierno Provisional. La Junta de Gobierno recibió principalmente los derechos de exportación del salitre con sus recargos ordinarios, llegando el total de lo recaudado

por ella a $ 11.526,059.03. El Gobierno Dictatorial percibió, en cambio, principalmente los derechos de internación con su recargo correspondiente, el producto de los ferrocarriles y el impuesto agrícola, ascendiendo el total a $ 22.237,407.34. El Gobierno Provisional recibió, en la forma regular de los tiempos normales, un total de $ 21.959,844.08.

Las entradas extraordinarias del año de la revolución alcanzaron a la suma de $ 42.241,310.82, siendo cuantiosas para el Gobierno Dictatorial, a causa de las emisiones de papel moneda, que llegaron a $ 20 millones 809,297, y del empréstito forzoso a los bancos, empleando los billetes emitidos por éstos, lo que le dió $ 8.829,380.98. Ese Gobierno tomó, además, del depósito fiscal en metálico $ 850,481.95. Si a las sumas totales de entradas ordinarias y extraordinarias de ese año, agregamos la existencia del anterior, podemos anotar un total de $ 113.584,400.91 en arcas nacionales en 1891. Los *gastos* de ese año llegaron a $ 104.628,402.38 (1), habiendo correspondido a la Junta de Gobierno $ 15.270,254.72, al Gobierno Dictatorial $ 61.626,732.97 y al Gobierno Provisional $ 27.781,414.69.

Como consecuencia natural de la guerra civil, el **comercio internacional** de Chile de 1891 arrojó valores inferiores a los del año anterior: en las exportaciones llegó a $ 65.701,811 y en las importaciones a $ 63.684,737. En cuanto a los derechos de *exportación del salitre*, dispúsose en 1892 que el 30% del im-

(1) En la Memoria de Hacienda de 1893, de Don Enrique Mac-Iver, se deja constancia de que esta suma debe haber sido aproximadamente de 110 millones, pues con posterioridad aparecieron gastos que no habían sido computados.

puesto establecido en 1880 se pagase en adelante en buenas letras sobre Londres a 90 días vista, computándose el derecho en 60 $^{8}/_{10}$ de penique por cada 100 kilos. Acordóse también ese año autorizar al Ejecutivo para que otorgase título de propiedad de la oficina salitrera que correspondiese a quienes lo hubiesen pedido y entregasen cancelados los certificados emitidos por el Gobierno del Perú en pago de la misma oficina.

Por lo que toca a los impuestos internos, hay que mencionar la dictación de una ley que estableció una contribución de patentes para los establecimientos en que se vendiesen al público *bebidas destiladas o fermentadas*, dividiéndose los departamentos en cinco órdenes y las patentes en tres clases. Estas se fijaron entre un monto de $ 1,200 y $ 75. Las leyes precedentes se dictaron ocupando la cartera de Hacienda Don Enrique Mac-Iver.

Los problemas que más debían preocupar, sin embargo, la atención del Estado eran los de naturaleza monetaria. A principios de ese año se autorizó al Presidente de la República para que hiciese acuñar la cantidad de dos millones de pesos en moneda divisionaria de veinte, diez y cinco centavos. En seguida se declaró excluída de la circulación la moneda divisionaria de plata con ley de $^{2}/_{10}$ de fino y la de $^{5}/_{10}$ de fino con 20% menos de peso que el Gobierno anterior mandó acuñar. Igualmente se declararon excluídos de la circulación los billetes al portador del Gobierno precedente, autorizándose ahora al Ejecutivo para contratar préstamos emitiendo vales con un interés máximo de 5% anual, hasta por veintiún millones de pesos, a fin de cancelar esas emisiones dictatoriales y

la moneda divisionaria a que acabamos de aludir. Las tesorerías fiscales cambiarían, además, por moneda legal la divisionaria de plata del 91. Para el pago de la deuda flotante, que en 1891 llegó a $ 41.264,113, representada por el papel moneda, se autorizó, con fecha 8 de Agosto, la emisión de bonos del Estado hasta por la suma de £ 1.800,000 con un interés hasta de 5% y una amortización hasta de 2% anuales, o en caso necesario hasta $ 18.000 000 con 6% de interés y 2% de amortización, elevándose en la proporción necesaria la cuota del derecho de exportación de salitre que debía pagarse en letras a 90 días. Este *empréstito* se contrató en Londres, en el mes de Octubre, por N. M. Rothschild e Hijos, que se obligaron a emitir los bonos al precio de 95%, comenzando el servicio de amortización el 1.° de Enero de 1894; por gastos de emisión, corretaje, impresiones, pago de estampillas y comisiones se abonó un 2¼%.

Con el fin de regularizar la situación de las deudas contraídas por el fisco con los bancos durante el Gobierno Provisional y cubrir el déficit de las rentas públicas que se produjese en 1892, se autorizó a principios de ese año la contratación de un *empréstito interior* hasta por la suma de $ 15.000,000.

Pero el gran problema pendiente en materia monetaria era el de la vuelta al régimen metálico. Estando al frente del Ministerio de Hacienda Don Enrique Mac-Iver, se aprobó una ley el 26 de Noviembre de 1892 en que **se preparaba la conversión,** ordenándose emitir para el efecto bonos del Estado, que llevasen la fecha 1.° de Enero de 1893, con 6% de interés y 1% de amortización acumulativa anuales, por la cantidad de £ 1.200,000. La enajenación de esos bo-

nos se haría por un mínimum de diez pesos papel por libra esterlina de capital, empezándose en Enero de 1893 a pedir propuestas para £ 50,000 mensuales. El papel moneda adquirido con estas emisiones sería incinerado hasta la cantidad de diez millones de pesos, invirtiéndose el resto en la compra de oro o plata para acuñar moneda en la forma que determinaba la ley. Hasta el 31 de Diciembre de 1895 se iría incinerando papel moneda y entregando a la circulación moneda metálica por igual valor. Llegado ese día, el papel moneda sería pagado a su presentación en la Dirección del Tesoro con monedas de plata de 25 grs. de peso y $^{9}/_{10}$ de fino, o su equivalente en moneda de oro, fijando el Presidente la relación que existiese entre la moneda de oro y el peso de plata. Las prescripciones hasta aquí citadas fueron derogadas al año siguiente por leyes de 13 y 31 de Mayo, siendo Ministro de Hacienda Don Alejandro Vial.

En su artículo 9.° disponía esa importante ley que el 25% de los derechos de internación y almacenaje en 1893 y el 50% en 1894 y 1895 se pagasen en libras esterlinas, a razón de $ 6.31 por libra, o en moneda chilena de oro de valor equivalente. En su artículo 14 ordenó que durante la vigencia del curso forzoso se limitase la emisión total de billetes de banco a veinticuatro millones de pesos. Se prescribió también que hubiese *tres clases de monedas de oro*, con ley de $^{11}/_{12}$ de fino: el cóndor, de veinte pesos; el doblón, de diez; y el escudo, de cinco. El cóndor tendría el peso de 15.9761 grs. con 14.64466 grs. de oro puro y 1.33134 grs. de aleación; las demás tendrían lo correspondiente. La tolerancia en feble y fuerte sería de dos milésimos en la ley, y de 1 por mil en los cóndores y dos mil

en los doblones y escudos en el peso. Se prescribió igualmente que hubiese *cuatro clases de moneda de plata:* el peso, los veinte, diez y cinco centavos con ley de 0.835 de fino, y peso de 20 grs. el peso, de 4 grs. la moneda de veinte centavos, de 2 grs. la de diez y de 1 gr. la de cinco. La tolerancia en feble y fuerte sería de cuatro milésimas en la ley, y de 3, 5, 7 y 10 por mil, respectivamente, en el peso. Nadie quedaba obligado a recibir más de veinte pesos en moneda de plata, pudiendo la Casa de Moneda cambiar por oro la de plata. Declaróse, finalmente, que las libras esterlinas de Inglaterra y Australia, iguales en peso y ley al doblón chileno, tendrían curso legal en Chile, con un valor de 10 pesos.

Transcurridos muchos años, decenios tras decenios, sin que en gran cantidad de servicios públicos se hubiesen llevado a cabo reformas de trascendencia orgánica, con el fin de reducir a justas proporciones el personal frente a las necesidades reales de las labores, mala situación que con la guerra civil se había complicado aún más, tomóse la importante resolución, ocupando la Cartera de Hacienda el señor Mac-Iver, de proceder a la *reorganización de la planta de empleados* y demás servicios de la Administración pública y a la revisión de las pensiones de gracia, autorizándose la formación de una comisión compuesta de diputados, senadores y funcionarios públicos para que propusiesen al Congreso la planta y las reformas correspondientes. El señor Mac-Iver fue infatigable luchador por tales reducciones.

Las **rentas ordinarias** de 1892 habían aumentado notablemente, pues ascendieron a un total de $ 61 millones 535,724.48. Origen del aumento fue el desa-

rrollo extraordinario de las importaciones, que hubieron de producir una fuerte mayor entrada por derechos de internación, principalmente por el capítulo de los géneros y casimires, lo que ocurrió por entrar al año siguiente en vigor la exigencia prescrita del 25% de los derechos de aduana en oro, a razón de $ 6.31 por libra esterlina. En efecto, en los valores totales del **comercio exterior** de 1892 las importaciones figuraron con $ 78.003,104 contra una exportación de $ 64.205,038. El cambio internacional había llegado, por término medio, en 1892 a 18.812 peniques por peso. Sobre este particular, hay que tener presente que las cifras de exportación e importación que consigna la estadística no eran ya, ni podían ser, tan aproximadas como antes a las cantidades efectivamente exportadas e importadas. A medida que se complica la economía de un país, por el natural progreso de su vida económica, van alejándose más y más de las verdaderas las cantidades anotadas. Los precios dados en las tarifas a los artículos que se internan difieren a veces mucho de lo que realmente tienen en la práctica.

De manera que no es posible atribuir a ese solo factor de la disparidad de las importaciones con las exportaciones la baja o el alza del **cambio internacional.** Cuanto más primitivo es un país y cuanto más sencillas y claras son sus conexiones comerciales con el extranjero, tanto más dependencia tendrá su cambio de la relacion de importaciones y exportaciones, mejorando naturalmente con el exceso de éstas sobre aquéllas y empeorando con el exceso de aquéllas sobre éstas. Pero cuanto más avanzado es el país y cuanto más complicadas sus relaciones comerciales, tanto

menos dependencia tiene su cambio de la situación de importaciones y exportaciones, pues hay fenómenos de precios y otros que engañan en las estadísticas, aparte de las importaciones invisibles.

El señor Mac-Iver prescindió un tanto del detalle cuando en su metódica e interesante Memoria de Hacienda de 1893, al referirse al comercio exterior de los años 1844 a 1858, en que, de catorce años sometidos a su consideración, en once excedieron las importaciones a las exportaciones, dice que «esa desfavorable balanza comercial no bajó el cambio internacional»... En conjunto, o sea, en el total de años, el cambio no descendió; pero separadamente, tomando en cuenta un año frente a otro, sí. La estadística nos dice, en efecto, que, con excepción de sólo tres de ellos, el cambio anual bajó con el predominio de las importaciones sobre las exportaciones y subió al impulso del fenómeno contrario.

Las exportaciones de 1844 ascendieron a $ 6.087,023 y las importaciones a $ 8.526,674; el cambio estuvo por término medio a 44 11/16 peniques.

En 1845 llegaron esos valores en igual orden a $ 7.601,523 y $ 9.144,764; el cambio bajó a 44 8/16.

En 1846 llegaron a $ 8.115,288 y $ 10.149,136; el cambio bajó a 44 7/16.

En 1847 llegaron a $ 8.442,085 y $ 10.068,849; el cambio bajó a 44.

En 1848 fueron de $ 8.353,595 y $ 8.601,357; el cambio bajó a 43 6/16.

En 1849 fueron de $ 10.603,447 y $ 10.722,840; aquí se observa una de las excepciones, pues el cambio fue de 44 15/16.

En 1850 los valores fueron $ 12.426,269 y $ 11.788,193; el cambio subió a 46 3/16; de seguro que el aumento previsto en las exportaciones de 1850 fue causa del alza del cambio de 1849.

En 1851 los valores fueron $ 12.146,391 y $ 15.884,972; el cambio bajó a 45 13 16.

En 1852 los valores fueron $ 14.087,556 y $ 15.347,332; aquí se observa otra excepción, pues el cambio subió a 46: la razón debió haber sido la misma del año 1849.

En 1853 los valores fueron $ 12.138,779 y $ 11.553,696; el cambio subió a 47 ¼.

En 1854 los valores fueron $ 14.527,156 y $ 17.428,299; el cambio bajó a 45 4/16.

En 1855 los valores fueron $ 19.180,589 y $ 18.433,287; el cambio subió a 45 12/16.

En 1856 los valores fueron $ 18.159,522 y $ 19.804,041; el cambio bajó a 45 10/16.

En 1857, por fin, los valores de las exportaciones fueron de $ 19.778,150 y los de las importaciones de $ 20.196,968; aquí se observa la otra excepción, pues el cambio subió a 45 12/16.

En abono de la aseveración del Ministro, se debe reconocer, como ya lo hemos hecho, que en el total de esos catorce años, no en el detalle anual, el cambio no bajó. Ello está bien, pero hay que advertir que cuando las exportaciones en total se equiparan o tienden a equipararse con las importaciones, el cambio no se mueve cuando la moneda nacional es sólida y no se puede depreciar por la intervención de factores que la deprecien, como la emisión de papel moneda u otro; en tal situación de solidez de moneda se hallaba el país en los años examinados. Pero cuando la moneda nacional no es sólida y se deprecia más y más por la intervención de factores como las emisiones de papel u otros, como era el caso en 1893, época en que el Ministro hacía esa aseveración, entonces el cambio baja aun cuando las exportaciones en total se equiparen o tiendan a equipararse con las importaciones. Esto es lo que de modo esencial ha ocurrido con el cambio

después de 1878 y 1879, en que empezó la inconvertibilidad del billete de banco y la emisión de billetes fiscales, respectivamente. Si observamos a grandes rasgos los valores de las exportaciones e importaciones desde entonces acá, veremos que en general tienden a equipararse, y a pesar de que representan valores inmensamente superiores a los de 1844 a 1858, el cambio ha bajado hasta llegar a 8.9 peniques en 1914 y a menos posteriormente.

Hay que tener presente, por lo demás, que la balanza comercial, que sólo en principio da una norma de enriquecimiento o de empobrecimiento nacional en el comercio internacional, sobre todo cuando los valores que consigna son verdaderos, se obscurece con el desarrollo de la vida económica y el aumento consiguiente de la cultura, a causa de la disparidad de los precios de avalúo y de pago, por la intervención de factores de crédito universal y por razón de otros factores de intercambio, que son menores en número y en valores cuanto más primitivo es un país y más sencilla su vida económica, y mayores en el caso contrario. Obran en esa obscuridad intereses que no se dejan anotar, valores invisibles, que tienen positiva influencia sobre el cambio. De aquí la complejidad de este problema. De aquí la importancia decisiva y la preponderancia absoluta de la balanza de créditos en el problema del cambio, balanza que incluye a la del comercio exterior y a diversos otros factores, como los empréstitos, los capitales invertidos en el extranjero, etc.

Interesante es, acerca de la interpretación de las estadísticas en el comercio internacional, la Memoria que Don **Zorobabel Rodríguez,** conocido economis-

ta y profesor del ramo en la Universidad de Chile, en donde tuvo distinguidos discípulos y continuadores en las doctrinas del libre-cambio, presentó en 1893, siendo Superintendente de Aduanas. Hizo en ella un estudio detenido de las causas que motivaron en el año anterior el desequilibrio extraordinario de la balanza comercial que aparecía en la estadística; hizo ver las razones que en su concepto permitían aseverar que tal desequilibrio no existía, al menos en el grado en que ahí aparecía, debiendo estimarse como ocasional; y llamó la atención a la influencia de él en el estado del cambio de entonces. El señor Rodríguez llegaba a la conclusión de que de los $ 13.798,066 con que en la estadística figuran superando las importac;ones sobre las exportaciones, $ 11.500,000 provenían de un aumento artificial u ocasional, procedente a su vez de haberse computado, por una parte, a las importaciones de 1892 unos cuatro millones de pesos pedidos en artículos en 1891, por haberse despachado sólo en 1892 para el consumo; de haberse encargado, por otra, mercaderías en cantidad extraordinaria, por no habérselo hecho en 1891 a causa de la guerra civil, artículos que él estimaba en otros cuatro millones; y de haberse, por la otra, internado de modo forzoso en los últimos meses de 1892 productos que debían internarse en 1893, lo que se hizo para evitar el pago en oro del 25% que debía exigirse el 1.° de Enero. Llegaba también a la conclusión de que, reducida así aquella cantidad y comparada con la que da la estadística como representativa de la exportación, aumentada con $ 11.000,000 del empréstito de £ 1.800,000 (lo que encontraba justificado porque los bonos emitidos en los empréstitos colocados en el extranjero

constituyen para el país que toma el préstamo un verdadero valor de exportación), compensaría «con exceso» la diferencia que en contra de la exportación aparece en la estadística del comercio exterior de ese año.

En vista de estas consideraciones, creía el señor Rodríguez que las medidas que se propusiesen para obtener la nivelación de la balanza comercial eran innecesarias, inconducentes o contraproducentes.

Entre los hombres estudiosos, que se inspiraban en los principios de la justicia y en las legítimas conveniencias de la vida económica nacional, dominaba por sobre todo la idea de rescatar el billete de curso forzoso y realizar *la conversión metálica*. Una ley dictada con fecha 31 de Mayo de 1893, junto con derogar, como hemos visto, algunas disposiciones de la ley de conversión de 26 de Noviembre del año anterior, prescribió que desde el 31 de Diciembre de 1899 el papel moneda del Estado sería pagado a su presentación por el valor equivalente al peso de 25 gramos de plata y 9/10 de fino con la moneda metálica establecida por ley de 26 de Noviembre de 1892; que desde el 1.° de Julio de 1896 la conversión del papel moneda se haría, para los que la solicitaren, en moneda metálica a razón de 24 peniques por peso; y que desde el 1.° de Enero de 1897 el papel moneda dejaría de tener curso forzoso.

Dentro de las posibilidades en que podía llevarse a cabo el ideal de la conversión, se modificaban, así, los diversos plazos. Por otra parte, estaba empeñado el Gobierno en disminuir el monto de *la deuda flotante*. Con tal fin, se acordó en 1893 emitir vales de tesorería por una cantidad que no excediese al pro-

ducto de las ventas de tierras públicas en el sur, y bonos con intereses y amortización que tuviesen los créditos que adquiriese el Estado por venta de terrenos del malecón de Valparaíso y otros. Por otra ley se autorizó la emisión de vales de tesorería sin interés por el monto de los créditos reconocidos a favor de los bancos con motivo de las exacciones de billetes realizadas por el Gobierno dictatorial.

Conveniencias de carácter financiero obligaban al Estado en esos tiempos a mantener créditos abiertos con los bancos aunque por suma no superior a dos millones y medio de pesos. Se dió hasta el paso de contratar con anterioridad un *empréstito interior*, en cuenta corriente o en vales de tesorería, por la suma máxima de $ 4.000,000 al 6% de interés anual. Como, por otro lado, hubiera ventaja en emitir moneda divisionaria, se autorizó al Ejecutivo para acuñar hasta la cantidad de un millón de pesos en piezas de 20, 10 y 5 centavos, conforme a ley la de 1880.

Habiéndose liquidado la situación de dominio de algunos *establecimientos y estacamentos salitrales de Tarapacá*, que pasaron al Estado en virtud del pago de los certificados emitidos por el Gobierno del Perú, se autorizó al Ejecutivo para venderlos en subasta pública. Para el efecto se publicaron anuncios en diarios europeos y chilenos. Los fondos provenientes de esas enajenaciones, hasta la suma de £ 1.500,000, se mantendrían en depósito en la Casa de Moneda. El procedimiento de la venta estaba en armonía con la política que al respecto seguía el Estado desde un comienzo.

Las vías de comunicación y transporte no fueron objeto de mayor atención en esos años. La razón era obvia. La revolución había demandado sacrificios que

lo impedían. Debemos mencionar, sin embargo, la concesión de permisos para construir un *ferrocarril* entre Temuco y Carahue y otro entre Antofagasta y Aguas Blancas, el último de los cuales no se había realizado a pesar de haberse autorizado con anterioridad.

Los Gobiernos de Chile y de la Argentina, por otra parte, se comprometieron, en virtud de un protocolo de fecha 8 de Febrero de 1894, a construir y conservar expedito un *camino carretero* que partiese del punto término de los ferrocarriles de ambos países y que llegasen a unirse en la línea divisoria de la Cordillera de los Andes por el paso de Uspallata, haciendo cada nación los gastos consiguientes al trecho de su territorio. Chile concedió la suma de $ 45,000 para la terminación del mencionado camino. Prorrogó, además, el contrato celebrado con la Compañía Inglesa de Vapores para el transporte de correspondencia, pasajeros y efectos que enviase el Gobierno.

Por lo que respecta al desarrollo del **comercio internacional** de 1893 y 1894, debemos anotar el mantenimiento de un considerable predominio de las cifras de exportación sobre las de importación, pero una disminución gradual del valor total del movimiento mercantil internacional. En efecto, las exportaciones de esos años llegaron a $ 72.245,114 y a $ 72.040,420 y las importaciones a $ 68.235,874 y $ 54.483,616, respectivamente, en pesos de 38 peniques. El aumento que podía constatarse en las primeras, se debió al incremento de la industria salitrera (1). La disminu-

(1) En 1893 se exportaron 20.587,490 quintales españoles de salitre, con un valor de $ 39.211,913 de 38 peniques. El precio en Inglaterra variaba entre 8.3 y 9.3 sh. por quintal inglés. El flete fluctuaba entre 22 y 29 chelines por tonelada hasta Londres. La proporción de consumo era: Alemania 39%; Francia, 17.3%; Estados Unidos, 13.3%; Bélgica, 11,3; Inglaterra, 10.9%; Holanda, 6.9%; Italia; 1.3%.

ción que, en cambio, podía constatarse en las segundas fue atribuída en buena parte a la circunstancia de que en 1892 se importó en exceso, como las propias cifras lo indicaban, para eludir el pago de recargos aduaneros. Hízose notar en 1893 una fuerte desvalorización de algunos productos de la agricultura en el extranjero, lo que debía afectar a nuestra balanza comercial: en ese año se exportó, así, trigo en la cantidad de 185,963 toneladas, por un precio de $ 6.082,001, cuando en el año anterior se habían exportado 145,802 toneladas, por un valor de $ 6.196,457. Obraba en Europa la competencia de otros mercados de producción. Fuerte depresión tuvo el cambio internacional: en 1893 llegó a un término medio anual de 15 peniques por peso, y en 1894 a 12.6 d. Esa situación era el resultado de los cuantiosos gastos de la revolución del 91. En el público, por lo demás, reinaba un pesimismo manifiesto en cuanto a la realización de la conversión.

Mucho se discutía acerca de la conveniencia de gravar con un impuesto aduanero la internación del ganado argentino. La estadística de 1893 anotaba un comercio total de importación con la República del Plata ascendente a $ 5.362,756 y uno de exportación de $ 166,823, ofreciendo una desproporción que, por lo demás, había sido lo regular. De las primeras correspondía casi el todo al ganado vacuno. Se temía, sí, encarecer la vida. Don Manuel Salustio Fernández, Ministro de Hacienda en 1895, creía que un impuesto moderado por cabeza gravaría el consumo sólo en los primeros años y de modo poco sensible, y que «una vez que los vastos campos de nuestra región agrícola pudiesen aplicarse a la crianza en grande escala, el

precio de la carne para el pueblo consumidor bajaría considerablemente». Según el señor Fernández, la contribución podía ser progresiva y su producto consagrarse directamente a mejoras agrícolas. Tampoco se ha podido seguir en esta materia una política determinada en el país, aunque en los últimos años ha predominado el principio de la cordillera libre al respecto.

Discutíase también en el *problema del nitrato* la conveniencia o inconveniencia de las «combinaciones salitreras», la regulación de la producción y la fijación de los precios. Con todo fundamento decía a este respecto Don Enrique Mac-Iver en la Memoria de Hacienda de 1893 (pág. LXXX) que «el productor de salitre, como cualquiera otro industrial está en su derecho defendiéndose contra crisis probables o pérdidas en sus negocios por los medios que le parezcan más eficaces y convenientes, pero no puede emplear aquellos que si bien conducen al fin que persigue, causan en cambio perjuicios muy graves a la generalidad y a la República». Esos graves perjuicios eran, naturalmente, posibles por el alcance que tenía la industria en el total de nuestra economía. Cualquiera crisis de salitre se convertía de hecho en crisis general.

Dentro del problema del nitrato, pensábase también en la ventaja de la «nacionalización» de la industria. El Ministro Fernández creía incuestionable la importancia de esa nacionalización, pero no la defendía. Se contentaba con hacer ver que los capitales nacionales ahí invertidos, que constituían un 36 o un 45%, podían rendir £ 585,000 al año, y que en la lucha económica el nacional «ha triunfado muchas veces en los torneos de la industria libre y cosmopolita». Era evidentemente partidario de la libertad industrial.

Si echamos, ahora, una mirada a las **rentas ordinarias** de esos años de 1893 y 1894, podremos constatar para el primero un total de $ 57.517,469.46 en moneda corriente y $ 11.959,243.62 en oro de 24 peniques, y para el segundo uno de $ 64.998,110.93 en moneda corriente y $ 13.687,671.08 en oro de 24 peniques. Desde ese tiempo arranca, como puede observarse, *la norma, adoptada posteriormente, de computar las entradas ordinarias en moneda corriente y en pesos oro.* Provenía ello de que, desde 1893, de acuerdo con la ley que ya hemos conocido, se percibió en oro o letras sobre Londres el 25% de los derechos de internación, y además de que desde el 4 de Agosto de 1892 se estaba cobrando en la misma forma el 30% de los derechos de exportación de salitre y yodo, cuota que en Enero de 1893 se elevó a 34%, de acuerdo con la ley de 8 de Agosto de 1892.

Las circunstancias de exigirse por el Estado una parte de los derechos aduaneros en oro de 24 peniques y de que el papel moneda hubiera sufrido una desconcertante depreciación, llegando a 15 y 12.5 peniques por peso en los años de 1893 y 1894, en medio de oscilaciones considerables de cambio, debidas en gran manera a la especulación que estimulaba el tiempo que había aún por delante para llegar a la moneda fija, robustecieron tanto el deseo de hacer la **conversión metálica**, que se estimó de ineludible necesidad anticipar la fecha de llevarla a cabo. Don Manuel Salustio Fernández, al hacerse cargo en el mes de Diciembre de ese último año de la cartera de Hacienda, se encontró, según declaraba, con que el punto capital de estudio era la solución del problema económico monetario, haciendo notar que las leyes dictadas para

volver al régimen del metal no allanaban las dificultades de intereses que había creado el mantenimiento del papel moneda de curso forzoso.

Había aún bastante divergencia de opiniones en la manera de realizar esa operación. No la había, sin embargo, en la adopción del oro como padrón monetario, quedando la plata, que era muy variable en su valor, con acuñación y poder liberatorio limitados. Tampoco la había, al menos en forma inconciliable, en la conveniencia de que el tipo de conversión, dado el nivel del cambio durante los últimos años, fuese menor de 24 peniques, para no perjudicar a los deudores, al alzar considerablemente el valor de la moneda legal, originar trastornos en la economía y producir situaciones múltiples de injusticia.

Insinuábanse, así, como base de la conversión los tipos de 16 y 18 peniques por peso. El primero era, en realidad, el que menos peligro presentaba de un fracaso de la operación, pues era el que más se acercaba al nivel del cambio en los años que inmediatamente precedían, nivel que, como término medio, había sido de 12.5 d. en 1894 y 15 d. en 1893. Ese nivel, por lo demás, era el reflejo de una situación positiva de decaimiento de valores, de un decaimiento cuya fuente había sido la propia revolución.

En estas circunstancias se aprobó con fecha *11 de Febrero de 1895* una ley de conversión, que llevó la firma del señor Fernández y que dispuso que desde el 1.° de Junio de ese año el Estado pagaría sus billetes a los que lo solicitaren en monedas metálicas, incinerándose mensualmente tales billetes. Desde el 31 de Diciembre de 1897 el papel moneda sería pagado, a su presentación, por el valor equivalente al peso de

25 gramos de plata y 9/10 de fino, con moneda de oro, pago que tendría lugar sólo en caso de que el valor del peso de plata de 25 gramos 9/10 de fino tuviese en igual fecha un valor superior a 18 d. Se autorizó al Ejecutivo por tres años para acuñar hasta diez millones de pesos en moneda de plata, destinándose además todo el producto de enajenación de salitreras a la adquisición y acuñación de moneda metálica. Para evitar entorpecimientos nacidos de los billetes bancarios, dispúsose que los bancos garantizasen el valor total de su emisión con depósitos de oro, billetes fiscales, vales de tesorería, bonos del Estado, municipales y de bancos hipotecarios. El billete bancario sería admitido en arcas fiscales en pago de contribuciones, créditos y servicios públicos hasta el 31 de Diciembre de 1897, limitándose la emisión total de tales billetes a veinticuatro millones de pesos, distribuídos con relación al capital pagado. Prescribiéronse, como antes, tres clases de monedas de oro: el cóndor de veinte pesos, el doblón de diez, y el escudo de cinco, pero con ley de 11/12 de fino, y teniendo el cóndor el peso de 11.98207 gramos y los otros el de la proporción correspondiente. El peso de un peso sería 0.599103 gramos. La tolerancia en feble y en fuerte sería de dos milésimos en la ley, y en el peso uno por mil en los cóndores y dos por mil en los doblones y escudos. Prescribiéronse también cuatro clases de monedas de plata: el peso (100 centavos), los 20, 10 y 5 centavos, con ley de 835 milésimos de fino, teniendo el peso 20 gramos y las demás la proporción correspondiente, con tolerancia de cuatro milésimos en la ley, y en el peso 3, 5, 7 y 10 por mil en las monedas de 1 peso, 20, 10 y 5 centavos. Nadie quedaba obli-

gado a recibir más de $ 50 en moneda de plata, pudiendo la Casa de Moneda cambiar por oro los pesos de plata. Los costos de amonedación del oro serían de cargo del Estado. Las libras esterlinas de Inglaterra y Australia tendrían también curso legal, con un valor de $ 13.33. Esta ley derogó, así, las prescripciones correspondientes de las de 1892 y 1893.

El Congreso aceptó, pues, el tipo de 18 peniques en la conversión. Su primer efecto fue el alza del cambio y la baja de los precios. Para preparar los elementos de ella, se dispuso de menos de cuatro meses de tiempo, por lo cual hubo de intensificarse extraordinariamente la labor de la Casa de Moneda. La negociación de las obligaciones procedentes de la venta de salitreras se realizó por intermedio de la casa Rothschild de Londres, emitiéndose vales del tesoro por £ 1.177,000, suma a que llegaban los dividendos de tales obligaciones, que vencían en Octubre de ese año y en Junio y Octubre del siguiente.

Con el propósito de afianzar la conversión, lo que no era tarea fácil, se acordó tomar una medida a que se había acudido en otros países en parecidas circunstancias, a saber, la de levantar un *empréstito exterior*, para lo cual se dió, con fecha 28 de Mayo de ese año, autorización para hacerlo por una suma no superior a £ 2.000,000. El producto debía destinarse a la amortización extraordinaria de las deudas municipales que eran de cargo del Estado. Esa ley, que lleva igualmente la firma de Don Manuel Salustio Fernández, dispuso, además, que desde la fecha inicial de la conversión hasta el 31 de Diciembre de 1897 el Fisco pagase los billetes de banco totalmente garantizados. El empréstito se contrató en Londres con la firma Roth-

schild e Hijos, estipulándose en el contrato (31 de Mayo de 1895) un precio de emisión de 93½%, en bonos del 4½% de interés y ½% de amortización anuales y pagándose a esa firma 2¼% sobre el valor nominal del empréstito como comisión por los gastos de la emisión. Su rendimiento efectivo fue de £ 1.825,000.

Sobre la base del pacto de tregua de 1884, se celebró con fecha 18 de Mayo de 1895 el tratado definitivo de *paz y amistad entre Chile y Bolivia*. Por él quedó exonerado nuestro Gobierno de la obligación de ceder a Bolivia el rendimiento de la Aduana de Arica en la forma que lo hemos contemplado, quedando absolutamente libre para Chile, y Bolivia con la facultad de establecer aduanas en donde lo creyese conveniente.

Celebróse al propio tiempo un **tratado de comercio** en virtud del cual las relaciones mercantiles entre ambas Repúblicas se establecían bajo un régimen de amplia y recíproca libertad, teniendo los ciudadanos de una y otra en los dos territorios los mismos derechos que los nacionales en el ejercicio del comercio y las industrias, sin imponérseles mayores impuestos. Los productos naturales y los elaborados con materia prima de cualquiera de las dos Repúblicas quedaban libres de todo derecho de internación que no fuese el fijado ya con anterioridad al tratado (art. 6.°). Se exceptuó de esta liberación al alcohol chileno (art. 7.°). Libres quedaron los puertos de Chile que estuviesen en comunicación con Bolivia para el tránsito de importación y exportación de artículos procedentes de esa República o destinados a ella (art. 9.°). Para facilitar el comercio mutuo, se acordó por ambas partes estimular la formación de sociedades ferroviarias que uniesen a las provincias limítrofes y proteger las que

entonces existían, para que pudiesen extender sus ramales a los centros más importantes, como la continuación de la línea de Oruro a La Paz (art. 10).

Solucionado ya, aunque sólo temporalmente, el problema de la conversión, el Gobierno debió preocuparse de las demás ramas del organismo económico. Preferente atención requerían *los ferrocarriles*. Con el fin de concluir y proveer de equipo a las líneas cuya construcción se había autorizado por ley de 1888, se acordó con fecha 20 de Diciembre de 1895 levantar otro empréstito, por la suma de £ 4.000,000, autorizándose al Ejecutivo para emitir bonos del Estado al 4½% de interés y ½% de amortización anuales. Una parte del producto de ese empréstito debía dedicarse también a la ejecución de las obras del puerto de Talcahuano y a la colocación de un cable telegráfico a Punta Arenas. La contratación se hizo en Mayo de 1896 con Rothschild e Hijos, habiéndose aumentado el interés a 5% anual. Por una ley de principios de Enero de 1896, en que después de diez años aparece nuevamente actuando Don Hermógenes Pérez de Arce como Ministro de Hacienda, se había autorizado al Ejecutivo para contratar igualmente un crédito en cuenta corriente o emitir vales del tesoro, hasta por la suma de dos millones de libras esterlinas, que se cancelarían con el producto del empréstito. Se acordó al propio tiempo adquirir por el Estado el ferrocarril de Coquimbo, emprender el estudio y la construcción de un ramal en el de Ovalle a San Marcos y la reconstrucción y mejoramiento de las líneas de todo ese centro ferroviario.

En materia de derechos de aduana, se habían elevado a $ 5.50 por kilo los de internación de cigarrillos y se había declarado libre la entrada del sulfato de hierro

comercial y de los hilados de algodón, lino y lana.

El alza consiguiente a la mayor depreciación del valor de la moneda nacional hubieron de experimentar los **precios corrientes** de 1895. En el «Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura» encontramos los siguientes, fijados durante el mes de Diciembre: trigo blanco, $ 4.70 los 72 kilos (en el comercio de exportación $ 2.60 de 38 peniques los 100 kilos); trigo candeal, $ 5.50 los 72 kilos; cebada del país, $ 2.50 los 72 kilos; cebada inglesa, $ 4.20 los 72 kilos; harina, $ 4.40 los 46 kilos; frejoles burritos, $ 12.00 los 100 kilos; porotos bayos, $ 13.00 los 100 kilos; maíz amarillo, $ 3.40 los 80 kilos; lana merino, $ 19.00 los 46 kilos.

Aun cuando los valores totales del comercio internacional de 1895 fueron bastante superiores a los del año anterior, las **rentas** no experimentaron aumento digno de consideración, pues llegaron a $ 83.866,656.19, descompuestas en su origen del modo siguiente:

Aduanas	$ 66.204,027.69 (1)
Ferrocarriles	12.688,153.15
Correos	791,059.18
Telégrafos	327,668.07
Papel sellado	489,570.37
Arriendo de bienes nacionales	133,747.32
Intereses y descuentos	381,590.63
Venta de bienes nacionales	99,893.44
Redención de censos	31,471.07
Impuesto agrícola	12,450.80
Contribución de haberes	81.71
Otras entradas	2.706,942.76

Como, al referirnos en páginas anteriores a la ley sobre organización y atribuciones de las Municipali-

(1) Los derechos de exportación fueron de $ 43.760,710 y los de importación $ 22.443,317.

dades, tuvimos ocasión de hacerlo notar, una buena parte de las contribuciones internas pasó a poder de los municipios. En la estadística anterior se observan sólo restos de algunas de ellas. Si se tiene en consideración que las entradas de ferrocarriles, correos y telégrafos provienen sólo del público que utiliza esos servicios, es decir, sólo de una parte de la población, resulta que el Estado en ese tiempo atendía a sus necesidades casi exclusivamente con los recursos de Aduana, pues el rendimiento del impuesto al papel sellado y demás no podía representar sino cantidades insignificantes.

Bastante superiores fueron, con respecto al año anterior, los valores del **intercambio comercial con el extranjero.** El exceso provenía esencialmente del aumento de las importaciones, que llegaron en total a $ 69.206,552 de 38 peniques, habiéndose internado cantidades mayores, sobre todo en azúcares, aceites, maderas, géneros de algodón, tocuyos y casimires. Las exportaciones fueron de $ 72.919,882 de 38 peniques, alcanzando las de salitre a 26.531,011 quintales españoles. La participación de las diversas naciones en nuestro comercio exterior fue la que sigue:

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 53.832,992	$ 32.086,959
Alemania	8.035,668	17.299,039
Francia	2.826,627	1.644,059
Italia	83,850	539,790
España	145,671	361,438
Bélgica	1,075	208,383
India	.....	593,575
Australia	.....	680,479
China	.....	157,538
Otras naciones	.....	8,010

Naciones americanas		
Estados Unidos	$ 2.207,117	4.579,614
Perú	1.488,160	4.456,388
Uruguay	1.038,293	498,443
Colombia	408,288	99,307
Guatemala	16,266	3,854
México	15,400	.....
Costa Rica	3,153	80,064
Ecuador	340,197	172,685
Argentina	91,594	5.141,351
Brasil	135,031	301,006
Bolivia	2,080	18
Paraguay	....	230,141
Otras naciones	6,855	....
Rancho	64,405	....
De la pesca	....	2.241,565

Decía en su Memoria de 1896 Don Hermógenes Pérez de Arce que se estudiaba con interés la idea de ajustar **pactos internacionales de comercio** con algunas de las naciones sudamericanas, sobre la base del libre cambio de ciertas mercaderías. El, particularmente, no se mostraba partidario de ese procedimiento, porque estimaba difícil encontrar reciprocidad en el intercambio. Como razón aducía la de que la mayor parte de esas naciones podían enviar a Chile azúcar, café, arroz y yerba, y nosotros podíamos ofrecerles sólo vinos, harina, papas y pasto seco, artículos que consideraba como poco valiosos y que no podían soportar el flete de un largo viaje. En tales condiciones, corríamos, según él, el riesgo de perder una parte considerable de nuestra renta de importación, que en esos artículos, con un avalúo de $ 4.100,000, ascendía a $ 2.700,000.

Creemos que este punto no se podía decidir de modo tan sencillo. En la celebración de tratados comerciales debe haber el pensamiento de penetración en los intereses y negocios del país con que se trate; debe en

ella tomarse la ofensiva, si no en todo, por lo menos en algún punto importante. Ninguna determinación podrá adoptarse sin considerar los valores reales del comercio del país extraño con el propio y con los demás, sin considerar el monto de los derechos con que se grava en todos ellos la internación de productos extranjeros y hasta la exportación de productos nacionales, y finalmente sin considerar el desarrollo de la economía nacional. No puede tomarse una determinación teniendo presente sólo el aspecto financiero fiscal, relegando al terreno de lo secundario el desarrollo que puede experimentar la economía nacional por razón de una mayor exportación de sus productos, con las facilidades que para el efecto se pueden obtener en el extranjero por medio de pactos comerciales.

Claro está que todo esto se debe hacer sin descuidar el incremento e intercambio de la producción en el consumo interno, que puede ponerse en condiciones de mayor abaratamiento con pago de fletes menores por distancias también menores. Claro está igualmente que esos tratados de reciprocidad en las exigencias aduaneras del intercambio se habrán de celebrar sólo con aquellas naciones en que, como lo hemos visto tantas veces en las estadísticas hasta aquí dadas, haya exceso marcado y persistente de exportaciones hacia la nuestra sobre importaciones de la nuestra hacia ellas, como precisamente ha ocurrido con las principales de las sudamericanas.

En 1896 se desahució una serie de tratados comerciales con naciones europeas, que tenían la cláusula de la nación más favorecida. Se persistía en el propósito de adoptar una política americana en la materia.

Muy plausibles son las observaciones de Pérez de Arce cuando opina que, para aumentar la riqueza

pública, nuestros esfuerzos debían encaminarse a producir gran número de artículos que entonces se importaban. A mediados de 1896 se había manifestado ya con intensidad una *crisis económica* que el Ministro atribuía a causas ya inmediatas, ya mediatas: estimaba, ante todo, que el régimen del papel moneda había inflado el crédito y hecho subir los precios; estimaba que las obras públicas emprendidas con materiales extranjeros eran exageradas, como lo eran las de algunos ferrocarriles improductivos y las de algunas construcciones de edificios; estimaba que se producía una crisis aguda, caracterizada por grande escasez de valores para girar sobre el extranjero, escasez de capitales internos y liquidación de créditos usados en forma desmesurada, porque junto a esto se habían hecho grandes inversiones en la adquisición de naves de guerra y armamentos, se había duplicado, en cinco años, la deuda pública exterior y el país había tenido malas cosechas de trigo en 1894 y 1895. Estimaba que la solución era no emprender obras nuevas, haciendo las economías consiguientes, y fomentar el desarrollo de la producción nacional.

Por lo que respecta a la **deuda pública** total, había que anotar para el 1.° de Junio de 1896 una interna de $ 33.025,979.29, cifra a que se redujo después de haber llegado a $ 65.974,463 en 1894. La externa era de £ 17.700,000. Reducido el total de la deuda a pesos chilenos de 18 peniques, resultaba ser de $ 268.966,979, siendo de $ 99.00 por cabeza de población.

Antes de emitir un juicio del conjunto de la actividad económica de esta Administración, como lo hemos hecho en las anteriores, creemos necesario hacerlo de la personalidad del Ministro de Hacienda Don **Enrique Mac-Iver**, que actuó en ella. En la imposibilidad

en que nos encontramos, por la índole de este trabajo, de extendernos para analizar el total de la actuación que el señor Mac-Iver ha tenido en la historia económica patria y en la lucha de ideas que sobre el particular se ha trabado, nos concretaremos sólo a algunos puntos de ella, que fuera de los ya mencionados en las páginas precedentes, son, en cierto modo, culminantes dentro de las materias que trató en su interesante y metódica Memoria de 1893. Correspondióle, desde luego, dar cuenta al Congreso de la marcha financiera de la República durante la revolución del 91, asunto no tan desembarazado de tropiezos por el desorden tanto legislativo y ejecutivo general, como de administración financiera, a que se encontró sometido el país. Fue, pues, como Ministro de Hacienda el heredero de una situación engorrosa y perfectamente delicada.

En su Memoria llama la atención a la circunstancia favorable que, a pesar de todo, se había creado la nación por la exigüidad del gravamen que legítimamente sufría el pueblo: llamaba con fundamento la atención al hecho de que en los derechos de importación de ese tiempo, que formaban las cuatro quintas partes de las cargas positivas de los habitantes, no había diferencia, en cuanto al sacrificio que significaba la contribución, con el sacrificio del gravamen de veinte o veinticinco años atrás, en que, por lo demás, la población era más escasa y más pobre. Era, así, partidario de que se aumentasen las contribuciones, que habían ido disminuyendo de modo especial por el descenso del valor de la moneda, pero siempre que con ellas se robusteciesen la seguridades de la vida y de la propiedad, se desarrollase el estado moral e intelectual de los habitantes y se fomentase la riqueza.

No cabe duda que la observación de Mac-Iver era perfectamente justa.

Gran batallador fue y siguió siendo Mac-Iver en la lucha por la abolición del régimen del papel moneda, que en su Memoria lo calificaba enérgicamente de antieconómico y desmoralizador. Hizo, a modo de censura, la observación de que los poderes públicos pudieron haber hecho la conversión en los años que de modo inmediato siguieron a la celebración del tratado de paz con el Perú, en que hubiera sido tarea fácil y poco costosa. Esta observación encontraba su justificación en las circunstancias de que entonces había más recursos disponibles y de que era menos complicada la relación de créditos y débitos entre los individuos, de manera que se habrían podido evitar mayores injusticias. El fue el primero que después de la revolución se empeñó, y lo hizo con tenacidad inquebrantable, en abolir ese régimen monetario. Así lo vimos aparecer en su labor de 1892, en que, al efecto de su acción, se aprobó la primera ley de conversión en la nueva éra política. Para él, se imponía la adopción de un plan que permitiese al país «con seguridad y definitivamente» quedar libre del papel moneda en corto plazo, y a ello dedicó con vehemencia sus mejores estudios, sus mejores esfuerzos, como pudo notarse también en los importantes proyectos que para llegar a ese fin presentó a la consideración del Congreso.

Interesantes son, asimismo, porque siendo reflejo de la situación de entonces, pueden hacerse extensivas, con ligeras modificaciones, a los propios días que corremos, las medidas que proponía para colocar al país en «el camino del progreso sólido y vigoroso». Esas medidas, lejos de enrolarse en las doctrinas del librecambio, como pudiera creerse, fueron la expresión de

un bien entendido proteccionismo. Ellas fueron: fomento de la marina mercante, protegiéndola cuerdamente y no por medio de subvenciones personales que originen monopolios, para reducir los fletes; reforma de la legislación aduanera, para cerrar puertas al fraude y abatir las barreras que comprimen el desarrollo de la industria nacional. Junto a estas dos medidas, que son de fundamental importancia en la protección de la industria del país, aconsejó otras que en su ejecución completarían el plan de adelanto que insinuaba, a saber: construcción de obras de puertos, para abaratar el comercio marítimo; construcción y conservación de las vías de comunicación, para bajar el costo de los transportes; y aumento de las escuelas profesionales, para formalizar el conocimiento práctico de las artes útiles.

De Mac-Iver se tuvo en general la opinión de que sus ideas económicas pertenecían exclusivamente a los dominios de la escuela libre-cambista. Los que en estas materias lean documentos tan importantes como las Memorias de Hacienda, que en verdad son pocos, se sorprenderán del error en que han estado en muchos puntos, desde luego en problemas tan fundamentales como los nombrados. Más de una vez, desempeñando el que esto escribe el Ministerio de Hacienda, llamóle Mac-Iver la atención a las ideas proteccionistas de su Memoria de 1893, a que daba importancia y hacía hincapié en la declaración de sus principios. Su acción fue no sólo interesante por los propósitos que la guiaron, sino porque sirvió de base a las decisiones que el país hubo de tomar con posterioridad a su actuación en el Ministerio de Hacienda.

Juicio crítico del papel que tocó desempeñar a la Administración de Don Jorge Montt en la vida económica nacional.

La tarea fundamental de la Administración de Don Jorge Montt no podía ser otra que la de obtener la normalización de la vida no sólo política y social de la nación, sino económica y financiera, quebrantada por efecto de la guerra civil en el período anterior. Sencilla debió ser esta tarea en cuanto a la vida política y social, dado el espíritu de orden que a través de toda nuestra historia ha caracterizado a los habitantes de este país. Difícil y llena de peligros debió ser en cuanto a la vida económica y financiera, pues los costos de la revolución habrían de dejar sentir sus adversos efectos durante un tiempo imposible de medir, si consideramos que ellos alejaron e hicieron ilusoria la vuelta del régimen metálico, tan anhelada por la nación.

Al afianzamiento del desarrollo normal de la vida contribuyó desde luego la atención que esta Administración prestó en su comienzo a los ferrocarriles, proveyéndolos de material rodante y facilitándoles el papel que están llamados a desempeñar. A igual fin contribuyó la importante ley que sancionó sobre organización y atribuciones de las Municipalidades, ley que daba vida propia a corporaciones de derecho público que dentro del organismo del Estado desempeñan funciones de vital importancia. Con la concesión de las nuevas entradas que los municipios tuvieron, quedaban ahora en condiciones, si no regulares, por lo menos considerablemente mejoradas, que les permitían alcanzar gran parte de lo que hasta entonces

les estaba vedado en el progreso general del país. Al afianzamiento del desarrollo normal de la vida contribuyeron, en fin, muchas otras medidas que tomó ese Gobierno, que aunque no fueron de orden trascendental, como fue la de la comuna autónoma, hubieron de contribuir a la regularización de las actividades nacionales en sus múltiples manifestaciones.

En el terreno de la economía y de la hacienda, y con el propósito de alcanzar una normalización que no sólo se hiciera extensiva a los tiempos posteriores a la guerra civil, sino a la propia guerra del Pacífico, dió esta Administración un paso de amplio alcance, a saber, el de la conversión metálica, que empezó a preparar ya desde sus primeros momentos, a pesar de las enormes dificultades que se le presentaron con el exceso de gastos hechos con motivo de las perturbaciones políticas a raíz de las cuales entró a dirigir los destinos de la patria.

El Gobierno de Don Jorge Montt aparecerá relevantemente en nuestra historia económica coronado del recuerdo halagador de haber trabajado con tenacidad y haber realizado el más ardiente de los anhelos nacionales, el de la abolición del régimen de curso forzoso, que tantos males había causado y siguió causando a la República cuando en la Administración siguiente se fue al suelo la conversión metálica, que había sido el triunfo de la legítima comprensión de los intereses del país y de la tenacidad de algunos hombres. Quizás baste un acto como ese en la historia económica de una nación para que una Administración ate su nombre imperecederamente a los Gobiernos progresistas y bienhechores.

El desarrollo del comercio exterior durante el quinquenio de Don Jorge Montt dejó ver un aumento,

aunque no tan considerable como en otros. Se lo puede ver en el cuadro que sigue, computados sus valores en pesos oro de 38 peniques:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1891.....	$ 65.701,811	$ 63.684,737	129.386,548	18.8
1892.....	64.205,038	78.003,104	142.208,142	18.8
1893.....	72.245,114	68.235,874	140.480,988	15.0
1894.....	72.040,420	54.483,616	126.524,036	12.6
1895.....	72.919,882	69.206,552	142.126,434	16.8

Causa de este progreso más o menos lento, comparado con el de otros períodos, aunque seguro, fue, por un lado, la situación de crisis que reinaba por entonces en el extranjero, y, por el otro, la natural depresión que trae consigo toda situación que quebrante en un momento dado la marcha regular de la vida política de una colectividad.

De mayor relieve fue el desarrollo que experimentaron las rentas públicas, que llegaron

En 1891 a $ 55.723,310 moneda corriente
» 1892 » 61.535,724 » »
» 1893 » 57.517,469 m/c. y $ 11.959,243 oro de 24d.
» 1894 » 64.998,110 m/c. y $ 13.687,671 » » 24d.
» 1895 » 83.866,656 oro de 18d,

El aumento de las entradas fiscales aparece como superior al del comercio exterior por la razón principal del recargo de los derechos. También hubo de influir, naturalmente, el incremento a que nos hemos referido del comercio internacional. Lejos estaba, sin embargo, de ser para el fisco un aumento ideal de recursos, pues no provenía de una mayor exigencia de contribuciones, sino de recargos de derechos en el intercambio con el extranjero. El mantenimiento y aún desarrollo de esa

situación rentística, o más propiamente, de ese régimen tributario, tendría que ocasionar los más graves inconvenientes en el equilibrio financiero, luego que estallase cualquier crisis que afectase a nuestro comercio exterior. El incremento de las entradas del fisco por contribuciones internas había sufrido el menoscabo de millones con el traspaso a las Municipalidades de diversos e importantes impuestos, como hemos visto al tratar de la ley sobre organización y atribuciones de esas instituciones en 1891, y que no observamos como una medida de efectos perniciosos para el Estado, porque en este sentido fue buena, sino como disminución de las entradas fiscales por el capítulo de los tributos que deben pagar los habitantes para satisfacer los gastos públicos. Deber de los Poderes debió ser el substituirlos de modo inmediato con nuevas fuentes de recursos internos.

13.—Labor económica durante el último lustro del siglo XIX, bajo la Presidencia de Don Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901).

No estaba desprovista de dificultades ni era ajena a mayores responsabilidades la situación en que debía hacerse cargo de la dirección del país el nuevo Presidente. No era ajena a mayores responsabilidades porque había recibido la herencia del régimen metálico, que era necesario mantener a todo trance. No estaba desprovista de dificultades porque debía empezar sus labores en medio de una crisis que amenazaba perturbar el equilibrio comercial. Don **Federico Errázuriz Echaurren**, el nuevo Presidente de la República, dejaba constancia en su primer Mensaje de que el mantenimiento de la moneda de oro en la circulación

podía estimarse ya consolidado, pero que el país atravesaba por «una época económica fatigosa». En socorro de ella creía conveniente recurrir a fondos que estimaba innecesarios en la reserva metálica, de los cuales, decía, no era posible continuar privando a la República.

Aunque con respecto a la **balanza comercial**, en la estadística del año de la trasmisión del mando (1896) se pudo constatar un aumento de valores, pues las exportaciones habían llegado a $ 74.359,414 y las importaciones a $ 74.082,805, en el comercio exterior de 1897 hubo una notable disminución: las primeras alcanzaron sólo a $ 64.754,133 y las segundas a 65 millones 502 mil 805 pesos (de 38 d.) Debióse ello principalmente a una menor exportación de salitre ($ 6.470,108), de minerales de plata, de trigo (1 millón 527 mil 317 pesos) y de cebada común; y a una menor importación de animales vacunos, carbón de piedra, rieles, etc.

En un país en que por efecto de una política rentística, seguida deliberada o indeliberadamente, la gran masa de las entradas fiscales proviene de las aduanas, es natural que a toda restricción del comercio internacional corresponda una disminución en las **rentas ordinarias.** En las correspondientes a 1896 y 1897 encontramos, en efecto, los totales de $ 81.328,637.68 y $ 79.281,536.80, respectivamente, habiendo decrecido de modo esencial, como se comprenderá, el producto de los derechos y recargo de exportación de nitrato. Para incrementar los recursos proponía el Ministro Don J. Sotomayor G., en la Memoria de Hacienda de 1.° de Junio de 1897: que se continuase mejorando el servicio aduanero y se suprimiese la liberación de derechos; que se estableciese una activa

propaganda para aumentar el consumo del salitre y se contratase la exportación de guanos; que se introdujese el impuesto de alcoholes, o su estanco, y hasta sobre el tabaco; y que se estableciesen otros impuestos, como el de sociedades extranjeras de seguros, para igualarlas a las nacionales en sus obligaciones. Razón sobrada tenía el señor Sotomayor, pues reinaba, por un lado, pasividad manifiesta en la política económica de propaganda, y había, por el otro, carencia casi absoluta de contribuciones internas que ayudasen en forma segura a las finanzas fiscales.

Al llegar al examen de los fenómenos y contemplación de la vida económica de conjunto en esos años no dejaremos de observar el decaimiento general que se nota en el interés que presentan en adelante las **Memorias de Hacienda,** habiendo naturalmente excepciones dignas de tenerse como tales. ¿De qué proviene esa falta de interés? ¿No llegaron hombres estudiosos al Ministerio de Finanzas? Evidente que sí. El origen de esa falta de interés proviene de que los estudios de hacienda se habían simplificado fundamentalmente con la transformación que experimentó nuestro sistema rentístico como consecuencia de la guerra del Pacífico, que puso en manos de este país riquezas que con su exportación le ofrecerían entradas enormes para sus gastos, sin que tuviera la necesidad ineludible de recurrir a la imposición de mayores gravámenes internos, sintiéndose más bien inclinado, como hemos visto que se ha hecho, a la abolición de contribuciones. Ahora se vivía casi sólo de la exportación de salitre y otros productos mineros y de los derechos de internación de mercaderías extranjeras. Ya no se pensaba en la gran cantidad de impuestos y contribuciones en que antes de ese acontecimiento

se debía pensar y en que han pensado y tendrán siempre que pensar los demás países, que no poseen un monopolio natural que arroje rentas tan considerables como el que posee Chile. Es la lucha por la vida lo que hace a los hombres, ya sea individual o colectivamente, estudiar y dar interés a sus actividades o a sus pensamientos. No es extraño, pues, que esas Memorias sean en cierto modo pobres y hayan perdido el interés que ofrecían las anteriores, y sólo de vez en cuando presenten un estudio realmente importante. No quiere decir esto que la situación financiera de ahora sea menos compleja: es el hecho que en la simplicidad del origen de los recursos está la complejidad; contándose sólo con entradas de aduana, para satisfacer los gastos del Estado, y fallando por cualquier motivo esta fuente, se desorganiza del todo el mecanismo de la vida económica nacional. Y el fracaso de esa fuente de recursos no depende de nuestra voluntad: es de ordinario el efecto de la vida política, social y económica del mundo entero. De ahí las dificultades de evitarlo; así se explica la vidriosa situación que se han creado nuestras finanzas por razón de los acontecimientos económicos que sirven de base a la vida del país.

El Ministro de Hacienda, Don D. Zañartu, recomendaba en su Memoria de 1.° de Junio de 1898, como medida de buena administración, hacer «una revisión de nuestro sistema de impuestos, a efecto de que su reparto sea más equitativo». No cabía duda que este era un buen pensamiento, pero en la contemplación de la historia económica y financiera del país carecía de trascendencia y hasta de justificación, porque éste no vivía ya de los impuestos a que él se refería, sino de otros. Tal pensamiento tenía trascendencia

y plena justificación a través de toda nuestra vida económica hasta la guerra del Pacífico.

Interesantes nos parecen los datos que daba él en la Memoria citada al abrigar la esperanza de que las cosechas mejorarían por el empleo de abonos que el Gobierno ponía entonces a disposición de los agricultores nacionales, salitre y guano. Efectivamente, se concedieron a la Sociedad Nacional de Agricultura £ 5,000 para la aplicación de abonos en el país, y se acordó devolver a los compradores de guano destinado a la agricultura el derecho de regalía que debían pagar los concesionarios de la explotación de ese abono a razón de $ 10.55 por tonelada que adquiriesen. Fue esta una materia en que la iniciativa y la acción de los poderes del Estado pueden ser de positiva utilidad para la economía nacional.

Con el fin de facilitar la instalación de establecimientos industriales en aquellas regiones que teniendo materia prima y riquezas inexplotadas careciesen de colonización, se autorizó al Ejecutivo para hacer en Magallanes concesiones de tierras hasta de veinticinco hectáreas. Siguiendo en los dominios de la protección del Estado y siendo Ministro de Industria Don Arturo Alessandri, autorizóse también al Gobierno para que pagase una prima de dos centavos por cada kilogramo de azúcar cruda de betarraga que se produjese en el país, garantizándose al transporte de su materia prima un flete que no debía subir en su monto durante diez años. Era éste un nuevo y laudable empeño que se hacía para que la industria del azúcar de betarraga se cimentara en el país. Razones de índole técnica y comercial, y más concretamente, de concurrencia, no han dejado, sin embargo, prosperar a esa fuente de trabajo y de riqueza, que se siente oprimida en su

comienzo y desarrollo por la fabricación de azúcar de caña sobre la base de la producción peruana de esa planta.

Con el espíritu proteccionista que dominara en las medidas precedentes, contrastaban las disposiciones de dos leyes dictadas con anterioridad, en virtud de las cuales se declaraban libres de derechos de internación por diez años los fósforos y por veintidós los hilados de algodón.

En materia de *aduanas*, se hicieron en ese entonces diversas reformas, derogándose artículos ya anticuados de la Ordenanza, cobrándose los derechos de importación en moneda corriente con un recargo fijo de 75% mientras los avalúos de la tarifa de aduanas se hiciesen en pesos de 38 peniques, aboliéndose el depósito en almacenes fiscales y particulares de las mercaderías que se importasen, organizándose con los vistas de varias aduanas un solo cuerpo para los efectos de los ascensos y destinaciones, aprobándose un arancel aduanero proteccionista que fijaba a todo producto procedente del extranjero un 25% de derecho sobre su avalúo en la internación para el consumo y determinándose un 60, 35, 15 y 5% para ciertos artículos y un derecho específico para otros (esta ley, que como Ministro de Hacienda lleva la firma de Don Elías Fernández Albano, es de 23 de Diciembre de 1897), declarando que los gastos de descarga y movilización de los bultos que se internasen por las aduanas serían de cargo de los importadores (en esto, como en aquellas liberaciones de derechos, actuó como Ministro de Hacienda Don Alberto González E.) y autorizándose en seguida al Ejecutivo para que dictase los aranceles que habían de regir en 1899 para el pago de esos servicios de descarga y movilización de merca-

derías que se internasen (en lo cual actuó en igual carácter Don Rafael Sotomayor).

En materias referentes al comercio exterior y a las relaciones internacionales, dictóse en 1897 una *nueva ley consular*, que establecía dos clases de cónsules: de profesión y de elección. Exigióse para los primeros una serie de conocimientos de legislación, de historia, de economía, de idiomas, etc., y para los segundos, que cuenten con recursos que les permitan vivir con independencia y decoro o ejerzan una profesión honrosa y gocen de consideración social en la localidad. A esta ley, que se ocupa con minuciosidad de la persona del cónsul, fijándole detalladamente los derechos que cobrará por sus actos, dando autorización al Ejecutivo para nombrar hasta un número determinado de ellos en distintas partes, debemos hacer la observación que hicimos a la de 1860: falta en ella la contemplación suficiente y eficaz del papel que en la vida económica moderna desempeñan o deben desempeñar los cónsules, sobre todo los de profesión: las complejidades de la lucha económica internacional exigen un personal apto para provocar y favorecer la celebración de negocios comerciales de beneficio para el país que representan. Si no se piensa en esta función matriz del cargo consular, el puesto degenera, convirtiéndose de hecho en una sede de vida tranquila, alejada de la lucha diaria, con residencia en el extranjero.

Con el fin de mejorar nuestras relaciones de intercambio comercial con la Confederación Helvética, se ajustó en la ciudad de Buenos Aires, con fecha 31 de Octubre de 1897, un *tratado de comercio* entre Chile y Suiza.

En materias de *tráfico interno*, se autorizó al Gobierno para invertir hasta la cantidad de $ 1.500,000

en la cancelación de obras contratadas y en la adquisición de materiales para los ferrocarriles en construcción y en explotación; se le autorizó también para ordenar la construcción, en el país, del equipo que fuese necesario adquirir para la explotación de las líneas de trocha de un metro, destinándose con tal objeto la suma de $ 1.500,000. Acordóse, además, la inversión de $ 130,000 en completar los estudios de la gran línea longitudinal que debía unir a Pisagua por el norte con Puerto Montt por el sur, y de $ 20,000 en los planos y presupuestos de un nuevo ferrocarril que uniese a Santiago con Valparaíso (leyes de 1898).

En lo que respecta a la *industria salitrera*, la industria madre, se procedió, previa autorización legislativa, a enajenar en pública subasta numerosos terrenos salitrales en Tarapacá, la provincia más rica; igualmente se procedió a pagar diversos certificados salitreros emitidos por el gobierno del Perú, que no habían sido cancelados ni canjeados en el plazo concedido. Acordóse también invertir la suma de £ 20,000 en auxiliar a la Asociación Salitrera de Propaganda para que extendiese y activase sus trabajos y a condición de que invirtiese por su parte una suma de £ 12,000 en el mismo fin.

En el conjunto de la situación económica y social del país, había en 1897 y principios de 1898 motivos de inquietud, que subsistían con mayor o menor pronunciamiento desde 1895, año de la conversión: perduraba, en efecto, una crisis económica que, aunque se manifestaba en cierto modo libre de amenazas, allegada a otro factor de perturbación podía revestirse de gravedad. El Ministro de Hacienda, Don Darío Zañartu, se esforzaba por dejar constancia en su Memoria de 1.° de Junio de 1898 de la circunstancia de

que mediante la conversión metálica, llevada a cabo con grandes sacrificios, la nación estaba provista «de un circulante monetario *firme* y no expuesto a las fluctuaciones peligrosas del papel moneda, lo cual contribuirá, sin duda, a dar sólidas garantías al capital extranjero, suministrando una base fija a las transacciones comerciales». No parece haber sido improbable que el Ministro persiguiese, en parte por lo menos, dar confianza al público de que no habría peligros de trastornos monetarios, en lo cual habría hecho bien.

Esté ello o no conforme con la realidad de los acontecimientos, el hecho es que, habiéndose dictado con fecha 28 de Junio de ese año una ley que autorizaba al Presidente para contratar en Santiago un préstamo de £ 500,000, emitiendo por igual suma vales internos de tesorería que ganaban un interés de 5% anual, pagaderos al tiempo de la emisión, y coincidiendo la crisis económica y esto con el peligro amenazante de una guerra con la República Argentina por causa de divergencias de apreciación en la fijación de los puntos que servirían definitivamente de límites entre ambos países, sosteniendo Chile el divortium aquarum y la Argentina las altas cumbres (el tratado de 1881 decía: las más altas cumbres que dividan las aguas), en pocos días de tirantez y pánico financiero y monetario se dictó, siendo Ministro de Hacienda Don Rafael Sotomayor, una **ley de moratoria** que lleva fecha 11 de Julio, y que dispuso que por el término de treinta días no podrían iniciarse ni proseguirse acciones ejecutivas, fuesen civiles o comerciales, comprendiendo las quiebras, y procedimientos de obligaciones contraídas antes de la promulgación de la ley. ¿Qué había ocurrido? Nuestro colega Don Guillermo Subercaseaux, especialista en estas materias y

testigo presencial de lo que había ocurrido, dice en su incomparable estudio sobre *El Sistema monetario y la organización bancaria de Chile*, que «con motivo de los peligros de guerra, se esparció el rumor en Santiago de que el Gobierno preparaba la vuelta al régimen del papel moneda. Como consecuencia de este rumor, los depositantes comenzaron a retirar sus depósitos de los bancos para poner a salvo su oro. No se trataba tanto del canje del billete bancario, pues había pocos en circulación, sino más bien del retiro de depósitos. Pronto este movimiento de desconfianza toma cuerpo y se produce en la ciudad una corrida a los bancos, que en menos de dos días coloca a estas instituciones en una situación aflictiva». El Gobierno decidió entonces autorizarlos para cerrar sus puertas.

Con esto se anunció el **fracaso de la conversión metálica.** El 31 de Julio, dentro de los treinta días de la moratoria, se dictó, ocupando la cartera de Hacienda el propio señor Sotomayor, una *nueva ley de emisión* de $ 50.000,000 en billetes fiscales de curso forzoso, pagaderos en pesos de oro de 18 peniques, comprendiéndose en esa suma las emisiones bancarias. Con este paso y el anterior se completó el derrumbe de la conversión hecha tres años atrás. Los derechos de internación y almacenaje se seguirían pagando en pesos oro de 18 peniques, como las obligaciones contraídas en esa moneda, y los derechos de exportación en la cantidad fijada por la ley del año anterior. La emisión de los bancos se declaró fiscal, no pudiendo esas instituciones emitir billetes mientras subsistiese el curso forzoso de los billetes fiscales. De las rentas de Aduana se tomaría anualmente la suma de diez millones de pesos oro para formar un fondo de conversión. La ley disponía el restablecimiento del régi-

men metálico desde el 1.° de Enero de 1902, fecha en que el Estado pagaría el papel moneda con igual cantidad nominal de pesos oro de 18 peniques. La esperanza del restablecimiento de la conversión metálica no ha podido, sin embargo, tornarse en realidad hasta hoy.

Por causa principalmente de un aumento habido en el monto de los derechos de exportación y recargo, las **rentas** de 1898 fueron superiores a las del año anterior: llegaron a $ 88.506,359.25. En el comercio exterior las exportaciones alcanzaron a $ 168.069,431 de 18 peniques ($ 79.611,835 de 38 peniques), y a $ 102.262,058 de 18 d. ($ 48.439,922 de 38 d.) las importaciones. Púdose notar un aumento más o menos considerable en las primeras. La fuerte preponderancia de valores que puede observarse ese año en las **exportaciones sobre las importaciones** no debe apreciarse como una correspondiente mayor suma de créditos contra las plazas extranjeras, como en general no debe apreciársela de ese modo en los años posteriores a la guerra del Pacífico, porque gran parte de los valores de exportación (la que representa la utilidad y amortización del capital) no vuelve al país en forma de importaciones, pues muchas oficinas elaboradoras pertenecen a sociedades extranjeras que tienen asiento en el extranjero. Don Rafael Sotomayor, Ministro de Hacienda en 1899, que llamaba la atención a esto último, calculaba en 65% lo que representaba en ese entonces la utilidad y la amortización del capital. Los valores de la importación debían aparecer, así, como muy subidos en la relación de créditos y débitos con el extranjero, superiores a los de la exportación en todos aquellos años en que la balanza comercial que da la estadística aparece equilibrada o

más o menos equilibrada. De aquí proviene el error que se comete al apreciar como favorable en el ejercicio de nuestro comercio exterior, sobre todo con posterioridad a la guerra del Pacífico, en que pasó a poder de Chile la industria salitrera, una balanza comercial en que predomine el monto de los valores de la exportación sobre el de la importación. *De esta situación proviene también la aspiración que debiéramos sustentar de que nuestras industrias se nacionalicen.*

En materia de liberación de derechos de Aduana y con el propósito de estimular la industria de tejidos en el país, declaróse en 1899 exenta de gravamen la internación de *algodón* en rama o en bruto y la maquinaria que se destinase a su elaboración. No cabía duda que era un ensayo bien encaminado, en el deseo de dar impulso al trabajo nacional. Igualmente se dispuso la libertad en la internación de la *lana* en preparación, sucia o lavada, por la cordillera. Junto con estimular el trabajo del país, debían tender estas medidas a ejercer influencia sobre la baja del precio de artículos de primera necesidad, a cuyo fin se encaminaba también en el terreno de la agricultura la medida tomada de que *el salitre, el guano y los abonos artificiales* se transportasen en los ferrocarriles del Estado por la mitad de la tarifa en vigencia.

Dióse en materia de Aduanas, desempeñando el Ministerio de Hacienda Don Manuel Salinas, autorización al Ejecutivo para dictar todos los años *los aranceles* que habían de regir para el pago de los servicios de descarga, movilización y despacho de las mercaderías que se internasen. Desempeñando luego después igual cargo Don R. E. Santelices, autorizóse la inversión de fondos para los gastos que originasen

tales servicios, gastos que, por lo demás, debían figurar en el futuro en la ley anual de presupuestos.

Necesidades de la *circulación* indujeron en 1899 a derogar la ley monetaria de 1880 y a dictar una que autorizaba la acuñación de cinco millones de pesos en moneda divisionaria de 20, 10 y 5 centavos de 5/10 de fino, en la forma prescrita por la ley de 1895 y debiendo ser redimida por su valor nominal. Autorizóse la acuñación de igual clase y por igual valor dentro de los diez millones de la ley de 1898.

Relativamente considerable fue la actividad desplegada durante los años de 1899 y 1900 en materia de *ferrocarriles*, rama fundamental del desarrollo del tráfico interno y base de la más legítima prosperidad económica en los tiempos que corremos. En el ensanchamiento de la red, dióse a principios del primero de esos años autorización para invertir $ 500,000 en estudiar e iniciar los trabajos del ramal de Temuco a Carahue. Concedióse permiso para construir y explotar un ferrocarril en Chañaral. Diéronse los fondos para cambiar la trocha del ferrocarril de Chañaral a Pueblo Hundido y ramal de las Animas, para estudiar, estacar y construir la línea entre Pueblo Hundido y el Inca. Destinóse la cantidad de $ 950,000 para terminar el ferrocarril de circunvalación de Santiago y la de $ 300,000 para la construcción, conservación y reparación de puentes. En estas autorizaciones y actividades actúo como Ministro de Industria y Obras Públicas Don Arturo Alessandri.

Con el objeto de adquirir para el Estado las líneas férreas de la Compañía del Ferrocarril de Coquimbo, se acordó emitir bonos de la deuda pública externa por £ 260,000, al 4½% de interés y ½% de amortización anuales, en reemplazo de la emisión autorizada

en 1896, la que había de ser incinerada. De fomento agrícola regional fue la inversión de $ 300,000 destinados a la construcción de un ferrocarril entre Talca y San Clemente. De trascendencia local fue también el gasto de $ 600,000 dispuesto para terminar los trabajos del de Ovalle a San Marcos y el permiso concedido para construir y explotar una línea entre Peumo y Las Cabras. De carácter industrial, meramente carbonífero, fue la construcción y explotación del ferrocarril que a fines de ese año se acordó realizar entre Punta Arenas y La Mina Loreto, y al expirar 1900 el de los Ríos de Curanilahue a Puerto Yáñez.

Al laudable propósito de estudiar la construcción de nuevas vías férreas obedeció la dictación de una ley de principios de ese año que concedía fondos para el objeto en los lugares siguientes: del Inca (Chañaral) a la línea de Copiapó, de Pueblo Hundido al norte, de La Serena a Vallenar, de Ovalle a Trapiche, de Combarbalá a Puerto Oscuro, de Ligua a Papudo, de Melipilla a San Antonio, de Rancagua a Doñigüe, de San Clemente a Panimávida, de Panimávida a la línea central, de Cauquenes a Coelemu, de los Angeles a Antuco, de Traiguén a Galvarino y de Puerto Montt a Maullín. Estas últimas leyes de fomento ferroviario llevan como Ministro de Industria y Obras Públicas la firma de Don José F. Valdés C.

Para atender a la construcción de equipo en el país y encargar al extranjero el que fuese necesario, invirtiéronse luego después $ 2.500,000. También *la construcción de caminos y el fomento de la navegación* recibieron apoyo por parte de esta Administración, al destinarse extraordinariamente la suma de $ 300,000 para los primeros y £ 25,000 para la segunda, subven-

cionándose a una compañía de vapores que hiciese el servicio entre los puertos de Chile y del Brasil.

Considerablemente superiores a las del año que precedió fueron las **rentas** ordinarias de 1899, que llegaron a $ 98.515,119.94. En el exceso de diez millones que tuvieron, participaron principalmente los derechos de exportación y recargo del salitre y las utilidades de la venta del oro. Las extraordinarias fueron de $ 28.206,686.76. Las ordinarias de 1900 llegaron, según la Memoria de Hacienda presentada al Congreso en 1902, a $ 78.381,197.12 en oro de 18 d. y $ 23.199,127.30 en moneda corriente.

El detalle de las rentas en oro fue:

Derechos de importación	$ 27.714,956.04
» de exportación	50.142,774.43
» consulares	173,227.87
Venta de bienes nacionales	25,537.07
Intereses y descuentos	71,250.81
Casa de Moneda	8,028.14
Reintegros, depósitos, etc.	245,422.76

El detalle de las rentas en moneda corriente fue:

Importación	$ 829,986.91
Exportación	56.77
Correos	928,107.29
Telégrafos	552,145.93
Papel sellado	584,677.12
Ferrocarriles	14.486,823.46
Venta de bienes nacionales	310,192.93
Intereses y descuentos	384,349.42
Redención de censos	236,904.67
Casa de Moneda	2,210.97
Reintegros, depósitos, etc.	4.883,671.83

Las entradas extraordinarias de 1900 alcanzaron a $ 1.411,915.27 en oro de 18 d y $ 23.045,633.09 en moneda corriente.

Un aumento bastante considerable notóse en los valores de la exportación de salitre de 1899, aunque las sumas de las exportaciones totales y del **comercio internacional** general de ese año fueron menores que las del anterior. Las exportaciones totales alcanzaron a $ 163.106,133 y las importaciones a $ 106 millones 260,358 de 18 peniques. Las primeras se descompusieron en:

Productos de la minería	$ 137.647,605
Productos de la agricultura ...	16.011,864
Manufacturas.	3.862,117
Numerario.	2.595,577
Artículos nacionalizados.	1.573,819
Diversos.	1.415,151

Los valores del intercambio comercial de 1900 ascendieron a cifras superiores a las anteriores. Aumentaron de modo considerable las importaciones, que llegaron a $ 128.538,142, contra $ 167.674,635 de exportaciones. Muy favorable al monto de estas últimas fue la circunstancia de que ese año el numerario exportado llegó sólo a $ 15,328, contra $ 14.271,608 en 1898. Las exportaciones habían mejorado en cuanto se habían saneado así de un factor que no las podía beneficiar. Habían mejorado también en cuanto aumentaban en total, lo que ocurrió sobre todo en salitre, cuya exportación llegó en 1900 a un valor de $ 109.945,156, y en cobre en barra, que llegó a $ 17 millones 899,200. Pero habían desmejorado en cuanto disminuía fuertemente la salida de productos agrícolas, sobre todo trigo, y de lana. De 45.812,687 kilos, con un valor de $ 4.581,268, a que alcanzó la expor-

tación de trigo en 1899, bajó a 9.440,752 kilos, con un valor de $ 944,075 en 1900. Esta situación, producida ese año por perturbaciones atmosféricas, preocupaba la atención pública, tanto más cuanto que un decenio atrás, ese producto (el principal en la exportación agrícola) había llegado a 178.048,276 kilos y a $ 15.283,920.80 en su exportación. Fue tan precaria la producción de trigo en 1900, que hasta hubo necesidad de importar el producto por un valor de $ 1 millón 603,792. Los productos que en las importaciones de ese año aumentaron fueron el azúcar, los géneros, el carbón, etc.

La participación que tuvieron las diversas naciones en nuestro comercio exterior de 1900 fue la siguiente:

Naciones europeas y asiáticas	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 123.236,317	$ 42.481,942
Alemania	20.227,090	34.321,877
Francia	7.970,126	9.289,642
Italia	10,022	2.232,361
España	35,634	798,934
Bélgica	9,627	1.005,616
India	.....	1.137,755
Australia	.....	9.313,061
China	.....	510,381
Otras	.....	186,423
Naciones americanas		
Estados Unidos	$ 6.387,345	$ 12.098,808
Perú	1.675,203	6.715,492
Bolivia	862,253	138,026
Argentina	389,263	2.538,413
Uruguay	518,552	2.011,258
Ecuador	577,753	1.076,233
Colombia	239,587	21,656
Brasil	149,163	1.540,170
Méjico	750	3,235
Otras	122,850	865,312
Rancho	5.263,100	.....
De la pesca	.....	251,541

La falta de reciprocidad en los valores del comercio de exportación e importación entre Chile y Alemania, Italia, Australia, Estados Unidos, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, hacían necesarios los esfuerzos de una política activa para celebrar **tratados comerciales** con esas naciones. Los Gobiernos que, abandonando en la medida de lo posible la política interna partidista, se preocupan del robustecimiento de la vida económica nacional, no pueden olvidar que la celebración oportuna de tratados comerciales que obtengan, por lo menos, reciprocidad en el intercambio de productos, evita muchas perturbaciones en la vida del país y trae beneficios positivos a su población. El desequilibrio con esas naciones perduraba./ En 1897, fenecidos ya los tratados desahuciados el año anterior con Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Bélgica, se celebraron, es verdad, dos nuevos convenios: uno con Suiza, que tuvo la particularidad, en contraposición a los hasta entonces pactados, de que ambos países se otorgaban recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida, *pudiendo Chile conceder favores especiales a los productos de los pueblos latinoamericanos*, y otro de comercio y navegación con el Gobierno imperial del Japón (25 de Septiembre); también se celebró un tratado con Italia el 12 de Julio de 1898 y otro con Dinamarca en 1899; pero sus efectos, aunque en las prescripciones del convenio se siguieron las normas y particularidades del de Suiza, no fueron de mayor trascendencia.

En 1897 se había preparado también un tratado entre Chile y el Brasil, que declaraba libres de derechos de internación para el consumo en la República fluminense los cereales, harinas, vinos, frutas, pasto, guano, salitre y bórax chilenos; y el algodón, el azúcar

no refinada, el café, el cautchouk, la yerba-mate, el tabaco en hoja y el cacao brasileros en Chile. Pero los intereses de muchos productores brasileros, por un lado, y los de los países que comerciaban con el Brasil, por el otro, produjeron allí una tempestad de protestas, y el proyecto fracasó apenas fue dado a conocer. En todo país en que viven, como en el Brasil, fuertes colonias extranjeras, que por razón de su esfuerzo y sus capitales, son poseedoras de grandes riquezas, se establecen siempre vinculaciones económicas casi indestructibles con el extranjero, de donde ordinariamente provienen los capitales o los medios de trabajo. Por eso, es menester pensar asimismo en otros fundamentos para celebrar pactos de fomento del intercambio de productos, sin perder de vista la necesidad que pueda haber por parte de los Gobiernos de que contrarresten con firme voluntad la oposición que puedan hacer los particulares, sobre todo cuando no son numerosos y siempre que haya beneficio común.

Los compromisos con el extranjero eran cada vez mayores. La **deuda** interna llegaba en 1.° de Enero de 1900 a $ 75.964,775.24 en moneda corriente y era de tres clases: con interés y amortización, con interés y sin amortización, y sin interés ni amortización. A la deuda interna con interés y amortización pertenecían las del 3% de 1833, 1837 y 1865 y las municipales que por la ley de 1891 pasaron al Fisco: en total, $ 4.012,687.34. A la con interés y sin amortización pertenecían los censos y las capellanías transferidos al fisco en conformidad a las leyes españolas reconocidas después de obtenida la independencia, los censos que traían su origen de los capitales consolidados, los constituídos en propiedades fiscales y las obligaciones redimidas conforme a las leyes de 1865, 1866 y 1869; la

cantidad en circulación era de $ 20.827,207.40. El monto de esta deuda era causa de alarmas en esos tiempos, pues había llegado a un nivel demasiado subido, el tipo de su interés excedía del 7% y era irredimible. El Ministro Don Manuel Salinas estimaba en 1900 indispensable poner término a la redención de censos en el futuro. El Ministro Don Juan Luis Sanfuentes, que ocupaba la cartera de Hacienda en 1901, estimaba como completamente perjudicial a los intereses del país mantener responsabilidades de esa clase cuando la nación podía con sus entradas ordinarias satisfacer todas las exigencias del servicio público. Recomendaba, así, la derogación de la ley de 24 de Septiembre de 1865, que había estatuído la redención en arcas fiscales de los censos, capellanías y capitales vinculados. El servicio de los censos imponía un desembolso de $ 852,283.46 anuales. A la deuda que no pagaba interés ni amortización pertenecía la flotante, constituída por los billetes fiscales y los vales de tesorería en circulación, deuda que llegaba a un total de $ 51.124,880.50; de esta suma correspondían a los vales de tesorería sólo $ 5,200.

La deuda *externa* en 1.° de Enero de 1900 alcanzaba a £ 17.571,706, o sea a $ 234.289,413.33 en oro de 18 d. Los empréstitos en vigencia eran entonces: los de 1885, 1886, 1887, 1889, 1892, 1893, 1894 (Peñuelas), 1895, 1896, 1898. *La deuda pública por cabeza de población en 1900 (la población de Chile era de 2.880,332) ascendía a $ 26.40 moneda corriente en la interna y a $ 81.30 de 18 d. en la externa.*

Las leyes económicas dictadas en esta Administración durante los meses que le correspondían de 1901 fueron en gran parte de inversión de fondos: para adquirir dragas destinadas al servicio de los puertos;

para estudiar un proyecto de dársena en Valparaíso (era Ministro de Hacienda Don Nicolás González E.); para pagar los trabajos hechos en la construcción del ferrocarril de Serena a Rivadavia; para estudiar vías férreas entre Ancud y Castro, entre Caracoles y San Pedro de Atacama, y entre Papudo y el Rayado; para estudiar el mejoramiento de la bahía de Antofagasta. Fueron inversiones reproductivas, que el desarrollo regular de la economía nacional las hacía necesarias, como lo fueron también las que se hicieron durante la Presidencia temporal de Don *Aníbal Zañartu*, que durante los últimos días reemplazó en la dirección del país a Don Federico Errázuriz E. y que recayeron en los ferrocarriles de Paloma a San Marcos y de Curicó a Hualañé. Bajo esta Presidencia temporal se hicieron además, en la materia que nos ocupa, remates importantes de terrenos salitrales, ocupando la cartera de Hacienda Don Juan Luis Sanfuentes, y se fijó un derecho específico de internación de veinte centavos por kilo de peso bruto a los fósforos de madera.

Fuerte alteración experimentaban ya los **precios corrientes** en plaza, haciendo desde entonces cada vez más difícil la vida para las clases inferiores. En el «Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura» encontramos los siguientes, correspondientes al mes de Diciembre de 1900: arvejas, $ 7.00 los 72 kilos; cebada forrajera, $ 3.60 los 72 kilos; lentejas, $ 12.00; frejoles bayos chicos, $ 15.00 los 72 kilos; caballeros, $ 14.00; garbanzos, $ 14.00 los 72 kilos; harina, $ 7.60 los 46 kilos; lana común, $ 16.00 a $ 20.00; maíz, $ 7.00; papas, $ 7.00; trigo blanco, $ 8.20 los 72 kilos; trigo candeal, $ 9.00; bueyes flacos del país, $ 95.00; bueyes gordos, $ 135.00, vacas del país, $ 65.00.

Fuera de los problemas que hasta aquí hemos exa-

minado dentro de la labor económica de la Administración Errázuriz Echaurren, no aparece otro que tuviese alguna trascendencia, que el que subsistía sobre el tratamiento de nacionales y extranjeros en lo referente a las empresas industriales, en que los últimos gozaban de ordinario de mucho mayores prerrogativas que los primeros. Tal ocurría en las sociedades de seguros. Las compañías nacionales, hacía ver el señor Salinas, que influyen en el movimiento económico del país, dando inversión en bienes y valores chilenos a su capital, están sometidas a todo el rigor de las disposiciones legales en lo relativo a la administración y a los asegurados. En cambio, las sociedades extranjeras, que «en su mayor parte extraen cuantiosas sumas de nuestro mercado para buscarles colocación en bienes o valores extranjeros», no están sometidas a otra obligación que a la de pedir autorización para instalarse en el país. Esta situación de preferencia en que se encontraban las empresas extranjeras en el país, producía justificadas quejas entre los industriales chilenos. No había, en verdad, conveniencia en establecer y mantener esa desigualdad, aun a trueque de que el extranjero tomase menor parte en las actividades nacionales, sobre todo en empresas que, por su naturaleza, parecen estar destinadas a ser de la organización y mantenimiento exclusivos del Estado que las sustenta, pues han tomado características de instituciones económicas internas de naturaleza predominantemente social.

Juicio crítico de la actividad económica nacional durante el último lustro del siglo XIX, bajo la Administración de Don Federico Errázuriz Echaurren.

Aunque prácticamente no tiene importancia el hecho de que corresponda a un Gobierno actuar a fines o a principios de una centuria, históricamente la tiene, pues en el recuerdo de los sucesos políticos, sociales o económicos de los pueblos se hacen separaciones que, para mayor claridad, se basan en diferenciación de siglos. Tocó a la Administración Errázuriz Echaurren actuar durante el último quinquenio del siglo XIX, y tanto su nombre como el de los hombres que participaron en él habrán de quedar grabados a ese hecho, sirviendo de reflejo de la idiosincrasia nacional, del modo de pensar, sentir y obrar y del legítimo adelanto material, moral e intelectual de la nación. Podráse decir que el término de cinco años que dura el período constitucional en nuestro país, no ofrece fundamento bastante para consignar lo anterior, pero es la verdad que abarca un tiempo suficiente para apreciar, sobre la base del estudio de sus hechos y de sus hombres, las condiciones en que se desarrollaba la vida, así material como intelectual de la República.

Cuando se entra al examen de los detalles de la labor de esta Administración, se experimenta una satisfacción al reconocer que trató de proteger la industria nacional, aunque no en forma irresistible y sistemática, como pudiera exigir todo aquel que divisa el levantamiento del poder económico de la nación sólo en el robustecimiento de sus organizaciones industriales. Claro espíritu proteccionista se observó también en las reformas del arancel y en las mejoras aduaneras.

Pero no sólo trató de proteger a la industria y al comercio nacionales, sino que a la agricultura, con los diversos intentos que hizo de propagar en las hermosas campiñas chilenas el uso del abono, salitre y guano, dando para el efecto las facilidades de que en las páginas anteriores nos hemos ocupado. Iniciativas y propósitos fueron éstos que pudieran nuevamente realizarse en pro de la producción agrícola.

El punto culminante de la acción económica del Gobierno de Errázuriz Echaurren está, sin disputa, en el fomento de las obras públicas, especialmente en el ramo de ferrocarriles. Es su característica en este orden de actividades. A las diversas faenas ferroviarias que emprendió y a los considerables elementos de que las proveyó, débese agregar la construcción y reparación de muelles, malecones y dársenas en los puertos; la construcción de galpones y bodegas en las Aduanas; la adquisición de dragas y otros útiles de uso marítimo, para todo lo cual hubo de necesitar y poner a disposición sumas considerables.

A estos hechos de reluciente gloria en el progreso material y desarrollo económico del país, débese oponer, empero, el de penoso recuerdo en la vida financiera, el del fracaso de la conversión metálica ocurrido en mitad de ese período. Fue un desgraciado suceso, que daría al traste con las más bellas esperanzas de la estabilidad de los valores y abriría de nuevo las puertas a la especulación y al juego que se basa en la inestabilidad creada por el régimen de papel moneda de curso forzoso.

Esos dos órdenes de fenómenos de índole financiera y económica, el fracaso de la conversión y el fomento de las obras públicas, tengan o no relación el uno con el otro, perdurarán con caracteres marcados en la his-

toria de los acontecimientos y de la vida nacional durante la Administración Errázuriz Echaurren. En pro de la realización de la conversión se había luchado intensamente y por largo tiempo. Haya o no culpa de los hombres en su fracaso al cabo de corto tiempo, constituirá siempre un trascendental y desgraciado suceso en la vida de la República. En pro de la realización de obras públicas se habían hecho igualmente grandes esfuerzos, y la circunstancia de llevarlas a cabo es, sin duda, un timbre de gloria. Las rentas habían aumentado. Su monto anual llegó

En 1896 a...	$ 81.328,637.68	oro de 18 peniques
» 1897 »	79.281,536.80	» » » »
» 1898 »	88.506,359.25	» » » »
» 1899 »	98.515,119.94	» » » »
» 1900 »	78.381,197.12	» » » »
	23.199,127.30	moneda corriente

Podría decirse, a la vista de esta estadística, que al espirar los días del siglo XIX y nacer los del año 1900, las entradas ordinarias de la nación llegaban a los *cien millones* de pesos de valor de 18 peniques. En medio siglo habían aumentado de $ 4.334,344.56 de 46 3/16 peniques (1850) a $ 100.033,715 de 18 peniques (1900). En cincuenta años habían duplicado. Y nótese bien que habían incrementado en tan considerable escala, no a costa de las contribuciones internas, sino de las externas, como son las constituídas por los derechos de exportación del salitre, pagados en definitiva por el consumidor extranjero. En tan considerable aumento habían tenido parte principal las nuevas fuentes del nitrato.

El intercambio comercial con el exterior experimentó igualmente un alza digna de notarse, como puede verse en las cifras correspondientes:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1896	$ 74.359,414	74.082,805	148.442,219 de 38 d.	17,43 d.
1897	64.754,133	65.502,805	130.256,938 »	17,56
1898	168.069,431	102.262,058	270.331,489 de 18 d.	15,68
1899	163.106,133	106.260,358	279.366,491 »	14.50
1900	167.674,635	128.538,142	296.212,777 »	16,80

Durante la Administración Errázuriz Echaurren se celebraron cuatro tratados de comercio: el cerrado con Suiza, con la particularidad de quedar facultado nuestro país para conceder favores especiales a los productos de los otros pueblos latinoamericanos; y los cerrados sobre igual base con el Japón, Italia y Dinamarca. En esta materia, la historia de la vida económica chilena del siglo XIX, en cuanto dependió de convenios con el extranjero, es pobre. Pudiera, quizás, hacerse la salvedad de dos o tres Gobiernos que en el curso de ella hicieron pequeños esfuerzos por ajustar pactos internacionales de comercio. Pero de ningún modo fueron suficientes, como tampoco llegaron a constituir la realización de un plan previsto o siquiera pensado para robustecer la riqueza nacional sobre la base de la acción inteligente y penetradora en la economía de los pueblos extraños, como lo aconsejan los principios de política comercial moderna.

Cerramos el examen de la vida económica de la República en el siglo XIX, abrigando la esperanza de que las observaciones que en el curso de él hemos hecho, puedan inducir en el futuro a meditar con mayor detenimiento o conciencia en todo aquello que en el terreno de la política del comercio exterior y de las rentas nacionales conduce con mayor seguridad al fomento de la riqueza y de la felicidad de la patria.

14. Labor económica, iniciativas de política comercial y acontecimientos financieros en el primer quinquenio del siglo XX, bajo la Administración Riesco (1901-1906).

Históricamente ocupa un lugar prominente el hecho de actuar una Administración en la iniciación de una nueva centuria, así como lo ocupa en su expiración, caso del Gobierno anterior. Elegido Don **Germán Riesco** para dirigir los destinos del país en 1901, en medio de generales consideraciones, simpatías y esperanzas, tocóle en sus comienzos afrontar la solución de un problema de orden fundamental en la vida financiera, cual era el de la conversión metálica, que se había postergado para el 1.° de Enero de 1902, y que exigía recursos relativamente considerables para su realización. En tiempos en que las entradas ordinarias alcanzaban para satisfacer sólo los gastos ordinarios, la solución del problema presuponía ahorros realizados con anterioridad en épocas en que debía empezarse en tan afanosa e ingrata tarea. Sabido es que para un Gobierno todos los recursos aparecen como escasos, dada la grande elasticidad que en la vida moderna adquieren las necesidades del Estado. Los progresos de orden material hechos durante los últimos años de la Administración anterior, progresos que sólo podían realizarse con sacrificios financieros apreciables, habían de complicar la solución del problema de la conversión, hasta despojarla quizás de toda viabilidad, salvo el caso de un esfuerzo extraordinario, que sólo podría desplegarse con seguro detrimento del funcionamiento económico regular de los demás resortes en que descansa la vida nacional.

Ante tales complicaciones, los hombres se detienen. No siempre es posible aventurarse a contrariar los menesteres ordinarios de la nación para ejecutar un acto que no ha tenido preparación. La conversión hubo de postergarse, fijándose como nuevo plazo el 1.° de Enero de 1905. Como Ministro de Hacienda, firmó esta primera ley de aplazamiento Don Enrique Villegas. Llegado ese término, y ocupando igual cartera Don Ernesto A. Hübner, se la postergó de nuevo hasta el 1.° de Enero de 1910.

Importante fue, en cuanto se estudiaban y buscaban **orientaciones de política comercial** para el futuro, la actuación que en sus comienzos correspondió tener a la Administración Riesco. Habiendo el Gobierno de Chile desahuciado con anterioridad (en 1896) los tratados comerciales con las principales naciones europeas, se había formado el propósito de no ratificar la celebración de ninguno otro hasta hacer un examen de conjunto de todos los que realmente conviniese celebrar, dedicando especial atención a los americanos. Era, sin duda, un plausible propósito, que dejaba ver, por fin, la concepción de un plan o de una política comercial con el exterior, materia de importancia tan trascendental para el desarrollo de la economía y riqueza nacional.

Vivo interés tienen a este respecto las observaciones que hace el Ministro de Relaciones Exteriores Don Eliodoro Yáñez en la Memoria ministerial de 1902. «Desahuciados, dice, los tratados existentes con algunas naciones europeas que tenían la cláusula de la nación más favorecida, nuestra política comercial ha debido dirigirse a favorecer el intercambio con los países de América, en que podía encontrarse un mercado fácil para la producción chilena y donde las con-

cesiones aduaneras no habrían de traer como resultado ahogar nuestra naciente industria por el poderoso desarrollo de la industria y de los capitales europeos. Se impone, por esto, la necesidad de ser excesivamente cauteloso en la celebración de los nuevos tratados, a fin de no cimentar sobre bases inciertas el desarrollo de nuestro comercio internacional». El Ministro estaba penetrado de la necesidad de formar un plan de política comercial para evitar que dentro de muchas posibilidades de celebrar un tratado pasaran también muchas situaciones inadvertidas y se tomaran en cuenta sólo las más inmediatas, resultando incierta la base del desarrollo de la economía nacional y del comercio internacional. A esto se refiere cuando al final de una circular del Ministerio dice que «en general los tratados pendientes de la ratificación del Gobierno de Chile se han celebrado por nuestros Ministros diplomáticos tomando principalmente en cuenta las relaciones comerciales de Chile con el país en que estaban acreditados, sin tener antecedentes bastantes para apreciar al mismo tiempo las de nuestro país con otras naciones». En la formación de corrientes comerciales el Ministro de Relaciones daba mucha importancia al abaratamiento de los fletes marítimos, los cuales, en su opinión, habrían llegado a un encarecimiento francamente perjudicial al desarrollo comercial del país, y al mejoramiento del acarreo terrestre a Bolivia y a la Argentina, en lo cual no tenía menos razón.

En su extensa e interesante Memoria refiérese el Canciller a diversos otros puntos de política comercial. «Nuestros esfuerzos, dice, deben dirigirse a adquirir franquicias suficientes para poder luchar en el exterior con los productos similares de otros países y dominar el mercado por la excelencia de la producción

chilena y por las condiciones de su presentación al consumidor». Concibe, para obtener esto último, la creación de un tipo de mercadería de exportación. Estimamos que la persecución de lo primero, o sea, de la adquisición de franquicias, en materia de política comercial, era no sólo justificada en ese entonces, sino que debía ser un objetivo atinado, que debía perseguirse constantemente y con tenacidad, como lo hacen los países bien llevados en esta materia. El Ministro obraba con clara visión de las conveniencias al propiciarlo. La persecución de lo último, a saber, la creación del tipo standard, aunque conveniente, no nos parece, en cambio, necesaria, por un lado, y posible, por el otro, por la sencilla razón de que si se trata de la exportación de salitre, nuestro principal producto de exportación, el tipo de mercadería está dado por sí mismo y es un monopolio de Chile; si se trata de la exportación de productos agrícolas, la creación de un tipo especial de exportación es, en la mayor parte de nuestros artículos, imposible, pues en la producción agrícola general de los países hay fuerte concurrencia de otros, los cuales, si están situados a menores distancias y tienen mejores medios de transporte, se impondrán, derrotando a todo competidor. El tipo de mercadería de exportación tiene especial importancia en los países industriales por excelencia, en que las características de la producción permiten crear un tipo muy difícil de desplazar en las luchas de competencia.

En Chile, habiendo monopolio, por una parte, y no habiendo, por la otra, diferencias con otras naciones concurrentes en los productos principales de la agricultura, el tipo de mercadería de exportación se hace imposible e innecesario. Lo principal entre nosotros es abaratar los costos de producción y de transporte

y producir más; podríamos agregar: y consumir menos, sobre todo del exterior. Si el país, en un futuro que aún no se divisa muy cercano a causa de dedicarse preferentemente a la exportación de productos salitreros y mineros, se industrializa o, por lo menos, acrecienta su industria hasta llegar a colocarse en condiciones de competir en ella con otros, y, desde luego, con todos los sudamericanos, camino que le es fácil; si el país llega a esto, claro está que debe ir a la creación del tipo de mercadería de exportación.

De gran trascendencia e interés para el desarrollo de la política comercial y de la economía nacional es la observación que hace el Ministro referente a la organización de un servicio estadístico que comprenda no sólo los datos de la producción chilena, sino los de la producción extranjera, dejando ver las necesidades de las distintas plazas y mercados de consumo. A ello habría que agregar la colaboración de los cónsules o agentes mercantiles especiales en cuanto diesen a conocer al país los gustos y las costumbres de los lugares respectivos, punto que anota oportunamente el Ministro. Es esa, sin duda, la base en que se apoye toda medida de política comercial exterior, como lo hemos manifestado en los capítulos preliminares de este trabajo.

Importantes fueron también, dentro del concepto de la política comercial, las observaciones que hizo sobre las tareas de los cónsules, de los cuales se debía exigir datos sobre el desarrollo del comercio del país en que residían junto con una apreciación de las causas del éxito obtenido, una exposición de la situación de la agricultura y de la industria locales, un estudio de la legislación económica con observaciones sobre su influencia y de los tratados de comercio. Patrocinaba,

por lo demás, la organización de un servicio de propaganda en el extranjero, para que diese a conocer las producciones nacionales, el desarrollo mercantil, las fuentes de recursos, y favoreciese la inmigración.

En la aspiración de seguir una política comercial que estimulase especialmente el intercambio de productos entre Chile y los países latinoamericanos, el Gobierno nombró en Junio de 1902 una comisión de personas entendidas para que estudiase los tratados (eran siete) celebrados *ad-referendum* por algunas Legaciones de Chile en el extranjero, tratados o proyectos de tratados que habían dado lugar a activas discusiones sobre sus conveniencias, y propusiese todas aquellas que, a juicio de la comisión, fueren de expectativas benéficas para los intereses de la agricultura, de la industria y del comercio nacionales (1). El estudio fue de verdadero interés. El **informe sobre tratados comerciales** que redactó la comisión, empieza por hacer algunas observaciones de carácter general, llamando desde luego la atención, aunque con demasiada discreción y brevedad, al hecho para nosotros fundamental de que en nuestro comercio internacional, cuando la estadística arroja un exceso de exportaciones sobre importaciones, el saldo activo es «nominal», pues los valores principales de las primeras están representados por el salitre, valores que no tienen «sino en pequeña parte el carácter de riquezas propiamente nacionales», pues el nitrato es explotado en gran parte por empresas extranjeras domiciliadas en el extranjero, en donde quedan también las utilidades, las fuertes ganancias.

(1) La comisión fue compuesta de los señores Luis Aldunate, Federico Varela, Juan Luis Sanfuentes, Francisco de B. Valdés, Luis Dávila Larraín, Salvador Izquierdo, Alberto González Errázuriz y Manuel F. Irarrázaval.

En el examen hecho acerca del desarrollo económico y comercial de años y períodos anteriores, hemos estudiado ya esta situación. Es para nosotros fundamental el conocimiento del hecho de que el saldo activo que arrojen las estadísticas de nuestra balanza comercial es meramente nominal, porque sólo sobre ese conocimiento podremos cimentar toda aspiración legítima o toda política comercial consciente del mejoramiento de nuestra economía y de nuestras relaciones mercantiles con el extranjero. Esa falta de mayor nacionalización de las industrias chilenas es la que provoca en buena parte este estado, para muchos incomprensible y contradictorio, de que aunque las exportaciones superen a las importaciones, las condiciones del cambio no mejoren. La razón está en el hecho positivo de qué el país importa más de lo que exporta, consume más de lo que produce, diríamos más de lo que produce y exporta como propio, y este es un factor de empobrecimiento. Nuestra grande aspiración, nuestra aspiración matriz, en este terreno debe ser el robustecimiento de la nacionalización de nuestra industria. Si a ese factor de empobrecimiento agregamos el del pago de los fletes, que siempre son tan subidos por las distancias tan largas que nos separan de los principales mercados de consumo de nuestros productos, podremos apreciar con alguna proximidad las desfavorables condiciones en que se desarrolla la economía chilena, que de otro modo pudiera ser inmensamente más poderosa.

Razón tiene la comisión cuando dice que la más imperiosa de las necesidades nacionales es la de producir riquezas «en cantidades que basten a satisfacer nuestros consumos», porque así no nos veríamos obligados a traerlas en tan grande escala de fuera, acrecentando con ello nuestras importaciones. Bien hacía igual-

mente al decir que la crisis ya endémica por que el país venía atravesando desde quince años atrás, era esencialmente crisis de productos. Pero no la tenía, en cambio, al menospreciar, en tiempos de falta de equidad o reciprocidad comercial internacional, la necesidad también imperiosa de pactar condiciones ventajosas en el intercambio de nuestros productos.

El informe hace después una ligera crítica de las convenciones o tratados desahuciados en 1896, que no ofrecían ventajas comunes a ambas partes porque eran unilaterales, siendo perfectamente onerosos para nuestro país y de beneficio gratuito y exclusivo para los otros. Con insistencia nos hemos referido en páginas y años precedentes a la falta absoluta de equidad con que se habían cerrado los pocos tratados comerciales celebrados entre Chile y las demás naciones. Bástenos aquí recordar uno, que nos parece típico al respecto: el de 1854, celebrado entre nuestro país y Gran Bretaña, en cuyas estipulaciones se contemplaban los casos de eventualidades marítimas, partiendo de la base de la igualdad de tratamiento para las naves de ambos países en las costas del otro, sabiéndose que el principal comercio de Chile con el extranjero se hacía en buques de la otra parte y que nuestro país no tenía naves que llegasen hasta ella.

De los siete proyectos de tratados que estudió esa comisión, tres consideró desde luego aceptables, pues aunque en nada alteraban las comunes disposiciones del derecho internacional público universal en lo referente a exportaciones, importaciones y tarifas aduaneras, contenían prescripciones que los hacían diferenciarse de los caducos y que les daban mayor tinte de reciprocidad, y junto con otorgarse de modo recíproco el tratamiento de la nación más favorecida, da-

ban a Chile la facultad de conceder privilegios especiales a los productos de los demás países latinoamericanos. Esas eran las convenciones ajustadas en 1897, 1898 y 1899 con los Gobiernos del Japón, de Italia y de Dinamarca, respectivamente.

Con la exigencia de que nuestro país pudiese conceder favores especiales a los demás de la América Latina en los tratados de comercio con aquellos otros, comprendiendo ante todo a Suiza, se manifestaba la política que pensaba seguir Chile, en el sentido de intensificar las relaciones mercantiles con los pueblos latinoamericanos. El informe patrocina, para asegurar el éxito de la nueva política comercial, el fomento de las comunicaciones, de manera que llegasen a ser fáciles y económicas; se muestra partidario del privilegio nacional del cabotaje y concibe la idea de la creación de un Zollverein americano, para que el intercambio comercial se regulase sobre la base de una legislación aduanera especial para los pueblos de la América Latina. No cabe duda que estos pensamientos eran sustentados dentro de un conjunto de anhelos económicos progresistas. Más tarde hemos visto propiciar también la idea de un Zollverein con Bolivia y la libertad de Cordillera con Argentina.

En el examen de los otros cuatro proyectos de tratados, que se celebrarían con países latinoamericanos, a saber, con Brasil, Guatemala, Nicaragua y Ecuador, hace la comisión algunas consideraciones que debemos observar, por contener conceptos que a la luz de la historia financiera de los países civilizados, no siempre se mantienen en el marco de lo verdadero. Así, al referirse al régimen convencional del intercambio, o sea al que establecen los pactos comerciales, dice que «es ficticio, porque reposa sobre el despojo de las arcas

fiscales, que privadas en todo o parte del impuesto de internación, *base del sistema tributario en el mundo moderno*, se ven obligadas a reemplazarlo gravando en otra forma a los contribuyentes». Como base del sistema tributario en el mundo moderno, no ha podido considerarse al impuesto de internación. Entre nosotros lo fue sólo hasta la época de la guerra del Pacífico. En Inglaterra se cambió la política económica que exigía fuertes derechos de internación al trigo y otros productos, dentro de la primera mitad del siglo XIX (1842), pasando a ser base de su sistema tributario el impuesto a la renta.

Tampoco estimamos exacta la aseveración que hace en seguida de que se puede establecer «sin temor de incurrir en errores, que no son los impuestos de internación los que hasta hoy han detenido las corrientes del comercio entre los países latinoamericanos, sino las dificultades o la carestía de los fletes». El estudio del comercio exterior de los países y de la América Latina nos dice que es el carácter de la producción de ellos lo que los obliga a fomentar sus relaciones mercantiles no con estos países, sino con los de ultramar, en donde existe un mercado suficiente de consumo para ellos. Chile lleva su salitre, la Argentina y el Uruguay sus carnes y trigo, el Brasil su café y su azúcar, Bolivia sus metales, etc., etc.

Y como los productos se pagan con productos, las corrientes del comercio en esa dirección son incontrarrestables. Podría hacerse, sin duda, la excepción del Perú; es, sin embargo, un caso tan pequeño y aislado, para darle mayor importancia. Las dificultades o la carestía de los fletes son de seguro un gran factor de entorpecimiento en el fomento del intercambio recíproco de productos en estas repúblicas; pero no es el

único ni el principal. El informe de la comisión constata el hecho verídico de que el 97.9% de las exportaciones chilenas, iba en el tiempo en que se redactó, a Europa y Estados Unidos y sólo el 2.1% a los países latinoamericanos.

El problema económico nacional era, así, un problema de producción y de transporte. Los tratados comerciales con los países latinoamericanos ofrecían el interés de propiciar un aumento de la producción de la República, buscando y ofreciendo nuevos mercados de consumo. Condición sine qua non era encontrar la reciprocidad. Con razón decía la comisión que «en la suspicacia, en la finura exquisita del interés comercial, es indispensable que una amplia y discreta ponderación de beneficios afiance y asegure la vida del tratado». Para ello se requiere, naturalmente, el estudio y el empeño de las partes por encontrarla. A esto se vincula el triunfo de los hombres y de los Gobiernos. No son siempre materias fáciles y sencillas. Muchas veces presentan los tratados, además, el peligro a que llama la atención el informe, de que se tornen desventajosos, por razón de alguna crisis inesperada en la producción nacional, que haga ceder a alguno de los resortes del equilibrio de la vida económica nacional. De aquí la importancia manifiesta de la determinación del plazo de duración de ellos. Un plazo demasiado corto no estimula a la producción, uno demasiado largo ofrece los peligros inherentes a las crisis de producción. Lo más prudente parece ser la libertad recíproca del desahucio, transcurrido un plazo fijado sobre la base del estudio de la situación y vida económica particular de cada Estado contratante, de modo que en lo posible se contrarreste la acción perturbadora de aquellos factores.

Entrando a considerar los proyectos de tratados con los países nombrados, recordaremos ante todo que en el comercio de Chile con el Brasil no había reciprocidad alguna, pues las importaciones de allí (café y yerba-mate sobre todo) ascendían a valores inmensamente superiores a las exportaciones hacia allá (frejoles, nueces, etc.). Las cifras correspondientes se encuentran en las estadísticas contenidas en las páginas anteriores de este trabajo. El informe de la comisión examina las cantidades de 1901, en que llegaron las internaciones de allí a $ 1.894,307 y las exportaciones hacia allá a $ 157,078. Constata con decepción la exigüidad del intercambio comercial de estos países: el Brasil importó ese año harina por un valor de $ 19.487,963 de 18 peniques, vinos por $ 13.684,813, trigo por $ 9 millones 171,206, etc., etc., artículos estos de que Chile es y puede ser gran productor; exportó, en cambio, café por un valor de $ 263.978,806 de 18 d., azúcar por $ 17.522,873, yerba-mate por $ 11.273,276, etc., etc. Chile importó café por un valor de $ 3.035,792 de 18d., yerba-mate por $ 1.546,563, azúcar por $ 4.066,249 (llegando los derechos percibidos en el azúcar a $ 2 millones 210,750 de 18 d.). Estos datos pudieran indicar las posibilidades que habría de intensificar el intercambio entre ambos países. La comisión, después de hacer algunas consideraciones sobre la posibilidad de fomento del intercambio, estimando, entre otros casos, que el comercio del vino chileno no tenía necesidad premiosa de aquellas franquicias, pues las leyes nacionales, al gravar fuertemente la internación de bebidas alcohólicas extranjeras, aseguraban al producto chileno el mercado nacional, llegó a la conclusión de que no debía insistirse en ese proyecto de tratado comercial.

No se armoniza con las leyes económicas el pensamiento con que el informe termina este examen, diciendo que «tendría más importancia y eficacia que el tratado en proyecto, el establecimiento de una línea de navegación regular, de carrera fija, de tonelaje suficiente y de fletes y pasajes económicos, que nos ligara con los puertos americanos del Atlántico». Insistimos en que esto no es armónico con el concepto económico, porque la actividad de una línea de vapores se mantendrá sólo como efecto de un intercambio positivo de productos, de un intercambio apoyado en las leyes y en los principios económicos de la conveniencia. Aunque los medios de comunicación y transporte fueron en un principio, en gran parte por lo menos, meros portadores de la cultura, hoy día, avanzada ésta en los países, son predominantemente el efecto de una explotación en marcha. Y esto rige de modo especial para los transportes marítimos. En ferrocarriles y caminos puede aún presentarse con frecuencia el caso contrario. Creemos que, a la vista de la desproporción del comercio recíproco, corresponde a nuestro deber el insistir en la celebración de un buen pacto comercial con el Brasil.

En el tratado con *Guatemala*, que había sido suscrito ad-referendum en 1900, se establecía la liberación de derechos de internación en Chile para los azúcares no refinados, el café, el tabaco en hoja, el cacao, el arroz, etc., de ese país; y en Guatemala los cereales, los vinos, el pasto, el afrecho, etc., de Chile. El intercambio comercial de ambos ha sido escasísimo: en 1901 alcanzaban las importaciones procedentes de ese país a $ 252,075 (casi en su totalidad café) y las exportaciones hacia allá a $ 16.295. Sin estimar de falta de interés el estudio de las posibilidades de aumentar el

intercambio comercial con Guatemala, creemos que hay más urgencia en dedicar nuestra atención a otras naciones latinoamericanas geográficamente más cercanas a Chile. Guatemala está destinada a tener vinculaciones económicas estrechas con los países importantes que están a menor distancia, sobre todo con los Estados Unidos. La comisión aconsejaba igualmente desistir de ese proyecto.

El referente a *Nicaragua*, igual en su concepción al precedente, ofrecía interés mucho menor, pues el intercambio era demasiado reducido: las importaciones de 1901 (maderas finas) habían llegado a $ 2,776 y las exportaciones (vino principalmente) a $ 3,904.

Importancia podía tener el proyecto de tratado con el *Ecuador*, de donde importábamos en 1901 café por valor de $ 1.200,818 de 18 d., y cacao, caña y azúcar por unos 100,000 pesos; y a donde exportábamos frejoles, lentejas, mantequilla, pasas y queso por un valor aproximado de $ 150,000 de 18 d., llegando el total a sólo $ 405,966. El proyecto liberaba del pago de derechos de internación en Chile a los azúcares y el petróleo no refinados, al tabaco en hojas, al café, al cacao, etc., ecuatorianos; y en el Ecuador a los vinos, a la chicha, al guano, salitre, bórax, etc., chilenos; pero el tratado principiaría a regir desde que se estableciese *la navegación directa a vapor* entre los dos países, lo que, como hemos observado al tratar del proyecto de tratado con el Brasil, no se concilia con los principios de la economía actual. La comisión no lo estimó aceptable por falta de reciprocidad, pues el total del consumo ecuatoriano de artículos que pudiese suministrar la agricultura y la industria chilena era estimado en 1901 en 799,180 sucres de 24 d., cantidad muy in-

ferior a la que nuestro país alcanzaría a importar de allí, que podría pasar de $ 8.000,000 de 18 d.

Pero los interesantes estudios hechos por la comisión no se detienen sólo aquí, sino que comprenden también las relaciones comerciales con el Perú, la Argentina y el Uruguay. Sobre la balanza de comercio con el *Perú*, hemos hecho ya observaciones en cuanto a su desequilibrio, debido principalmente a la situación creada con la guerra del Pacífico. En 1901 las importaciones procedentes de ese país llegaban en el azúcar prieta a $ 3.986,052, en el café a $ 383,270, en el carbón de leña a $ 169,636, en el arroz a $ 109,786, en total a $ 4.905,847; y las exportaciones de Chile hacia allá, en charqui a $ 136,108, en frejoles a $ 40,578, en animales caballares y mulares a $ 104,290, en queso a $ 32,088, en total sólo a $ 920,000. ¿Cuál era la causa de esa falta de reciprocidad en las relaciones comerciales? La fundamental, generadora de todas las demás, era, sin duda, la malquerencia con que nuestros vecinos del norte nos han mirado por razón de los resultados de la guerra del 79. El trigo chileno pagaba allí, como anota la comisión, el 40% ad-valorem, como igualmente el afrecho, los frejoles y el pasto seco; los vinos el 65%, igualmente ad-valorem. La comisión llamaba la atención al hecho de que los azúcares peruanos internados a Chile pagasen sólo $ 6.50 por quintal métrico, cuando otros pagaban $ 14.35, lo cual significaba una protección al producto del Perú. No pertenecemos a los que estiman que los derechos al azúcar peruana están bien: estimamos que son bajos; pero creemos que se debe considerar también la circunstancia de que esos $ 6.50, que habían sido $ 7.00 desde 1893 a 1897, eran pagados por el azúcar impura (prieta), que se refinaba y se refina en Chile, en donde

queda, o debe quedar por lo menos, el producto del trabajo correspondiente, lo que no deja de tener sus ventajas económicas. En cambio, aquellos $ 14.35 eran pagados por el azúcar ya refinada y eran demasiado elevados. El problema que al respecto ha existido y existe es el de la carestía del producto en el consumo nacional. Ello proviene naturalmente del monopolio establecido en el país por causa del fuerte gravamen impuesto al azúcar refinada. El informe estimaba que la rebaja de tal impuesto «daría satisfacción a un deseo general». El mantenimiento de esa situación era, en su concepto, gravemente perjudicial al interés público, pues el azúcar es un artículo de alimentación y no de lujo.

Sobre la balanza de comercio con la *Argentina*, a que igualmente hemos llamado la atención, por el constante desequilibrio en contra nuestra, la comisión hace también observaciones importantes. En 1901 los valores de importación de procedencia argentina ascendieron, en animales a $ 3.251,005, en lana a $ 57,290, en sebo a $ 34,758, en grasa a $ 21,722, en total a $ 3 millones 385,091; y los de exportación chilena hacia allá, en nueces a $ 63,365; en tabaco a $ 42,643, en frejoles a $ 28,197, en todo a $ 222,967. Por el capítulo más valioso de las importaciones argentinas a Chile, o sea, de los animales, salió del país en los cincuenta y dos años transcurridos de 1850 a 1901 la suma de $ 204.807,596 de 18 d., llegando la exportación total de productos a la Argentina sólo a la cantidad de $ 14.39,622. La comisión estimaba que era prudente propender por todos los medios al fomento de la ganadería nacional, para contrarrestar la enorme sangría económica que por tal capítulo sufría el país. Pero para ello era menester no abolir los derechos de inter-

nación de ganado argentino, y en tal caso se producía el problema, que es siempre latente, de la carestía de la vida, en que padecen principalmente las clases bajas de la sociedad, por la exigüidad de sus rentas y fortunas. Es este, sin duda, uno de los puntos más interesantes que tenemos por delante en el terreno de la economía nacional. La solución satisfactoria del problema habrá de imponer sacrificios a la población. Está comprobado que la ganadería chilena prosperó grandemente al abrigo del impuesto protector que tuvo durante algún tiempo la internación por la Cordillera. Es de esperar que, pasadas las crisis económicas generales, continúe la protección eficaz a la crianza de ganado nacional, lo que obligaría quizás a la Argentina a dar facilidades a la introducción de productos chilenos, en apoyo de la reciprocidad que anhelamos.

Sin embargo, para conseguir ese fin de protección, es necesario tomar medidas conducentes, mejorando, por una parte, las condiciones de vigilancia en la Cordillera, pues el contrabando puede ejercerse en grande escala por las dificultades mismas que ella presenta, para lo cual sería menester organizar los puntos de entrada por la montaña; suprimiendo las exenciones, por otra; e interesando, por la otra, directamente al agricultor. La comisión llamaba, entre otros casos, la atención al hecho de que, estando exenta del impuesto la internación de terneros, se importaron en 1901 por Antuco 4 machos, 3 hembras y 3,169 terneros libres, y por el paso de Lonquimay 300 machos, 605 hembras y 17,287 terneros libres. Termina al respecto manifestando la certidumbre de que el territorio de Chile puede producir el total del consumo nacional de carne.

Ciérrase el informe llamando la atención al déficit que deja igualmente nuestro intercambio con el *Uru-*

guay. Chile importó en 1901 productos uruguayos por valor de $ 1.422,244, llegando la yerba-mate a $ 613,745, el sebo a $ 500,772 y la grasa a $ 289,968; y exportó hacia allá por un total de sólo $ 600,441, contribuyendo las nueces con $ 237,475, los frejoles con $ 182,844, las lentejas con $ 59,570, los garbanzos con $ 37,045 y los descarozados con $ 37,945.

El estudio hecho por esa comisión sobre las relaciones comerciales de Chile con los países latinoamericanos mencionados constituye una iniciativa de valor y un buen ejemplo para los hombres que más adelante han debido dirigir sus pensamientos y las actividades del Estado hacia la consecución de los altos fines de mejoramiento de la vida económica nacional en cuanto depende de la prosecución de una política comercial oportuna y eficaz. Le debemos, sin embargo, hacer la objeción de ser en general más de crítica o censura de lo ya hecho o insinuado, que de construcción u organización de lo que debía hacerse, sin que esta observación la formulemos con el carácter de absoluta, pues a veces hace proposiciones concretas. Estamos seguros de que si hubiera economizado un poco el pesimismo con que tan a menudo aparece en el informe y hubiera perseverado en el terreno de esos tratados comerciales, patrocinando medidas positivas, el país habría tomado al respecto un rumbo diverso al del laissez faire laissez passer que ha seguido.

En materia económica y financiera de orden interno, correspondió a la Administración Riesco la dictación de una importante **ley sobre alcoholes,** problema acerca del cual se venía tratando desde algún tiempo atrás. La ley, que lleva fecha 18 de Enero de 1902, y la firma del Ministro Villegas, creó el organismo denominado *Administración del Impuesto sobre Alco-*

holes, que se encargaría de fiscalizar todo lo referente a esa materia, no pudiéndose establecer fábrica alguna de alcoholes sin dar aviso a esa oficina y sin comunicar los pormenores de su ubicación, de sus alambiques, cubas y recipientes, de su materia prima y producción. Prohibióse la internación de alcoholes no etílicos o vínicos. Estableciόse sobre la fabricación del alcohol *una contribución fiscal* proporcionada a la cantidad de alcohol absoluto, que llegó a 50 centavos por litro de 100° Gay–Lussac en los alcoholes fabricados en las destilerías industriales, contribución que se aumentaría en 10 centavos anualmente hasta llegar a un peso por litro, y a 40 centavos por litro en los fabricados en las destilerías agrícolas (las que destilan sólo los productos de la uva) de los residuos de la fabricación del vino, y a 30 centavos si fuesen extraídos del vino y de las chichas, llegando en igual forma que el anterior a un peso. La contribución se cobraría para las fábricas industriales por la cantidad de alcohol que indicasen los marcadores mecánicos continuos, de que estarían dotados los alambiques. Todos los locales de expendio de alcohol quedaban sujetos a la vigilancia de la policía y pagarían impuesto de patente, que fluctuaría entre $ 1,200 y $ 75, según fuese la clase y el departamento.

Con fines de beneficencia, se concedió permiso a los hipódromos para mantener *apuestas mutuas*, fijándose el beneficio que pudiese reportarles, en el 10% de los fondos acumulados para ellas, pero asignándose la mitad a la Junta de Beneficencia de la ciudad cabecera del departamento respectivo. Para el mejoramiento local, se acordó también la inversión de cien mil pesos en establecer desinfectorios públicos en varias ciudades de la República.

Con fines de fomento industrial, se concedió una

prima de tres centavos por cada kilo de ácido sulfúrico de 60° Beaumé que se produjese en el país. Por ley de 1906 se concedió a las fábricas nacionales de azúcar de betarraga una prima de 80 centavos por cada 100 kilos de betarraga sacarina elaborados por ellas. Había una fábrica en Parral y se trataba de estimular la fundación de otras. Esa interesante ley, que como Ministro de Hacienda lleva la firma de Don Belfor Fernández, estableció también derechos específicos para los azúcares que se internasen a Chile, siendo de $ 13.35 por cada 100 kilos de azúcar refinada; $ 10.40 por igual cantidad de azúcar blanca; $ 7.50 por igual cantidad de azúcar granulada; y $ 6.60 por los azúcares impuros (chancaca o concreto). En los dominios del salitre, se autorizó la enajenación en pública subasta de una gran cantidad de terrenos salitrales del Estado. Dictóse también una ley de constitución de la propiedad salitrera, en virtud de la cual las personas que se creyesen con derecho a pertenencias salitrales en terrenos eriales debían presentarse haciendo valer sus títulos dentro de cuatro meses.

Con iguales fines de fomento industrial, pero también agrícola y comercial, dispúsose en esa Administración gran número de medidas de orden ferroviario, empezándose por destinar $ 3.700,000 en reparaciones de la vía férrea y reconstrucción y afianzamiento de puentes. De trascendencia sería la ley de 14 de Febrero de 1903, que autorizaba la contratación por propuestas públicas de la construcción de **un ferrocarril que uniría a Chile con Argentina,** poniendo en comunicación la ciudad de Los Andes con Mendoza. El Estado garantizaría por veinte años el interés del 5% sobre el capital invertido de £ 1.500,000, y el concesionario, una vez terminado el ferrocarril, estaría obli-

gado a venderlo al Estado, si éste lo exigiese, dentro del plazo de cinco años y por un precio que no excediese del capital cuyos intereses se garantizasen, más un 10%, debiendo, además, respetar las convenciones que celebrase Chile con la Argentina relativas a la explotación y tráfico de la línea.

Esta ley, que lleva la firma de Don Elías Fernández Albano, y que se dictaba en días en que se estimaba que había base económica suficiente para realizar la obra en los lugares inmediatos a la capital y al centro del país, era la expresión de un anhelo largos años sustentado. Hiciéronse los trabajos, a cargo del concesionario señor Clark, desde 1906 a 1910, año este último en que se rompió el túnel de la cumbre, de 3,039 metros de largo, en la línea divisoria. El trecho que correspondió a Chile fue de 70.5 kilómetros, y el que correspondió a la Argentina de 180 kilómetros.

A las poderosas dificultades de orden técnico con que debía tropezar un ferrocarril que atravesase la ancha, elevada y escabrosa Cordillera de los Andes, hubieron de agregarse las de orden económico derivadas de la existencia de una población escasa en los países que pondría en comunicación (5 habitantes por kilómetro cuadrado en Chile y 3 en la Argentina), siendo, además, relativamente reducido el intercambio comercial de ellos, por haberse dedicado hasta ahora de modo principal a la exportación de sus productos a Europa y Estados Unidos, tomando los argentinos la vía atlántica y los chilenos la vía del Pacífico. Así se explica, como lo hemos detallado en el trabajo sobre «Nuestros problemas económicos y el tráfico nacional», que el transporte por la vía ferroviaria transandina haya sido siempre modesto, lo cual debe incitar a obrar con grande empeño y perseverancia en una

política ferroviariá transandina capaz de llegar a obtener una explotación favorable y un porvenir venturoso en esta obra y en el intercambio económico transcordillerano.

Al año siguiente de la dictación de la ley ferroviaria anterior se reorganizaron los resguardos de Cordillera, formando con el personal que tenían un cuerpo movilizable capaz de ejercer mejor vigilancia. A los ferrocarriles del Estado se proveyó de galpones-bodegas en sus estaciones, para lo cual se destinaron $ 750,000. Destináronse también sumas para el pago de obras ejecutadas en los ferrocarriles de Serena a Rivadavia, de Alcones a Pichilemu, de Temuco a Carahue y de Antilhue a Loncoche. Concedióse, además, permiso para construir y explotar el ferrocarril de Quintero a la línea central, a la altura de Nogales, y se dieron fondos para estudiar la sección del ferrocarril longitudinal comprendida entre Arica y la línea de Antofagasta a Bolivia, como asimismo la vía de Antofagasta a Mejillones y de Iquique a la frontera boliviana, el último de los cuales no podría realizar.

Por último, y después de haberse firmado entre Chile y Bolivia, con fecha 24 de Enero de 1906, sobre la base del tratado de paz de 1904, un protocolo comercial que disponía que mientras el Gobierno de Bolivia realizaba su propósito de cancelar las franquicias de que gozaban los productos peruanos, los artículos chilenos que se importasen a Bolivia y viceversa gozarían de la exención de derechos de aduana en uno y otro país, se acordó contratar un empréstito que produjese hasta la suma de £ 2.200,000 para construir **el ferrocarril de Arica a la Paz.** Los bonos que se emitirían tendrían una amortización anual de 2% y un interés no superior a 5%. La ley correspondiente lleva

fecha 21 de Febrero de 1906 y la firma del Ministro Don Federico Puga Borne. Este ferrocarril, que debía «estrechar las relaciones políticas y comerciales entre ambas repúblicas», fue construído por Chile sobre la base del tratado de paz celebrado con Bolivia en 1904, que puso término al pacto de tregua de 1884. Concluyó la obra en 1913. Como base económica fundamental tiene el movimiento de las riquezas minerales de Bolivia. Es, por lo demás, la vía más corta de salida al mar: 416 kilómetros (la línea que sale por Mollendo, en el Perú, tiene 850 kms., la que sale por Antofagasta 1,157 kms.).

En otro orden de materias, y con el fin de controlar las finanzas municipales, se crearon en 1902 algunos cargos de inspectores de tesorerías municipales. A causa del mayor poder financiero que había dado la ley de 1891 a las Municipalidades, esos funcionarios se hacían necesarios. Del dominio de la administración financiera fiscal fue, en cambio, la medida tomada en 1904, ocupando igual puesto Don Ramón E. Santelices, en virtud de la cual se creaba *la Tesorería de Chile en Londres*, anexa a la Legación. Esa tesorería debía servir de intermediaria en los pagos del personal del país en el extranjero y recibir cuenta de los emolumentos que percibiesen los cónsules de profesión y elección.

En ese año se dictó también una ley que reglamentaba el establecimiento de las compañías extranjeras de seguros en el país, para lo cual se exigía autorización del Presidente de la República. En materia de seguros, queda aún mucho por hacer, sobre todo cuando se toma en consideración que la institución es de trascendencia social, en que el Estado debe intervenir de

modo esencial, como ocurre aquí en Sud América por ejemplo, en el Uruguay (1).

En materia de navegación, se acordó gravar a las embarcaciones que navegasen en las costas de Chile con *una contribución de faros y balizas*, que se devengaría sobre el tonelaje de registro una vez al año, pagando $ 0.60 de 18 d. por tonelada todas las naves a vapor de procedencia exterior o que navegasen en las costas de Chile, cualquiera que fuese su nacionalidad; $ 0.40 las de vela, y $ 0.30 y $ 0.20 las a vapor y a la vela, respectivamente, que se ocupasen en el comercio de cabotaje. Esta ley lleva la firma del Ministro Don Aníbal Cruz. En cuanto a los puertos, existía por esos años el proyecto de realizar grandes construcciones en Valparaíso, asunto en que a mediados de 1905 celebróse un contrato entre nuestro Gobierno, siendo Ministro de Hacienda Don A. Subercaseaux Pérez, y el ingeniero Don Jacobo Krauss, en virtud del cual éste se comprometía a trasladarse a Chile con el fin de intervenir en la apertura de las propuestas pedidas para la ejecución de las obras marítimas, de informar sobre ellas y de prestar sus servicios.

Intensa había sido en 1904 **la fiebre de negocios industriales y comerciales.** El Ejecutivo había autorizado la existencia legal de 59 compañías anónimas, que representaron un capital de $ 93.663,900 y que se dedicarían a la explotación de frigoríficos, de minerales de cobre, de salitre, de carbón, de papel y cartón, de azúcar, de productos agrícolas y ganaderos, de crédito urbano y bancario, de seguros, de transportes marítimos y terrestres, de electricidad, de gas acetileno,

(1) Véase sobre el particular el «Banco de Seguros del Estado», publicado en Montevideo, y el «Monopolio del seguro por el Estado», publicado por Don Guillermo Epple, en la «Revista Chilena» de 1920, (págs. 472 y sigs.).

etc. Pero mucho mayor aún fue esa fiebre de empresas y negocios en 1905. Se creía, según el Ministro de Hacienda Don Joaquín Prieto Hurtado, «en la existencia de una considerable masa de capitales disponibles y en la inesperada manifestación de riquezas, prontamente aprovechables, y se organizaron sin discreción suficiente muy numerosas sociedades anónimas, con el objeto de crear negocios problemáticos». A causa de las muchas remesas que en pago de artículos de todo género hubieron de hacerse al extranjero, y de otros factores, el cambio desmejoró y osciló bruscamente, con todo lo cual, y la fiebre misma de negocios, se desarrolló una fuerte especulación.

Ese año se autorizó la existencia legal de 170 sociedades industriales y comerciales, con un capital social de $ 271.000,000. Las compañías ganaderas y agrícolas, que fueron representadas con $ 78.743,000 y £ 595 mil 500, llegaron a 29; las salitreras, que lo fueron con $ 9.700,000, £ 4.445,000 y Mcs. 16.320,000, alcanzaron a 23; las mineras, que lo fueron con $ 44.390,000 y £ 775,000, llegaron a 27; las bancarias, que lo fueron con $ 40.100,000, alcanzaron a 10; las auríferas, con $ 1.000,000 y £ 403,240, fueron 13; y diversas otras, que llegaron a 68. Las Memorias de Hacienda de 1905 y 1906, de los Ministros Don Julio Fredes y Don Joaquín Prieto Hurtado, traen un detalle de los nombres de esas sociedades, con su capital social y la cuota fijada para iniciar sus operaciones, cuota que en gran número de ellas era demasiado baja para dar seguridades de éxito. Gran parte hubo más tarde de zozobrar, con perjuicio de mucha gente.

A fines de 1904 se debía presentar de nuevo el *problema de la conversión*, a causa de cumplirse pronto el plazo fijado para ella. Pero el cuarto de siglo, con

excepción de tres años, que había vivido el país bajo el régimen del papel, hacía difícil la vuelta a la moneda metálica, porque los intereses se habían amoldado demasiado a las condiciones que creaba el circulante fiduciario, sin ser ajeno a ello el hábito de la especulación. Sólo la tenacidad de un Gobierno que cifrase su gloria especialmente en la obra de concluir con el curso forzoso, podía ejercer influencia favorable para llegar a la realización de ese ideal. Por otra parte, los ahorros y depósitos que para la conversión debieron hacerse, no lograron llegar a una suma suficiente, de manera que, además de las dificultades que oponían los intereses creados, existía la de la insuficiencia de los medios de reemplazar el billete por el oro.

No era extraño, así, que habiendo falta de recursos para satisfacer nuevas necesidades, cumpliéndose el plazo de postergación de la conversión y obedeciendo a una política inflacionista que tenía fuerte mayoría en las Cámaras, se la volviese a postergar y se lanzase una **nueva emisión,** que esta vez fue de $ 30.000,000. La ley lleva fecha 29 de Diciembre de 1904 y la firma del Ministro Don Ernesto A. Hübner. Prescribió que de esa suma se invirtiesen dos tercios en adquirir bonos de la Caja de Crédito Hipotecario, los que unidos a otros fondos depositados en la Casa de Moneda, se mantendrían preferentemente afectos al servicio de interés y amortización de la deuda interna del Estado. Dispúsose también que se constituyese un fondo de garantía y de conversión para la totalidad de la emisión fiscal, compuesto de $ 22.907,513 de 18 d. existentes en la Casa de Moneda, de $ 14.939,040 de 18 d. existentes en arcas fiscales de la venta de los acorazados «Constitución» y «Libertad» y de otras partidas menores.

De trascendencia local fue la ley de 1906 que autorizó la contratación, en licitación pública y a precio alzado, hasta por la suma de £ 1.500,000, la ejecución de numerosas obras de mejoramiento, como ser los trabajos de defensa de la ciudad de Valparaíso contra las inundaciones producidas por las aguas lluvias, el alcantarillado y la provision de agua potable de numerosas ciudades. Al mismo año pertenece la ley que creó los **consejos de habitaciones para obreros,** destinados a favorecer la construcción de habitaciones higiénicas y baratas para la clase proletaria, a sanear las que se destinasen a ese objeto, a dirigir las que ellos mismos construyesen con los fondos donados, legados o destinados por el Estado para el objeto y a fomentar la formación de sociedades de construcción de tales habitaciones. Esta importante ley de mejoramiento social obrero, que creó el Consejo Superior de Habitaciones, presidido por el Intendente de Santiago, lleva como la anterior, la firma del Ministro Don Miguel Cruchaga.

Después de dictarse en ese año una ley sobre acuñación de moneda de plata, por la cantidad total de $ 4.500,000, se lanzó con fecha 23 de Mayo de 1906, firmándola como Ministro de Hacienda don Joaquín Prieto, **otra emisión de billetes** fiscales de curso forzoso, esta vez por $ 40.000,000. De esa suma se destinaron veinte millones a las obras previstas por la ley de Febrero de igual año, que autorizaba su ejecución hasta por la suma de £ 1.500,000, y al ferrocarril de Arica a La Paz, para el cual se había autorizado la contratación de un empréstito de £ 2.200,000. Los otros veinte millones estaban destinados a ser tomados por los bancos y por los particulares por igual cantidad en oro sellado o en letras sobre Londres. La política infla-

cionista estaba en su apogeo. En el país flotaba aquel ambiente febril de fundación de empresas de toda clase, que luego se derrumbarían con estrepitoso aparato.

Tócanos ahora examinar el desarrollo de las **rentas nacionales** ordinarias que, aunque lento en los primeros años del período, experimentó notable alza en los últimos, llegando

	Oro de 18 d.	En m/c.
En 1901 a.	$ 71.955,129.32	$ 23.764,384.10
» 1902 ».	71.257,231.57	23.264,624.98
» 1903 ».	79.089,920.86	28.263,123.12
» 1904 ».	82.596,860.43	27.611,873.95
» 1905 ».	90.636,701.56	33.222,447.82

Habiendo llegado el monto de los gastos de 1901 a $ 40.857,885.92 de 18 d. y $ 90.056,104.02 m/c. y tomando en consideración el sobrante del año anterior y las entradas extraordinarias de ése, las cuales, reducidas a oro de 18 d., alcanzaron a unos catorce millones de pesos, el año financiero arrojó un déficit de $ 2.277,663.54. Superávit hubo, en cambio, en el siguiente, en que con un gasto total de $ 134.263,366.55 y una entrada extraordinaria de veintitrés millones de pesos, quedó un sobrante de $ 1.958,152.52. El impuesto sobre alcoholes rindió en 1902 la cantidad de $ 1.063,252.05. Al año siguiente llegó a $ 1 millón 434,598.84, invirtiéndose en gastos $ 1.219,948.76, suma abultada que encontraba su explicación en los egresos por adquisición de elementos e instalaciones de servicios pertenecientes en gran parte al período anterior. En los hechos financieros de 1902 hay que anotar la circunstancia de que de los fondos de conversión se tomaron veinte millones de pesos para gastos extraordinarios de guerra y marina. Superávit tam-

bién hubo en el ejercicio financiero de 1903, en que los gastos ascendieron a $ 38.760,251.43 de 18 d. y $ 84.395,830.01 m/c. y la entrada extraordinaria a treinta y tres millones de pesos.

En el aumento de las rentas ordinarias de 1903 participaron los derechos de internación con un 14%, los ferrocarriles con 12.85%, los derechos de exportación con 9.35% y el impuesto de alcoholes con un 7.80%. El Ministro de Hacienda, Don Maximiliano Ibáñez, poseído de sana previsión, protesta en la Memoria de 1904 del hecho de que el Estado consumiese «todas sus rentas ordinarias y aún aquellas que tienen con toda evidencia el carácter de transitorias, como son las que produce la exportación del salitre, en servicios indispensables», sin excluir de éstos a los empleos y pensiones innecesarios. Encontraba esa forma de gastos sólo aceptable en obras materiales de grande aliento, como las del puerto de Valparaíso, los ferrocarriles, los muelles, etc.

Déficit volvió a producirse en 1904: considerando, además de los ordinarios, los recursos extraordinarios (unos veintisiete millones de pesos) y el aumento que se hizo de los fondos de conversión en $ 16.346,553, el déficit llegó a $ 1.227,921.64. Al año siguiente hubo de nuevo un superávit, pues se refrenaron los gastos, que llegaron a $ 136.326,748.66, y aumentaron las entradas ordinarias por los derechos de exportación e importación; las extraordinarias alcanzaron a unos quince millones. El detalle de las rentas ordinarias de 1905 fue el siguiente:

Derechos de internación.	$ 31.109,903.55	oro de 18d.
Derechos de exportación de salitre .	56.645,288.98	» »
Derechos de exportación de yodo. ..	687,840.83	» »
Derechos del 10% sobre alcoholes ..	121,298.56	» »

Resguardos de Cordillera	935,116.00	oro de 18d.
Faros y balizas	536,498.21	» »
Derechos consulares	288,223.52	» »
Otras	312,531.91	» »
Derechos de internación	270,733.35	m/c.
Derechos de movilización de bultos	960,540.63	»
Impuesto sobre alcoholes	1.429,539.67	»
Papel sellado, timbres	917,308.72	»
Estampillas postales y telegráficas	1.498,369.47	»
Telégrafos	802,736.99	»
Utilidad de la Casa de Moneda	12,353.84	»
Productos de los ferrocarriles	20.978,332.98	»
Redención de censos	1.174,415.68	»
Contribución de Cías. de seguros	112,728.98	»
Otras	5.065,387.49	»

De trascendencia en el monto de las entradas principales para el porvenir habría de ser la celebración del Congreso Azucarero de Bruselas de 1902, a causa de la íntima relación que guardaba la producción de azúcar de betarraga con el consumo de salitre. Tomóse ahí el acuerdo de abolir las primas que se daban a la producción y exportación de azúcar y de limitar el recargo fiscal sobre el monto de los impuestos de importación del azúcar extranjera y demás gravámenes a 6 francos los 100 kilos en la refinada y 5½ francos en las demás. Alemania iba en camino de robustecer eficazmente la industria del azúcar de betarraga, llegando a ser el principal productor de ella y el principal consumidor de nuestro salitre. Los nuevos remates de terrenos salitrales en Chile, que estimularían la producción de nitrato, eran portadores de fundadas esperanzas de mayor desarrollo salitrero y de rentas nacionales en el futuro próximo.

La cuantía y la forma en que estas últimas se habían producido en el período que examinamos debían estar necesariamente en estrecha unión con las condiciones de desarrollo del **comercio internacional,** en el cual

notamos en sus valores totales estagnación o escaso aumento en los primeros años, pero fuerte progreso en los últimos. En pesos oro de 18 d. las sumas llegaron:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1901.....	$ 171.844,976	$ 139.300,766	$ 311,145,742	15.87 d.
1902.....	185.879,965	132.428,204	318,308.169	15.18
1903.....	194.130,402	142.470,569	336.600,971	16.62
1904.....	215.997,784	157.152,080	373.149,864	16.37
1905.....	265.209,192	180.596,418	453.805,610	15.62

Malas cosechas en la agricultura nacional obligaron en 1901 a importar trigo y harina de Estados Unidos y Australia por más de 80,000 y 40,000 toneladas, respectivamente, y por un valor de $ 8.560,000. En las exportaciones de 1902 aparece la extracción de moneda chilena al extranjero con un valor de $ 16.349,514, cantidad considerable que provenía del giro hecho contra el fondo de conversión, que fue entregado a la circulación a causa de las dificultades por que atravesaron las relaciones internacionales de Chile, situación de incertidumbre que se normalizó por tratados del mismo año. La producción de trigo y harina había mejorado: ese año se exportó por valor de $ 2.595,000 y $ 371,000, respectivamente.

Aumento general hubo ya en 1903. En la exportación llegó el salitre a $ 142.323,734, el cobre en barra a $ 16.975,035 y el trigo a $ 5.386,355. En la importación aumentaron las materias textiles y sus manufacturas en $ 44.997,943 y los minerales en $ 23.509,736. Mayor fue el aumento en 1904: la exportación de trigo llegó a $ 7.030,213 (en 1905 bajó de nuevo, llegando a $ 1.120,000) y la de salitre a $ 160.508,620. Mucho mayor lo fue en 1905, sobrepasando al anterior en $ 80.655,746; en las exportaciones figuró el salitre con $ 184.421,000, participando

en él por primera vez el Japón con 124,000 quintales; en las importaciones, la maquinaria para la industria salitrera con $ 7.395,000, los motores en general con $ 1.355,000, las máquinas para diversas industrias con $ 807,000, las máquinas para alumbrado eléctrico con $ 953,000 y las para diferentes otros objetos a sumas también considerables. He aquí el detalle de la balanza comercial de 1905:

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 101.321,794	$ 71.120,129
Alemania	73.154,739	47.587,686
Francia	22.321,590	14.225,817
Bélgica	4.507,782	2.653,693
Italia	4.047,943	5.118,697
Holanda	3.154,333	35,851
España	1.825,902	1.719,225
Japón	1.371,305	41,713
Australia	653,939	7.566,663
Turquía	.....	29,258
Otras	1.120,130	4.326,113
Naciones americanas		
Estados Unidos	42.804,991	18.867,949
Perú	5.009,627	4.945,432
Argentina	1.552,578	6.333,572
Bolivia	1.176,144	59,933
Uruguay	376,060	1.081,557
Brasil	342,055	798,061
Ecuador	291,816	933,099
Panamá	133,469	333,115
Guatemala	31,797	68,250
Cuba	.....	189,488
Otras	11,598	52,494
De la pesca	.....	507,622

A las observaciones ya hechas sobre el comercio exterior de ese año debemos agregar algunas otras, necesarias para juzgarlo en su composición. Del estudio de los pormenores de la exportación de 1905 resulta que entonces se exportó por $ 23.386,635.29, dirigién-

dose la mayor parte, como no era de extrañar, a Alemania. Los valores en letras destinadas al servicio de la deuda externa fueron de $ 13.000,000; los del servicio público de Chile en el extranjero, de $ 4.000,000. Es evidente que para apreciar la exportación efectiva de productos al extranjero, el conocimiento de estos datos es de importancia fundamental, pues representan valores que es menester descontar de la suma general de exportaciones, para obtener una balanza comercial que siquiera se aproxime a la realidad.

Nada más difícil que leer o interpretar justamente los valores de una balanza comercial. Cifras totales de exportaciones e importaciones, en que, por ejemplo, las primeras sobrepasen fuertemente a las segundas, como el caso del año 1905, suelen representar una mera ilusión en el intercambio legítimo de productos del comercio internacional. Y esto, como hemos dicho en otra ocasión, ocurre de modo especial en los años en que la economía general de una nación empieza a complicarse más y más por sus relaciones con el extranjero. Así, a esos cuarenta millones que debemos rebajar de la exportación real, deberíamos agregar los valores que representan los fletes de las compañías extranjeras de navegación, que no sólo han ejercido el comercio de cabotaje en condiciones mucho más favorables que las naves nacionales, sino que han sido las únicas que han traído y llevado los productos objeto de intercambio. Deberíamos agregar igualmente los valores que han representado las ganancias de las compañías extranjeras de ferrocarriles en el país, que, sobre todo en la región salitrera, han arrojado considerables utilidades. Deberíamos agregar, por último, los valores que salen del país como intereses de los capitales extranjeros invertidos en la industria nacional, especialmente en las

salitreras, que han producido beneficios sencillamente cuantiosos.

Si todo esto tomamos en cuenta, como lo menciona también el Ministro Prieto, y rebajamos de la cifra de las exportaciones que aparecen en las estadísticas los valores que realmente representan, veremos que la extracción verdadera de productos al extranjero es mucho menor que la anotada por la estadística y que las cifras de las importaciones son susceptibles de ser aumentadas en cantidades mayores o menores, según sea mayor o menor el contrabando que se puede ejercer en la internación de productos: piénsese un instante en lo que ocurre o puede ocurrir a través de la Cordillera por el Este, en nuestros costas por el Oeste y aún en Tacna por el Norte. Una balanza muy activa y favorable, como la estimaban los mercantilistas, puede y llega a ser muy pasiva y desfavorable por los hechos que dejamos consignados. Y en ello es menester pensar, y es menester precaver y evitar el mal. De otro modo las finanzas y la riqueza nacional sufren los más serios trastornos.

Los **precios corrientes** de 1905 habían experimentado, en comparación con los del quinquenio anterior, un considerable aumento: los 73.6 kilos de trigo valían, por término medio anual, $ 12.10; los 46 kgs. de harina, $ 7.90; los 92 kgs. de frejoles, $ 15.20; los 46 kgs. de papas, $ 3.35; los 73.6 kgs. de maíz, $ 6.25; los 71.3 kgs. de cebada, $ 4.80. Tomamos estas cifras de la «Revista Comercial».

La **deuda pública** exterior llegaba a fines de 1905 a £ 17.599,300, o sea, a $ 234.657,333.33. La interior a $ 6.467,100 en oro y a $ 107.168,761.59 en moneda corriente, cifras que daban por cabeza de población $ 112.00 en su total general. Los *fondos de conversión*

ascendían a $ 46.701,672.04, proviniendo de la venta de acorazados $ 14.939,040.

Juicio crítico del conjunto de la labor económica de la Administración Riesco.

El Gobierno de Don Germán Riesco, primero de la República en el siglo XX, puede legítimamente caracterizarse en el orden político-económico por sus iniciativas de política comercial, por el espíritu febril de empresas industriales y comerciales que durante él se manifestó y por las actividades desplegadas en materia de ferrocarriles internacionales. En el orden financiero, sus características son los superávits casi constantes de las arcas fiscales y la inflación del crédito.

Fue, sin duda, un hermoso ejemplo, que no tuvo, desgraciadamente, la resonancia que debió haber tenido, en beneficio de los intereses económicos de la población, el que dió esta Administración con sus preocupaciones acerca de la necesidad y conveniencia de celebrar tratados comerciales preferentemente con los países sudamericanos, ya que los celebrados con las naciones europeas principales no daban los resultados que podían esperarse, por las condiciones poco equitativas que envolvían para Chile. Y no tuvo mayor resonancia, porque el país, poco habituado a pensar en problemas de política comercial exterior, no ofrecía la preparación que significa el que los dirigentes, la prensa y la opinión pública discutan sobre el particular con alguna frecuencia e interés especial.

Estudios de la clase del informe de la comisión nombrada por esta Administración para dictaminar sobre las ventajas o desventajas de celebrar tratados determinados, son de valor en todo tiempo, a causa de las

iniciativas que encierran y las preocupaciones que revelan: son iniciativas y afanes que, desentendiéndose de las incógnitas y maquinaciones de la política interna, abandonan el estrecho terreno de lo vulgar, para caer en los amplios dominios de las perspectivas económicas de mayor vuelo. Todo examen que se haga de las condiciones en que se desarrolla la vida económica de los países más cercanos, para meditar en las posibilidades de un intercambio conveniente de productos, pertenece a los mejores esfuerzos que se desplieguen en la aspiración de encarrilar al país por la senda de su adelanto material.

Manifestación de una vida de tranquilidad nacional y de esperanzas económicas en este Gobierno fue el hecho de haberse fundado durante sus últimos años tan numeroso número de sociedades industriales, hecho que no había ocurrido antes ni que ha vuelto a presentarse después. El espíritu de empresa se desarrolló en forma inusitada, rompiendo, podría decirse, los moldes de la cordura, pues se idearon y crearon negocios que, por falta de base, terminaron pronto malgastando capitales y sembrando desconfianzas. Pero ello no afecta a la Administración del país, pues son emanaciones espontáneas de una población que en un momento dado se encuentra en una situación que no puede producir otros efectos. Conjurados los temores de conflictos internacionales e inflado y próximo a inflarse aún más el crédito por causa de emisiones, era natural que los habitantes fueran dominados por una verdadera fiebre de empresas. Tal ocurre sólo en períodos en que hay causas de expansión económica, esto es, cuando existe un bienestar fundado en la riqueza del momento. Y es imposible evitar sus consecuencias, que aparecen en verdaderas explosiones

de entusiasmo mercantil. Si muchas empresas fracasan ruidosamente, como entonces ocurrió, debe tenerse presente que el abuso en situaciones especiales nunca ha podido reprimirse con eficacia.

Digna de elogios, como en materia de estudios de política comercial con el extranjero, fue la actividad desplegada por el Gobierno de Riesco en lo referente a ferrocarriles internacionales. Dos leyes de trascendencia se dictaron en este respecto: la una, que amparaba de modo definitivo la construcción del ferrocarril transandino por Uspallata, en virtud de la cual tornóse éste en una realidad; y la otra, que autorizaba y ponía en ejecución los trabajos de apertura de la línea férrea de Arica a La Paz. De la primera de estas empresas de incremento comercial internacional, el Presidente decía en su Mensaje de 1.° de Junio de 1902 que en los deseos de estrechar las relaciones con la República Argentina, el ferrocarril transandino había de ser «el primer paso de esta grande obra de civilización y de progreso». Especial cuidado ponía el Presidente en el cultivo de las relaciones exteriores sobre bases de mayor acercamiento producido por el intercambio comercial. Igual punto de vista tuvo en la realización del ferrocarril de Arica a La Paz. Tanto Bolivia como Chile necesitan estrechar mutuamente sus vínculos económicos, para que lleguen a obtener el máximum de beneficios materiales. He ahí el éxito de toda política internacional.

En el orden financiero, fue peculiar de la Administración Riesco la formación de un superávit. Si, en efecto, prescindimos del año en que se hizo cargo de los destinos del país, hubo un sólo período financiero que arrojó déficit. Es evidente que tal circunstancia aliviaba las tareas ordinarias del Gobierno y signifi-

caba la solución de los problemas nacionales, que en la mayor parte de los casos son de trascendencia económica o financiera. Sin el propósito de hacer aquí una objeción a la Administración, porque no eran superávits exagerados, debemos llamar la atención a que si en el sentido indicado el superávit es ventajoso, no lo es en cuanto el Fisco retiene fondos que en manos de los particulares, de donde emanan, producen mayores intereses.

El comercio internacional experimentó en este período presidencial el notable incremento que se revela, primero, en las exportaciones, que fueron en 1901 de $ 171.844,976, y en 1905 de $ 265.209,192 oro de 18 peniques; y, después, en las importaciones, que de un valor de $ 139.300,766 en 1901, llegaron a $ 180 millones 596,418, igualmente oro de 18 d, en 1905. Este fuerte exceso de exportaciones sobre importaciones fue causa de que el cambio no sufriera, en su término medio, descenso digno de anotarse. Las rentas nacionales durante esta Administración subieron, como consecuencia esencial de los aumentos del comercio exterior, en sumas considerables: de $ 71.955,129.32 oro de 18 d. y $ 23.764,384.10 en moneda corriente de papel, a que llegaban en 1901, ascendieron a $ 90 millones 636,701.56 oro de 18 d. y $ 33.222,447.82 moneda corriente en 1905.

Característica de este quinquenio fue también la inflación del crédito. Las grandes emisiones de papel moneda de curso forzoso que se hicieron en sus postrimerías, debieron producir los efectos que les son peculiares, como el encarecimiento de la vida, aparte de hacer cada vez más difícil la vuelta al régimen metálico, por aumento de la deuda interna. Fue, este, sin duda, un acontecimiento económico inevitable, que

la historia financiera de la República no recordará en la forma en que recuerda los que ocurren en el sentido del afianzamiento de la moneda metálica.

A las espléndidas preocupaciones de política comercial exterior, a que hacíamos referencia al iniciar nuestro juicio sobre esta Administración, debemos agregar las plausibles iniciativas que tuvo en materia de política social interna. La creación del Consejo de Habitaciones Obreras da testimonio del espíritu de justicia y de los buenos propósitos abrigados por ese Gobierno en favor de las clases trabajadoras. Los fines de esa institución aparecerán siempre ligados a las benéficas aspiraciones de la Administración Riesco.

A las importantes obras ferroviarias que hemos mencionado, es menester agregar la actividad desplegada en pro de igual rama dentro de los límites del país. En su Mensaje de 1.° de Junio de 1904 se quejaba el Presidente de la falta de maestranzas adecuadas en los ferrocarriles, de la falta de bodegas y galpones para el abrigo de la carga, de la falta de edificios y cierros en muchas estaciones, de la falta de nuevas líneas telegráficas, de la falta de doble vía en los trayectos de mayor tráfico, de la falta de frenos de aire para los trenes de carga y de otros servicios e instalaciones que aún hoy pertenecen a los últimos adelantos en la materia. Y él se preparaba con interés para subvenir a esas necesidades, después de haber realizado diversas obras de tal naturaleza.

En las labores de trascendencia interna es necesario tener presente los muchos trabajos de carácter local que emprendió y realizó. Igualmente es menester tener presente el beneficioso paso dado con la aprobación de la ley de alcoholes, que pertenece a esa Administración. Con satisfacción decía el Presidente en el

Mensaje mencionado de 1.° de Junio de 1904 que ya había logrado uno de los fines de la ley: «dar salida por exportación a los vinos en cantidad importante y obtener su mejoramiento, ya que son llamados a reemplazar en porción considerable el consumo de los alcoholes». Y eran todos fines de vasto alcance los perseguidos y obtenidos por la Administración de Don Germán Riesco, que deja ligado su nombre a hechos económicos y financieros de trascendencia en la vida de la República.

15.—Vida económica de Chile durante la Administración de Don Pedro Montt (1906-1910)

Un político activo, que había prestado ya muchos servicios al país siendo Ministro de Estado y ocupando otros puestos de importancia, sucedió en el Gobierno de la República a Don Germán Riesco. Don **Pedro Montt,** a que nos hemos ya referido en sus iniciativas ferroviarias, llegaba a la elección presidencial rodeado del más justo prestigio. Sus condiciones de estudio, de capacidad, de energía y de carácter lo colocaban entre los más aptos para regir los destinos del país.

La época en que debía hacerse cargo de la Primera Magistratura no estaba desprovista de dificultades, sobre todo de orden económico, pues le sorprendía una intensa crisis, cuyo período de expansión había empezado unos dos años antes con la fiebre de empresas que hemos examinado, y cuyo período de depresión hubo de acelerarse por un fenómeno ajeno al poder y a la voluntad de los hombres, a saber, por el terremoto del 16 de Agosto de 1906. La situación de estiramiento en que se encontraba la vida industrial y comercial del país hacia mediados de 1906, las des-

ilusiones que en algunos sentidos se habían empezado a experimentar porque el éxito no coronaba los esfuerzos que se habían hecho ni las esperanzas que se habían tenido, y los considerables perjuicios ocasionados por aquel pavoroso acontecimiento sísmico, produjeron una angustiosa situación, que debía agravarse aún más con los efectos del pesimismo más o menos general que se había apoderado de mucha gente, producido no sólo por esos acontecimientos, sino también por las emisiones de papel-moneda, que no ofrecían mayores expectativas de mejoramiento. En 1908 el cambio internacional llegaba a un término medio anual de 9.625 peniques por peso.

Pero detengámonos, antes de entrar en otras consideraciones sobre el particular, a examinar las leyes y demás medidas a que se recurrió desde un comienzo para afrontar la situación y para mantener la actividad económica de la República en su mejor predicamento.

Durante los primeros tiempos hubo de proseguirse en la dictación de medidas encaminadas a atender las necesidades originadas por el terremoto, invirtiéndose sumas más o menos considerables en auxiliar a los empleados públicos damnificados y en reparar los edificios deteriorados, especialmente en Valparaíso. No era extraño que también desde los primeros meses se preocupase el Presidente en la construcción de vías férreas, cuyas iniciativas y labor eran ya conocidas al respecto. Con fecha 12 de Diciembre de 1906 se le autorizó, así, para contratar la de Osorno a Puerto Montt, que se terminó seis años después. Con este trecho quedaba unida toda la extensión del valle central de Chile, desde el puerto más austral hasta el más septentrional. En la idea de realizar la comunicación

ferroviaria de sur a norte, faltaba emprender la construcción del longitudinal de Calera a Arica. Más al sur de Puerto Montt, a causa de desaparecer el valle central, no hay posibilidades de tender líneas férreas, por lo menos longitudinalmente, pues el terreno se compone de montañas cortadas por numerosas y profundas entradas de mar, y no ofrece población por falta de colonización.

En el Gobierno de Don Pedro Montt aparecía como natural todo esfuerzo que se gastase por llevar a cabo aquella idea de unir la zona central con el norte por ferrocarril, y ya muy a principios del año siguiente debió autorizársele para invertir un millón de pesos en los estudios definitivos de la línea entre La Ligua y Arica, hasta que el 23 de Enero de 1908 obtuvo del Congreso la ley, firmada por el Ministro Don Joaquín Figueroa, que le permitía contratar a precio alzado la construcción y el equipo del que se llamaría **ferrocarril longitudinal.** Las obras no excederían de un precio de £ 7.500,000. Hubo fuerte resistencia por parte de la Cámara para realizar este proyecto. Si buscamos las causas de la oposición y de la tardanza general en la construcción, que aprovecharía diversos trechos de líneas ya construídos en la zona norte, encontraremos que ellas fueron el reconocimiento de un escaso valor económico de la línea, fundado en un doble sentido: por un lado, en que gran parte de las regiones que debía atravesar han sido pobres o han ofrecido una producción relativamente tan pequeña, que no la justificaban; por el otro, en que la vía marítima sería a largas distancias una competidora eterna del longitudinal, en especial en el transporte de carga. A esto había que agregar los grandes costos de la obra, por tener que atravesar los cordones transversales de la

Cordillera desde la cuesta de Chacabuco hasta la altura de Coquimbo y Serena.

Construído ese ferrocarril, el país ha contado con una línea central longitudinal de 3,150 kilómetros de extensión (de Pisagua a Puerto Montt); pero, al caracterizar la red completa de ferrocarriles chilenos, tenemos que reconocer: 1.° que los ferrocarriles perpendiculares a la costa tienen que ser en general los proveedores del cabotaje nacional, y 2.° que el ferrocarril longitudinal tendrá que sufrir siempre la competencia de tal cabotaje, irresistible a largas distancias.

Luego que se inició ese Gobierno, se concedió también permiso para construir y explotar un ferrocarril de Rancagua al mineral de «El Teniente» en la Cordillera de los Andes, destinado a servir a la explotación de las grandes minas de cobre ahí existentes; para construir y explotar una línea entre el establecimiento carbonífero denominado Los Ríos de Curanilahue y la costa; para contratar la construcción de un ferrocarril en la isla de Chiloé, entre Ancud y Castro, y para construir y explotar uno de Lebu a Los Sauces. Emprendióse igualmente (1907) la reorganización provisional del servicio de los ferrocarriles del Estado, fijándose las obligaciones, atribuciones y sueldos del personal, después de lo cual se autorizó la inversión de $ 8.000,000 en la prosecución de los trabajos ferroviarios. A principios del año 1908 se autorizó también la contratación de un *empréstito* de £ 3.000,000 con un interés del 5% y una amortización hasta de 1% anuales, para el pago de la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, pudiéndose emitir £ 2.000,000 en vales de tesorería, que serían cancelados con el producido del empréstito.

Creado ya en el Gobierno anterior el Consejo Superior de Habitaciones, se autorizó en 1907 la contratación de otro *empréstito* de $ 6.000,000 para la adquisición de terrenos y la construcción de habitaciones destinadas a obreros en ciudades de más de ocho mil habitantes. Fue esta una determinación simpática, que en su prosecución no habría de satisfacer sino necesidades concretas. En países, como el nuestro, en que las clases trabajadoras viven en tan deplorables condiciones, dominando la mayor ignorancia, reinando una pobreza extrema y faltando el aseo más elemental, todo sacrificio que haga el Estado en tal sentido reportará los mayores beneficios y será bien mirado por todo el que conozca la verdadera situación.

En materia de derechos aduaneros, se dispuso que los fósforos de madera pagasen un derecho específico de internación de veinte centavos por cada kilo de peso bruto; se concedió liberación de derechos de exportación a una partida de salitre destinado a la Argentina, con el objeto de atender a la propaganda del abono; se dispuso que los derechos de internación y almacenaje se pagasen en lo sucesivo en papel moneda, con el recargo correspondiente, ordenándose que éste fuese fijado semanalmente por el Presidente de la República; se suspendió (1907) por dos años el impuesto que gravaba la internación de ganado vacuno y ovino por la Cordillera; se redujeron progresivamente, hasta el 50%, los derechos de internación de los artículos manufacturados de tejidos de punto, de lino, de lana y tricote, las planchas acanaladas de hierro galvanizado, el calzado, los azúcares, las casas desarmadas; se ordenó que la plata en barra con ley de 5/10 o menos pagase un derecho de exportación de 40% sobre su valor; se dispuso que la leche con-

densada que se importase pagase un derecho específico de 38 centavos por kilo bruto de peso; y se declararon, por fin, en 1909, libres de derechos de internación los útiles y materiales necesarios para la instalación de la industria siderúrgica en el país hasta una suma aproximada a quinientos mil pesos de 18 d. La industria del hierro no ha dado hasta ahora los resultados que se esperaban, encontrándose, hoy por hoy, paralizada toda labor al respecto.

Para fomentar la **pesca,** se concedió a las embarcaciones de bandera nacional que se ocupasen exclusivamente en ella, una prima anual de quince pesos por tonelada de desplazamiento y diez por tonelada de pescado y marisco frescos que internasen para el consumo, no pudiendo exceder el monto de la prima de doscientos mil pesos al año. La ley, que lleva la firma del Ministro Don Gonzalo Urrejola y que ordenaba tomar disposiciones para reglamentar la pesquería y fomentar la industria, mandaba se considerase al producto de la pesca como carga de cuarta clase para el efecto de los fletes. A pesar de estos laudables esfuerzos, la industria de la pesca, que por las inmensas costas del país y la abundancia de peces, pudiera ser muy rica, no se ha establecido en la forma concebida.

Igualmente se acordó dar una prima de $ 16 durante los seis primeros años y de $ 8 durante los seis siguientes, por quintal métrico de lino producido y elaborado en el país, que se exportase.

Ocupando la Cartera de Hacienda Don Guillermo Subercaseaux, se acordó que, a partir de 1908, se cobrase en Tacna y Arica el impuesto sobre haberes muebles e inmuebles de 3°/₀₀ que establecía la ley de Municipalidades de 1891, y se declaró que las mercaderías introducidas por mar en Arica, quedasen afectas

durante ese año al pago de la contribución de mojonazgo y sisa.

Con fecha 27 de Agosto de 1907, se dictó una ley de mayor trascendencia, que contiene prescripciones importantes y que regula una serie de servicios de hacienda. Empezó por dar facilidades en el pago de los derechos de internación y almacenaje, el cual podría hacerse en oro o en papel moneda con el recargo correspondiente, recargo que sería fijado el cuarto día de cada mes por el término medio del mes anterior. Dispuso en seguida que la oficina de emisión entregase billetes fiscales de curso legal, en la proporción de un peso por cada 18 peniques, por los depósitos que se hiciesen en oro sellado en conformidad a la ley de 1895. Dispuso también la creación de la *Caja de Crédito Salitrero*, que tendría por objeto emitir bonos de 5, 6, 7 y 8% de interés, en oro, con hipoteca de propiedades salitreras pertenecientes a personas domiciliadas en Chile; por una ley posterior se la autorizó igualmente para emitir cédulas o bonos que correspondiesen a obligaciones de largo plazo con hipoteca de ferrocarriles en explotación. Dispuso asimismo la suspensión de la remisión al extranjero de los fondos destinados a la conversión del papel-moneda, mientras el cambio fuese inferior a 17 d.

En su artículo 14 ordenó la emisión de $ 30.000,000 en billetes de curso legal. Fue esta **la última emisión de papel-moneda.** Con las dos del reciente período inflacionista (1904 y 1906) y las existentes con anterioridad, la moneda de curso forzoso llegaba a 150 millones de pesos en el país. La emisión de ahora se invertiría en adquirir bonos de la Caja de Crédito Hipotecario. En el artículo 15 se autorizó la contratación de un *empréstito exterior* por £ 4.500,000 al 5%

de interés y una amortización hasta de 1% anual, debiéndose destinar su producido exclusivamente en garantizar el papel-moneda emitido por el Estado. Pero esta disposición fue derogada más tarde por ley de 30 de Agosto de 1909. El artículo 16 dispuso, además, la contratación de otro *empréstito* hasta por £ 3.000,000, al 5% de interés y una amortización de ½% anuales, pudiéndose emitir vales del tesoro a uno y dos años plazo, mientras se contratase este empréstito, de cuyo producido se destinarían £ 1 millón 100,000 a las obras del puerto de Valparaíso y el resto a la construcción de doble vía en el ferrocarril central, adquisición de equipo, otras obras de puerto, ferrocarriles transversales y otros gastos. El fondo de garantía y conversión de la emisión fiscal quedaba constituído con los fondos ya depositados en los bancos extranjeros, con el empréstito autorizado por el artículo 15 y con las letras hipotecarias que adquiriese el fisco en conformidad al artículo 14. Esta ley, que autorizaba una nueva emisión de papel-moneda y que tuvo su origen en el Congreso, fue resistida tanto por el Presidente de la República como por el Ministro Subercaseaux. Por nuevas leyes se ordenó acuñar diez millones de pesos en moneda de plata de 40, 20, 10 y 5 centavos, con ley de 4/10 de fino, y emitir vales de tesorería al portador y sin interés, que se entregarían a los bancos nacionales pagando éstos un interés inferior en 3% a los intereses y comisiones que ellos cobrasen a sus deudores. Estas obligaciones serían caucionadas con bonos de las instituciones exclusivamente hipotecarias. Para mejorar las condiciones de los empleados públicos, muy desfavorables en esos tiempos, se les concedió una gratificación general.

Estando próximo a expirar el plazo en que debía hacerse la *conversión metálica* y después de resistir el Presidente Montt con su veto la nueva postergación que se proponía por el Congreso, con fecha 30 de Agosto de 1909 se fijó el 1.° de Enero de 1915 para que se realizara, acordándose al propio tiempo incrementar los fondos de conversión con $ 500,000 oro de 18 d. mensuales, tomados de las rentas de Aduana, y con el producto de la venta de terrenos salitrales y magallánicos. En esta forma se substituyó el empréstito exterior de cuatro millones quinientas mil libras autorizado antes para completar esos fondos.

Con el fin de aumentar las rentas públicas y adaptar los derechos a las nuevas exigencias, se reformó a fines de 1909 el impuesto de papel sellado, timbres y estampillas, por una ley que, como la anterior, lleva la firma de Don Agustín Edwards. La reforma, sin embargo, fue modificada en parte a principios de 1910. También se modificaron en 1909 los aranceles consulares.

Las **rentas ordinarias** durante el quinquenio de esta Administración tuvieron el siguiente desarrollo:

Años	Oro de 18 d.	Moneda corriente
1906.....	$ 103.437,392.11	39.676,022.27
1907.....	96.586,766.21	65.399,776.95
1908.....	72.389,964.67	101.101,049.75
1909.....	73.729,045.08	103.816,039.22
1910.....	82.764,423.27	123.366,853.48

En los totales de entradas anuales hubo, así, un aumento constante. En el aumento de las rentas de 1906 sobre el año anterior figuraron los derechos de internación con $ 9.326,000. A los ingresos anotados de 1906, que fueron los ordinarios, hay que agregar

$ 17.976,310.85 oro de 18 d. y $ 20.000,000 papel, como recursos extraordinarios, estos últimos procedentes de la emisión fiscal. Las entradas extraordinarias de 1907 llegaron a $ 32.991,533.14; el ejercicio financiero arrojó ese año un *déficit* de $ 3.312,916.63.

El descenso considerable que experimentaron los ingresos ordinarios en oro en 1908, como el aumento de los en papel, se debe a la resolución tomada de que los derechos de internación pudiesen pagarse en moneda corriente. Las entradas extraordinarias de ese año fueron de $ 57,399.11 oro y $ 64.308,298.82 papel, arrojando el ejercicio financiero nuevamente un *pequeño déficit*, ascendente a $ 2.177,731.78.

La situación de rentas de 1909 permaneció más o menos estable con respecto al año procedente, pero aumentaron los gastos, produciéndose un *déficit mayor*, que llegó a $ 35.782,111.90 en billete, y que debe ser reducido en $ 9.005,143.81 oro de 18 d., que quedaron sobrantes.

Mucho mayores que en el precedente fueron los recursos ordinarios de 1910, incrementados con $ 45 millones 703,488.52 de entradas extraordinarias; pero ese año, año del centenario de la independencia del país, los gastos subieron a valores considerablemente mayores, produciéndose un *nuevo déficit*, esta vez por $ 41.834,392.28 en billete y $ 1.151,800.18 oro de 18 d. Tomando en cuenta la situación del año anterior, resultó en 1910 un *déficit total* en moneda corriente ascendente a $ 64.658,487.20, que se debió en esencial a la ejecución de obras públicas, característica del Presidente Montt en sus actividades públicas, y al fracaso de las finanzas de los ferrocarriles del Estado, que con las grandes emisiones de papel-moneda de los años 1904, 1906 y 1907 hubieron de sufrir

el grave trastorno de ver aumentados fuertemente sus gastos de explotación, por el encarecimiento general consiguiente a las emisiones, y mantenido el nivel de sus tarifas, si omitimos la pequeña alza de 30% que entonces experimentaron, alza que no correspondía ni con mucho al aumento de los costos de explotación. Los ferrocarriles tuvieron en 1906 una pérdida de $ 3.554,164; en 1907, de $ 20.506,407; en 1908, de $ 20.824,637; en 1909, de $ 11.567,498; en 1910, una de $ 10.486,167.

La composición de las rentas ordinarias de 1910 había tenido sus cambios con respecto a las anotadas en los períodos anteriores. He aquí su detalle:

Derechos de exportación y recargo del salitre	$ 79.665,417.23	oro de	18d.
Derechos consulares	1.203,600.30	»	»
Derechos de exportación de yodo	727,115.13	»	»
Derechos de faros y balizas	669,354.48	»	»
Otras	399,936.13	»	»
Derechos de internación	44.436,032.30	»	»
Producto del tráfico de ferrocarriles	47.455,724.57	»	»
Papel sellado	3.429,990.34	»	»
Derechos de timbres	674,098.77	»	»
Encomiendas postales	3.252,883.11	»	»
Fajas de impuesto	2.580,760.93	»	»
Estampillas postales	2.577,759.94	»	»
Impuesto sobre alcoholes	2.066,972.74	»	»
Derechos del 10% sobre alcoholes	256, 349.43	»	»
Derechos de movilización de bultos	1.590,767.29	»	»
Telégrafos	1.624,845.71	»	»
Casa de Moneda	1.495,202.10	»	»
Resguardo de Cordillera	2.248,429.07	»	»
Compañías de Seguros	456,599.17	»	»
Otras	9.219,438.02	»	»

Origen, en gran parte, de este desarrollo de rentas nacionales era, naturalmente, el desenvolvimiento del **comercio internacional** del país, cuyos valores llegaron a las cifras siguientes, en pesos de 18 peniques:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1906....	$ 271.448,216	$ 225.265,000	496.713,216	14.37
1907....	280.080,730	293.681,855	573.762,585	12.75
1908....	319.149,072	267.264,169	586.413,241	9.62
1909....	306.429,909	262.082,763	568.512,672	10.78
1910....	328.827,176	297.485,697	626.312,873	10.78

Las importaciones de 1906 aumentaron en $ 36 millones 669,000 sobre las del año precedente. Según el Ministro de Hacienda, Don Rafael Sotomayor, ello no se debió a los perjuicios ocasionados por el terremoto, sino al desenvolvimiento natural del comercio, pues las internaciones del primero debían figurar en las estadísticas de los años de 1907 y 1908. El comercio de importación de máquinas mineras llegó en 1906 a $ 9.800,000; el de máquinas industriales de otra categoría, a $ 3.115,000; el de máquinas agrícolas, a $ 600,000; el de locomotoras, a $ 2.800,000; el de hierro y ruedas para ferrocarriles, a $ 2.680,000. La internación de trigo llegó a $ 4.500,000, y la de harina a $ 2.160,000. Los consumos principales de artículos extranjeros en 1906 llegaron en:

Materias textiles a.	$ 53.100,000
Materias minerales.	45.100,000
Máquinas.	39.000,000
Materias vegetales.	31.300,000
Aceites, combustibles, etc.	28.700,000

La composición de las exportaciones más importantes de 1906, en que hubo también un aumento, aunque pequeño, fue la siguiente:

Productos minerales.	$ 252.085,000
» vegetales.	8.957,000
» animales.	8.861,000

Las cantidades que de estos valores fueron a los países americanos, con excepción de los Estados Unidos,

alcanzaron a cifras pequeñas. La falta de iniciativas de política comercial perduraba en la forma de antes. A la República Argentina se exportó en 1906 por valor de $ 2.080,500; al Perú, por $ 1.446,900; a Bolivia, por $ 864,300; al Uruguay, por $ 502,200; al Brasil, por $ 449,600; al Ecuador, por $ 186,800; a Panamá, por $ 46,600; a Guatemala, por $ 29,300; a Méjico, por $ 8,500; a Costa Rica, por $ 6,400; a Colombia, por $ 2,700; a Nicaragua, por $ 400; y al Paraguay, por $ 100.

En 1907 se dejó sentir una intensa **crisis económica universal,** que por razón del entrelazamiento moderno en las relaciones mercantiles internacionales, hubo de hacer sentir también con recio vigor sus efectos en Chile, paralizando empresas y obligando al país a tomar medidas de dudosa conveniencia para su porvenir. Las importaciones que daban las estadísticas, superaron a las exportaciones, debido principalmente al fuerte aumento que ocasionaba en parte aquella fiebre de negocios del último tiempo, pero sobre todo la destrucción de bienes por el terremoto del año anterior. El cambio bajó en 1907 a 12.75 peniques por peso. Como en las exportaciones el salitre formaba una cuota muy subida, constituyendo ese año el 73.62% ($ 206.202,950), y habiendo sido, como en páginas anteriores lo hemos contemplado con mayor detenimiento, un producto cuyos valores principales se van del país, por pertenecer la parte principal de las salitreras a extranjeros residentes en el extranjero, resultaba que, aunque la diferencia entre importaciones y exportaciones no era tan excesiva que hiciera temer muy difíciles situaciones, la crisis aparecía como profunda y altamente perturbadora.

Con entera razón llamaba la atención el Ministro de Hacienda, Don Enrique A. Rodríguez, al hecho de que «sólo el 26.38% corresponde a los demás productos minerales, animales y vegetales, que son, en rigor, *la producción saneada* de nuestro haber nacional». Aquí debió intervenir la política comercial, en el sentido, sobre todo, de fomentar un intercambio mayor de las demás clases de la producción. Por otra parte, había aumentado también el uso y la internación de artículos suntuarios: la champaña llegaba a valores superiores a $ 1.000,000 de 18 d.; las joyas, a $ 2 millones 250,000; la sedería, a $ 3.500,000; y la perfumería, a $ 800,000. Esta circunstancia llevó al señor Rodríguez a recomendar el alza de los derechos correspondientes en la Aduana. Recargo especial debía tener, también la internación de encomiendas postales, pues originaba trastornos en esa institución.

En materia salitrera abogaba por la baja del precio del nitrato, como «condición primera para la expansión del consumo». Era partidario de que se abaratasen los costos de producción y los gastos intermediarios. «El sistema usado hoy día, decía, es el mismo que se empleaba hace 50 años». Para disminuir el gravamen que significan los intermediarios, recomendaba la centralización de las ventas. La Memoria del señor Rodríguez pasa, además, una interesante revista sobre los puertos de Chile y sus necesidades en la época. Es un documento de valor.

En 1908 mejoró radicalmente la situación del comercio exterior, pues disminuyeron las importaciones y aumentaron las exportaciones. Sin embargo, el cambio, lejos de mejorar, descendió a 9.62 peniques. ¿A qué se debió? Fue efecto, ante todo, del propio estado que se había creado el año precedente con la emisión

de papel moneda y el exceso considerable de las importaciones, junto con la crisis universal.

El salitre exportado en 1908 llegó a un valor de $ 233.865,403; el trigo, a $ 12.115,770; y los minerales de cobre, a $ 7.073,728. La internación de mercaderías por encomiendas postales ascendió a $ 5.000,000, dando $ 1.682,308 de derechos. En las relaciones comerciales con los países sudamericanos pudo notarse que la importación procedente del Perú alcanzaba a $ 10.213,863, consistente principalmente en azúcar, arroz y café, y la exportación chilena hacia allá a sólo $ 3.814,115, compuesta sobre todo de cereales, salitre y oro sellado. La importación procedente del Brasil llegó a $ 1.310,016 (yerba-mate y café) y la exportación hacia allá a $ 527,273 (frejoles, arvejas, lentejas y nueces). La importación procedente de la Argentina ascendió a $ 10.535,007 (animales especialmente), y la exportación nuestra hacia allá a $ 3 millones 284,379 (vinos y salitre, sobre todo).

En materia de derechos, preocupaba a la Aduana y al Gobierno la situación producida en la primera a causa del bajo nivel de la tasa de almacenaje, que posibilitaba que el comercio dejase una buena parte de mercaderías en depósito después de cumplido el plazo de un año fijado por la ley, «aprovechando, como dice en su Memoria de 1909 el Ministro de Hacienda Don Luis Devoto, de la dificultad que existe para proceder a su remate y de la franquicia que otorga la Ordenanza para despacharlas aun momentos antes de la subasta». Estimábase, así, que el derecho se debía subir y que las mercaderías que no hubiesen sido despachadas continuasen pagando el 1% mensual. También se pedía un derecho de almacenaje para las mercaderías en tránsito.

En 1909 los valores del comercio internacional de Chile descendieron; pero al año siguiente aumentaron considerablemente, manteniéndose el cambio en ambos a 10.78 d. Don Roberto Sánchez, Ministro de Hacienda de la época, dice en su Memoria de Abril de 1912 que a cuesta de los déficits de 1909 y 1910 «el activo de la Hacienda Pública se incrementa día a día con la construcción de nuevas obras y con la adquisición de materiales y elementos destinados a la explotación de empresas y servicios a cargo del Estado». Estimamos que era este un proceder bien propio del espíritu progresista de la Administración. El Ministro creía, finalmente, que una conveniente reorganización de los Ferrocarriles del Estado, en el sentido de que se costeasen con sus tarifas, y el establecimiento de algunas nuevas fuentes de recursos, serían medidas conducentes a normalizar el estado de la Hacienda Pública.

La participación que las diversas naciones tuvieron en el comercio exterior de 1910 fue la siguiente:

Naciones europeas, asiáticas, etc.:	Exportación	Importación
Gran Bretaña	$ 131.586,978	$ 94.083,762
Alemania	64.416,410	72.044,029
Francia	14.991,876	19.208,025
Bélgica	9.541,826	6.753,263
Holanda	6.729,322	907,405
España	5.465,751	3.423,835
Colonia del Cabo	3.967,580	.....
Japón	2.000,706	232,234
Polinesia	1.475,940	.....
Portugal	1.437,960	299,696
Italia	1.414,656	8.843,432
Egipto	708,400	12,001
Dinamarca	343,020	4,419
Austria-Hungría	.....	395,554
Suecia	237,080	48,250
Australia	96,600	7.453,853
China	30,860	201,884

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
India	.....	11.008,903
Suiza	.....	550,139
Noruega	.....	24,343
Otras	.....	28,293
Naciones americanas:		
Estados Unidos	67.736,524	36.629,518
Bolivia	6.152,173	260,452
Argentina	4.670,313	15.007,692
Perú	3.109,721	14.920,519
Canadá	941,980	.....
Uruguay	658,585	955,535
Brasil	590,099	1.984,237
Méjico	235,944	726
Panamá	129,014	136,997
Ecuador	106,601	1.269,844
Islas Malvinas	39,995	.....
Paraguay	10,020	31,922
Cuba	982	285,215
Guatemala	120	227,496
Costa Rica	120	78,497
Colombia	.....	2,562
De la pesca	.....	171,165

Considerable aumento habían experimentado **los precios corrientes** durante el quinquenio que examinamos. Los 46 kilos de harina valían en 1906, por término medio, $ 9.60; en 1910 valían $ 13.05; los 73.6 kilos de trigo $ 12.15 y $ 13.50 respectivamente; los 92 kilos de frejoles, $ 19.90 y $ 31.80; los 46 kilos de papas, $ 3.15 y $ 6.60; los 73.6 kilos de maíz, $ 7.30 y $ 11.10; los 71.3 kilos de cebada, $ 8.50 y $ 8.75, respectivamente.

La **deuda** externa alcanzaba el 31 de Diciembre de 1910, año del centenario, a £ 25.258,620. Al lado de ésta existía la llamada *deuda internacional*, representada por los bonos emitidos en conformidad al tratado de paz y amistad celebrado con Bolivia, deuda que en igual fecha llegaba a $ 6.093,800. La interna

era en 1.° de Enero de 1910 de $ 179.289,132.36, descompuesta en:

Emisión de papel-moneda.....	$ 150.000,000.00
Censos redimidos.....	25.789,855.52
Deuda del 3%.....	1.715,078.06
Deuda del 5%.....	900,500.00
Saldo de emisiones anteriores....	871,866.50
Saldos de deudas municipales ...	9,232.28
Vales de tesorería.....	2,600.00

La deuda total por cabeza de población ascendía en 1910 a $ 205.

Juicio crítico del conjunto de la actividad económica de la Administración de Don Pedro Montt

Don Pedro Montt fue uno de los Presidentes de Chile que hizo mejores estudios en materias económicas y que aportó mayores conocimientos a la vida nacional, en cuanto dió a los problemas del robustecimiento material y de la organización económica la importancia que les correspondía. El Presidente tenía, en efecto, un concepto claro, perfectamente definido de la vida y del porvenir del Estado. Tenía esa concepción que se adquiere con el examen de la vida económica de otros pueblos, vida que conocía de cerca por su permanencia en el extranjero y por el estudio atento de su producción científica económica, de que estaba en todo momento informado. Sea dicho, en su memoria, que la mejor biblioteca de obras de esta clase que en 1910, año de su fallecimiento, existía en el país (y que hoy se encuentra en el Instituto Nacional) era, sin duda, la de este hombre público.

Pero el excesivo trabajo que la concepción de su deber de Mandatario y su espíritu laborioso, enérgico

y convencido le imponían, fueron quizás causa de su prematuro fallecimiento, ocurrido algún tiempo antes de terminar su período constitucional. En los cuatro años que rigió los destinos del país, realizó obras, marcó rumbos y ejecutó actos que perdurarán en el recuerdo de todo el que tenga capacidad de discernir con acierto en el abigarrado conjunto de los problemas de la vida económica moderna.

Su actuación fue característica en un doble sentido: en su afán de fomento de las vías y medios de comunicación y transporte, base de la prosperidad de la economía, y en su afán de realizar aquel ideal tan anhelado de buena organización, base del funcionamiento regular de los negocios, que se dirige hacia la estabilización del valor de la moneda con la vuelta al régimen metálico.

En el ramo de ferrocarriles emprendió con admirable empeño la empresa de proveer al país de una red continuada, llevando a cabo una obra que en su realización requería de los mayores esfuerzos, de una tenacidad obstinada, a causa de ser resistida por razón de las escasas expectativas económicas que por el momento se podían cifrar en ella, pero que aparecía como necesaria en la formación de un sistema completo de comunicaciones internas. El ferrocarril longitudinal ponía en contacto a las zonas central y sur del país con la zona norte, posibilitando el transporte rápido de los centros más poblados hacia las regiones del extremo septentrional, en donde hasta ahora ha habido cuestiones de carácter internacional de trascendencia.

Además de las obras de carácter ferroviario, emprendió numerosas otras. Fue tal la actividad desplegada por esta Administración en materia de progreso

material público, que, aunque las entradas de la nación tuvieron siempre escala ascendente, pues de $ 103.437,392.11 oro de 18 peniques y $ 39.676,022.27 moneda corriente, a que llegaban en 1906, subieron a un total de $ 123.366,853.48 moneda corriente y $ 82.764,423.27 oro de 18 d. en 1910, el ejercicio financiero arrojó en cuatro años consecutivos (1907, 1908, 1909 y 1910) un déficit, en verdad no de mucha consideración, impulsado en no escasa proporción por las pérdidas de la explotación de los ferrocarriles del Estado. Déficits producidos por fuerza de afanes tan laudables como los que tuvo ese Gobierno, son déficits que honran.

Iniciativa original y simpática, dentro de las aspiraciones de impulso de las industrias nacionales más propias del país, fue la que tuvo con respecto a la pesca, cuyo fomento se intentó, pero desgraciadamente no se prosiguió con posterioridad. Chile, con sus largas costas, no parece sino ser un país adecuado para el efecto. El problema es organizar esta industria, que puede traer consigo los positivos beneficios de independizar al país de un comercio extranjero que, hoy por hoy, quita a la nación sumas cuantiosas por razón de la internación de productos de la pesquería extraña. El comercio exterior, que a causa de la crisis económica mundial de 1907 se había hecho bastante desfavorable para nuestro país, recobró su normalidad, ofreciendo en el conjunto del período de la Administración un marcado progreso, pues de $ 271 millones 448,216 y $ 225.265,000, a que alcanzaban las exportaciones e importaciones en 1906, ascendió a $ 328.827,176 y $ 297.485,697, respectivamente, en 1910.

Sorprendió, pues, a esa Administración una crisis

económica mundial, la crisis de 1907, que hubo de producir considerables perturbaciones en el desarrollo regular de la vida económica del país. En la política inflacionista que proseguía el poder legislativo y que se manifestaba nuevamente en una emisión de treinta millones de pesos, el Gobierno opuso la resistencia que debía emanar como un raudal natural de la antipatía que tenía el Presidente y el Ministro por la medida que se imponía. Y ésta fue la otra característica de ese Gobierno, que tenía un concepto claro de los peligros que acarrea a la vida económica de un país el mantenimiento de un sistema monetario que sólo el estado de guerra puede justificar. Al aprobarse por el Congreso en 1909 el proyecto de ley de postergación de la conversión metálica, el Presidente lo vetó, pero su resistencia hubo de ser vencida por la voluntad de las Cámaras, que insistieron de acuerdo con la forma prescrita por la Constitución del Estado.

La capacidad del Presidente Montt, la labor que desempeñó, sus ideas y sus esfuerzos le colocarán en la historia económica y financiera de Chile entre los más preclaros y tenaces espíritus que haya tenido la República en el dominio del progreso material, del orden y de la paz.

16. Vida económica del país durante la Administración Barros Luco (1910-1915)

La situación política de 1910, año en que, con motivo de la enfermedad y fallecimiento del Presidente Montt, ocuparon la Primera Magistratura sucesivamente Don Elías Fernández Albano, que desempeñaba el cargo de Ministro del Interior, y Don Emiliano Figueroa, que por muerte de éste último tocóle

asumir también la Presidencia como Ministro del Despacho más antiguo, dió como resultado la elección de Don **Ramón Barros Luco** para dirigir los destinos del país en el período de 1910 a 1915. Hízose cargo de la Presidencia el 23 de Diciembre, quedando esa fecha consagrada a la transmisión del mando supremo de la República. La elección del señor Barros Luco auguraba un Gobierno de tranquilidad, como podía predecirse por el temperamento del político, de quien ya nos hemos ocupado en su carácter de Ministro de Hacienda en Administraciones anteriores. Dentro de las rivalidades de los hombres y de los partidos, en que se forman oposiciones que perturban con tenacidad la labor de los gobernantes, el Gobierno de Don Ramón Barros Luco se encontraba en magnífica situación, pues no fue elegido por una combinación política determinada, combatida por otra, sino por la voluntad de todos. No debía, así, ser extraño que la legislación económica, la más importante en la vida de un país y, por razón de lo mismo, la que más cooperación de voluntades necesita en las Cámaras, fuese relativamente abundante en esa Administración, como en seguida veremos.

Siendo Presidente Don *Elías Fernández Albano* y ocupando la cartera de Obras Públicas Don Fidel Muñoz Rodríguez, se había dictado, entre otras leyes, una que con fecha 22 de Agosto de 1910 autorizaba la inversión de $ 5.000,000 en la prosecución de las obras públicas que estaban en ejecución. Siendo Presidente Don *Emiliano Figueroa*, se dictó el 7 de Septiembre de igual año una ley que autorizaba la adopción de un plan definitivo en las obras marítimas de Valparaíso y San Antonio, trabajos que se llevarían a cabo por propuestas públicas que fijasen un precio

alzado no superior a tres millones de libras esterlinas para Valparaíso y de un millón doscientas setenta y cinco mil libras para San Antonio. Se autorizó para el efecto la contratación de un empréstito hasta por la suma de £ 4.275,000, con 5% de interés y 1% de amortización. Con igual fecha se autorizó la inversión de $ 600,000 en la reparación, conservación y apertura de caminos, como en la construcción de calzadas definitivas en las carreteras de entrada a Santiago, y £ 275,000 en la adquisición del ferrocarril de Copiapó, suma esta última que se pagaría en bonos de la deuda pública, a la par, con 4½% de interés y 1½% de amortización acumulativa anual. Próxima ya a terminar la Magistratura del señor Figueroa, se acordó (12 de Diciembre de 1910) la inversión de $ 10.000,000 en el estudio y construcción de ferrocarriles y en la adquisición de material rodante.

Durante el Gobierno de Don *Ramón Barros Luco* se prosiguió activamente en la obra de fomento ferroviario. Por ley de 1.° de Febrero de 1911 se acordaron diversas inversiones: de $ 6.907,277 en gastos ordinarios de los ferrocarriles del Estado; de $ 600,000 oro de 18 d. y 672,038 moneda corriente en el pago de trabajos de puentes, estaciones y desvíos; y de $ 1.020,932 m/c. en la reconstrucción de la Estación Central de Santiago. Esa ley lleva la firma del Ministro Don Javier Gandarillas. En Septiembre de igual año se declararon de utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de un ferrocarril de Valparaíso a Casablanca, que hasta hoy no se ha llevado a efecto, existiendo el proyecto de hacerlo de Santiago al puerto por esa ciudad. Al terminar el año se autorizó la inversión de $ 3.500,000 oro de 18 d. en la adquisición de equipo ferroviario en Chile y en el extranjero.

Estas últimas leyes llevan la firma de Don Enrique Zañartu Prieto, como la lleva igualmente la de creación del *Ministerio de Ferrocarriles*, de 17 de Enero de 1912, que estaría a cargo del Ministro de Industria y Obras Públicas. Ese Departamento, que aún existe, perdió gran parte de su justificación una vez que se dió en 1914 organización autónoma a los ferrocarriles del Estado. Por otra ley, que lleva la firma de Don Abraham A. Ovalle, se autorizó la inversión de unos doce millones de pesos más en el pago de obras públicas, puentes, caminos, alcantarillado, gastos de ferrocarriles en explotación y en construcción.

La ley que dió **organización autónoma a los ferrocarriles de Chile** es de 26 de Enero de 1914 y lleva la firma del activo Ministro Don Enrique Zañartu P. Pone la administración de ellos en manos de un Consejo, un Director General y Administradores de Zona. El Consejo se compone del Director General, de dos miembros designados por el Presidente de la República por cinco años, de dos miembros elegidos por el Senado y dos por la Cámara de Diputados por tres años. Al Ministerio de Ferrocarriles corresponde la supervigilancia y fiscalización de la administración y servicios. La Dirección General se divide en los departamentos de Transporte, Vía y Obras, Tracción y Maestranzas, Materiales y Almacenes y Contabilidad. El personal se distribuye en doce grados: pertenece al primero el Director General, con $ 30,000, y al segundo los jefes de departamento de la administración central, el inspector general de los ferrocarriles aislados y los administradores de zonas centrales, con $ 20,000 etc., etc.

Los ferrocarriles forman una sección especial de la Administración pública, con contabilidad independien-

te de las demás ramas de ella. Deben cubrir con sus propias entradas los gastos ordinarios, administrando por sí mismos los saldos anuales. Deben formar sus tarifas sobre la base de que la empresa pueda lograr el fin de su sostenimiento. Fija sus servicios en oro, cobrando el recargo correspondiente en moneda corriente según el premio del oro en el último trimestre. La ley de ferrocarriles de 1914, que es la que está en vigencia, es una de las buenas leyes dictadas en este país.

Con igual fecha se dictó una que aprobaba un plan de obras y adquisiciones para esa empresa, cuyo valor alcanzaba a £ 4.710,000, quedando el Presidente de la República autorizado para contratar un *empréstito* de £ 2.100,000 al 5% de interés y 2% de amortización anuales. Las fábricas nacionales tendrían preferencia en la construcción del material rodante. A poco de promulgarse estas leyes, se autorizó la inversión de $ 8.946,248 oro de 18 d. en la adquisición de carbón para los ferrocarriles, debiéndose cubrir el gasto con el alza de los fletes y pasajes y con el sobrante de las rentas generales de la nación. Luego después se acordó, por dos nuevas leyes, que igualmente llevan la firma del Ministro Don Enrique Zañartu P., invertir otras sumas (en total unos cuatro millones de pesos) en pago de materiales, gastos generales y reparación de locomotoras, carros, etc.

En materia de *Aduanas*, se declaró libre la internación de diversos artículos, como el cloruro de platino para usos industriales, las duelas de roble y encina elaboradas para vasijas, los aparatos esterilizadores de leche del Patronato de la Infancia, la maquinaria de ensayos de extracción automática del caliche de la Du-Pont Nitrate Co., las bombas y mangueras para el

servicio contra incendios de los cuerpos de Bomberos, la brea mineral destinada a la fabricación de briquetas y el perclorato de amonio. Con fecha 29 de Enero de 1914 se eximió del derecho establecido en 1897 al ganado ovejuno que se enviase a pastar a la Argentina y retornase por la Cordillera. Se declaró, por otro lado, que los fósforos de madera pagasen el derecho de $ 0.40 oro de 18 d. por kilo de peso bruto y se modificaron los derechos de diversas clases de tejidos. Se dispuso que toda mercadería que ingresase en almacenes de aduana pagase el 1% sobre su valor por el servicio de depósito, aumentando los derechos por atrasos en el retiro, medida ésta que se tomó por el Ministro Don Samuel Claro Lastarria.

Por la ley de 4 de Octubre de 1911 se ratificó y mandó cumplir el **tratado de comercio y navegación** firmado en 1898 en Berlín entre la República de Chile y el Reino de Italia, en virtud del cual las altas partes contratantes se garantizaban recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida en todo lo concerniente a sus respectivos nacionales, pudiendo los ciudadanos y los productos chilenos en Italia y los súbditos y productos italianos en Chile ser admitidos al goce de cualquier favor que en ambas partes se concediese a los ciudadanos y productos de cualquier otra nación. Si Chile otorgase reducciones especiales de impuestos aduaneros a los productos de un Estado centro o sudamericano, ellas no podría ser invocadas por Italia en razón del derecho al tratamiento de la nación más favorecida, mientras no fuesen extendidas a terceros Estados no comprendidos entre los de Centro y Sud América.

Con fecha 16 de Noviembre de 1911 se ratificó y se ordenó cumplir igualmente el *protocolo sobre ga-*

rantías ferroviarias firmado en Santiago de Chile en 1908 entre este país y la República de Bolivia, en virtud del cual se estipulaba, entre otros asuntos, que las tarifas de fletes cuyo cobro autorizase el Gobierno de Bolivia para los ferrocarriles a que se refiere el tratado de paz y el contrato celebrado por ese Gobierno con el National City Bank, guardaría la misma relación en cada uno de ellos con el kilometraje recorrido y el costo permanente de explotación.

De trascendencia fue también la celebración de una **convención de tráfico comercial** con esa república, firmada en Santiago en Agosto de 1912 y ratificada en Marzo de 1914, en virtud de la cual el Gobierno de Chile garantiza el libre tránsito por su territorio de las mercaderías extranjeras que se embarquen con destino a Bolivia o que de ahí se desembarquen para el extranjero. Las mercaderías serán conducidas del muelle a la estación del ferrocarril en vagones cerrados y sellados, pudiendo también ser despachadas para su consumo en Chile, a petición de los interesados, sin otro gravamen que el pago de los derechos de aduana.

La situación relativamente holgada de las finanzas de 1911 y la necesidad de renovar algunos elementos de defensa nacional, hicieron tomar la decisión de contratar un *empréstito* que produjese hasta £ 3.500,000 al 4½% de interés y 1% de amortización anuales, para adquirir un «dreadnought» y otras unidades de guerra, fondos de los cuales se autorizó girar luego después £ 1.000,000 para atender a necesidades del Ejército. La compra del *Latorre* se basó también en la autorización concedida por aquella ley.

Con el fin de dar más amplitud y adaptar los servicios estadísticos de la República a los menesteres de la época, se ordenó, por ley de Diciembre de 1911, la reor-

ganización de la **Oficina Central de Estadística**, a la cual correspondería en adelante la dirección general del servicio, y que se repartiría en cinco secciones: 1.ª de Geografía y Demografía, 2.ª de Política y Administración, 3.ª de Hacienda, 4.ª de Economía y 5.ª de Agricultura, divididas a su vez en subsecciones provistas de inspectores y demás. La ley respectiva, que lleva la firma del Ministro Don J. Ramón Gutiérrez, derogó la que hemos examinado de 1847 y algunas disposiciones posteriores. La Oficina Central de Estadística, que está en buen pie, publica el «Anuario Estadístico», en doce volúmenes y una «Sipnosis Estadística» anualmente (1).

A principios de 1912 se acordó vender los bonos que existían depositados en la Casa de Moneda afectos al servicio de la deuda interna, con el fin de pagar al Banco de Chile parte del saldo que el Fisco le adeudaba, autorizándose al Presidente de la República para contratar una cuenta corriente para el movimiento de fondos del Estado hasta por la suma de $ 15 millones. Poco después se acordó seguir la venta de bonos con igual objeto sobre el resto de la deuda, autorizándose también al Ejecutivo para substituir, por intermedio de la Caja de Crédito Hipotecario hasta la suma de $ 55.000,000 de las letras de esa institución, que estaban depositadas en la Casa de Moneda, por una cantidad equivalente en letras de crédito en moneda de oro nacional o extranjera del 5% de interés y 1% de amortización. Esta última ley dispuso tam-

(1) Los doce volúmenes del Anuario son: I Demografía, II Beneficencia, Medicina e Higiene, III Política y Administración, IV Justicia, Policía y Criminalidad, V Instrucción, VI Hacienda, VII Agricultura, VIII Minería, IX Industria, X Comercio interior, XI Comercio exterior, XII Comunicaciones.

bién que se aumentasen por tres años en 5% sobre el avalúo los derechos de internación de ciertas mercaderías, se cobrasen con un aumento de 10% adicional los derechos específicos de otras y se estableciese un derecho de 5% sobre el avalúo de algunas, haciéndose diversas modificaciones en los derechos de internación y estableciéndose una Aduana en Punta Arenas, a cuyo objeto se destinaron $ 200,000.

Ocupando la cartera de Hacienda Don Pedro Montenegro, como en la dictación de la ley anterior, dispúsose igualmente que los bancos pagasen en adelante una contribución equivalente al 2°/₀₀ anual sobre el monto medio de los depósitos, nombrándose un *inspector de bancos* para que informase sobre la exactitud de la contabilidad y de los balances que mensualmente deben pasar al Ministerio de Hacienda (ley de 24 de Enero de 1912). Con el fin primordial de dotar de agua potable a la ciudad de Iquique, se acordó luego después la enajenación de terrenos salitrales en la provincia de Tarapacá, destinándose para ese objeto $ 3.800,000 de 18 d.

Importante fue, además, la ley de 11 de Mayo de 1912, que lleva igualmente la firma anterior y que dispuso que la **Oficina de Emisión** *entregase a los bancos billetes de curso legal en la proporción de un peso por cada 12 peniques*, en cambio de los depósitos en oro que hiciesen en la Tesorería Fiscal de Santiago o de Londres. Cuando el peso papel se cotizase a más de 12 d., los bancos estarían obligados a enterar en oro sobre los 12 d. ordenados las cantidades que determinase el Presidente de la República para mantener la correlación entre los depósitos y el tipo de cambio del billete en el mercado. El oro entregado se destinaría al canje de billetes. Al hacer los depósitos, los bancos

recibirían un certificado nominativo, que devolverían al exigir el canje de los billetes por el oro, no pudiendo ningún banco obtener mayor cantidad de billete fiscal que el monto de su capital efectivo. Acogiéndose a estas disposiciones, los bancos depositaron el año 1912 en la Tesorería de Chile en Londres £ 925,000 para retirar de la Caja de Emisión $ 18.500,000 en billetes, a razón de 12 d. por peso. Al año siguiente los valores se duplicaron.

Las necesidades del Erario obligaron en seguida a hacer uso de £ 1.200,000 de los fondos provenientes de empréstitos destinados a obras públicas, a fin de atender a los gastos generales de la nación. En Septiembre de 1912 se dispuso, ocupando la cartera de Hacienda Don Manuel Rivas Vicuña, la *supresión de la Caja de Crédito Salitrero*, quedando las emisiones de bonos que había hecho a cargo de la Caja de Crédito Hipotecario.

Importante pudo ser también el convenio ad-referendum celebrado a principios de 1913 entre el Gobierno de Chile y la Sociedad Hauts Fourneaux-Forges et Acieries du Chile, en virtud del cual el primero acordó ampliar la garantía de interés de 5% oro de 18 d., otorgada en 1905, hasta un capital de $ 11.000,000 de 18 d., cuya inversión se justificase, en la **implantación de la industria siderúrgica**, obligándose la Sociedad a producir, después de un año de la entrega de los bosques, 6,000 toneladas de hierro fundido y 3,000 de acero en el primer año; sobre estas cantidades, 3,000 toneladas más de acero en el segundo año; sobre las anteriores, 3,000 toneladas en el tercero; y sobre éstas, 3,000 toneladas en el cuarto; de modo que en el quinto año y siguientes debía producir 6,000 toneladas de fierro fundido y 15,000 toneladas de acero.

El Gobierno concedió a la Sociedad una garantía de amortización acumulativa de 1½% al año sobre el capital emitido en bonos, que no podría exceder de $ 8.000,000 de 18 d. La extensión de bosques quedó reducida a 50,000 hectáreas. La ley que aprobó este convenio lleva la firma del Ministro Don Oscar Viel; pero los preparativos de la industria fueron sorprendidos luego después por la guerra europea, y hasta hoy no se han convertido en realidad.

A principios de 1913, y mientras se dictaba una ley general sobre impuestos a la producción, manufactura y expendio de *tabacos*, como igualmente a su internación, se fijaron los derechos que el artículo pagaría en adelante. La ley general que hoy está en vigor, es de 1921.

Ocupando la Cartera de Hacienda Don Arturo Alessandri, se prorrogó el plazo fijado para la vigencia de los aumentos hechos en 1912 en los derechos de internación, destinando su producto a reintegrar sumas tomadas de empréstitos de obras para el pago de adquisiciones del ejército.

Desempeñando igual cargo Don Ricardo Salas Edwards, se dictó con fecha 3 de Agosto de 1914 una ley que autorizaba al Presidente de la República para emitir *vales de tesorería* al portador, a un año plazo, sin interés, con que se podría solucionar toda clase de obligaciones en moneda corriente, vales que se entregarían a los bancos que los solicitasen pagando un interés inferior en 3% a los intereses que dichos bancos cobrasen a sus deudores. Era **el estallido de la guerra europea,** que tan hondas perturbaciones habría de producir en Chile, lo que motivaba esta inesperada medida. La situación de los bancos debía complicarse en gran manera con el retiro que necesariamente debía

hacer el público de los depósitos. Con esa emisión se afrontaba la situación, pues los vales se ponían a disposición de los bancos, naturalmente con las garantías del caso, a saber, mediante el depósito de bonos hipotecarios cotizados al 90%, sin exceder del 50% del capital pagado, para que pudieran devolver lo que los depositantes exigían. En igual fecha se dispuso que los *derechos de exportación* se pagasen en buenas letras de cambio a 90 días vista en moneda nacional de oro o en billetes con el recargo correspondiente para obtener 18 d. por peso, quedando facultado el Ejecutivo para determinar la cantidad que se pagaría en letras, en oro o en billete y para fijar el recargo. Por exigirlo el interés nacional, se suspendió *la exportación de ganado, de artículos alimenticios y de carbón de piedra* y se dieron facilidades a la internación de algunos de ellos. Por iguales circunstancias de la situación de guerra, y especialmente para evitar, en parte por lo menos, una enorme cesantía de trabajadores, se acordó el 12 de Agosto de ese año *anticipar a los productores de salitre* que se comprometiesen a mantener en explotación sus oficinas, hasta la suma de $ 3.00 por cada quintal español de salitre que tuviesen elaborado en las canchas y hasta de $ 4.00 por quintal que tuviesen listo para el embarque en los puertos o caletas, no pudiendo exceder el monto de tal autorización de 15.000,000 de quintales de salitre elaborado. El anticipo se haría por letras que los productores girarían previa constitución de garantía prendaria a favor del fisco sobre dicho salitre, letras que servirían también para caucionar las obligaciones correspondientes a la emisión de vales de tesorería.

Fueron esos, sin duda, tiempos difíciles para el director de las finanzas nacionales, quien hubo de realizar

una ruda labor. A principios de Septiembre se decidió el traslado al país de £ 2.000,000 de los fondos de los empréstitos contratados o de rentas generales. En bancos nacionales se hizo un depósito de un millón y medio de libras para que pudiesen retirar billetes de la Oficina de Emisión y atender al público. Se acordó también prorrogar el cobro de derechos adicionales.

En el mes de Noviembre de ese año se acordó acuñar hasta $ 15.000,000 en moneda de plata de un peso con ley de 720/1000 de plata y peso de 9 gramos. La ley de las monedas de plata de 20, 10 y 5 centavos sería en lo sucesivo de 450/1000.

A pesar de la difícil situación financiera, las *obras públicas* no fueron abandonadas. En Septiembre de ese año se acordó invertir $ 1.800,000 en la construcción y reparación de caminos, de puentes y alcantarillas. En Noviembre se dispuso la inversión de $ 1 millón 700,000 en la terminación del alcantarillado de Antofagasta, Tocopilla y Arica. En Diciembre se declararon de utilidad pública los terrenos necesarios para la ejecución de diversas obras de caminos, y se autorizó la inversión de $ 16.000,000 en la ejecución de obras de regadío, entre ellas del canal derivado del río Aconcagua, del derivado del río Maule, del derivado del río Melado, del derivado del río Laja, leyes éstas últimas que llevan la firma del Ministro Don Julio Garcés.

Habiendo expirado el plazo en que debía hacerse la conversión metálica, se la postergó nuevamente, esta vez hasta el 1.° de Enero de 1917.

Importante fue, además, en este período la dictación de la ley de **contribución de herencias y donaciones,** de 5 de Febrero de 1915, que estableció un impuesto fiscal sobre el monto líquido de toda asignación

por causa de muerte y de toda donación irrevocable, impuesto que empieza con el 1% en las asignaciones a favor de los descendientes legítimos y de los cónyuges, que sigue con el 2% en las de los ascendientes legítimos, hijos y padres naturales, con el 3% en las de los hermanos, con el 5% en las de los otros colaterales, y que termina con el 10% en las asignaciones y donaciones hechas a las personas no comprendidas en los grupos anteriores.

No menos importante fue la ley dictada al mes siguiente sobre la **contribución de haberes,** que disponía que todos los bienes gravados con el impuesto municipal de haberes quedarían también afectos a un impuesto adicional fiscal ascendente al 2 y 4°/₀₀. Por otra ley se exigía un derecho de exportación de $ 6.65 de 18 d. por tonelada métrica de ácido bórico y boratos, pagándose después de dos años $ 10.00 por igual cantidad. Las tres leyes anteriores, que son, sin duda, de trascendencia, llevan, como Ministro de Hacienda, la firma de Don Alberto Edwards.

La contribución de faros y balizas se fijó en 1915 sobre el tonelaje de registro, pagando $ 0.75 y $ 0.50 oro de 18 d. por tonelada una vez al año las naves según fuesen a vapor o a la vela, con procedencia del exterior, y $ 0.40 las de cabotaje. Siendo Ministro Don Alejandro Lira se reformó ese año la ley consular. Aunque en ella se introdujeron importantes modificaciones, no se lograron aquellos fines a que en capítulos anteriores hemos hecho mención.

Las perturbaciones ocasionadas por la guerra europea en la vida económica de Chile interrumpieron el desarrollo creciente del **intercambio comercial** con el extranjero en este período. En efecto, los valores de nuestro comercio exterior fueron, en pesos de 18 peniques:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1911 ...	$ 339.409,363	$ 348.990,354	$ 688.399,717	10.62d.
1912 ...	383.227,949	334.454,779	717.682,728	10.12d.
1913 ...	396.310,443	329.517,819	725.828,262	9.75d.
1914 ...	299.675,435	269.756,699	569.432,134	8.96d.
1915 ...	327.479,158	153.211,557	480.690,715	8.25d.

Si en las importaciones se nota un descenso continuado durante los cinco años, hasta llegar a reducirse a menos de la mitad, en las exportaciones hubo un descenso brusco de cerca de cien millones de pesos oro de 18 d. el año en que estalló el conflicto, para recuperar al siguiente buena parte de lo perdido.

En el comercio internacional de 1911 hubo un fuerte incremento sobre el año anterior. La importación de máquinas aumentó en $ 16.466,852. Los valores de las internaciones de hierro y acero ascendieron a $ 45 millones 437,965, los de combustibles a $ 47.364,308. La exportación de productos minerales llegaba ya a $ 294.474,679, correspondiendo de esta suma $ 262 millones 649,476 al salitre.

En 1912 la balanza comercial experimentó un cambio favorable en cuanto crecieron considerablemente las exportaciones y disminuyeron las importaciones. En el decrecimiento de estas últimas, sin embargo, hay que tener presente que, como anota la Memoria del Ministro Don Pedro García de la Huerta, con la reforma que se hizo de la tarifa respectiva se rebajó el avalúo a muchas mercaderías libres, que pasaron a ser gravadas con el derecho de 5% ad-valorem; de manera que no hubo en realidad una reducción efectiva en las internaciones. En las exportaciones llegaron los productos minerales a un valor de $ 336.067,787 (el salitre aumentó en $ 29.678,270).

Los mayores valores alcanzados por el comercio

exterior total de Chile antes de la guerra europea, fueron los de 1913, que llegaron a $ 725.828,262 de 18 d. Fue igualmente el año de mayor producción y exportación de nitrato, alcanzando la producción a 60 millones 266,395 quintales españoles y la exportación a 59.529,129. Había aumentado considerablemente la explotación y la exportación de ese artículo, pero poco su consumo, que llegó solo a 55.562,219 quintales españoles, motivo por el cual se resolvió restringir la producción, con el fin de liquidar las existencias en Europa. Los estudios hechos por el Gobierno y la Asociación Salitrera en el sentido de evitar los perjuicios que tal restricción pudiese acarrear, no tuvieron otro resultado que la determinación de trasladar el domicilio de la Asociación, de Iquique a Valparaíso. Así tendría el Gobierno mayores relaciones con ella.

El estallido de la guerra de 1914 hubo de ser altamente perjudicial para nuestro comercio con el extranjero. Las exportaciones disminuyeron en $ 96.635,008, correspondiendo el retroceso casi en su totalidad al salitre. Gran motivo de ello fue la falta de naves nacionales para el transporte, pues el comercio de exportación del nitrato se hacía en buques extranjeros, en su mayor parte de los países beligerantes, que por razón del conflicto los hubieron de retener. Tal circunstancia fue la que de hecho privó de mercados de mayor consumo a nuestro producto. La guerra europea produjo en 1914, a pesar de los auxilios prestados por nuestro Gobierno, la paralización de 91 oficinas salitreras (de 134 que había en actividad, siguieron trabajando sólo 43). En el descenso total de las exportaciones hubieron de tener alguna culpa también, aunque muy pequeña, las prohibiciones a que hemos hecho referencia, que como prudente medida se hicieron en resguar-

do de la vida nacional. Las importaciones decrecieron principalmente en el ramo de hierro, acero, algodón, lana, industrias fabriles y ganado, por un valor total de $ 59.761,112.

Pero el año en que las importaciones disminuyeron en mayor escala fue el de 1915, y era natural, pues en el anterior, en que estalló la guerra y en que debió producir sus más fuertes perturbaciones, los efectos recayeron sólo en el segundo semestre; en 1915 pesaron sobre todo el año. La disminución de las internacionales fue de $ 116.545,142. La exportación subió, en cambio, en $ 27.803,723; los países europeos y Estados Unidos no podían prescindir de nuestro producto principal.

El desarrollo histórico de las **rentas nacionales** en ese quinquenio, debió seguir, por razón de su constitución, que deja a un lado los impuestos internos, para acudir esencialmente a las aduanas, cobrando derechos de salida y entrada, las alternativas del comercio con el extranjero. El monto de las entradas ordinarias fue:

En 1911..	$ 135.849,256.67	billete	y	$ 86.896,389.55	oro de 18d.		
» 1912..	153.936,280.19	»	»	90.896,203.34	»	»	
» 1913..	164.950,825.39	»	»	96.752,727.88	»	»	
» 1914..	127.611,019.07	»	»	60.581,377.94	»	»	
» 1915..	174.324,519.05	»	»	33.467,589.20	»	»	

En el año 1911 aumentaron las entradas en moneda corriente por derechos de internación, por el impuesto de alcoholes, por el de papel sellado y fajas de impuesto y por el producto de los ferrocarriles. En oro aumentaron las entradas por derechos de exportación de salitre. Hubo, además, una entrada extraordinaria de $ 51.530,566.12 papel, formada por el recargo en los derechos de aduana.

En los años de 1912 y 1913 los recursos ordinarios fueron superiores a los anteriores, llegando en el último a su máximo, y habiendo aumentado en papel moneda el producto de las fajas de impuesto en $ 3 millones 841,957.52, el de los ferrocarriles en $ 4.505,940.95, y en oro los derechos de exportación de nitrato en $ 5.679,730.08. Los recursos extraordinarios de 1912 llegaron a $ 39.879,193.73 en billete y $ 21.414,102.56 en oro, en 1913 a $ 42.957,995.49 en billete y $ 412 mil 724.12 en oro.

En el año de 1914, en que se produjo el cataclismo europeo, figuran entre las entradas en moneda corriente $ 32.971,556.56 correspondientes a derechos de exportación de salitre que se recaudaron en conformidad a la ley de 3 de Agosto de ese año. La exportación de ese artículo disminuyó en $ 40.644,523.08 en oro de 18 d., suma a que es menester restar aquellos derechos percibidos en papel para obtener el verdadero descenso de valores por este capítulo. Fuerte disminución experimentaron también los derechos de internación y almacenaje ($ 15.557,272.72). Las rentas públicas de 1914 debieron aparecer aún inferiores por entrar en vigencia la nueva ley orgánica de los ferrocarriles del Estado, en virtud de la cual pasó la empresa a ser autónoma, descontándose, desde luego, $ 57 millones 637,781.92, producto del tráfico ferroviario de ese año. Los recursos extraordinarios fueron de $ 33 millones 817,644.84 en billete.

Los *fondos de conversión* ascendían en 1.° de Enero de 1914 a $ 105.494,222.83 oro de 18 d., distribuídos en £ 758,615.04.4 y Marcos 146.053,118.70. Como los contratos de los depósitos en Alemania vencían en 1914, el Gobierno decidió trasladar a Inglaterra los dos tercios de ellos, dejando el resto para el servicio de

interés y amortización de nuestra deuda en el extranjero. De los valores depositados en la Casa Rothschild se remitieron a Chile £ 275,731.15 en barras de oro. En 1.° de Enero de 1915 había en Londres £ 5.569,575.09.2 ascendiendo el total de los fondos en oro de 18 d. a $ 108 millones 160,754.56.

En cuanto a las rentas de 1915, hay que anotar, desde luego, un aumento en moneda corriente, debido al cobro de los derechos de exportación de salitre en letras sobre Londres y en billetes, habiendo disminuído los percibidos en oro en un valor aproximado. La situación del nitrato pudo haber sido muy desfavorable ese año, pues el precio de los primeros meses bajó hasta 6 chelines por quintal español. Felizmente, el uso que se hizo del artículo en la fabricación de explosivos en Estados Unidos, hizo llegar el precio a 9.6 chelines y mantuvo la producción. Los fletes subieron extraordinariamente: de 20 a 25 chelines la tonelada, llegaron a fines de ese año a 190 chelines, como lo consigna el Ministro Don Armando Quezada Acharán en su Memoria de Hacienda de 1.° de Junio de 1916. Los auxilios salitreros hasta fines de 1915 sumaban $ 59.112,501.

Descenso considerable experimentaron los derechos de importación. La razón se encontraba en las propias perturbaciones ocasionadas por la guerra.

El detalle de las rentas de 1915 fue el siguiente:

Derechos de internación y almacenaje	$ 21.026,647.02	en billetes
Exportación de salitre	85.170,211.83	» »
Exportación de yodo	1.087,760.08	» »
Exportación de bórax	74,919.81	» »
Faros y balizas	198,753.95	» »
Movilización de bultos	1.110,679.92	» »
Encomiendas postales	943,354.49	» »
Impuesto sobre alcoholes	2.161,805.95	» »

Adicional del 10% sobre alcoholes	128,421.17	en billetes
Patentes de minas	103,821.04	» »
Papel sellado y estampillas de impuesto	3.200,260.73	» »
Dirección General de Correos	357,489.06	» »
Estampillas postales	3.804,692.31	» »
Timbre	361,536.07	» »
Fajas de impuesto	8.105,385.55	» »
Telégrafo	2.026,166.39	» »
Casa de Moneda	2.099,877.47	» »
Resguardos de Cordillera	211,972.57	» »
Compañías de Seguros	653,035.43	» »
Redención de censos	836,899.38	» »
Contribución bancaria	901,556.65	» »
Contribución de herencias	143,268.11	» »
Contribución adicional sobre haberes	15.732,352.89	» »
Otras	23.883,647.19	» »
Derechos de exportación de salitre	28.732,880.47	oro de 18 d.
Exportación de yodo	390,147.32	» »
Exportación de bórax	34,715.37	» »
Faros y balizas	477,300.00	» »
Derechos consulares	443,973.95	» »
Contribución bancaria	48,945.94	» »
Otras	3.069,625.77	» »

Los recursos extraordinarios de 1915 fueron de $ 24.191,768.57 en billetes y $ 88,889 en oro. El ejercicio financiero de 1915 arrojó *un déficit* de $ 49 millones 227,843.12 en oro de 18 d. y $ 37.461,357.76 en billete.

Fuerte alza habían experimentado los **precios corrientes** de 1915. En Valparaíso habían subido en papel moneda en la forma siguiente: arvejas de Constitución, de $ 14, a que estaban por término medio en 1913, a $ 41 en 1915 los 100 kilos; cebada chevalier, de $ 18, a que estaba en 1911, a $ 33 en 1915 los 100 kilos; frejoles caballeros, de $ 33 en 1911 a $ 48 en 1915 los 100 kilos; garbanzos, de $ 51 en 1911 a $ 72 en 1915 los 100 kilos; harina, de $ 27 en 1911 a $ 58 en 1915 los 100 kilos; lentejas de Constitución, de $ 36 a

$ 57 los 100 kilos; papas amarillas, de $ 16 a $ 18 los 100 kilos; trigo blanco del centro (Santiago), de $ 16 a $ 38 los 100 kilos. La plata valía en 1915 $ 42.25 oro de 18 d. el kilo fino; el cobre en barra, $ 85.89 de 18 d. el quintal métrico, $ 38.24 los ejes (50%) y $ 4.05 el mineral (10%); el salitre, 7.4¼ chelines por quintal español en la costa; el yodo, 7.6 d. por onza; el carbón $ 25. de 18 d. por tonelada.

La **deuda** externa llegaba en 31 de Diciembre de 1915 a £ 32.556,380, o sea a $ 434.085,066.67 oro de 18 peniques. La interna en oro (bonos emitidos en conformidad al tratado de paz con Bolivia) a $ 5.616,000. Agregando a esta cifra el valor de la emisión fiscal de billetes, la deuda interna en oro alcanzaba a $ 155 millones 616,000. La interna en billetes ascendía a $ 38 millones 722,773.09. El total de la deuda pública por cabeza de población era a fines de 1915 de $ 170 oro de 18 d.

Llenas de interés son las observaciones que hace el Ministro de Hacienda de esos tiempos, Don Armando Quezada Acharán, en su Memoria de 1.° de Junio de 1916, sobre los problemas económicos pendientes. Llama la atención hacia la conveniencia de dar alguna solución al problema monetario; de que la acción del Estado se haga sentir en forma más eficiente sobre la industria salitrera, abaratando los costos de producción, realizando la centralización de las ventas y reconociendo metódicamente la riqueza salitrera; de que se fomente la producción agrícola por medio del regadío, la industria minera por medio de ferrocarriles y caminos y la industria fabril por medio de la protección. «La circunstancia, dice, de que en los últimos años la balanza de nuestro movimiento comercial haya saldado con centenares de millones a favor de la ex-

portación sin que ello haya determinado una sensible alza del cambio, está revelando que la capacidad productora del país era deficiente y nos tenía fuertemente endeudados al extranjero; y si tal situación no se remedia, alejaremos más y más la hora de nuestra independencia y robustez económica». Y tenía toda la razón al respecto.

Llama, finalmente, la atención hacia la conveniencia de proteger la marina mercante nacional (lo que se hizo por una ley posterior), de proteger la construcción de puertos modernos, de fomentar la población y la mayor difusión de la cultura científica y práctica. Sus palabras constituían el más oportuno alerta.

Mirada de conjunto sobre la vida y actividad económicas durante la Administración Barros Luco

El hecho de haber sido un Presidente que despertara escasa oposición, tanto por parte de los hombres como de los partidos políticos, y de estar poseído de un temperamento tranquilo, facilitó en gran manera el desarrollo de una labor legislativa considerable, especialmente en el terreno de la economía y de las finanzas, en donde repercuten de ordinario las resistencias que hacen las Cámaras al Poder Ejecutivo.

Es característica de esta Administración, en efecto, la aprobación de un número relativamente considerable de leyes de esa índole. Pertenecieron a las más importantes las de legislación bancaria y las referentes a la Caja de Emisión. Fuera de ellas, es menester recordar la que autorizó la contratación de un empréstito por cantidades subidas con el propósito de adquirir armamentos. Muchas dispusieron, además, liberaciones de derechos aduaneros.

Dominaba, sin duda, un espíritu de bastante liberalidad en el Gobierno de Chile hasta principios de 1914. Pero vino la guerra europea, y la Administración debió hacer frente a sus primeros efectos, que fueron rudos golpes que sufrió nuestra economía y severa lección en múltiples sentidos. Ellos nos hicieron ver el error que habíamos cometido al no proteger de modo eficaz la formación de nuestra marina comercial, error que hubimos de reconocer tomando poco después medidas de fomento de la navegación marítima nacional en nuestras costas, con la aprobación de la ley de protección a la marina mercante hecha a principios de 1917 y que se refirió al derecho de cabotaje.

Afrontáronse los primeros oleajes de la guerra con la dictación de leyes importantes y eficaces, como las de auxilios salitreros, de emisión de vales de tesorería, de depósitos fiscales en los bancos nacionales, de suspensión de exportación en artículos importantes para la vida en el país, etc. Situación fue esa en que tocó actuar con inteligencia y energía al Ministro Don Ricardo Salas Edwards.

Importante fue también la legislación sobre contribución de herencias y donaciones, como la que introdujo el impuesto adicional fiscal en el gravamen territorial. Aunque esas leyes son demasiado suaves en el gravamen que establecen, constituyen pasos e iniciativas que deben ser recordados.

De mayor trascendencia para el orden estable de las finanzas nacionales fue la ley sancionada a principios de 1914, firmada por el Ministro Don Enrique Zañartu, que dió organización autónoma a los ferrocarriles del Estado. Constituyó un paso importante como pocos en la materia, pues dió buena dirección a la empresa, le aseguró su porvenir económico y finan-

ciero, y desembarazó al Fisco de un organismo que hasta entonces le había significado los más fuertes sacrificios pecuniarios.

En la solución de los problemas de tráfico, se hicieron durante esa Administración muchas inversiones de naturaleza ferroviaria, como, en general, de obras públicas, puertos y demás. Se organizó la Oficina de Estadística en condiciones que le permitieron desarrollar una labor eficiente. Se trató de fomentar la industria siderúrgica: el esfuerzo que entonces se hizo al respecto debe tenerse siempre presente, tanto más cuanto que con posterioridad el problema ha sido cada vez más importante. En el terreno de las relaciones internacionales, se ratificaron y firmaron tratados y protocolos, y se celebró una importante convención de tráfico comercial con Bolivia.

En los dominios del intercambio de productos con el extranjero no puede hacerse una caracterización que arranque del desarrollo normal de las relaciones y negocios, pues habiendo perdido la paz el viejo mundo, se rompieron los fundamentos sobre que descansaba nuestra vida económica, produciéndose perturbaciones que en la estadística del quinquenio hacen aparecer a las importaciones en escala descendente continua desde el principio hasta el fin, y manteniendo en pie casi igual a las exportaciones, a causa del distinto uso que durante el conflicto se hizo en Europa y Estados Unidos, sobre todo en esta última nación, del salitre chileno, que, como se recordará, fue destinado a la fabricación de explosivos. En efecto, de $ 348 millones 990,354, a que llegaban los valores de importación total en 1911, se pudo consignar sólo la suma de $ 153.211,557 en 1915, y de $ 339.409,363, a que ascen-

dieron las exportaciones de 1911, se pudo anotar la suma casi igual de $ 327.479,158 en 1915.

Igual efecto de desorden en el desarrollo natural hubo de producir la guerra en las rentas nacionales, que no pudieron ofrecer el aumento que ofrecieron en el total de los cinco años de las Administraciones anteriores. En 1911 hubo una entrada ordinaria de $ 135 millones 849,256.67 en billete y $ 86.896,389.55 en oro de 18 d; y en 1915, al terminar el período, llegó la primera a $ 174.324,519.05 y la segunda a $ 33.467,589.20.

La Administración Barros Luco empezó con todas las ventajas que rodean de ordinario a un Gobierno desapasionado y tranquilo en la dirección del país, obteniendo numerosas y buenas leyes, pero terminó oprimida por una situación llena de dificultades, de pobreza y de incertidumbre que le creó el estallido de la guerra en el viejo mundo, situación que, naturalmente, no estaba en su poder eyitar.

17. Vida económica y financiera de Chile durante la Administración Sanfuentes (1915-1920)

En tiempos bien difíciles para la economía nacional se hizo cargo de los destinos del país el Mandatario del nuevo período, Don **Juan Luis Sanfuentes.** En medio de las dificultades que ocasiona a una Administración el peso abrumador de un fuerte déficit con que se inicia, que en moneda corriente pasaba de cien millones, y en medio de los entorpecimientos de la gran guerra, en que aparecía el horizonte de la vida de los pueblos envuelto en una obscura nube de incertidumbres, hubo de afrontar la delicada situación y las múltiples responsabilidades que son inherentes a todo jefe de una nación que en su vida ordinaria mantiene estre-

chos vínculos de todo género con el extranjero, especialmente en el ramo de los negocios de carácter material. Las circunstancias creadas por el conflicto, la presión ejercida por las medidas tomadas en diversos sentidos por los países europeos en el orden social, y la necesidad de dar entrada a algunas reformas o innovaciones hechas allí en los dominios de la economía y la hacienda, tuvieron, sin duda, su influencia en la vida de este país durante el período que examinamos, aparte, naturalmente, del empeño puesto por el Gobierno en tal sentido. La legislación dictada y la labor realizada ofrecen, en efecto, un marcado interés durante esta Administración.

Ya muy a principios de 1916, y ocupando la Cartera de Hacienda Don Armando Quezada Acharán, se aprobó una importante ley de **reforma del arancel aduanero,** que se hizo sobre la base de los derechos específicos y al abrigo de la suave política proteccionista que ha seguido nuestro país con respecto a las industrias nacionales en algunos períodos. El artículo 1.° de esa ley consigna, en el número de 1792 partidas, el gravamen a que quedaron sujetos los productos y mercaderías procedentes del extranjero. Se detallan igualmente los artículos que son libres de derechos, se establecen las prohibiciones de internación y se da una larga serie de prescripciones acerca de la internación en general. La ley lleva fecha 1.° de Marzo y está seguida de un minucioso reglamento elaborado por la Superintendencia de Aduanas para la aplicación del arancel.

Se dispuso también que los derechos de faros y balizas y de hospital se pagasen en adelante en buenas letras de cambio a 90 días vista en moneda nacional de oro y además en billetes con el recargo consiguiente.

Se exceptuó del pago de derechos de internación al ganado nacional que se exportase y retornase por los puertos de cordillera de la provincia de Coquimbo. Se declararon libres de derechos de internación las lanas y la crin animal que se internasen igualmente por los puertos de cordillera de las provincias de Ñuble, Bío-Bío, Malleco, Cautín y Valdivia. Se aumentaron en un 50% los derechos consulares y se aprobaron tratados de amistad con Uruguay, Estados Unidos y China.

Importantes fueron las **modificaciones a la ley de alcoholes** de 1902, que se hicieron con fecha 5 de Abril de 1916, siendo Ministro de Hacienda Don Maximiliano Ibáñez, en que alterando la base fijada para el pago de la contribución, se dispuso que las fábricas de alcohol industrial pagasen un impuesto fiscal de $ 1.20 por litro de alcohol absoluto, o sea, de 100° del alcohómetro centesimal, y $ 1.40 cuando se le produjese de los residuos de la refinación de azúcar. Las fábricas de alcohol agrícola pagan sólo $ 1 por litro de alcohol absoluto. Por el alcohol desnaturalizado, $ 0.10 por cada litro de 85° centesimales. Los licores con base de vino pagan $ 0.20 por litro; los licores de frutas, $ 0.25; los amargos y bítteres, $ 0.30; los anisados, $ 0.35; los licores dulces (benedictine) $ 0.40; el aguardiente, pisco y whisky $ 0.45; y el vermouth $ 0 50. En la producción de vinos y chichas, los viñedos de Tacna a Talca pagan $ 30 por hectárea de riego y $ 15 por la de secano; los viñedos al sur del río Maule pagan $ 20 por la de riego y $ 10 por la de secano. En la producción de cerveza se pagan $ 0.02 por litro hasta 4° centesimales de alcohol y $ 0.03 por litro de 4 a 7°. Por los alcoholes que se exporten se devuelve el valor del impuesto pagado.

De importancia fue también la ley que gravó con una contribución fiscal y municipal **la propiedad territorial, edificada o no, los bienes muebles y los valores mobiliarios.** Esta reforma y gravamen se hizo con igual fecha 5 de Abril de 1916. El título I se refiere al *impuesto territorial*, que recae sobre los predios rústicos y urbanos y las cosas que adhieren permanentemente a ellos y que por ley se consideran inmuebles, fijando como tasa hasta el 3°/₀₀ sobre el monto del valor, producto que se aplica a la atención de los servicios municipales, y pudiendo exigirse el pago de un impuesto adicional fiscal que no excederá del 2°/₀₀ para los servicios públicos, siempre que así lo autorice el Congreso a proposición del Ejecutivo al aprobarse en general la ley anual de presupuestos. El título II se refiere a los *bienes muebles*, comprendiendo los útiles de casa, carruajes, libros, alhajas y objetos de arte, y los animales, enseres y maquinarias que se encuentren en las propiedades urbanas o rurales. Los bienes muebles, para los efectos del impuesto, se estiman conjuntamente en el 10% del avalúo de la propiedad en que se encuentren, y sobre este valor se paga la contribución municipal y la contribución fiscal adicional. El título III se refiere a los *valores mobiliarios*, pagando el impuesto fiscal de 3°/₀₀ sobre su valor de tasación los títulos de crédito emitidos por el Estado, Municipalidades, etc., las cédulas de la Caja de Crédito Hipotecario, las acciones de las sociedades anónimas o en comandita por acciones; pagando el 2°/₀₀, igualmente fiscal, sobre su valor nominal, el capital de las sociedades colectivas o en comandita simple, los censos, los depósitos de los bancos; y exceptuando del impuesto el capital de las corporaciones de beneficencia, el capital de las compañías nacionales de se-

guros y las acciones de sociedades anónimas destinadas a la explotación de minas, mientras no produzcan utilidades. El título IV organiza la Dirección General del Impuesto.

Importante fue asimismo la ley de 22 de Diciembre de 1916 que gravó con un **impuesto de patente municipal** el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio o arte. Esta reforma y gravamen se hizo ocupando nuevamente la cartera de Hacienda Don Enrique Zañartu P. La ley establece cinco categorías de ciudades para el pago de la patente, perteneciendo Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Talcahuano a la primera, y las villas, aldeas y demás centros poblados a la quinta. El valor de la patente se fija en un cuadro anexo, que comprende las patentes profesionales, las patentes industriales y las patentes comerciales, estas últimas divididas en secciones de comercio mayor y comercio menor. El gravamen que establece la ley es decididamente bajo: un abogado, un médico y un ingeniero pagan la patente máxima de $ 500; una fábrica de tejidos de seda o de otro artículo, el máximum de $ 300; un banco nacional que no sea sociedad anónima y un banco extranjero pagan $ 12,000, y las sucursales de los mismos $ 1,000; una casa importadora $ 6,000.

En materia de obras públicas, se acordó a principios de 1916 invertir $ 10.000,000 en la edificación de escuelas, autorizándose al efecto una emisión de bonos que devengasen el interés de 8% con 2% de amortización anual. Se autorizó también la emisión de bonos en oro a un interés de 6% y una amortización del 4% por la suma de $ 20.000,000 de 18 d. para la prosecución de las obras de agua potable de Santiago y reintegro de fondos para los puertos de Valparaíso

y San Antonio y construcción de naves, pudiendo esos bonos servir para caucionar los vales de tesorería que soliciten los bancos en conformidad a la ley de 3 de Agosto de 1914.

Junto con esto se autorizó la emisión de $ 30.000,000 moneda corriente en vales de tesorería a plazo de cinco años, con interés no superior a 8% y amortizables por terceras partes en los últimos tres años de su plazo, valores cuya emisión se haría a la par, destinando su producido al pago de las cuentas pendientes del Estado y a la cuenta corriente de crédito abierta en el Banco de Chile. Se dispuso, además, que los bonos de regadío y edificación escolar sirviesen en adelante de caución para retirar vales de tesorería, quedando exentos tales bonos de todo impuesto fiscal o municipal. Se elevó a $ 950,000 la autorización para emitir bonos para atender a la construcción del *canal de Mauco*, a $ 2.960,000 la correspondiente al *canal derivado del río Laja*, a $ 12.538,000 la correspondiente a la construcción del *canal del río Maule* y a $ 8.000,000 la correspondiente al *canal derivado del río Melado* hasta el río Ancoa. Se autorizó la emisión de $ 3 millones en bonos para la ejecución de las obras de embalse del río La Laguna, a fin de regularizar el régimen del río Turbio. Igualmente se autorizó la emisión de $ 1.000,000, también en bonos, para la ejecución de las obras de embalse de aguas y obras en el río Colina. Acordóse, finalmente, contratar la ejecución de los trabajos fundamentales de mejoramiento del puerto de Antofagasta, cuyo precio no podría exceder de £ 1.700,000, y la inversión de varias sumas en trabajos de ferrocarriles, malecones y puentes.

En Julio de 1916 se acordó anticipar a los productores de salitre que se comprometiesen, como antes, a

mantener en explotación sus oficinas, hasta la suma de $ 3.00 por cada quintal español de salitre que tuviesen elaborado en las canchas y hasta $ 4.00 por el que tuviesen listo para el embarque en los puertos, no pudiendo exceder esta autorización de la suma que correspondiese a quince millones de quintales de salitre elaborado. El anticipo se haría por medio de letras previa constitución de garantía prendaria a favor del fisco. Esta ley, que había sido el efecto de una prórroga, duró un año, y fue renovada al año siguiente por tres años más, acordándose en Agosto de 1918 aumentar a $ 4.50 y 6.00 las respectivas cantidades.

Importantes fueron, además, las **leyes de carácter social** dictadas durante esta Administración. Con fecha 27 de Diciembre de 1916 se legisló sobre los *accidentes del trabajo*, disponiendo que los ocurridos a los obreros o empleados con ocasión directa del trabajo que ejecuten en una empresa, dan derecho a una indemnización a cargo del patrón, en provecho de la víctima, del cónyuge sobreviviente y de los hijos legítimos, exceptuándose los accidentes debidos a fuerza mayor extraña o producidos intencionalmente por los obreros. Esta ley lleva la firma del Ministro Don Enrique Zañartu P., como la lleva igualmente la que se dictó con fecha 13 de Enero de 1917 sobre el *servicio de cunas*, en virtud de la cual toda fábrica o establecimiento industrial que ocupe 50 o más mujeres mayores de 18 años deberá disponer de una sala acondicionada para recibir en las horas de trabajo a los hijos de las obreras durante el primer año de edad. Siguió a estas dos leyes una tercera sobre *descanso dominical*, que dispuso que los dueños, gerentes o administradores de establecimientos industriales o mercantiles darían un día de descanso (en general el Domingo) en

cada semana a los operarios o empleados que trabajen bajo su dependencia, empezando a las 9 de la noche de la víspera y terminando a las 6 de la mañana del día siguiente del fijado para el reposo y haciéndose algunas excepciones en casos de faenas que no admiten espera. Esta ley es de 5 de Noviembre de 1917 y lleva la firma de Don Eliodoro Yáñez. De igual carácter es también la ley que con el nombre de *Caja de Retiros y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado*, reorganizó la Caja de Ahorros establecida en 1911 en este servicio. La Caja de Retiros y Previsión Social tiene por objeto formar un fondo para el personal de la empresa, difundir el ahorro voluntario y fomentar el desarrollo de las instituciones de mejoramiento de la condición moral, intelectual, social y económica de los empleados y sus familias. La ley, que fundó una institución que ha prestado buenos servicios, es de fecha 10 de Marzo de 1918 y lleva la firma del Ministro Don Ramón Briones Luco.

A fines de 1916 se dispuso de nuevo la postergación por dos años de la *conversión metálica*. Igualmente a fines de ese año y ocupando la cartera de hacienda Don Arturo Prat se ordenó pagar a la casa Morgan Grenfell y Cía. los dos millones de libras que esa institución avanzó al Gobierno para cancelar vales del tesoro emitidos por igual cantidad, tomando la suma, para este pago, de los fondos destinados a la conversión metálica y prescribiendo la forma en que sería reintegrada. Se autorizó la contratación de un empréstito para incrementar los fondos de conversión. Con el fin de obtener más recursos, se dispuso poco después la enajenación de terrenos salitrales en Tarapacá y Antofagasta.

El año 1917 será memorable en nuestra historia económica por haberse aprobado al fin una ley de **protección a la marina mercante nacional** después de mucho tiempo de arduas discusiones y esforzada labor de parte de los que exigían el privilegio del cabotaje en nuestras costas y el incremento de nuestras naves de comercio. Esa ley, que lleva fecha 29 de Enero y la firma del incansable Ministro Don Enrique Zañartu P., estableció una contribución de tonelaje a toda nave nacional o extranjera que ejerciese el comercio de cabotaje en nuestros puertos y trasportase carga o pasajeros, debiendo pagar $ 0.40 oro de 18 d. por tonelada de registro que midiesen los buques de vela, $ 0.80 los barcos de vela con propulsión mecánica y $ 2.00 los vapores, exceptuándose los buques de vela de menos de 500 toneladas y los vapores de menos de 100. Hay protección a las naves chilenas en cuanto se reserva el ejercicio del comercio de cabotaje exclusivamente a los buques nacionales. Pero la ley dispone también que con el producto de la contribución se formará un fondo de fomento de nuestra marina mercante, problema que aún está pendiente. Los buques nacionales resultan favorecidos sobre los extranjeros, además, en cuanto la contribución se paga una sola vez al año independientemente del número de viajes que hagan: recorriendo sólo nuestras costas, sus viajes son mucho más numerosos que los de los extranjeros, que vienen de Europa o Estados Unidos en número menor de veces. A esta ley siguió otra, de principios de 1919, que estableció la *hipoteca de las naves* de 50 ó más toneladas de registro y creó la *Caja Hipotecaria de Crédito Naval*, institución destinada a facilitar los préstamos sobre hipoteca.

Para mejorar las condiciones marítimas y fluviales del tráfico en Corral y Valdivia, se estableció a principios de 1918 una contribución de tonelaje sobre la carga que se internase y exportase por Corral, fijada en un 12% sobre el precio de conducción que cobrasen los empresarios de transporte de ese puerto a Valdivia y viceversa.

En materia de Administración financiera, se dió ese año organización legal a la *Oficina de Especies Valoradas*, disponiéndose que la fabricación de los billetes fiscales y especies valoradas con destino al cobro y servicios de los impuestos públicos y la adquisición y reparto de los utensilios de escritorio de las oficinas fiscales, estarían a cargo de esa oficina, fijándose el personal definitivo. Se dispuso también que el Banco de Chile tomase a su cargo los servicios de la *Tesorería Fiscal de Chile en Londres*, creada el 1904. Más tarde se ha sustentado la idea de restablecerla, habiéndose presentado por el Ejecutivo un proyecto al Congreso. También se facultó a la *Oficina de Emisión* para que entregase billetes de curso forzoso a toda persona que lo solicitase en cambio del depósito de 18 d. en oro por peso que debería hacer en la Tesorería Fiscal de Santiago.

Para atender al ahorro y préstamos no superiores a mil pesos en la población, se creó en Santiago, por ley de 14 de Febrero de 1920, la **Caja de Crédito Popular,** importante institución que ha prestado buenos servicios en su objetivo de dar dinero en préstamo con garantía prendaria, de emitir bonos o letras de crédito, lo que hace por el valor de las obligaciones constituídas a su favor, de amortizar a la par las letras que emita y de formar un fondo de re-

serva para dar garantía a sus operaciones. Con la fundación de esta institución, en que tuvo acción directa el señor Francisco Huneeus, se iba tras la solución de un problema de carácter social, pues reinaba el más franco descontento por la situación de dureza con que las casas de préstamos ofrecían sus servicios a las clases bajas. La ley lleva la firma del Ministro Don Guillermo Subercaseaux.

Con el fin de subvenir a las necesidades de la circulación, en que había dificultades por causa de la situación creada por la guerra europea, se acordó, con fecha 8 de Agosto de 1919, y ocupando la cartera de Hacienda Don Julio Philippi, la acuñación de $ 20.000,000 en *moneda divisionaria de níquel*, de 20, 10 y 5 centavos, y de cobre de 2½ centavos. La aleación de las primeras fue de 25% de níquel y 75% de cobre, no quedando nadie obligado a recibir más de $ 50 en ella.Con esta ley se dió comienzo al uso del níquel, tan frecuente en toda la Europa, en las monedas de 20, 10 y 5 centésimos, en las que hasta ahora se había empleado en Chile la plata, aunque en los últimos tiempos con fuerte aleación. La misma ley ordenó acuñar también $ 5 millones en moneda de plata de valor de un peso con 500/1 000 de ley y 9 gramos de peso.

Cuatro nuevas leyes referentes a la *conversión metálica* postergaron el plazo, primero hasta el 31 de Diciembre de 1919, después hasta el 1.° de Febrero de 1920, ocasión ésta en que puso extraordinario empeño por realizarla el Ministro Subercaseaux, en seguida hasta el 30 de Junio y después hasta el 31 de Diciembre del mismo año de 1920.

Siendo Ministro de Hacienda Don Luis Claro Solar, se aprobó a principios de 1919 una importante ley

que fijaba por diez y ocho meses el *impuesto de timbres, estampillas y papel sellado*, ley que tomaba ahora mayor desarrollo en los gravámenes, y que hubo de ser reformada a principios de 1921 para adaptarla a la nueva situación de gravámenes frente al aumento de las necesidades del Estado.

Con el propósito de evitar entorpecimientos por atraso en la aprobación de las leyes respectivas, se dispuso igualmente a principios de 1919 que el *servicio de la amortización e intereses de los bonos de la deuda pública* y los dividendos de las deudas hipotecarias del Estado se hiciese en las fechas de sus vencimientos aun cuando no se hubiese promulgado la ley de presupuestos anuales.

En materia de agricultura y ganadería, se acordó suspender durante los años 1919, 1920 y 1921 el impuesto de internación de ganado, e invertir $ 2 millones en la construcción y reparación de caminos que favoreciesen el desarrollo de la agricultura. Las tarifas ferroviarias hubieron, sin embargo, de aumentarse luego después en un 20%, ocupando la cartera de Industria Don Oscar Dávila I. La firma del señor Dávila lleva también la importante **ley de caminos,** aprobada el 5 de Marzo de 1920, después de prolongada discusión. Esta ley vino a reemplazar a la ya muy antigua de 1842. Ella hace distinción de caminos públicos y particulares, clasificando los públicos en primera y segunda clase; da reglas de policía de caminos y de reglamentación del tránsito; prescribe la formación de un plan de carreteras, creando las autoridades necesarias; fija las rentas y su inversión, y concluye con el establecimiento de las penas a que la aplicación de la ley pueda dar lugar. Es un conjunto de disposicio-

nes que se armonizan con las exigencias de la época y que constituyen un positivo progreso en la materia. Sabido es que los caminos desempeñan en la economía de un país el papel que desempeñan las arterias en la vida del cuerpo humano: dentro del sistema total de vías de comunicación y transporte, son los alimentadores de los ferrocarriles y aún de la navegación.

Para seguir favoreciendo la *industria de la pesca*, se dispuso pagar íntegramente por un nuevo plazo de diez años las primas de fomento establecidas en 1907. En el comercio internacional se aumentaron, por ley de 6 de Agosto de 1920, los derechos fijados en los aranceles consulares.

Las últimas leyes económicas y financieras de esta Administración fueron: una que ordenó la emisión de $ 30.000,000 en vales de tesorería, que debían destinarse preferentemente al retiro inmediato de la circulación de los vales emitidos en los préstamos a los salitreros que correspondiesen a sumas ya pagadas por los deudores; otra que modificó algunas funciones de la Dirección de Contabilidad, aumentando los sueldos del personal; y otra que destinó fondos para la terminación de caminos.

Las **rentas ordinarias** de la nación alcanzaron, con excepción de sólo un año (1919), un positivo progreso en el quinquenio, como puede verse en el detalle siguiente:

Años	Billetes	Oro de 18 d
1916.....	$ 200.117,045.75	y $ 64.275,398.17
1917.....	220.385,281.99	» 57.746,583.64
1918.....	239.981,714.90	» 94.918,327.46
1919.....	187.434,037.74	» 32.398,526.83
1920.....	304.452,948.88	» 131.140,253.71

Considerable aumento hubo el año 1916 en las entradas de oro, llegando el exceso de las rentas salitreras a $ 31.237,689.38. Con la reforma que se hizo en los aranceles consulares hubo también un mayor rendimiento de $ 1.017,966.29. Las entradas extraordinarias llegaron a $ 37.648,218.39 en billetes y a $ 4 millones 750,622.30 en oro. En la relación de entradas y gastos de ese año resultó un superávit de $ 28 millones 339,446.67 en billetes y $ 14.844,825.48 en oro. Pero como en el año anterior hubo un fuerte déficit, el ejercicio financiero de 1916 cerró también con un *déficit*, que fue de $ 9.121,911.09 en billetes y $ 34 millones 383,017.64 en oro.

El aumento que se observa en las entradas en billete de 1917 se debió a los derechos de internación, almacenaje y recargos consiguientes. Los recursos extraordinarios ascendieron a $ 17.207,400.30 moneda corriente y a $ 20.464,497.49 oro.

El año 1918 arrojó un *superávit* de $ 15.853,655.16 en billetes y $ 22.337,721.08 en oro. Ello fue debido, como se comprenderá, al mejoramiento de los negocios del salitre: la entrada total por derechos de exportación de nitrato llegó a $ 65.568,029.71 oro. También incrementaron las entradas en moneda corriente por derechos de papel sellado y estampillas, que arrojaron una renta total de $ 7.052,161.83, y por la contribución de haberes, cuya entrada total fue de $ 12 millones 258,736.66.

Déficit hubo nuevamente en 1919, en que ascendió a $ 52.790,304.72 m/c. y $ 25.229,770 oro, por causa de un fuerte retroceso en las ventas de salitre, que disminuyeron en $ 36.649,673 m/c. y $ 54.683,611 oro. La disminución de las exportaciones restringió el mon-

to de los derechos de importación en $ 12 millones 244,887.

A pesar del considerable aumento de entradas que hubo en 1920, en que el exceso de los derechos de exportación de salitre llegó a $ 39.864,228.71 en billetes y $ 49.913,455.58 en oro, el año saldó con un *nuevo déficit* de $ 61.976,378.28 en la computación en billetes, pero un supéravit de $ 4.883,673.94 en la computación en oro. Agregando a estas cifras las del año anterior, resulta un **déficit total** en 31 de Diciembre de 1920 ascendente a $ 99.178,466.67 moneda corriente y $ 15.178,547.84 en oro. El detalle de las rentas de 1920 es el siguiente:

Derechos de internación	$ 16.315,986.22	billetes
Recargo por cambio	13.477,807.86	»
Derechos de exportación de salitre	71.973,875.53	»
De yodo y recargo	356,742.97	»
De bórax y recargo	154,886.07	»
Encomiendas postales	1.521,960.82	»
Adicional del 10% sobre alcoholes	207,292.20	»
Movilización de bultos	2.173,627.75	»
Resguardos de cordillera	80,877.96	»
Derechos de tonelaje	52,497.33	»
Estampillas postales	5.471,181.40	»
Telégrafos	4.731,519.74	»
Dirección General de Correos	407,859.33	»
Papel sellado	855,776.57	»
Estampillas de impuesto	7.995,954.51	»
Fajas de impuesto	10.113,344.58	»
Impuesto sobre alcoholes	29,825.98	»
Idem. (ley 3,087)	6.523,589.62	»
Contribución bancaria	1.833,492.01	»
Contribución de herencia	2.185,795.55	»
Contribución de haberes	13.295,077.81	»
Compañía de seguros	700,180.19	»
Patentes de Cía. de seguros	361,000.00	»
Derechos en timbres	1.558,154.10	»
Ferrocarril de Arica	6.574,468.36	»
Faros y balizas	749,781.11	»
Redención de censos	320,796.26	»

Patentes de minas	112,959.49	billetes
Casa de Moneda	219,069.67	»
Otras	26.107,584.44	»
Derechos de internación	19.649,766.15	en oro
Exportación de salitre	56.797,874.13	»
Yodo	330,928.61	»
Bórax	116,081.31	»
Encomiendas postales	857,075.30	»
Adicional del 10% sobre alcoholes	128,068.25	»
Resguardos de cordillera	49,070.80	»
Faros y balizas	526,950.97	»
Derechos y multas consulares	3.985,740.25	»
Contribución bancaria	280,690.64	»
Otras	1.707,658.25	»

Ya no cabe discusión que una de las medidas ineludibles en el propósito de mejorar las condiciones de la hacienda pública es la introducción del impuesto a la renta. En la Memoria de Hacienda correspondiente a 1918 el señor Claro Solar, Ministro del ramo, se empeña por la introducción de esta contribución, insertando en ella un detallado proyecto sobre el particular. En la Memoria de 1920 viene un Apéndice, escrito en igual carácter por el autor de este trabajo, en que después de examinar la evolución que a través del tiempo ha tenido el régimen de las rentas públicas en el país, llega a la conclusión de que la introducción de la contribución general a la renta no admite espera, dada la situación insostenible que ha debido producirse en los últimos años por las crisis salitreras en el mantenimiento de los gastos del Estado.

Por lo que respecta a la garantía metálica que hoy por hoy tiene el papel moneda entre nosotros, debemos constatar que los *fondos de conversión* ascendían en 31 de Diciembre de 1920 a **$ 114.110,600.86** en oro nacional, habiendo en el Banco de Inglaterra £ 1 mi-

llón 799,391.16.0 y en la Casa de Moneda $ 90 millones 118,719.59.

El estudio del desarrollo y de las contingencias del **comercio internacional** en este período, nos da plena luz sobre la situación que hemos contemplado en las rentas públicas. Su detalle fue:

Años	Exportación	Importación	Total	Cambio
1916. . .	513.584,744	222.520,828	736.105,572	9.46 d
1917. . ..	712.289,028	355.077,027	1,067.366,055	12.73 »
1918. . .	799.625,417	436.074,065	1,235.699,482	14.59 »
1919. . ..	316.977,143	401.324,195	718.301,338	10.58 »
1920 . . .	791.521,373	455.078,934	1,246.600,307	12.06 »

El fuerte incremento que hubo el año 1916 en las exportaciones, al extremo de que jamás había sido mayor el exceso de ellas sobre las importaciones, se debió al mejoramiento inesperado del mercado de salitre, producto que pasó a emplearse, principalmente, no en la agricultura, como antes de la guerra, sino en la preparación de elementos de guerra. La exportación subió en 1916 a 64.787,814 quintales españoles, habiendo variado sus precios entre 6/8 y 10/4. El stock de nitrato que había en nuestras costas tuvo un fuerte retroceso. La exportación de cobre en barra llegó a 59.923,861 kilos, la de cobre en ejes a 4.326,019 kgs. y la de minerales de cobre a 9.212,778 kgs., representando esta producción de metal rojo unos 13.000,000 de libras esterlinas. En las importaciones, que también subieron, debe tenerse presente que el avalúo de las mercaderías se hizo tomando como base el valor fijado en la póliza por el comerciante; anteriormente se basaba en la tarifa de avalúos. Con todo, la proporción de exportaciones e importaciones fue extraordinariamente favorable, lo que, sin duda, hubo de mover al Minis-

tro de Hacienda Don Arturo Prat a decir en su Memoria de 15 de Junio de 1917 que con verdadera satisfacción podía presentarse al Congreso el resultado del año económico y financiero del país en 1916. «En el curso de él, dice, se han regularizado los negocios, la industria salitrera ha tenido su época más próspera, la producción de cobre ha aumentado en más de un 50% y la hacienda pública ha disminuído considerablemente la enorme deuda flotante que la oprimía». Sin embargo, debía no olvidarse, sobre todo para el equilibrio financiero posterior, que la prosperidad de la industria salitrera, la industria matriz, tenía por entonces base artificial, pues abandonándose el empleo natural de su producto, que es el de servir de abono en la agricultura, se lo usaba principalmente en la elaboración de explosivos, lo cual debía significarle un auge momentáneo, inestable, si no recuperaba, pasado el conflicto, su antiguo uso. Y así fue que, por la competencia que debió hacer al nuestro el salitre artificial y la fuerte restricción de su empleo por falta de capitales y desvalorización inusitada de la moneda en algunos de los países consumidores, la exportación sufrió más tarde casi una paralización completa, dando el más recio golpe a nuestras finanzas y con ello a nuestra vida económica, como ha debido palparse principalmente en 1921 y 1922.

La situación de 1916 ejerció su influencia sobre el cambio, mejorándolo, pero ofreciendo, en todo caso, las posibilidades de alteración propias de la falta de una institución que le ofreciese fijeza, lo cual hace plausiblemente al señor Prat recomendar «la adopción de medidas eficaces que eviten las fluctuaciones de la moneda», divisando dos sistemas que conducirían al

objeto: la conversión a un tipo medio de cambio de los últimos tiempos o la caja de conversión con garantía de oro, al tipo que se tomase para la conversión. No estimaba que el «gold exchange standart» fuese de segura aplicación en ese entonces, a causa de las oscilaciones que también sufría el cambio extranjero.

El fuerte aumento experimentado por el comercio exterior de 1917, que pasó por primera vez de la suma de mil millones de pesos oro, se debió, del propio modo, al mejoramiento de las ventas de salitre y yodo, que tuvieron un exceso ascendente a $ 129.777,866, y en parte al auge de la exportación de minerales metálicos y de leguminosas. La exportación de cobre llegó ese año a 78.142,572 kilos en barras, 21.414,158 kgs. en ejes y 32.579,941 en minerales, cifras totales que llevaron a nuestro país al segundo lugar entre los que producen metal rojo en el mundo entero. Contribuyó al robustecimiento del comercio exterior la internación que, como consecuencia de las exportaciones generales, hubo de productos de la industria manufacturera, aumento en que sólo los Estados Unidos participaron con $ 79.659,942 (en un total de importaciones de allí de $ 178.068,041). La exportación a ese país aumentó en $ 172.200,686 (en un total de exportaciones hacia allá de $ 424.674,255).

En cuanto a las industrias nacionales, el Ministro de Hacienda, Don Luis Claro Solar, refiriéndose a la del *hierro*, dice en su Memoria de Agosto de 1918 que «las dificultades que la guerra europea ha creado para la provisión de hierro han venido a evidenciar la urgente necesidad que tenemos de establecer la fundición del hierro, que podría suministrarnos en buenas condiciones todo el que se consume en el país y llegar a

constituir aún un ramo importante de nuestra exportación». No cabe duda que sería un buen paso el de fomentar esa industria; pero en cuanto al ideal de bastarnos a nosotros mismos y llegar todavía a una apreciable exportación, no somos tan optimistas, porque los artículos que de tal materia recibimos del extranjero son el resultado de industrias avanzadas, del trabajo de industrializaciones y técnica de muchos años de progreso y perfeccionamiento.

En el problema del carbón recomienda «la terminación de la línea férrea de Lebu a Los Sauces, destinada a ligar la zona carbonífera con el centro del país y abrir un puerto fácil para las exportaciones, línea que puede llegar a ser en breve una interesante vía de comunicaciones con la República Argentina». Bien hacía el señor Claro Solar en activar el pensamiento de realización de tal empresa, cuando sabemos que la riqueza carbonífera y agrícola de esa región es inmensa.

Habiendo mejorado el cambio medio desde el bajo nivel a que llegó con el estallido de la guerra, el señor Claro opinaba en 1918 (Memoria de Hacienda) que la situación se presentaba «favorable para procurar alcanzar la estabilidad de nuestra moneda», proponiéndose presentar al Congreso, como lo hizo, un proyecto para establecer un Banco Central con privilegio de emisión de billetes, institución con que estimaba se regularía el circulante, se estabilizaría el cambio y se daría elasticidad a la moneda.

En 1918 aumentaron principalmente las importaciones de tejidos, que llegaron a un valor total de $ 73.144,929; el oro no labrado y la moneda de oro, que ascendieron a $ 40.953,698. Llama la atención el incremento de las internaciones procedentes de los

Estados Unidos, que en seis años habían llegado de $ 55.038,790, a que alcanzaban en 1912, a $ 203 millones 451,891 en 1918. Digno de notarse es el hecho de que el carbón, que en 1913 se importó en la cantidad de 1.540,747 toneladas, con un valor de $ 30 millones 814,940, en 1918 se importó sólo en la cantidad de 320,219 toneladas con un valor de $ 6.091,058. En las exportaciones generales aumentaron el salitre y el yodo, que alcanzaron en 1918 á un valor total de $ 532 millones 323,781; las lanas, a $ 32.833,723; los cereales, a $ 17.421,919; las féculas y harinas, a $ 13.960,296. La exportación de carbón en 1913 había sido de 200 toneladas, con un valor de $ 4,000; en 1918 fue de 24 mil 490 toneladas, con un valor de $ 2.038,306; en rancho se consumían entonces 278,448 toneladas.

Interesantes son las observaciones que hace Don Luis Claro Solar en la Memoria de Hacienda de 1.° de Junio de 1919 acerca del régimen financiero de los últimos años, en que llama la atención al hecho de que el rendimiento de los impuestos indirectos llegaba al 84,67% de las entradas, en tanto que el de los directos sólo al 15,33%, observando que en los otros países la desproporción no es tan fuerte como en Chile. Sin el propósito de objetar al Ministro la buena consecuencia que de ahí deriva, de que es menester incrementar estos últimos, para que se aproximen a la relación que guardan, por ejemplo, en Inglaterra, en que el porcentaje de ellos era entonces mayor (ahora mucho mayor) que el de los indirectos, debemos advertir que el grueso de los impuestos que en el cálculo del Ministro aparecen como indirectos (los derechos de exportación de salitre, industria en su mayor parte en manos de extranjeros), no son propiamente impues-

tos, es decir, no caen en el concepto de éstos, pues son un gravamen que no pesa sobre nuestro país, sino sobre el extranjero, que es el consumidor casi exclusivo. Ello no querrá decir, sin embargo, que la relación de impuestos directos e indirectos esté de hecho mejorada. Nó, porque aunque los impuestos indirectos propiamente tales son bajos, los directos lo son mucho más, de lo cual resulta el grave peligro de que faltando o disminuyendo la entrada por exportación de salitre, necesariamente habrán de faltar rentas a la nación. Los impuestos directos deben aumentarse, no sólo para que acrecienten las rentas nacionales, lo que sería el fin más inmediato, sino para que una mayor cuota de las clases poseedoras desarrollen mayor espíritu de trabajo creador, de trabajo propiamente creador, al encontrarse cargadas con mayores gravámenes, como ocurre en los países de más intensas actividades económicas. Bien hacía el Ministro al recomendar el impuesto a la renta.

En el año 1919 empezó una **fuerte crisis económica,** que pareció desaparecer en 1920, pero que en realidad prosiguió con mayor vigor en 1921 y 1922. La exportación descendió en 1919 a menos de la mitad. La disminución del salitre llegó a un valor de $ 405.246,739 y la de minerales metálicos a $ 58 millones 5.23,740. En 1920 hubo un restablecimiento de valores. He aquí la participación que las diversas naciones tuvieron en el comercio exterior de 1920:

Naciones europeas, asiáticas etc.	Exportación	Importación
Gran Bretaña.....	$ 164.424,175	$ 116.166,298
Francia.....	31.712,886	28.272,712
India.....	420,215	24.148,285
Alemania.....	7.480,844	21.074,388
España.....	16.938,294	9.187,362

Naciones europeas, asiáticas, etc.	Exportación	Importación
Suecia	2.498,675	8.497,675
Bélgica	9.698,763	6.848,866
Noruega	8,375	5.649,460
Italia	9.586,534	5.646,911
Japón	14.973,701	4.214,864
Holanda	20.848,423	2.759,384
Suiza	.....	2.041,246
Australia	4.393,337	801,482
Dinamarca	6.280,375	353,915
China	.....	323,241
Grecia	.....	232,493
Portugal	1.507,501	226,922
Nueva Zelanda	.....	118,583
Finlandia	.....	56,581
Java	2.788,117	35,571
Turquía	.....	20,645
Austria	1,805	8,078
Egipto	10.871,479	4,332
Haway	7.096,785	.....
Colonia del Cabo	3.218,031	.....
A la orden	80.875,921	.....
Naciones americanas		
Estados Unidos	345.684,712	140.270,665
Perú	13.856,054	33.968,124
Argentina	17.454,000	17.053,117
Méjico	10,030	8.850,597
Brasil	87,000	8.790,399
Bolivia	12.296,855	2.932,440
Cuba	402,080	2.061,442
Uruguay	376,381	1.798,567
San Salvador	47,568	874,714
Guatemala	7,410	691,187
Ecuador	1.002,198	623,505
Canadá	223,369	185,718
Costa Rica	3,142	153,194
Panamá	1.508,535	88,140
Colombia	93,432	15,933
Malvinas	23,469	7,156
Jamaica	.....	4,085
Paraguay	.....	627
Martinica	1.302,000	.....
Puerto Rico	1.191,641	.....
Trinidad	327,292	.....

El comercio total con el extranjero llegó en 1920 a $ 1,246.600,307, habiendo aumentado las exportaciones de salitre y yodo en $ 408.498,926 (exportación total: 60.271,952 quintales españoles), los minerales metálicos en $ 49.962,448 y las importaciones de carbón y combustibles. Nuestro comercio de nitrato mejoró a causa del agotamiento de las reservas en Europa y Estados Unidos y el fracaso más o menos evidente del salitre artificial.

Las perturbaciones producidas en las economías de todo el mundo por la guerra europea, se han hecho sentir de modo fundamental en los **precios corrientes,** que en 1920 eran en Chile, por término medio anual en moneda corriente: cebada chevalier, $ 37 los 100 kilos; frejoles caballeros, $ 26 los 100 kilos; frejoles bayos grandes, $ 59 los 100 kilos; garbanzos grandes, $ 71 los 100 kilos; harina superior, $ 75 los 100 kilos; lentejas de Chillán, $ 72 los 100 kilos; mantequilla de Puerto Montt, $ 440 los 100 kilos; papas amarillas, $ 18 los 100 kilos; trigo blanco del centro, $ 49 los 100 kilos; plata, $ 107.02 oro de 18 d. por kilo fino; cobre en barra, $ 104.04 de 18 d. por quintal métrico; salitre, 15 chelines por quintal español en la costa; yodo 10.3 peniques por onza; carbón, $ 68 de 18 d. por tonelada.

La **deuda pública** externa ascendía el 31 de Diciembre de 1920 a £ 28.350,732, o sea, a $ 378.009,760 oro nacional. La interna en oro a $ 155.739,000; en billete a $ 95.149,690.42. Por cabeza de población llegaba a $ 170.

Mirada de conjunto sobre la vida económica del país durante la Administración Sanfuentes

En el enlazamiento económico cada vez más íntimo a que llegan los pueblos con el transcurso de los años por efecto del aumento de la cultura, cualquiera crisis política o social produce perturbaciones considerables en todas y cada una de las naciones en contacto, y estas perturbaciones son tanto mayores en sus efectos cuanto más potentes y numerosos son los pueblos que directamente las ocasionan. La guerra europea trascendió a todo el orbe y ha debido entorpecer durante ocho años hasta ahora la vida social, política y económica de la casi totalidad de los Estados: durante cuatro, con la refriega armada, y durante otros cuatro, con las consecuencias derivadas de ésta, sin que siquiera podamos vislumbrar el tiempo en que vuelva la normalidad a la vida del mundo.

Natural es, así, que la vida económica de Chile a través del quinquenio que examinamos aparezca con las características de tal situación, ajustándose las medidas tomadas por el Gobierno y la legislación general a las necesidades que ella crea. Esas características son: el mayor o menor aumento de las cargas públicas, por un lado, y el mayor o menor adelanto de las condiciones del trabajo, por el otro. Casi todo movimiento político en que participan las masas, sea que tenga carácter internacional, sea que tenga alcance nacional, sea que tenga trascendencia meramente local, trae, dentro de la organización de la vida moderna, aumento de gravámenes por escasez de recur-

sos en los organismos y mayores garantías o mejoramiento en la situación de las clases trabajadoras.

Dando, en efecto, una mirada de conjunto a la vida económica del país durante este tiempo, veremos que gran parte de sus principales medidas y leyes se encaminaron hacia el aumento de las contribuciones y hacia el adelanto social en las clases bajas. Pero la actividad de un Estado en tales circunstancias no se concreta ni puede concretarse a esto sólo. Junto a ello la Administración Sanfuentes desplegó actividades importantes en pro del mejoramiento de los organismos e instituciones que tienen parte en el robustecimiento de la capacidad económica general, realizando obras de positivo beneficio para la nación. En cuatro órdenes podemos concentrar la labor económica principal realizada por este Gobierno: en la reforma de leyes tributarias, en la aprobación de leyes sociales, en la aprobación de leyes de tráfico y transporte y en la construcción de obras de regadío, estas dos últimas dirigidas al fomento de la producción.

En el primer orden, se llevó a cabo una reforma del arancel aduanero, que se trató de ajustar a las nuevas exigencias del comercio con el exterior, elevando en parte las tarifas, protegiendo en parte las industrias y estableciendo en general mayor equidad; se modificó el gravamen a la propiedad territorial, estableciendo una contribución fiscal y municipal sobre ella, estableciendo una contribución sobre los bienes muebles y sobre los valores mobiliarios; se amplió la ley de patentes municipales, introduciendo aumento de impuestos y realizando innovaciones importantes. Estas últimas reformas, junto con mejorar la situación de los municipios, debían mejorar indirectamente la situación de la hacienda del país.

En el segundo orden, se legisló sobre el trabajo, dictando una ley de accidentes que, en la ausencia casi absoluta de legislación obrera en el país, significaba un paso importante en pro de las clases trabajadoras; se instituyó el servicio de cunas en los establecimientos industriales en que participase la mujer; se estableció de modo legal y obligatorio el descanso dominical, como pertenece a los países en que hay buena organización de trabajo y mayor cultura; se creó la caja de retiros y previsión social de un organismo público tan vasto e importante como el de los ferrocarriles del Estado; se aprobó una ley que daba vida a la Caja de Crédito Popular, o sea, al banco de crédito prendario en el país. Fueron éstas, como las anteriores, medidas que se tomaron al impulso de las necesidades creadas por las perturbaciones de la guerra y en el deseo de no entorpecer, antes bien, de favorecer el adelanto normal de las instituciones sociales y de la vida económica de la nación. Si bien es cierto que las reformas de orden social y económico realizadas principalmente en la Europa con ocasión de la guerra, hubieron de mover a nuestro país a obrar, en la medida de lo posible, en sentido parecido, aunque no con la intensidad en que se procedió allá, también lo es que el Estado hizo laudables esfuerzos por acercarse a los preceptos de las conveniencias nacionales en estas materias.

En el tercer orden, se emprendió con tenacidad el estudio definitivo y la aprobación de la ley de protección a la marina mercante nacional, obra de naturaleza fundamental en el amparo y fomento de nuestros intereses económicos, por la cual se había luchado durante muchos años en la República y en que las

perturbaciones del conflicto europeo ofrecieron el apoyo más decidido en su realización, a causa de estar dentro del concepto de las conveniencias del país; se mejoraron las condiciones marítimas y fluviales de los puertos de Corral y Valdivia, centros de gran desarrollo y porvenir económico en Chile; se dictó la ley de caminos, paso éste último de carácter no menos fundamental, que habrá de posibilitar la formación de una red adecuada y suficiente de carreteras, para incremento de la producción y felicidad de sus habitantes.

En el cuarto orden, por fin, se emprendió la construcción y el mejoramiento de los importantes canales de regadío del Mauco, el Maule, el Melado y el Laja, junto con la realización de obras de embalse, para todo lo cual se recurrió, en demanda de recursos, a la emisión de bonos, pues las entradas ordinarias de la nación no permitían la distracción de sumas para estos objetos, antes por el contrario, arrojaron déficits cuantiosos, que se presentaron ya en los años en que esta Administración empezó su Gobierno y que perduraron hasta que terminó.

La estadística de las entradas durante este quinquenio, no presenta, en verdad, en el estudio del desarrollo económico y rentístico del país, el interés que debe presentar en períodos normales, pues ha habido alteraciones ocasionadas por fenómenos inesperados, por fenómenos que no se repiten o que no son corrientes. Con todo, dejaremos consignado el hecho importante de que los recursos ordinarios de 1916 llegaron a $ 200.117,045.75 en billete y $ 64 millones 275,398.17 en oro nacional, y los de 1920 a $ 304.452,948.88 en billete y $ 131.140,253.71 en oro,

cifras estas dos últimas que no se podían sostener, en la producción que representaban, para el año 1921 ni para 1922. Lo propio debemos decir de los valores del comercio exterior, que en 1916 alcanzaron a $ 513.584,744 en las exportaciones y a $ 222.520,828 en las importaciones, en tanto que en 1920 llegaron a $ 791.521,373 en las primeras y a $ 455.078,937 en las segundas, anotando un aumento igualmente artificioso al de las rentas, de las cuales constituyeron su legítima causa.

18.—Labor económica realizada en los comienzos de la Administración Alessandri

Jamás había tomado el pueblo una participación tan animada y directa en la elección presidencial como en 1920. Ello provenía, ante todo, de la estrechez económica en que lo mantuvieron las circunstancias producidas por el largo período de duración de la guerra europea y la inextinguible crisis que ella trajo consigo, crisis que aún perdura, que perdurará por vasto tiempo y que habría de producir las más hondas perturbaciones en el desarrollo de la vida económica. Pero ello también provenía de la evolución que han venido sufriendo los conceptos de la vida social, sobre todo en las clases bajas, de los últimos tiempos, evolución que ha debido robustecerse de modo esencial como consecuencia de aquel gran conflicto y en que ellas se han sentido impulsadas a formular aspiraciones mayores. Obsérvese lo que ha ocurrido primero en Rusia, después en Alemania y por último en Italia, Francia y otros países, en que el pueblo ha sustentado ideales

que hasta antes de la conflagración del viejo mundo no se habían sustentado con el ímpetu formidable con que han aparecido ahora.

El Presidente Don **Arturo Alessandri** fue llevado al poder en brazos de la democracia, de una democracia que quería ante todo reformas sociales, porque manifestaba un descontento, que no podía provenir sino de la pobreza y miseria económica de los últimos años y de la influencia ejercida por la evolución de los conceptos sociales. Espíritu emprendedor, amante del pueblo y extraordinariamente laborioso, empezó su Gobierno con marcado entusiasmo, en medio de la resistencia que las clases superiores ponen en todo tiempo y en todos los países a las exigencias de las clases inferiores, sobre todo cuando las estiman exageradas.

Con un fuerte déficit fiscal, ascendente a $ 99 millones 178,466.67 m/c. y $ 15.178,547.84 oro de 18 d, y en medio de una crisis económica profunda como jamás se había presentado (así ha sido la que siguió en el mundo entero a la gran guerra), inició su labor la nueva Administración. El plan que hubo de trazarse, en razón de las necesidades del Estado y también de las preocupaciones de las Cámaras, en donde se estudiaban algunos proyectos importantes, no podía ser otro que el de obtener en primer lugar el despacho de las leyes tributarias pendientes, para organizar en seguida un sistema que ofreciese entradas seguras y suficientes para los menesteres de la nación. Desde el primer momento propició y obtuvo la aprobación del proyecto de ley de **reforma del arancel aduanero,** conjunto de disposiciones que no correspondía a la situación creada en el último tiempo por el enca-

recimiento general de la vida y por el nuevo concepto de las relaciones del comercio exterior, el cual requería la adopción de medidas que dificultasen un tanto las internaciones y aumentasen los caudales públicos. La ley lleva fecha 23 de Febrero de 1921 y estableció un recargo general de 50% en los derechos de internación y de 100 y más por ciento en mercaderías determinadas, exceptuando del recargo a algunas partidas. Igualmente dispuso que los derechos de almacenaje se pagasen con un 50% de recargo. Era una medida que se imponía con urgencia.

Luego obtuvo también la aprobación del proyecto de **reforma de la ley de papel sellado, timbres y estampillas,** que en la ampliación de los servicios públicos y en la alteración de la vida económica del país, ofrecía deficiencias que era necesario enmendar, no sólo en pro de la equidad, sino en beneficio de las arcas fiscales. La ley lleva igualmente fecha 23 de Febrero de 1921. Estableció en general un recargo considerable, de manera que el rendimiento total de ella debía aumentar en un 50 o más por ciento.

Con fecha 8 de Febrero se había aprobado además, una ley importante, que modificaba substancialmente la situación del Estado frente a una industria que ha tenido entre nosotros historia muy amplia, pues el gravamen a su producto se remonta a los tiempos de la colonia, y que producía nuevas situaciones en el consumo correspondiente. Esa ley fue la relativa al cultivo e **impuesto de tabaco, cigarros y cigarrillos.** Era esta una materia en que desde hacía tiempo se estimaba conveniente legislar, imponiendo un mayor gravamen a la correspondiente importación del extranjero, para estimular con ello la producción na-

cional y aumentar las insuficientes rentas públicas. La ley establece prescripciones sobre el cultivo de este producto y su fomento en el país, sobre la inscripción y pago de la contribución, sobre su comercio, sobre las penas y sobre el procedimiento judicial.

Las dificultades producidas en la economía por la guerra europea, habían afectado, por razón del encarecimiento de los artículos, de los costos de la vida y de la pobreza general, tan profundamente el funcionamiento regular de los ferrocarriles chilenos, que sobre la base de la reforma de su organización, hecha, como hemos visto, sólo pocos meses antes de estallar ese conflicto, el Gobierno, como igualmente la Empresa, no encontraban otra solución que contratar un fuerte empréstito exterior para obtener los recursos que se requerían. Con fecha 17 de Enero de 1921 se aprobó, así, una ley que autorizaba la contratación de un **empréstito ferroviario por £ 5.000,000** oro, al 8% de interés, empréstito que se colocó en los Estados Unidos por la suma de 24.000,000 de dólares, comprometiéndose la Empresa a reintegrar al fisco el valor del servicio de la deuda, para lo cual destinará hasta un 15% de sus entradas brutas. Las tarifas de los ferrocarriles han debido, por causa de esta obligación y el alza general de los costos, aumentarse considerablemente.

La honda crisis económica producida en Chile por la falta de ventas y exportación de nitrato, crisis que trajo como consecuencia la paralización de gran número de salitreras y la restricción de casi todas en su elaboración, fue causa principal de la cesantía que a principios de 1921 se produjo en una gran masa de obreros (unos cuarenta a cincuenta mil), lo que venía

a agravar mucho más la difícil situación por que atravesaba el país. Esto obligó al Ejecutivo a pedir autorización legislativa para invertir la suma de $ 50 millones m/c., de los fondos provenientes del empréstito ferroviario, en la **construcción y reparación de caminos y prosecución de obras públicas,** dándose al propio tiempo autorización para contratar otro empréstito por £ 2.000 000 oro al 8% de interés con el fin de reintegrar los fondos que se invirtiesen en ese objeto.

La atención de estas necesidades de orden social y económico constituía una medida de trascendencia en la vida nacional. La suma que se destinaba a la construcción y reparación de caminos y a la prosecución de obras públicas era considerable. Ocupaba entonces la cartera de Industria y Obras Públicas Don Zenón Torrealba.

Las cinco leyes anteriores, que se dictaron desempeñando el Ministerio de Hacienda el autor de este trabajo, constituyeron los primeros pasos dados por esta Administración en el orden financiero y económico.

En materia monetaria, se acordó primero postergar el plazo de la *conversión metálica* por un año, o sea, hasta el 31 de Diciembre de 1921, y cumplido éste, por tres años más, habiéndose fijado el 31 de Diciembre de 1924 para su realización. Estimamos que las postergaciones de este plazo no deben ser de larga duración, no deben quizás pasar de un año, para que el problema de la conversión esté siempre latente, porque pocas materias tienen mayor trascendencia para nuestra vida económica que ésta.

En la **anotación del cambio** se introdujo a principios de 1921, desempeñando el Ministerio de Ha-

cienda el autor de este trabajo, una innovación que en un principio encontró resistencias, por romper con la tradición, pero que después dejó ver sus ventajas: se acordó que en adelante se consignase en la Bolsa de Corredores la relación monetaria con el exterior, o más propiamente el precio a que se cotizan las letras de cambio, en pesos chilenos y no en peniques, como hasta entonces se lo hacía. Con ello se persiguió el fin de facilitar los cálculos en todos los círculos del país y adoptar el procedimiento de las naciones extranjeras, que cotizan la moneda extraña en moneda nacional y no la nacional en moneda extraña.

Para evitar dificultades de administración financiera, se dictó con fecha 23 de Abril de 1921 una ley que introdujo modificaciones en las de 1919 y 1884 sobre la formación de los presupuestos, dando autorización al Ejecutivo para decretar pagos aunque excediesen el ítem o la partida correspondiente, cuando se tratase del *cumplimiento de sentencias ejecutoriadas* dictadas por autoridad competente y cuando se tratase de decretos de pago de pensiones de jubilación o de retiro dictados en conformidad a las disposiciones vigentes, con posterioridad a la fecha de la promulgación de la ley de gastos de la nación.

La obra de fomento de la economía, en que se hicieron desde un comienzo esfuerzos que deben anotarse, como el del fomento de la *exportación de frutas*, ramo en que la naturaleza ha favorecido con prodigalidad a este país, se prosiguió después con la dictación de varias leyes, como la que modificó las disposiciones sobre construcción de *canales de regadío* en lo referente al pago de la contribución que afecta a las

propiedades declaradas de riego obligatorio, y la que autorizó la emisión de $ 3.000,000 en bonos, para destinarlos al pago de las obras de regadío que ejecuta la Cía. Industrial y Azucarera de Tacna, provincia a que se dedicaron, por otra parte, sumas para saneamiento, expropiación de terrenos, construcción y arreglo de caminos, servicio de agua potable, edificios públicos y servicios administrativos. Se concedió a la Cía. Carbonífera de Lebu permiso para construir y explotar un *ferrocarril a los Sauces*, y se aprobó un convenio subscripto con la Empresa del *Ferrocarril Trasandino por Uspallata* sobre la base de la fusión de la sección argentina y chilena de dicho ferrocarril, comprometiéndose el Ejecutivo a hacer una emisión de bonos del Estado por £ 825,000 que ganarán 8% de interés y tendrán 1% de amortización, bonos que se canjearán por los que forman las actuales emisiones hechas por la compañía con hipoteca del ferrocarril, que ascienden a £ 1.485,000 y a los cuales garantiza el Estado el interés del 5% por 20 años. Esta ley se dictó el 13 de Septiembre de 1921, mientras ocupaba la cartera de Ferrocarriles Don Artemio Gutiérrez.

En materia de obras de carácter local, se autorizó la inversión de $ 5.800,000 en la prolongación de la *canalización del río Mapocho*, obra importante cuya iniciación trasciende a la Administración Balmaceda.

La difícil situación por que atravesaba la industria salitrera en 1921, fue causa de que se tomase la resolución de elevar el monto del anticipo que se hacía a los *productores de nitrato* que se comprometiesen a mantener en explotación sus oficinas, hasta $ 7.50 m/c. por cada 46 kilógramos de salitre en los puertos y

hasta $ 6.00 en las canchas. Esta autorización llegará hasta fines de 1922.

Por su parte, el precario estado del Erario por razón de la aguda crisis salitrera, crisis que nunca había sido tan intensa, privando al Estado de la mayor parte de sus rentas, dió origen a una ley de fecha 15 de Julio de 1821, en virtud de la cual se autorizaba la colocación de un *empréstito* que produjese $ 25.000,000 moneda nacional de oro y $ 50.000,000 en moneda corriente. Los bonos ganarían el 8% de interés y se amortizarían en cinco años. El producto de los bonos en oro se destinaría al servicio de la deuda externa y demás obligaciones en esta moneda; los bonos en billete servirían a los bancos nacionales para caucionar el retiro de vales de tesorería. Los bancos pagarían al fisco sobre los vales que retirasen un interés inferior en 2% a la tasa de descuento más la comisión que tuviesen fijada para los descuentos de letras a 90 días. Más tarde, con fecha 23 de Diciembre de igual año, se autorizó al Ejecutivo para contratar *otro empréstito*, que produjese esta vez $ 80.000,000 en billetes y £ 1.500,000, pudiendo las obligaciones devengar un interés anual hasta de 8% y amortizándose en un plazo no menor de cinco ni mayor de diez años. Los bonos servirían a los bancos nacionales para caucionar el retiro de vales de tesorería. El oro se destinaría al servicio de las obligaciones en igual moneda. El producto correspondiente al 15% de los derechos de internación, desde la fecha en que quedasen canceladas las obligaciones a que estaba destinado, se aplicaría a la amortización del empréstito contratado en moneda corriente.

El país debió recurrir a estos empréstitos por no

encontrar otra solución dentro de la falta de entradas, ya que las contribuciones internas no prestan, a causa de la escasez de su monto, la ayuda necesaria, cuando por cualquier entorpecimiento se restringen los recursos de aduana. Esta circunstancia hace imprescindible la pronta aprobación de la contribución a la renta. Sólo sobre la base de la introducción de este impuesto, se podrá emprender la reforma de nuestro régimen de tributos públicos para que puedan llegar a ser eficientes. Es menester preparar los elementos con que debe hacerse, y a los más importantes pertenece aquí la introducción del impuesto general a la renta entre las fuentes de recursos ordinarios. Sin ella, no podremos llegar a los ideales del orden, de la equidad y de la seguridad en que se basa, dentro de las aspiraciones y prácticas modernas, todo buen régimen en la hacienda pública.

El Gobierno del Excmo. señor Alessandri no ha podido menos que preocuparse con tesón desde un comienzo en la realización de tan elevado pensamiento, a pesar de la certidumbre que debía tener de las muchas dificultades con que habría de tropezar en ella, por la natural oposición que toda nueva contribución provoca en los círculos afectados, que en este caso se extienden por la población del país en amplitud mucho mayor que en los demás gravámenes. Y es deber del Congreso cooperar, con su acción eficaz y su elevado espíritu tradicional, a los esfuerzos del Ejecutivo por introducir, tan pronto como sea dable, este impuesto en el país, como base de la organización que en el futuro habrán de tener las finanzas del Estado.

En materia de gravámenes, se aprobó a principios

de 1922 una ley que estableció un **impuesto fiscal de barajas, fonógrafos, pianos y pianos eléctricos,** ascendente a 50% sobre su precio de venta en las primeras y $ 120 en los fonógrafos, pianolas, pianos y pianos eléctricos instalados en los establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas. Se aprobó también una ley en virtud de la cual las mercaderías que se embarquen por los puertos marítimos de la República con destino al extranjero, las que se exporten por los puertos terrestres y las extranjeras que se desembarquen en puertos mayores o menores habilitados al efecto o se internen por puertos terrestres, comprendiéndose también a las encomiendas postales, pagarán un *impuesto de $ 0.10* por cada quintal métrico de peso bruto o fracción, impuesto que no afectará al ganado, al salitre, a las mercaderías fiscales y a las de los ferrocarriles del Estado. Se estableció igualmente un *derecho adicional de importación* a todos los aceites que provengan de países que graven la exportación de la materia prima, derecho equivalente al que se cobre en el país de origen sobre la exportación de la materia prima destinada a la producción nacional.

Con fecha 8 de Febrero de 1922 se dictó una ley referente a **los contratos de cuenta corriente bancaria y los cheques,** ley de importancia que reglamenta lo concerniente a este particular. El cheque cruzado en su anverso por dos líneas paralelas y transversales no podrá ser presentado al pago sino por un banco.

De gran trascendencia para la economía nacional fue la ley de 6 de Febrero de 1922, que dispone que **el transporte de carga entre los puertos de**

la República queda reservado a las naves chilenas, pudiendo el Presidente conceder, a título de reciprocidad, el derecho de hacer el cabotaje en las costas del país a las naves de otras naciones sud-americanas en que se haya otorgado igual franquicia a las naves chilenas. Los buques extranjeros, que habían ejercido libremente el comercio de cabotaje en nuestras costas desde mediados del siglo XIX, han dejado así de ejercer este comercio en nuestro país. Las tarifas máximas de carga y pasajes son fijadas anualmente en moneda legal de oro con aprobación del Presidente de la República. Desde hoy la Marina Mercante Nacional entra a formar parte de la Reserva Naval. Aunque la ley de 1917 fijaba sólo el plazo de diez años para que el cabotaje de nuestras costas quedase reservado exclusivamente a las naves chilenas, la situación de los navieros nacionales no hacía casi posible esa espera, y la nueva ley no podía menos de ser recibida con interés y entusiasmo. Comienza, así, una nueva éra de progreso marítimo para nuestro país. Es de desear que este orden se mantenga a todo trance.

Las cinco leyes anteriores se dictaron desempeñando la cartera de Hacienda el señor Francisco Garcés Gana.

Siguiendo un perseverante propósito del Gobierno, a principios de este año se autorizó la **ejecución de obras** de mejoramiento en los puertos de Constitución, Iquique, Talcahuano, Lebu, Puerto Saavedra y Valdivia; la terminación de las obras de abrigo del Puerto de Valparaíso y los trabajos complementarios del mismo; las obras complementarias del puerto de Antofagasta; la construcción de un malecón y muelle

en Puerto Montt y la construcción de un muelle y obras complementarias en Tomé y Pichilemu. Se autorizó también al Ejecutivo para contratar, una vez asegurada la realización de las obras del puerto de Constitución, la construcción del ferrocarril de Los Queñes a Curicó, de Parral al ramal de San Fernando a Pichilemu, y de Hualañé a Constitución. Estos trabajos se pagarán, a opción del Presidente, o con el producto de la explotación de ellos mismos, o con el producto de un empréstito que rinda en dinero efectivo hasta £ 7.640,000, cuyos bonos ganarán un interés de 8% y tendrán una amortización de 1%. Esta ley es de 11 de Enero de 1922.

Con fecha 11 de Febrero de este año se aprobó una disposición legal que autoriza al Presidente para invertir hasta la suma de $ 15.000,000 oro nacional en la ejecución de *obras de desagüe* en numerosos ciudades de la República. El Presidente emitirá bonos con la garantía del Estado, que ganarán hasta el 8% de interés anual. Estas nuevas empresas tendrán como entrada: el producto de la contribución de desagüe, que se cobrará en la forma del impuesto de haberes y que en ningún caso bajará de $ 12 al año por cada servicio ni excederá de 4‰ sobre el valor de los avalúos, y los demás ingresos que proporcione el giro de la empresa.

Finalmente se dictó por esos días, desempeñando aun el Ministerio de Hacienda Don Francisco Garcés Gana, una ley que autoriza al Presidente de la República para emitir hasta $ 3.500,000 en bonos, que ganarán 8% de interés anual, se amortizarán en cinco años en cuotas de 25% en los últimos cuatro años y servirán para caucionar el retiro de vales de tesorería,

destinados a la terminación de las *obras del puerto de San Antonio* y sus instalaciones y a la ejecución de sus servicios de alcantarillado, agua potable, alumbrado y pavimentación.

Cerramos este trabajo, en la parte referente a la historia económica nacional, tomando en cuenta sólo hasta el 1.° de Marzo de 1922 el desarrollo de los hechos y la actividad que venimos contemplando. Las páginas del examen de esta Administración quedan abiertas.

III

LA INFLUENCIA EJERCIDA POR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL EXTRANJERO Y EL ROBUSTECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CHILENA.

III. La influencia ejercida por la política económica del extranjero y el robustecimiento de la economía chilena.

LA POLÍTICA COMERCIAL DE INGLATERRA, FRANCIA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS.

El estudio de la historia económica de Chile no nos ofrece, como puede verse en el detallado examen que de ella hemos hecho en las páginas anteriores, el fundamento para afirmar que nuestro país haya seguido una política comercial determinada o perseverante en la consecución de algún fin. El nos deja ver, cuando más, la adopción, ordinariamente tardía, de alguna medida de defensa contra los avances de la política ejercida sobre nuestra economía por las naciones del extranjero. Pero no nos deja ver, si hacemos excepción de una que otra iniciativa, luego abandonada, la circunstancia de que nuestras clases dirigentes tomen la ofensiva en materia tan importante, se formen siquie-

ra un plan persistente de política comercial que lleve a obtener ventajas en la lucha económica de los pueblos, como ocurre en los de mayor cultura y actividad nacionales.

Hemos hecho un análisis de toda nuestra vida económica. En él se puede observar la obra realizada por el país desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días en el terreno de la economía y de las finanzas. Hemos acometido la fatigosa tarea de hacer la historia económica nacional, para que pueda tenerse un cuadro de conjunto de las actividades del país en el orden que nos ocupa. Hemos ido aún más allá: hemos hecho esta historia por Administraciones, para que pueda apreciarse, siquiera con proximidad, la labor realizada por cada Presidente, ya que un Gobierno perseverante mucho puede conseguir cuando posee la conciencia necesaria para concebir un plan de trabajo útil para el Estado.

Mandatarios ha habido que han iniciado actividades de política comercial, tratados y demás, pero no han perseverado. Otros ha habido que han realizado actos importantes de política económica, como en la marina mercante, pero que no han encontrado posteriormente sostenedores, de manera que lo que hicieron tuvo la vida fugaz de un afecto o un deseo que muere cuando muere el que lo sustenta. Bien poco, en verdad, es lo que se ha hecho en los dominios de la política económica en general y en los de la política comercial en particular.

Contemplemos, en tanto, los rumbos sistemáticos, consecuentes y adecuados de la política comercial de los principales países con que tenemos relaciones mercantiles. Provechosas lecciones nos pueden dar.

1. La política comercial de Inglaterra

A las observaciones que sobre la política de **Inglaterra** hicimos en las páginas 168, 169 y 170 de este trabajo, en donde dejamos constancia del hecho de que hasta el primer cuarto del siglo XIX, y a pesar de los ataques de Adam Smith, ese país se mantenía fuertemente aferrado a las doctrinas del mercantilismo; en donde dijimos que en los años de 1824 y 1825 se patrocinaba ya por el Gobierno el libre-cambio, tratando de suavizar el acta de navegación y de simplificar y rebajar las tarifas de aduana; en donde hicimos ver que por los años de 1842 a 1846 se dió el paso decisivo en favor de la realización de esa política, con la rebaja primero y la abolición después, de los derechos de internación del trigo, y en donde nos referimos al papel que cupo desempeñar en ese movimiento a la «Anticornlawleague», debemos agregar en este punto que, siendo un país ya rico y de desarrollo industrial superior a los demás, su política de libre-cambio le llevó a un abaratamiento considerable en la vida interna y a un desarrollo estupendo de su industria. Esta política tuvo su influencia sobre la nuestra, pues aquí se abandonó a mediados del siglo XIX el régimen de protección a la marina mercante nacional y a muchas industrias, aligerándose también los derechos de aduana.

Si bien es cierto que Inglaterra hubo de encontrar dificultades en la expansión de su comercio de exportación, por causa de la política de protección que tomaron algunos Estados, también lo es que no le fue difícil salvar las barreras que le ofrecían sus colonias,

las cuales no podían sino que estar interesadas en sus relaciones mercantiles con la madre patria, de la que requerían capitales y reclamaban defensa. Más cómodo debería serles, por lo demás, otorgar a Gran Bretaña concesiones político-comerciales que pagarle tributos en dinero. Chamberlain fue más allá: quiso fundar una liga aduanera real sobre la base del librecambio de los países de la Unión y con exclusión del extranjero. Su intención era robustecer el poder político del reino, lo que no le ofrecería dificultades. En cambio, en las relaciones comerciales con las colonias de ultramar debía acudir a recursos de otra naturaleza para asegurarse su comercio en buena forma, dándoles libertades y garantías en su organización.

Clarovidentes fueron los planes de política comercial de Inglaterra a principios de este siglo. En su famoso discurso de Glasgow de 1903, decía Chamberlain que los fines de la nación eran, por un lado, el mantenimiento y desarrollo de las fuerzas nacionales y el progreso del Reino Unido, en lo cual no debía esperarse que el deber del inglés se presentase para los extranjeros en la misma situación que para Gran Bretaña; por el otro, la realización del ideal de la creación de un Reino como el mundo jamás lo hubiese tenido, trabajando por la unión de los Estados de un mismo origen y consolidando la raza británica.

Estimaba que su patria había desempeñado en la historia universal un gran papel, por lo cual era menester que siguiera adelante en la adquisición de su poder. Por mucho que hubiese que afanarse, no debía la Inglaterra permanecer por más tiempo aislada, como Chamberlain creía que estaba, de los que hablaban el mismo idioma y se enorgullecían de ver flamear la misma bandera.

Combatía la política del libre-cambio, calculando que en los últimos treinta años el comercio exterior había aumentado sólo en 7%, en tanto que la población en 30%. Decía que los países proteccionistas, de que él con anterioridad creía que iban a la ruina, habían hecho progresos muy superiores a los de Inglaterra. Lo predicho por Cobden no se había realizado, en su concepto, pues en lugar de remitir el país más y más artículos al extranjero y recibir cada vez menos, remitía menos y recibía más. En los treinta años calculaba un retroceso de exportaciones ascendente a £ 46.000,000 y un exceso de importaciones de £ 86.000,000. De lo cual deducía que el comercio exterior inglés debía tomar otro giro; si no, descendería el país a una nación de quinto orden.

Chamberlain se mostraba optimista para el futuro, porque confiaba en la inteligencia y voluntad de su pueblo para enmendar rumbos. ¿Por qué, preguntaba, el Canadá toma de la industria británica tres veces más por cabeza de población que los Estados Unidos y Australia tres veces más que el Canadá? Por que los Estados Unidos son proteccionistas y porque en Australia hay menos industrias que en el Canadá. Es necesario proteger la producción nacional como lo hace Norte América y Alemania.

Refiriéndose a los intereses de las clases trabajadoras, combatía a los que hacían propaganda en el sentido de que a éstas convenía más la situación de libre-cambio o libertad de internación de entonces, que cualquiera otra, haciéndoles ver que, si fuesen a las colonias, cambiarían inmediatamente de opinión. «Creo, decía, que ninguno de ellos pasaría allí seis meses sin cantar otra *canción*. Todos son proteccionistas

y no creo que todos estén locos. Yo no convengo que un hombre que en Gran Bretaña es inteligente, en llegando a Australia se convierta en idiota. Lo que ocurre es que allí abandonan los prejuicios a que aquí se aferran». Llamaba la atención al hecho de que toda industria crece al abrigo de la muralla de la tarifa aduanera, y como los Estados Unidos todo lo producen, poco han menester.

En materia de política colonial directa, estimaba que era conveniente alterar el modo de pensar y obrar inglés, que llamaba «provincial» al pensamiento de las colonias, siendo que el propio inglés aparecía como «provincial» al pensar sólo en sí mismo y no en todos los que hablan el idioma que les es común. Trataba a las colonias como Estados hermanos de la madre patria, capaces de contratar con ésta y con libertad de permanecer unidos o separados, por lo cual recomendaba el cultivo de un mayor acercamiento. Para evitar la separación, creía necesaria la concesión de preferencias aduaneras, formando una verdadera confederación con ellas. Tal procedimiento equivalía a la preparación sólida del camino que condujese a la unidad duradera y segura de Gran Bretaña con sus colonias.

Concluyó su sorprendente alocución del modo siguiente: «Si vosotros gozáis de las preferencias de aduana, si deseáis aumentar el comercio exterior y si queréis evitar la separación de las colonias, debéis imponer una contribución a la internación de víveres». Estas palabras nacían de la concepción del más claro proteccionismo y eran la expresión de un pensamiento de alta política en ese terreno. Las medidas que tomó Gran Bretaña con posterioridad a este movimiento

de opinión, que fueron encaminadas a dar garantías a las industrias nacionales mediante una protección directa, aunque relativamente escasas se debieron al poder de persuasión de este grande economista y político.

Pero mucho más importante que con sus colonias, eran sus relaciones mercantiles con los países extranjeros, los cuales hasta 1914 supieron hacerle una fuerte competencia, que, si no hubiese mediado la circunstancia de la guerra, rudos golpes le hubieran asestado en su vida económica, sobre todo Alemania. Sin embargo, la guerra de ese año cambió por completo el cuadro de situaciones que se venía preparando, desapareciendo todo aquel peligro que a Inglaterra hubiese amenazado en su política comercial posterior. Si es cierto que las elecciones de Enero de 1910 habían significado un triunfo en el movimiento proteccionista del Reino Unido, también lo es que pasada la guerra y a causa de la destrucción del comercio que favorecía la política proteccionista del continente europeo, Inglaterra no ha tenido necesidad de abandonar, como se creía, los rumbos que le han sido característicos desde 1842 para adelante, y así vemos que hoy por hoy casi el 80% de sus entradas proviene de impuestos internos, a saber, del income-tax, del impuesto de herencias, de otros y de los beneficios extraordinarios.

La influencia que la política comercial expansiva de Inglaterra podrá ejercer sobre Chile, será siempre positiva y de gran significación, pues siendo el centro del mercado universal, tiene en su poder la regulación y la solución de los problemas que se afanan por resolver satisfactoriamente la mayor parte de los países. Nosotros debemos estar atentos a sus decisiones, como al

estudio de las posibilidades de obtener partido con los rumbos de política comercial que podamos tomar.

2. La política comercial de Francia

El examen de la política comercial de **Francia** es, ante todo, importante en cuanto se refiere a las rivalidades que a través de la historia ha tenido con Inglaterra y durante los últimos decenios con Alemania. También lo es en cuanto sigue un camino completamente distinto al de expansión exterior seguido por Inglaterra, concretándose en especial al mantenmiento y desarrollo de su producción agrícola interna.

En la corroboración del primero de estos hechos, baste recordar la prohibición impuesta por Napoleón I de todo comercio con Inglaterra y las tentativas realizadas por ésta sobre Francia en los dominios del librecambio. Pero aquel país, superior en poder naval y en riqueza mineral de hierro y carbón, base de todas las actividades industriales en los tiempos modernos, le hubo siempre de aventajar en la producción comercial de grandes masas, no así en la fabricación de artículos de lujo, sobre todo de seda. No era, así, de extrañar que Francia, que había sufrido, además, un considerable menoscabo de sus fuerzas por las sangrientas y desgraciadas guerras que había sostenido, no encontrase en los fines de la política del libre-cambio que adoptaba Inglaterra, los ideales de su proceder en el futuro, por lo cual se mantuvo durante mucho tiempo más que aquélla aferrada a la protección de sus industrias.

La política anterior a Napoleón III estaba inspirada en la protección. Sólo con éste pudieron triunfar las

doctrinas del libre-cambio en Francia, aunque no en la forma extrema de la abolición de derechos, sino que levantando discretamente prohibiciones y rebajando moderadamente tarifas en el comercio agrícola, hecho todo ello al impulso de las iniciativas inglesas y en consideración a las masas, que pedían abaratamiento de la vida. El tratado de Cobden de 1860 fijó sólo un máximum de tarifas francesas de 30% sobre el valor. A las demás naciones se concedieron las ventajas dadas a Inglaterra. Napoleón III dió mayores facilidades únicamente a los países que mediante un tratado de comercio ofrecieron a Francia reciprocidad, con lo cual en la práctica se colocó ese pueblo en condiciones relativamente superiores a Inglaterra en lo tocante a la exportación. Como estos tratados de comercio contenían, por lo regular, la cláusula de la nación más favorecida, llegaron a formar una verdadera red de convenios de bajas tarifas entre los países que componían la Europa occidental, y la política de tratados seguida por Francia hubo de inducir a Inglaterra a seguirla.

Pero en la tercera República las tendencias librecambistas no podían ya ser patrocinadas en esa forma: las clases poseedoras se resistían a pagar impuestos directos suficientes al mantenimiento del Estado. La contribución a la renta era acerbamente combatida. No cabía más resolución que aferrarse a los impuestos de aduana y volver a poner las barreras que encarnan el proteccionismo. En 1881 se crearon ya algunas tarifas, aunque suaves. A partir de entonces se observa una marcada evolución: los agricultores protestan e ingresan bulliciosamente al bando de los industriales proteccionistas a causa de los perjuicios que sufrían con la competencia extranjera en el cultivo del trigo,